

LA DESTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA

Reacción, Reforma y Revolución
en la Segunda República

Paul Preston



se

La destrucción de la democracia en España es un estudio extraordinariamente dramático de la lucha política y social en la Segunda República y de su escalada hasta el estallido de la Guerra Civil. Trata tanto del desarrollo del PSOE, que sometido a la presión de la base de mineros y jornaleros pasa de posiciones reformistas a revolucionarias, como de las formaciones políticas de la oligarquía y de sus intentos de impedir las reformas a través de la imposición violenta del estado corporativo.

Es un libro sobre los orígenes de la Guerra Civil que, al margen de la propaganda y la visión partidista de los hechos, estudia la brutalidad diaria de la lucha de clases en la Segunda República.



Paul Preston

La destrucción de la democracia en España

Reacción, reforma y revolución en la Segunda República

ePub r1.1

Titivillus 06.08.2019

Título original: *The Coming of the Spanish Civil War*

Paul Preston, 1978

Traducción: Jerónimo Gonzalo

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1



Para Janet y Jerónimo

TESTIMONIO DE GRATITUD

Mientras preparaba este libro, viví en España durante más de tres años y además hice muchas visitas más cortas. No es de sorprender que, dadas la franqueza y la afectividad de los españoles en general, contrajera una serie de deudas de gratitud por las que quisiera expresar aquí mi agradecimiento.

Dos amigos, y a la vez dos estudiosos de estas materias, me ayudaron a no ver España con los ojos de un anglosajón. Durante muchos años, Jerónimo Gonzalo Rubio me ha prodigado ideas, hospitalidad y amistad. Joaquín Romero Maura ha profundizado mi sentido de la Historia española y me ha enseñado mucho sobre investigación histórica en general. Sin querer implicarles como cómplices de los defectos de este libro, quiero agradecerles su contribución a él.

Muchas horas de conversación con dos participantes en los acontecimientos que aquí se describen me ayudaron a comprender la brutalidad cotidiana de la vida rural española en los años treinta. Miguel González Inestal fue, y sigue siendo, uno de los mayores expertos del movimiento libertario en cuestiones agrarias. El fallecido Ignacio Arenillas de Chaves, Marqués de Gracia Real, fue un monárquico salmantino que más adelante defendió a Julián Besteiro en su proceso. Los dos fueron más generosos en tiempo y en información de lo que un joven historiador extranjero podía haber esperado. Tuve también muchas otras entrevistas con protagonistas de la época, demasiado numerosas para citarlas aquí. Sin embargo, quisiera agradecer a José María Gil Robles, Mariano Robles y Santiago Carrillo el que me facilitaran información inasequible de otro modo.

Especial agradecimiento le debo a Martin Blinkhorn, Norman Cooper y Francés Lannon, que, en momentos diferentes, se tomaron el trabajo de leer y comentar el texto. También me beneficié de las sugerencias y críticas de los siguientes amigos y colegas: Juan José Castillo, Elías Díaz, Juan Pablo Fusi, Juan García Duran, Manuel González García, Miguel González Urien, Gabriel Jackson, Joe Harrison, Edward Malefakis, José Montero Gibert, Eduardo Sevilla Guzmán, Pepe Varela y Ángel Viñas.

También quisiera mostrar mi agradecimiento a una serie de libreros que me ayudaron a encontrar ejemplares raros y en el proceso nos hicimos

amigos: Manuel Arroyo y Pepe Esteban, de Editorial Turner; José Martínez Guerricabeitia, de Ruedo Ibérico; Martín Gili y Juan Martínez Ballester.

Una serie de historiadores consagrados fueron generosos en su ayuda. Christopher Seton-Watson supervisó, con inagotable paciencia, la tesis doctoral en la que se basa este libro. Hugh Thomas fue amable conmigo de varias formas. Herbert R. Southworth puso a mi disposición los incomparables recursos de su biblioteca y de su conocimiento de la derecha española. Los profesores E. A. Bayne, Alistair Hennessy, James Joll y Víctor Kiernan me aconsejaron y me animaron.

Si no hubiera sido por el amable empuje del profesor Robert F. Leslie, puede que este estudio no hubiera visto nunca la luz. Sin embargo, ni él ni ningún otro de los mencionados anteriormente son responsables de los juicios o errores contenidos aquí.

Queen Mary College, Londres. Junio de 1977.

INTRODUCCIÓN

Durante la Segunda República, los partidos parlamentarios de la izquierda introdujeron una serie de reformas que amenazaban directamente la estructura económica y social existente en España antes de 1931. Las actividades tanto de la derecha legalista como de la llamada catastrofista entre 1931 y 1939 fueron ante todo una respuesta a estas ambiciones reformistas de la izquierda. La victoria de la derecha en la guerra civil preparó el camino para que el general Franco restableciese, después de 1939, el orden social tradicional. Este libro es un examen del papel jugado por el partido socialista en la organización del desafío reformista, de la resistencia decidida a la reforma llevada a cabo por los representantes políticos de las oligarquías terrateniente e industrial y de los efectos del conflicto subsiguiente en el movimiento socialista y en el régimen democrático español.

Los socialistas constituían el grupo más importante de la izquierda española en los años veinte y en los treinta. Tanto en términos de fuerza numérica como en su compromiso en favor de una reforma social fundamental su importancia era más decisiva que la de sus aliados republicanos burgueses. Además, al ser el mayor partido parlamentario de la izquierda, tenían una eficacia potencial mayor dentro del sistema democrático que la de sus rivales más revolucionarios. El insurreccionismo inconexo de los anarquistas y la insignificancia numérica de los comunistas ortodoxos y disidentes les privaba a todos ellos de posibilidades serias de combatir el aparato del Estado y de implantar la sociedad que deseaban. Sin embargo, las críticas teóricas y las actividades de estos grupos forman el telón de fondo sobre el que se enjuicia el giro de los socialistas desde el reformismo a un revolucionarismo aparente.

El papel de los socialistas durante la Segunda República se examina a la luz de dos factores principales: la ideología del partido y las aspiraciones de la base. Puesto que el PSOE se proclamaba marxista, la política adoptada por sus líderes era a menudo consecuencia de su interpretación ideológica del proceso social y económico que se desarrollaba en España. Al mismo tiempo, puesto que la República se proclamó en unos momentos de aguda crisis económica y puesto que durante los años treinta se produjo un aflujo masivo al movimiento socialista del proletariado rural más afectado por esa crisis, gran parte de la política del partido sólo toma sentido si se tienen en cuenta las presiones ejercidas desde la base.

Estos dos polos de la actividad socialista estaban, naturalmente, condicionados por la resuelta resistencia al cambio organizada por los partidos de derechas. En consecuencia, el segundo tema principal del libro es el de los intentos de la derecha legalista de bloquear la reforma al principio y más adelante de crear un Estado corporativo como solución a largo plazo ante la amenaza izquierdista. De hecho, el argumento básico del libro es que el conflicto central de la Segunda República, y la causa principal de la guerra civil, fue la lucha entre el PSOE y la derecha legalista, especialmente la CEDA, para imponer sus respectivas formas de entender la organización social en España por medio del control del aparato del Estado. Tanto los socialistas como la derecha legalista sabían en aquellos momentos que la suya era una batalla crucial. Ambos estaban seguros de que las fuerzas de orden podían hacer frente a las actividades de los extremistas de derechas y de izquierdas. Lo que los dos temían más era que el otro pudiera utilizar los medios legales para dar a la República un contenido legislativo que perjudicara los intereses materiales de sus seguidores.

En una sociedad predominantemente agraria, las ideas sobre la organización social de la derecha y de la izquierda se centraban en la tierra. Los trabajadores rurales constituían con mucho el grupo laboral más amplio dentro del sindicato socialista, la UGT. Las formaciones políticas de la derecha legalista —la CEDA, los agrarios y, en menor grado, los radicales— recibían ayuda económica de las clases altas terratenientes y defendían sus intereses. Además, buscaron especialmente su apoyo de masas entre los pequeños propietarios. Así, inevitablemente, este estudio se refiere en gran medida a la lucha de clases en las zonas agrícolas y a su impacto en la política nacional a través del PSOE y de la CEDA. Otros sectores socialmente conflictivos, especialmente la minería, se analizan también detalladamente.

El libro empieza con un capítulo dedicado al desarrollo ideológico y táctico del movimiento socialista entre 1917 y 1931, que intenta clarificar las presuposiciones no declaradas que influyeron en la conducta de las tres principales facciones socialistas al verse sometidas a presiones durante la Segunda República. Los capítulos segundo y tercero se ocupan del período 1931-1933 y examinan separadamente las actividades de la derecha legalista y de los socialistas en esos años. En ese período, ambos grupos elaboraron su postura hacia el régimen y la de uno respecto al otro: la derecha legalista yendo desde un obstruccionismo defensivo a una determinación activa de establecer el Estado corporativo; los socialistas pasando de un reformismo optimista a un revolucionarismo provisional y retórico como respuesta al

éxito de la derecha en el bloqueo de la reforma. En el capítulo cuarto se estudian los dos grupos conjuntamente y se analiza su continua interacción y su creciente hostilidad desde la victoria electoral de la derecha en noviembre de 1933 hasta la insurrección izquierdista de octubre de 1934. Durante esos once meses, la CEDA, dirigida por Gil Robles, mostró que estaba dispuesta a proteger el orden social anterior a 1931 introduciendo un Estado corporativo autoritario. Como respuesta, los socialistas intentaron conservar el carácter progresista del régimen republicano por medio de amenazas revolucionarias, que esperaban no tener que cumplir jamás.

El levantamiento de octubre de 1934 y su derrota condicionó la táctica tanto de la derecha como de los socialistas hasta finales de 1935. Los socialistas se vieron obligados a retirarse de la política organizada. El capítulo quinto se ocupa de las principales disensiones internas y de los ajustes teóricos que sufrió la dirección socialista desde el momento de la derrota hasta la creación de la coalición electoral del Frente Popular. El capítulo sexto examina los intentos de la CEDA de irse aproximando lentamente hacia el Estado autoritario, conociendo la resistencia del proletariado a un Estado de éste tipo tal y como se había demostrado en octubre de 1934. La habilísima estrategia utilizada por el líder de la CEDA, Gil Robles, se vino abajo por un error táctico, a finales de 1935, que provocó la convocatoria de elecciones. El capítulo final trata de las consecuencias de las elecciones del Frente Popular. La victoria izquierdista terminó con la posibilidad de que la derecha estableciese legalmente el Estado corporativo, y la defensa del orden social amenazado pasó a grupos más violentos. A causa de sus diferencias internas, los socialistas no añadieron su fuerza al Gobierno. De este modo, cuando la agudización del conflicto social desembocó en un colapso, parcialmente provocado, de la ley y el orden, los socialistas no estaban en una posición desde la que pudiesen tomar medidas eficaces contra el recurso derechista al golpe de Estado.

La violencia diaria y la escalada del odio social son temas centrales de este libro. Los choques constantes entre las fuerzas de orden público y el proletariado urbano y rural fueron el largo prelude a una guerra civil salvaje. Sin embargo, los orígenes del conflicto no hay que buscarlos en los intentos de los extremistas de derribar la sociedad, sino en los esfuerzos de los reformistas para mejorar las condiciones de la vida cotidiana de los miembros más desafortunados de la sociedad. Las implicaciones son claras. Los resultados de una política de socialismo reformista en unos momentos de crisis económica pueden, igual que un revolucionarismo total, provocar los

intentos de imponer un Estado fascista o corporativo. Esto no sólo es revelador respecto a España en los años treinta, sino también ilustrativo de la tragedia de la Unidad Popular, de Allende, en Chile. Además, subraya los problemas con los que se encuentra la izquierda hoy en Italia y, una vez más, en España e ilustra las razones para la adopción en estos países de una política «eurocomunista». Las lecciones de España y Chile han sugerido que el camino hacia la reforma debe ser por medio de alianzas con los partidos del centro. El fracaso del experimento reformista en la República española y sus sombrías connotaciones contemporáneas plantean una serie de interrogantes sobre la suerte del eurocomunismo.

GLOSARIO DE SIGLAS

(I) *Partidos políticos, sindicatos, etc.*

ACNP	Asociación Católica Nacional de Propagandistas.
ASM	Agrupación Socialista Madrileña.
BOC	Bloc Obrer i Camperol.
CEDA	Confederación Española de Derechas Autónomas.
CMI	Círculo Monárquico Independiente.
CNCA	Confederación Nacional Católico-Agraria.
CNT	Confederación Nacional del Trabajo.
DRV	Derecha Regional Valenciana.
FAI	Federación Anarquista Ibérica.
FJS	Federación de Juventudes Socialistas.
FNTT	Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra.
JAP	Juventud de Acción Popular.
JSU	Juventudes Socialistas Unificadas.
PCE	Partido Comunista de España.
POUM	Partido Obrero de Unificación Marxista.
PSOE	Partido Socialista Obrero Español.
SMA	Sindicato Minero Asturiano.
UGT	Unión General de Trabajadores.
UME	Unión Militar Española.
UMN	Unión Monárquica Nacional.

(II) *Fuentes.*

<i>BUGT</i>	<i>Boletín de la Unión General de Trabajadores de España.</i>
<i>DSC</i>	<i>Diario de Sesiones de las Cortes, diciembre 1933-julio 1936.</i>
<i>DSCC</i>	<i>Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes.</i>
<i>NFP</i>	José María Gil Robles, <i>No fue posible la paz</i> (Barcelona, 1968).
<i>PFP</i>	Joaquín Chapaprieta, <i>La paz fue posible</i> (Barcelona, 1971).
<i>TFC</i>	Juan Simeón Vidarte, <i>Todos fuimos culpables</i> (México, 1973).

CAPÍTULO I

LOS ORÍGENES DEL CISMA SOCIALISTA.

EL PSOE, 1917-1931

En el debate, aún vigente, sobre los orígenes de la guerra civil española, se ha convertido en un lugar común la atribución de la principal responsabilidad al partido socialista, el PSOE. Fuese o no responsable del derrumbamiento de la Segunda República, lo cierto es que jugó un importante papel en ella. Al ser el mayor partido de la izquierda, proporcionó tres ministros a los gobiernos reformistas de 1931-1933 y fue la piedra angular de su apoyo parlamentario. Durante el período de dominio centro-derecha de 1933 a 1935, los socialistas fueron la única oposición importante, tanto en las Cortes como en la calle, e incluso tomaron parte en la trascendental insurrección de 1934. Desde las llamadas elecciones frentepopulistas de febrero de 1936 hasta el estallido de la guerra en julio del mismo año, los socialistas, de nuevo el principal partido, fueron los árbitros de la política republicana. Refiriéndose a la insurrección de 1934, un historiador ha llegado a afirmar que «dado que el futuro de la República dependía del movimiento socialista y del partido católico, es importante reconocer que fue el primero de ellos y no el segundo el que abandonó los métodos democráticos y apeló a la violencia»^[1].

Este recurso a la violencia fue uno de los síntomas más claros de la creciente radicalización del PSOE, que comenzó en 1933 como consecuencia de la desilusión ante los escasos logros reformadores de la República, del temor de que una línea menos militante llevase a los socialistas españoles a compartir la suerte de sus compañeros alemanes y austríacos y de una radical reconsideración de la ideología y tácticas del partido. La radicalización o «bolchevización», como la denominaron sus defensores, no fue nunca completa y no progresó más que a costa de enconadísimas polémicas en el interior del partido. De hecho, fue la persistente lucha interna por el poder lo que paralizó virtualmente a los grupos más moderados del partido, impidiéndoles contribuir a la defensa de la República cuando se vio amenazada en la primavera de 1936. Posiblemente se refiere a esto Salvador de Madariaga cuando afirma que «lo que hizo inevitable la guerra civil española fue la guerra civil en el interior del partido socialista»^[2].

Los orígenes de la radicalización de los socialistas no han sido nunca explicados satisfactoriamente. Y lo mismo ocurre respecto a la estrechísima relación que tiene dicha radicalización con acontecimientos políticos contemporáneos, tanto dentro de la República como fuera de España. Evidentemente, hasta que esto no se haya hecho, será prematuro extraer conclusiones definitivas sobre «responsabilidades» por el advenimiento de la guerra civil. No obstante, es cierto que incluso militantes del PSOE, y no sólo los que adoptaron posturas moderadas en la polémica, se han mostrado muy duros en sus apreciaciones posteriores sobre los intentos de «bolchevizar» el PSOE^[3]. En el caso de los moderados, no es difícil de explicar. Aparte de un comprensible resentimiento por los ataques personales de que fueron objeto, como antiguos militantes se opusieron a lo que consideraban un ataque a las tradiciones del partido, que eran cualquier cosa menos radicales. En el caso de los bolchevizadores arrepentidos, tampoco es difícil explicar su cambio de opinión. Uno de los resultados de la «bolchevización» fue que amplios sectores del PSOE cayesen bajo la influencia del Partido Comunista, cuya conducta durante la guerra civil originaría una enorme amargura entre sus antiguos aliados republicanos. Tras la derrota, lamentaron abiertamente el papel que habían jugado al ayudar a los comunistas en su ascenso. Ninguna de estas críticas justifica la aseveración de Madariaga, aunque ambas ayudan a explicar por qué ha sido ampliamente aceptada como explicación al estallido de la guerra.

Todavía está por aclarar la radicalización del partido socialista, sobre todo porque constituyó un fenómeno único en Europa en una época en la que la mayoría de los movimientos socialistas evolucionaba hacia posiciones cada vez más moderadas. El contraste era aún mayor en relación con el propio pasado del PSOE, de un reformismo fuertemente enraizado y con una falta de tradición de marxismo teórico^[4]. El partido no rompió nunca con sus orígenes, que radicaban en la aristocracia obrera de los tipógrafos madrileños. Pablo Iglesias, su fundador, no dio nunca a su partido un cuerpo de teoría independiente. El *pablismo*, como más adelante serían denominadas sus ideas por los críticos trotskistas, se preocupó siempre más del saneamiento de la política existente que de la lucha de clases, adoptando un tono austero y monacal que le hacía parecer, al menos a los ojos de uno de sus críticos, como una hermandad de moralistas. De hecho, el *pablismo* fue una mezcla de ideología revolucionaria y de táctica reformista que, dada la debilidad numérica del partido, era para Iglesias la única alternativa realista a la destrucción o a la clandestinidad. Julián Besteiro, su sucesor en la dirección

del partido, también creía que la austeridad y la reserva eran las únicas tácticas viables dentro de la política corrompida de la Restauración^[5]. Así, tras la semana trágica de 1909, el PSOE se unió a las fuerzas republicanas en lo que virtualmente era una campaña de derechos cívicos. En 1914, aunque España no estaba implicada en las hostilidades, la dirección del PSOE desaprovechó la oportunidad de condenar la guerra y siguió la orientación francesa de romper la solidaridad internacional, pese a la consternación de algunos grupos del partido.

Las aspiraciones de la dirección reformista hasta los años treinta se centraron en la necesidad de sustituir la monarquía desacreditada por una república popular y apenas se ocuparon de revolución social y lucha de clases. *El Socialista*, el periódico del partido, ignoró en un principio la revolución soviética y, más adelante, declaró que era una desviación del auténtico deber de Rusia: la derrota de Alemania^[6]. Dejando a un lado la pobreza del marxismo del partido, su falta de aliento revolucionario se debía en gran medida al hecho de que desde la fundación del PSOE en 1879 hasta el auge de la gran guerra los precios y salarios permanecieron relativamente estables, aunque estuvieron entre los precios más altos y los salarios más bajos de Europa; tal vez por esto, la clase obrera española se mantuvo desmovilizada en gran medida^[7]. En 1914 empezaron a cambiar las circunstancias. La posición no beligerante de España le permitió asumir el papel de abastecedora de alimentos, ropas y equipos a ambos bandos. Un crecimiento industrial vertiginoso se vio acompañado de una feroz inflación, que alcanzó su máximo en 1916. En respuesta al deterioro de las condiciones sociales, el PSOE y su organización sindical, la UGT, se vieron envueltos en el amplio movimiento reformador de 1917. Incluso cuando, en circunstancias enormemente complejas, esta actitud llevó a la UGT a verse implicada en una huelga general nacional, en agosto de aquel año, los objetivos máximos de los socialistas eran el establecimiento de un gobierno provisional republicano, la convocatoria de elecciones a Cortes constituyentes y una actuación vigorosa frente a la inflación^[8]. La huelga fue sofocada con relativa facilidad por el gobierno a costa de una feroz represión en Asturias y el País Vasco, dos de los principales reductos socialistas; el otro era Madrid.

La represión de 1917 tuvo un efecto doble en el movimiento socialista español. Por una parte, traumatizó a la dirección y, particularmente, a la burocracia sindical. Por otra, los que se opusieron a la línea del partido respecto a la primera guerra mundial empezaron a adoptar posturas más

revolucionarias. La polarización se agudizó en los años siguientes. De 1918 a 1923 se produjo una considerable agitación revolucionaria, especialmente en el sur campesino y en la industrial Barcelona^[9], ante la cual el movimiento socialista mantuvo una actitud de deliberada indiferencia. Sin embargo, la crisis económica posbélica y el subsiguiente descontento de las masas habían creado, tras la revolución bolchevique, un clima de opinión dentro del movimiento socialista favorable a una orientación revolucionaria, especialmente en Asturias y en el País Vasco. Su opinión se expresaba en la revista *Nuestra palabra*, que, bajo la dirección de Ramón Lamóneda y Mariano García Cortés, defendía que los acontecimientos de Rusia y el fracaso del movimiento reformista español en 1917 mostraban la irrelevancia de la fase democrática en el camino hacia el socialismo, lo cual les hizo entrar en conflicto con la burocracia sindical, especialmente con Trifón Gómez, Manuel Llana y Francisco Largo Caballero, que estaban decididos a no repetir lo que veían como el aventurismo insensato de 1917^[10].

Como consecuencia, se produjo un amplio debate sobre la actitud del PSOE y de la UGT respecto a la revolución soviética y la Tercera Internacional. La tendencia probolchevique fue derrotada en una serie de congresos, de 1919 a 1921, tras una lucha cerrada en la que la dirección consiguió el triunfo apoyándose en los votos de la fuerte burocracia sindical con sueldo y con puestos fijos^[11]. La izquierda derrotada se separó para formar el Partido Comunista Español. Numéricamente, el cisma comunista no fue un golpe serio, pero acentuó la debilidad ideológica de los socialistas en una época de grave crisis económica y social. La esencial moderación del partido se reforzó con ello, pero quedó una cierta depresión moral^[12]. En la estela de la derrota de 1917, la división de 1921 dejó a los socialistas sin un sentido claro de dirección y algo apartados de los problemas candentes del momento. Las batallas sindicales que se libraban en otros países atrajeron menos la atención socialista que la campaña parlamentaria contra la guerra de Marruecos y las supuestas responsabilidades del rey en la derrota de Annual.

La postura defensiva y el conservadurismo ideológico de los socialistas se pusieron de manifiesto con la llegada de la Dictadura militar del general Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923. Su toma del poder fue, en amplia medida, una respuesta a la agitación social de los seis años anteriores. Pero los socialistas ni previeron el golpe ni mostraron gran inquietud cuando ocurrió, a pesar de que pronto se empezó a perseguir a otras organizaciones obreras. Aparte de un manifiesto que abogaba por la resistencia pasiva^[13], no

hicieron nada por impedir el establecimiento del nuevo régimen y pronto empezaron a colaborar con él, lo que refleja hasta qué punto sus líderes habían salido de la crisis de 1917 convencidos de la necesidad de persistir en una táctica legalista, para no volver a arriesgar jamás la existencia de los sindicatos en un combate frontal con el Estado y conservar a toda costa los logros de la legislación social existente^[14].

Años después, la colaboración con el dictador se convertiría en una carga moral para los socialistas. Es posible que parte del extremismo retórico que mostraron durante la República fuese el síntoma de su deseo de borrar el reformismo egoísta del período de la Dictadura. Algunos apologistas socialistas intentaron justificar el hecho de que ni el PSOE ni la UGT se resistieran al golpe de Primo de Rivera, alegando que habría sido absurdo arriesgar el movimiento obrero para salvar el degenerado sistema político de la monarquía de la Restauración^[15]. El argumento era engañoso, pues estaba en juego algo más que el derrocamiento por Primo de Rivera de los políticos de viejo cuño, como mostró la persecución sufrida por otros partidos^[16]. Además, hubo críticos de izquierda que opinaban que una huelga general habría impedido el golpe y situado a los socialistas en una posición dominante en la política nacional^[17]. Más significativo aún, dentro del propio PSOE hubo quienes se escandalizaron ante el oportunismo mostrado por la dirección. Reconocieron que una acción huelguística contra el ejército habría sido un heroísmo sentimental e infantil, pero no podían admitir que ello justificase una estrecha colaboración con él y se sintieron decepcionados al ver que el partido se limitaba a encogerse de hombros en lugar de resistir, postura de principio que hubiera podido convertirse en un punto de convergencia para una posterior oposición al dictador^[18].

En la realidad, los socialistas no tuvieron un papel significativo en los diversos movimientos de resistencia a la Dictadura, al menos hasta sus últimas etapas. Esta «discreción» dividiría las filas socialistas, aunque los socialistas de izquierda la defenderían más tarde como una negativa a hacer el juego de la oligarquía^[19]. A medida que decrecía la popularidad del dictador, el movimiento socialista en su conjunto empezaba a dissociarse del régimen, pero en los primeros tiempos sólo un pequeño grupo estuvo a favor de una oposición abierta: los seguidores de Indalecio Prieto, que contaban con cierto apoyo en Bilbao y Asturias, y Fernando de los Ríos, cuyos partidarios estaban en Granada. Aunque el resto de los dirigentes socialistas estaban a favor de la colaboración, no todos lo hacían exactamente por las mismas razones. De

hecho, los colaboracionistas eran todos en la práctica reformistas, como también lo eran Prieto y Fernando de los Ríos. En teoría, sin embargo, podían distinguirse dos tendencias entre los colaboracionistas: los sindicalistas prácticos, dirigidos por Francisco Largo Caballero, y quienes seguían al revisionista marxista Julián Besteiro. Sus diferencias sólo se hicieron patentes gradualmente, e incluso entonces estuvieron lejos de resultar claras para los militantes de base. Pero a la larga produjeron las acerbas polémicas de los años treinta y dividieron el movimiento a causa de los muchos seguidores personales que cada dirigente tenía.

Después de Pablo Iglesias, el fundador del socialismo español, Julián Besteiro era la figura más significativa del PSOE y uno de sus escasísimos teóricos. Cuando falleció Iglesias, en 1925, Besteiro se convirtió en presidente del partido y de la UGT. Su posición teórica era análoga a la de Kautsky, al que admiraba^[20]. Con Kautsky compartía un análisis teórico marxista ortodoxo del inevitable progreso de la sociedad a través de una revolución burguesa hacia el socialismo y deducía de ello una praxis específica y gradualista. Como Kautsky, rechazaba la noción de la dictadura del proletariado, considerando la experiencia bolchevique irrelevante para la situación española^[21]. Besteiro, como Iglesias, se fijaba mucho más en el partido laborista británico y en los fabianos como modelo. En consecuencia, estaba a favor de que los socialistas españoles aprovecharan las oportunidades ofrecidas por Primo de Rivera para defender sus intereses materiales^[22].

Los sindicalistas del movimiento que no eran seguidores de Besteiro lo eran generalmente de Largo Caballero, aunque también Prieto tenía sus partidarios, especialmente en el norte. La actitud de Largo Caballero frente a la Dictadura era similar a la de Besteiro, aunque sin la base teórica de este último. Largo era fundamentalmente un sindicalista pragmático que siempre afirmó haber conseguido un puesto destacado dentro del movimiento gracias a la realización asidua de los deberes sindicales y de las tareas diarias de organización. Una vez había escrito que el movimiento obrero era resultado de la inalterable necesidad de mejorar la situación moral y material de los trabajadores dentro del régimen capitalista^[23]. No era, pues, extraño que se opusiese a cualquier empresa que pusiese en peligro ese movimiento, especialmente tras el desastre de 1917. Cuando llegó la Dictadura, él y sus seguidores razonaron que, aunque la lucha política había sido suspendida, el combate sindical tenía que seguir adelante. Después de la crisis posbélica se estaba produciendo una recuperación económica, y pensaron que la primera

tarea de la UGT era hacer todo lo posible por proteger los intereses materiales de sus miembros en las fábricas y talleres^[24]. En la práctica, eso significaba pasar del simple pragmatismo a un oportunismo estricto basado en el deseo de ganar por la mano a los anarcosindicalistas^[25]. Este sectarismo egoísta topó con una considerable oposición en la base, especialmente en Asturias, pero también entre los sectores agrarios de la UGT.

La iniciativa formal de la colaboración procedió del dictador en persona, que podía confiar en una respuesta positiva en vista de la pasividad socialista a raíz de su golpe. Un comunicado conjunto del PSOE y la UGT había ordenado al movimiento socialista no seguir el ejemplo de los obreros de Bilbao, que habían declarado una huelga general^[26]. La oferta del dictador vino en forma de un manifiesto a los trabajadores el 29 de septiembre de 1923, en el que Primo de Rivera agradecía a la clase obrera su actitud durante la toma del poder. El manifiesto iba claramente dirigido a los socialistas. Favoreciendo, por un lado, la legislación social, tan cara a los reformistas de la UGT, llamaba luego a los trabajadores a dejar las organizaciones que les conducían «por caminos de ruina». Esta referencia a los revolucionarios CNT y PCE, era un ofrecimiento apenas velado de que la UGT podía llegar a ser la única organización de la clase obrera si colaboraba con el régimen mientras éste eliminaba a los rivales de la UGT, anarquistas y comunistas^[27]. La alusión alcanzó el objetivo de la vieja hostilidad socialista a la CNT. Poco después, Pablo Iglesias predecía con regocijo la caída de la CNT en términos similares, sobreentendiendo que los trabajadores de sus filas se encontraban en ellas por error o por la fuerza. Dos días después del manifiesto, Primo de Rivera hizo una oferta directa a Manuel Llaneza, presidente del Sindicato Minero Asturiano, invitándole a formar parte de una comisión que iba a estudiar los problemas de la industria minera. Recibiendo la errónea impresión de que el SMA podría así defender sus logros en el terreno de los salarios y las horas de trabajo, al día siguiente Llaneza habló entusiásticamente en una reunión conjunta, favorablemente predispuesta y convocada anteriormente, de las ejecutivas nacionales del PSOE y la UGT^[28]. La reunión decidió apoyar la colaboración iniciada por Llaneza, aunque hubo tres votos en contra de la resolución, entre ellos los de Prieto y De los Ríos.

Llaneza fue dirigente del SMA durante la huelga de 1917 y, testigo de la brutal represión, fue uno de los socialistas más traumatizados por los acontecimientos de aquel año. El miedo a las consecuencias de un nuevo enfrentamiento con el ejército era la base de su colaboracionismo. A su

actitud se oponía, incluso en aquellos momentos iniciales, Teodomiro Menéndez, otro dirigente de 1917 y seguidor fiel de Prieto^[29]. Era un síntoma de la naciente división entre la base de UGT y la dirección reformista. El SMA, además de ser una de las secciones más importantes de la UGT, era también una de las más militantes, e incluso después de la escisión de 1921 mantenía relaciones cordiales con los comunistas locales^[30]. Pero por el momento, la oposición a la táctica de la ejecutiva fue expresada únicamente por De los Ríos y Prieto, quien escribió a Besteiro, a finales de 1923, protestando. Reunido el 9 de enero de 1924, el comité nacional del PSOE ratificó la línea colaboracionista adoptada hasta entonces, aunque hizo una pequeña pero significativa concesión a Prieto: una declaración de que no se aceptarían puestos gubernamentales sin que las personas que fueran a ocuparlos fuesen designadas por el organismo socialista correspondiente^[31].

A pesar de ello, la integración de la dirección nacional en el nuevo régimen fue considerable y la UGT estuvo representada en varios organismos estatales^[32]. Las casas del pueblo socialistas permanecieron abiertas y la mayor parte de las secciones de la UGT pudieron seguir funcionando en tanto que los anarquistas y comunistas vieron totalmente amordazadas sus actividades. El primer indicio del precio puesto por el Directorio militar a la posición privilegiada concedida a los socialistas apareció en marzo de 1924, cuando se prohibieron las manifestaciones obreras previstas para la conmemoración del Primero de Mayo^[33]. A cambio de la docilidad de los obreros, se ofreció a la UGT la mayor recompensa obtenida hasta entonces: un puesto en el Consejo de Estado. El 2 de junio de 1924, el Instituto de Reformas Sociales fue reemplazado por un Consejo del Trabajo, y la delegación de la UGT pasó tal cual de un organismo a otro. El 13 de septiembre, un decreto regio permitió que un representante de los trabajadores y otro de los patronos, miembros del nuevo consejo, pasaran al Consejo de Estado. Los representantes de la UGT eligieron a Largo Caballero, sin que hubiera repercusiones desfavorables en el interior de la UGT (Besteiro era vicepresidente y Largo Caballero secretario general). Pero sí hubo protestas en el PSOE.

Prieto y De los Ríos escribieron sendas cartas a la ejecutiva del PSOE denunciando el oportunismo de la aceptación del puesto por Largo Caballero y advirtiéndole que sería explotado por el dictador por su valor propagandístico. De hecho, Primo de Rivera mencionó la presencia de Largo Caballero en el Consejo de Estado como una razón para no establecer la democracia^[34]. La

ejecutiva se reunió el 17 de octubre para examinar esas objeciones y acordó que el PSOE no se interferiría en nada relacionado con la UGT. No era un proceder muy honrado, pues los mismos individuos formaban parte de los comités ejecutivos de ambas organizaciones y era una práctica normal tener deliberaciones comunes sobre cuestiones nacionales de importancia. Como consecuencia, Prieto dimitió^[35]. La decisión se planteó ante un pleno del comité nacional del PSOE el 10 de diciembre, y la aceptación de Largo Caballero fue ratificada por 14 votos contra cinco. De los Ríos propuso un referéndum entre los militantes, pero no se aceptó^[36]. Esta división dentro del partido iba a tener repercusiones hasta la guerra civil, aunque sólo fuese por las enemistades personales que originó. De hecho, ante los rumores de escisión en el partido, Prieto declaró públicamente que las discrepancias tácticas no habían afectado en absoluto la cordialidad y unión existentes entre los dirigentes del partido. No obstante, es evidente que, tanto entonces como después, Largo Caballero abrigó un tremendo rencor personal contra Prieto^[37].

La colaboración continuó y aumentó a pesar de la evidencia asturiana de que semejante táctica poco servía para proteger los intereses de los trabajadores. Los propietarios de las minas provocaron una huelga en noviembre de 1924 al solicitar una reducción salarial. Mientras Llaneza se precipitaba a Madrid a visitar a Primo de Rivera, los propietarios dieron un golpe preventivo, despidiendo a 350 trabajadores. Cuando estalló la huelga sólo fue defensiva y apenas consiguió mantener los salarios a su nivel anterior, lo que ocasionó críticas de elementos de la izquierda socialista que afirmaron que la colaboración significaba entregar atados de pies y manos los mineros a los propietarios^[38]. En absoluto desalentada, la UGT mantuvo su actitud pacífica, negándose a unirse a los movimientos de resistencia de la Dictadura. Citando la acción en Asturias como un triunfo, resultado de la colaboración con el régimen, Pablo Iglesias afirmó que, a pesar de la censura y los límites a las reuniones y huelgas, tanto la UGT como el PSOE crecían bajo la Dictadura. De hecho, en 1926 iba a tener lugar la cooperación más importante de la UGT hasta el momento. Largo Caballero, hablando en la Casa del Pueblo de Madrid, condenó rotundamente el sabotaje industrial, los ritmos lentos y las huelgas como provocadores de cierres empresariales y declaró que la oposición al régimen podría ser desastrosa para la organización de la clase obrera^[39].

En noviembre de 1926, el ministro de Trabajo de Primo de Rivera, Eduardo Aunós, puso en marcha la Organización Corporativa Nacional. Resultado en gran medida de un viaje de estudios que había realizado a Italia, e incorporando gran parte de la legislación social existente, pretendía a largo plazo reemplazar a los partidos de derecha e izquierda y eliminar la lucha de clases^[40]. Su manifestación más práctica fue la creación de unos organismos de arbitraje, los comités paritarios. La UGT decidió aceptar la invitación del régimen, basándose en que se podían obtener beneficios materiales inmediatos. Consideraron que si la mejora de situación de los trabajadores habría que negociarla a través de los comités, y la representación de los trabajadores estaba exclusivamente en manos de la UGT, los trabajadores no socialistas afluirían a sus filas. Las principales actividades de los comités consistían en negociar los contratos salariales y las bases de trabajo y en conseguir indemnizaciones por despidos improcedentes. La burocracia sindical pensaba que los comités evitarían muchas huelgas y sacrificios innecesarios a la clase obrera^[41]. Años después, cuando se criticó a la UGT por su oportunismo al haber aceptado los comités paritarios, se alegó frecuentemente que los oradores de la UGT se servían de ellos como plataforma propagandística contra la Dictadura^[42]. Hay pocas pruebas de ello, y si realmente ocurrió así, fue cuando ya la marea de la opinión pública se había vuelto contra el dictador y la UGT estaba intentando disociarse del régimen.

En cualquier caso, resulta difícil calcular cuántas huelgas evitó la existencia de los comités paritarios. Ciertamente, hacia 1927, la expansión económica, que tanto había favorecido a la Dictadura, estaba llegando a su fin y cada vez había más pruebas de descontento sindical y aumentos significativos del desempleo^[43]. Aparte de que afectase a la estabilidad del régimen, tuvo que repercutir grandemente en el movimiento socialista, pues indicaba la existencia de una división entre la militancia de base y el tímido conservadurismo de la dirección de UGT. Esa división era más evidente en Asturias. En el otoño de 1927, los propietarios de minas trataron de aumentar las horas de trabajo y de disminuir las tasas de los destajos. Llaneza estaba en contra de la huelga porque temía que se enviase al ejército contra los mineros. El Sindicato Minero Asturiano desechó sus opiniones y siguió adelante con la huelga, que tuvo éxito. El efecto, a nivel nacional, fue que los dirigentes asturianos comenzaron a favorecer el abandono de la línea colaboracionista de la UGT. Apenas tenían otra alternativa, pues los efectivos del SMA estaban

disminuyendo a un ritmo alarmante, bajando de 20 000 en 1921 a 3000 en 1929^[44].

La oposición a la dirección no se limitó a los mineros asturianos, sino que afectó también a las secciones rurales de la UGT. Los trabajadores agrícolas formaban el grupo profesional más numeroso dentro de la UGT, y la alarma por la disminución de sus efectivos muestra su importancia creciente en el movimiento socialista^[45]. Además, era el sector que menos beneficios había obtenido de la cooperación de la UGT con la Dictadura. Los comités paritarios agrarios no fueron establecidos nunca, y los débiles intentos de Aunós para ayudar a los trabajadores del campo sirvieron para unir a los terratenientes del sur contra Primo de Rivera^[46]. Un reflejo significativo de los sentimientos del sector agrario del movimiento provino de Gabriel Morón, un veterano dirigente de Córdoba y una voz importante dentro del partido. En una crítica devastadora del fracaso de la dirección en la resistencia contra la Dictadura, aseguró que la actitud egoísta de la UGT estaba dividiendo al movimiento obrero, y se quejó de que no se hiciese nada para preparar a las masas para el fin del régimen. Pidió que se abandonasen los cargos oficiales, porque seguir en ellos significaba cambiar el prestigio histórico del partido por una protección oficial a corto plazo^[47].

El descontento que salía a la luz parecía justificar la actitud adoptada cuatro años antes por Prieto y De los Ríos. Más aún, su postura parecía ganar adhesiones, sobre todo dentro del PSOE. En septiembre de 1927, Primo de Rivera ofreció seis puestos en su nueva Asamblea Nacional, que iba a deliberar sobre una posible reforma constitucional. Los seis —Largo Caballero, Núñez Tomás, Llaneza, De los Ríos, Santiago Pérez Infante y Lucio Martínez Gil— rechazaron el ofrecimiento. Se convocaron congresos extraordinarios de la UGT y el PSOE para el 7 y el 8 de octubre, respectivamente, y en ellos se ratificó el rechazo (una victoria clara de los anticolaboracionistas). Aún más, el PSOE hizo una declaración pidiendo el restablecimiento de la libertad y la democracia. Sin embargo, los seguidores de Besteiro se aferraron a la táctica colaboracionista. Besteiro se encontraba enfermo, pero dos de sus más fieles partidarios, Trifón Gómez, del Sindicato Nacional Ferroviario, y Andrés Saborit, de la Federación Gráfica Española, propusieron que se aceptara la oferta de Primo de Rivera si los socialistas podían elegir a sus representantes. La polémica levantada fue tan áspera que se decidió postergar la decisión^[48].

El debate sobre la Asamblea Nacional mostró que la intensificación de la conflictividad social estaba teniendo un efecto, gradual pero significativo, en la configuración de fuerzas dentro del movimiento socialista. De las tres tendencias del movimiento, los socialdemócratas que seguían a Prieto, el «kautskismo» de Besteiro y el sindicalismo pragmático de Largo Caballero, esta última fue la más visiblemente afectada por el cambio de ánimo de las masas obreras socialistas. En 1924, Largo había optado por la cooperación con la Dictadura porque al actuar así se conseguirían sustanciales beneficios materiales para la UGT; sin mayor fundamento teórico, por lo tanto, en 1927 empezó a variar de opinión ante las pruebas cada vez más evidentes de que semejante táctica estaba teniendo efectos nefastos sobre la adhesión a la UGT. La colaboración les había costado ya a los socialistas el oprobio de otros grupos de la izquierda^[49]. La pérdida de prestigio sólo se podía justificar si iba compensada por un incremento de los efectivos. Y no parecía que el monopolio virtual de la UGT en los mecanismos estatales de arbitraje laboral tuviese un efecto significativo en el reclutamiento de nuevos miembros. De hecho, dos de las secciones más fuertes de la UGT, los mineros asturianos y los trabajadores agrícolas, habían tenido pérdidas apreciables durante la Dictadura^[50]. El bienestar material de la UGT significó siempre para Largo Caballero más que cualquier teoría, y fue por ello siempre sensible a los cambios en los sentimientos de los miembros de la base, lo que sirve también para explicar muchos de sus cambios de táctica durante la República, cuando otra vez los asturianos y los trabajadores de la tierra estuvieron a la vanguardia de la militancia.

La extensión que estaba alcanzando la oposición a la Dictadura dentro del movimiento socialista se vio claramente en el XII Congreso del PSOE, que se celebró del 29 de junio al 4 de julio de 1928. De los Ríos se hallaba en Sudamérica, pero Prieto y Teodomiro Menéndez defendieron una línea clara de oposición y ya no estaban solos. Se formó una comisión especial para examinar la táctica del partido. La colaboración fue rechazada por la comisión por seis votos contra cuatro. La mayoría incluía a Morón, de Córdoba, y a Teodomiro Menéndez, de Asturias, que pronunció también un resonante discurso contra la colaboración en el propio congreso^[51]. Por motivos de censura, no se dio publicidad a las discusiones de la comisión sobre táctica. Pero al suponer la derrota de los partidarios de Largo Caballero, parecen haber influido en la concepción de éste sobre el papel de los socialistas en la Dictadura. No obstante, por el momento, y a pesar de la creciente oposición verbal en favor de una actitud en pro de la libertad y la democracia, el parecer

mayoritario siguió siendo procolaboracionista, como se reflejó en las elecciones a los cargos del partido en el XII Congreso, así como para los puestos de la UGT en el XVI Congreso de la UGT, celebrado del 10 al 15 de septiembre. Besteiro fue elegido presidente del PSOE y la UGT, y todos los cargos directivos fueron atribuidos a besteiristas o seguidores de Largo Caballero^[52].

Sin embargo, el conflicto entre el movimiento obrero y el régimen iba creciendo. Después de que las fuerzas del orden aplastaran una huelga en Sevilla, a los socialistas del sur les quedó poca fe en la eficacia de la cooperación^[53]. En Asturias, la incapacidad de los comités paritarios para resolver los problemas de las minas era aún más evidente. Las minas no estaban bien organizadas y su carbón era de poca calidad. En 1928, la industria carbonífera empezó a resentirse de la competencia del *dumping* del carbón inglés barato. Fueron despedidos 4000 mineros. La negociación era imposible, y las soluciones reformistas, fuera de propósito. Los mineros pedían la nacionalización de las minas; los propietarios, reducción de salarios y despidos. Evidentemente, Primo de Rivera no podía consentir ataques contra la estructura de la propiedad. Cuando Llaneza se le quejó de que los mineros sólo tenían trabajo dos semanas al mes, el dictador le respondió: «Ustedes se alarman demasiado, más vale trabajar dieciséis días que nada». Los mineros estaban siendo empujados ya hacia la radicalización, que iba a ser uno de los principales problemas de la República^[54].

Cada vez era más difícil a la dirección socialista el sostener que la colaboración beneficiaba a la clase obrera. Sin embargo, Largo Caballero continuaba oponiéndose a la acción directa y manifestando su apoyo a la legislación del gobierno^[55], aunque separándose progresivamente del compromiso con el régimen. Las posibilidades de elección no eran muy amplias, puesto que éste se iba a pique. Las universidades estaban amotinadas. Intelectuales y políticos republicanos y monárquicos protestaban contra los abusos de las leyes e incluso preparaban movimientos de resistencia. Para ello podían contar cada vez más con el apoyo del ejército, herido por el trato despótico de Primo de Rivera con la artillería. La burguesía estaba alarmada ante la caída de la peseta, y conforme transcurría el año 1929 empezaron a hacerse notar en la economía española los primeros efectos de la depresión mundial. Los socialistas se quedaban gradualmente aislados como únicos defensores del dictador, salvo su Unión Patriótica.

El temor a ser superados por las circunstancias cambiantes y a perder el apoyo de la base acabó por afectar a la mayoría colaboracionista de la dirección socialista. El 26 de julio de 1929, Primo de Rivera ofreció a la UGT la posibilidad de escoger cinco representantes para su Asamblea Nacional. Su primitiva oferta de septiembre de 1927 había sido rechazada únicamente porque no permitía la elección de los representantes por los socialistas. Los comités nacionales del PSOE y la UGT tuvieron una reunión conjunta para discutir el ofrecimiento el 11 de agosto. Se presentaron dos propuestas principales. La primera, de Largo Caballero, propugnaba rechazar la oferta, basándose en que aceptarla significaría la violación de los acuerdos del congreso extraordinario de la UGT del 7 de octubre de 1927. Esto, aparte de no ser totalmente cierto, significaba un importante cambio de postura por parte de Largo Caballero, que, evidentemente, había decidido que la Dictadura estaba desacreditada y que sería contraproducente para el movimiento socialista prolongar su asociación con ella. La otra propuesta, de Besteiro, estaba a favor de aceptar la oferta de Primo de Rivera.

Las discusiones de la reunión mostraron hasta qué punto habían advertido los líderes sindicales el peligro de perder su ascendiente sobre las masas socialistas. Sólo Enrique Santiago y Wenceslao Carrillo apoyaron la propuesta de Besteiro. Pero el cambio de táctica sólo se adoptó de mala gana y bajo la presión de los acontecimientos y de la base. Andrés Saborit, el más fiel seguidor de Besteiro, comentó: «Nuestro voto se fundamentaba en el examen que hacíamos de las circunstancias políticas. En el fondo era una rectificación de toda una política acertada, puro oportunismo»^[56].

Besteiro había convocado un congreso extraordinario de la UGT para decidir la cuestión. Las objeciones hechas a su propuesta pusieron de manifiesto hasta qué punto habían comenzado a influir en los dirigentes las opiniones de las masas socialistas. Largo Caballero afirmó que estaba totalmente de acuerdo con las razones de Besteiro a favor de la colaboración con el régimen, pero no con la convocatoria de un congreso. Era evidente que no quería tener que enfrentarse con una rebelión de la base. Trifón Gómez, dirigente del Sindicato Nacional Ferroviario y besteirista, dijo, defendiendo su voto en contra del presidente: «Yo no tengo inconveniente en suscribir el documento que acaba de leer Besteiro, pero tengo en cuenta los sentimientos de la clase obrera organizada y creo inútil y perjudicial la convocatoria de un congreso, porque los delegados vendrán, en su inmensa mayoría, a votar en contra de ir a la Asamblea». En la votación final, sólo Santiago votó a favor

de Besteiro, pues Carrillo también estaba convencido de que los delegados de un congreso votarían contra la ejecutiva^[57].

Incluso a Besteiro le afectaron las circunstancias, aunque con una consistencia teórica mayor. Si se veía obligado a criticar a la Dictadura, era a causa de un reformismo intelectual, y no por las consideraciones prácticas que movían a la burocracia sindical. La Asamblea Nacional, a la que se había invitado a la UGT, iba a discutir un proyecto de reforma constitucional que habría bloqueado toda vuelta a la normalidad «democrática». Besteiro se había mostrado partidario de aceptar la invitación para impugnar el proyecto en la Asamblea. De hecho, salvo el grupo prietista, el resto de la dirección socialista estaba básicamente de acuerdo con él, pero prefería ceder ante los sentimientos de la base. Rechazada la invitación del dictador, Besteiro redactó un manifiesto con sus opiniones sobre la proyectada reforma constitucional. Firmado por Besteiro y Saborit, por el PSOE, y por Besteiro y Largo Caballero, por la UGT, el manifiesto salió a la luz el 13 de agosto de 1929. La censura prohibió su publicación y fue impreso y distribuido clandestinamente^[58].

El texto del manifiesto contenía una amplia demostración del pensamiento de Besteiro sobre la crisis política y el papel en ella del movimiento socialista. No era incoherente con su postura acerca de la colaboración con el régimen. Besteiro pensaba que en la larga marcha hacia el establecimiento del socialismo era legítimo utilizar todos los medios legales para mantener o mejorar la situación del movimiento socialista. Considerando a la Dictadura como un estadio transitorio de la descomposición del régimen monárquico, le parecía lógico aceptar los privilegios ofrecidos por el dictador, y ello porque, conforme a su análisis marxista rígidamente ortodoxo, la monarquía tenía que ser derribada por una revolución burguesa, y, por lo tanto, la tarea de los socialistas consistía en mantener intacta su organización hasta que llegase su hora. En 1929, el proyecto de reforma constitucional de Primo parecía tratar de legitimar y convertir en permanente la naturaleza transitoria de la Dictadura. Besteiro consideraba que la vía hacia el socialismo había de ser legal, y el plan de Primo de Rivera intentaba cerrar las posibilidades legales. Su primera reacción fue impugnar legalmente el proyecto en la Asamblea. Cuando el movimiento se opuso a ello, redactó el manifiesto. Sus críticas al proyecto eran de dos clases. La más inmediata y a corto plazo se basaba en que el proyecto sólo hacía vaguísimas promesas de reforma social y expresaba la intención de restringir el derecho de huelga. Más importantes

eran sus críticas de los efectos a largo plazo del proyecto si llegaba a ponerse en práctica. Los poderes que se otorgarían al rey imposibilitarían que el Parlamento introdujese reformas que socavaran los intereses de la oligarquía. De acuerdo con ello, Besteiro llegaba a la conclusión de que la condición previa para la marcha democrática hacia el socialismo consistía en «un Estado republicano de libertad y democracia donde podamos alcanzar la plenitud del poder político que corresponde a nuestro creciente poder social». Si Primo de Rivera acababa con la posibilidad de establecer las condiciones políticas necesarias para el desarrollo del socialismo, ni la UGT ni el PSOE serían responsables de las acciones a que se vieran obligados^[59].

Esta declaración tajante no significó, empero, la unión de las tres tendencias del movimiento socialista. Podría haberse pensado, por ejemplo, que el rechazo por Besteiro de la Dictadura le acercaría a las posiciones de Prieto y De los Ríos, pero la coincidencia era únicamente accidental. No siendo marxistas de convicción, estaban siempre más interesados por la libertad y los derechos democráticos como fines en sí mismos. Besteiro era también un demócrata convencido, pero pensaba que el establecimiento de las libertades básicas era labor de la burguesía. De ahí que, en tanto que Prieto y De los Ríos estaban a favor de la cooperación con los republicanos de clases medias contra la monarquía, Besteiro temiese que se utilizara a la clase obrera para fines burgueses y perdiese de vista sus objetivos a largo plazo. La postura de Largo Caballero era también distinta. Pragmático y oportunista, se interesaba sólo por dos cosas: los intereses materiales del movimiento socialista frente a cualquier otro grupo y el mantenimiento del control de la burocracia socialista sobre la base. Este pragmatismo hizo que la postura de Largo Caballero se viese sujeta a variaciones más repentinas e inconsistentes que las de las otras dos tendencias.

Largo se iba aproximando a la postura de Prieto de colaborar con los republicanos, aunque todavía dentro de un contexto de reformismo profundo. Pronto se vio que este cambio era una adaptación a los deseos de los militantes de base. El 16 de septiembre de 1929 pronunció un discurso ante la Federación Gráfica Española, en Santander, en el que declaró que los socialistas no podían seguir limitando su interés a cuestiones estrictamente sindicales, «porque, *contra nuestra voluntad*, las circunstancias nos llevan a tener que intervenir en todos los problemas de carácter nacional». Dejó bien claro que estaba alerta ante el fin de la Dictadura y que cambiaba su táctica de acuerdo con ello. «Yo, que soy tachado de tendencia de derechas, soy de los que opinan que, mientras la clase obrera pueda actuar relativamente dentro

de una esfera de un círculo legal que le permita desarrollar su organización, sería locura salirse de este círculo; pero también creo que si los que tienen obligación de conocer los anhelos del país cierran los ojos ante estos anhelos y anulan las posibilidades por donde nuestro país pueda desarrollarse hacia el progreso, la clase obrera sabrá cumplir con su deber»^[60]. Esta nueva militancia no dejaba de tener relación, quizá, con el hecho de que en Santander se habían dado importantes enfrentamientos entre los socialistas locales y la Dictadura. Largo se iba alejando de las posiciones de Besteiro y se aproximaba a las de Prieto. El 12 de enero de 1930 declaraba que en la vía hacia el socialismo habría que pasar por un largo período de transición en el que los socialistas podrían colaborar con los gobiernos republicanos burgueses e incluso hacerse «administradores del capitalismo»^[61]. Cuando también esta actitud demostró que perjudicaba al movimiento obrero en 1933, Largo Caballero la abandonó fácilmente en favor de una mayor radicalización.

Aunque se pueden distinguir tres tendencias principales en el PSOE, estaban parcialmente ocultas por algunas coincidencias del análisis político. Como es propio de un partido que rechazaba el bolchevismo, las tres tendencias participaban de una orientación esencialmente reformista. Esto quedó suficientemente claro después de la decisión de no adherirse a la III Internacional, y volvió a evidenciarse a principios de 1924, cuando los tres sectores del PSOE recibieron jubilosamente el establecimiento del primer gabinete laborista en Inglaterra. Pablo Iglesias comentó en términos exagerados que este acontecimiento enmendaría el daño producido al socialismo mundial por las tácticas de los comunistas rusos. Largo Caballero dijo que era «el hecho más importante de toda la historia del socialismo internacional»^[62]. Luis Araquistáin, posteriormente uno de los consejeros más radicales de Largo Caballero, subrayó la importancia de las lecciones que había que sacar del camino británico al socialismo^[63]. Besteiro, claro está, ya tenía algo de fabiano y era un firme seguidor y admirador del socialismo británico^[64]. De los Ríos estaba también encantado con la victoria laborista y vio en ella la prueba de que podía evitarse la lucha de clases^[65]. De hecho, por muchas razones, en España iba a resultar imposible una marcha gradual hacia el socialismo. El darse cuenta de ello iba a afectar a las tres tendencias del movimiento socialista español de distinta manera, y esas respuestas distintas exageraron las divisiones, ya visibles en los años veinte, y fueron la base de las feroces polémicas que desgarraron a los socialistas españoles en los años treinta.

Sin embargo, por el momento, todo esto no estaba tan claro. El dictador dimitió el 28 de enero de 1930, y en la euforia subsiguiente los socialistas parecieron menos divididos que en cualquier otro momento desde 1923. Además, estaban en la mejor posición de toda su historia. Los viejos partidos liberal y conservador, alejados durante tanto tiempo de los antiguos mecanismos de fraude electoral y desmoralizados por el patrocinio regio del dictador, se hallaban en una completa confusión. Los nuevos partidos republicanos estaban aún en su forma más embrionaria. Por tanto, el PSOE era el único partido político bien organizado a principios de 1930. La situación de la UGT era aún más favorable dadas las dificultades con que habían tenido que actuar los anarquistas y comunistas. Inevitablemente, la creciente oposición a la monarquía buscó apoyo en los socialistas. Estaban seguros de una respuesta favorable de Prieto y sus seguidores socialistas democráticos, y conforme se agudizó la crisis y la base fue aumentando su militancia, Largo Caballero se acercó aún más rápidamente a la postura de Prieto. Sólo Besteiro era hostil; creyendo que incumbía a los republicanos burgueses realizar su propia revolución y decidido a que las masas socialistas no fuesen utilizadas como carne de cañón, adoptó una actitud pasiva.

Al principio, Besteiro se sumergió en sus actividades profesionales de catedrático de Lógica en la Universidad de Madrid^[66]. Parecía como si quisiera evitar las cuestiones a que había de enfrentarse. Redactó el manifiesto conjunto de la UGT y el PSOE con motivo de la aparición del gobierno del sucesor de Primo de Rivera, el general Dámaso Berenguer. Expresando dudas sobre la promesa de Berenguer de restablecer las libertades básicas, el manifiesto condenaba su régimen por ilegítimo y carente de un mandato popular. Aun siendo crítico, el texto de Besteiro no contenía ninguna indicación de oposición activa a Berenguer ni de interés en maniobrar para cambiar el régimen. De hecho afirmaba que si se restableciesen las libertades políticas, el movimiento socialista reanudaría su participación en la vida política normal^[67]. No es de extrañar que Berenguer confiase en que los socialistas no le iban a causar problemas. El 29 de enero de 1930, el día que asumió el poder, recibió un informe sobre la situación política y social del país, realizado por el director general de Seguridad, el general Bazán. El informe alababa a los dirigentes socialistas por haber contenido la agitación política de la base. Concluía que los socialistas, lejos de constituir un peligro para el orden establecido, podían ser considerados como garantes de él^[68]. El sucesor de Bazán, el general Emilio Mola, confiaba igualmente en que se podría contar con la burocracia sindical para manejar y contener la acción

combatiente de la base^[69], aunque estaba preocupado por su capacidad para lograrlo.

No pasó mucho tiempo antes de que los socialistas se vieran sometidos a una presión creciente por parte de las fuerzas republicanas para que se incorporasen al movimiento contra la monarquía. Besteiro estaba decididamente en contra de ese tipo de colaboración socialista y lo dijo en varias ocasiones, insistiendo en que los republicanos se mostrasen unidos y presentaran un programa claro antes de solicitar el apoyo socialista^[70]. Prieto seguía tan estrechamente vinculado a la causa del republicanismo como lo había estado durante la Dictadura, e incluso estaba jugando un papel más importante. Uno a uno, los políticos más significativos del país se iban declarando contrarios al rey. El 20 de febrero de 1930, Miguel Maura, hijo del gran primer ministro conservador Antonio Maura, anunció su recién adoptado republicanismo. El 27 de febrero, otro gran conservador, José Sánchez Guerra, declaró que había perdido la confianza en Alfonso XIII. Fueron seguidos por otros monárquicos significativos, Angel Ossorio y Gallardo y Niceto Alcalá Zamora. Pero las palabras que mayor efecto popular tuvieron fueron las de la conferencia que Prieto pronunció el 25 de abril en el Ateneo madrileño. Para desazón tanto del grupo de Besteiro como de Largo Caballero, Prieto abogó por un movimiento revolucionario contra la monarquía con la participación de las masas socialistas^[71].

Sin embargo, antes de que transcurriese el verano de 1930, Largo Caballero dio muestra de tanto entusiasmo como Prieto por la colaboración socialista en el movimiento republicano. No había consistencia teórica en su actitud. Actuaba, como lo había hecho a lo largo de los años veinte, con un oportunismo basado en lo que calculaba que serían los intereses inmediatos de la UGT. Dos cosas en especial impulsaron a Largo Caballero a cambiar de táctica: la crisis económica, cada vez más evidente, y su efecto en la militancia cotidiana de la base socialista y, sobre todo, los rápidos avances de la anarquista CNT y, en menor escala, del partido comunista.

Como en los últimos años de la década de los veinte, la recesión de la economía resultaba especialmente visible en los sectores minero y agrícola. Las tendencias militantes de los mineros asturianos habían sido refrenadas por Llaneza a costa de la pérdida de adhesiones, pero éste falleció en enero de 1930. A partir de entonces aumentó la influencia de Prieto. En marzo, bajo la dirección del prietista Ramón González Peña, el Sindicato Minero Asturiano combatió con éxito por un aumento salarial del 7 por 100. Y a pesar de las

órdenes de la comisión ejecutiva del PSOE de no pactar con grupos republicanos, la Federación Socialista Asturiana siguió pronto una política prietista de aliarse en el combate contra la monarquía^[72].

A nivel nacional, la militancia laboral crecía a un ritmo vertiginoso. En 1930 hubo, en comparación con 1929, cuatro veces más huelgas con cinco veces más huelguistas y con la pérdida de diez veces más jornadas laborales^[73]. La dirección de la UGT parecía no darse cuenta de la importancia de la crisis económica y estuvo lejos de distinguirse en los conflictos laborales de la primavera. De hecho, el general Mola llegó a pensar en proponer un acuerdo entre la UGT y los sindicatos «amarillos» patrocinados por el Gobierno, los «sindicatos libres», para combatir la agitación anarquista y comunista^[74]. La CNT había sido autorizada en abril y estaba recobrando su anterior fuerza a una velocidad asombrosa. En junio estallaron huelgas en Cataluña, Levante, Aragón y Andalucía. Los comunistas no alcanzaron la misma influencia, pero tenían un apoyo importante y militante en el País Vasco y en Sevilla, donde la paralización del extravagante programa de obras públicas de Primo había dejado en paro a un gran número de obreros de la construcción^[75].

La oleada de huelgas puso de manifiesto que la base de la UGT era considerablemente más militante que sus dirigentes. Mola se convenció de que lo que él denominaba la «gimnasia revolucionaria» de la CNT estaba obligando gradualmente a la dirección de la UGT a seguir el mismo camino por temor a perder miembros. Siempre había sido característico de la burocracia sindical socialista una celosa vigilancia de las otras organizaciones, y parece haber tenido una influencia decisiva en los dirigentes sindicales a mediados de 1930. Además, seguir adelante con la base chocaba frontalmente con los intereses económicos de la dirección. Mola confiaba en su reformismo debido a los ingresos que la burocracia socialista cobraba por participar en los comités paritarios. Les interesaba hacer funcionar los mecanismos de arbitraje salarial^[76]. Es de lo más significativo a este respecto transcribir la opinión de un miembro de la burocracia ugetista conocido por sus múltiples cargos en la maquinaria estatal, Manuel Cordero^[77]. Explicando cómo se unió la UGT al movimiento contra la monarquía en 1930, dice que «nuestro optimismo revolucionario no se había entibiado poco ni mucho... Era evidente que nos hallábamos ante una revolución inminente que se realizaría con nosotros, sin nosotros y hasta contra nosotros si era menester»^[78].

Las informaciones policiales indujeron a creer al director general de Seguridad que la preeminencia cenetista en las huelgas estaba perjudicando a las adhesiones a la UGT, en especial entre los jóvenes. La principal consecuencia de ello, sobre todo en el sur, fue que la UGT pasó gradualmente en el verano de 1930 de jugar un papel secundario en las huelgas dirigidas por anarquistas a otro más independiente y dinámico. Con la excepción del País Vasco, donde Prieto tenía un considerable apoyo, la iniciativa de la participación socialista en el movimiento republicano provino de las masas, con la dirección dominada por Besteiro y Largo Caballero a remolque de la situación. Durante el verano, la mayor agitación laboral tuvo lugar en el sur, con huelgas generales en Sevilla, Granada y Málaga. Para septiembre se había extendido al norte industrializado. Galicia, Asturias y el País Vasco estaban también activándose. Además, si bien al principio las huelgas tendían a objetivos económicos limitados, no transcurrió mucho tiempo antes de que manifestaran una orientación claramente política, comenzando con protestas contra las medidas represivas del gobierno y transformándose finalmente en peticiones de un cambio de régimen. En octubre, por ejemplo, una huelga de un día convocada por la UGT en Bilbao para el día 4 fue reprimida por la Guardia Civil. La huelga se prolongó por otros cuatro días en señal de protesta. El 23 de octubre, el PSOE vasco y la UGT se pronunciaron a favor de la adhesión al movimiento republicano. A mediados de noviembre, en un accidente de la construcción, en Madrid perdieron la vida cuatro obreros, y la UGT, secundada por la CNT, convocó una huelga general en la que también se produjeron enfrentamientos entre obreros y fuerzas del orden. Cada vez resultaba más evidente que la tendencia espontánea de las masas socialistas iba en dirección de la línea por la que abogaba Prieto y se apartaba de la burocracia sindical. De hecho, un miembro de la comisión ejecutiva besteirista de la UGT, Manuel Muiño, dijo a Mola que la dirección no podía oponerse a la tendencia predominante en la UGT^[79].

No deja de ser significativo que la participación de la UGT en las huelgas aumentase después de la fundación, en abril de 1930, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. Fundada con 157 secciones, que totalizaban 27 340 miembros, la FNTT había pasado en dos meses a contar con 275 secciones y 36 639 miembros. Fue el principio de una rápida expansión con la que la UGT sobrepasaría el millón de adherentes en 1932. La importancia de la FNTT dentro de la UGT se puso pronto de manifiesto, ya que la UGT en bloque, incluida la FNTT, registraba unos incrementos relativamente menores. En diciembre de 1929, la UGT contaba con 1511

secciones y 228 507 miembros. Un año después había pasado a 1734 secciones y 277 011 miembros^[80]. Naturalmente, estas cifras no son definitivas, pues se basan en el pago de las cotizaciones. Muchos trabajadores, especialmente en el sur rural, podían seguir las instrucciones de la UGT acerca de una huelga sin ser formalmente miembros de ella. Pero el desarrollo desproporcionado de la FNTT refleja de forma clara su influencia creciente en el interior del movimiento socialista. Las cifras indican, además, que Mola no se equivocaba al decir que la CNT estaba haciendo estragos entre los miembros de la UGT, ya que todos los incrementos de 1930 se basaban virtualmente en obreros agrícolas. En las áreas industriales, las adhesiones a la UGT apenas si consiguieron mantenerse al nivel anterior.

Gran parte de la oleada de huelgas de la segunda mitad de 1930 tuvo lugar en el sur. En parte, era resultado de la frenética agitación anarquista y comunista, pero, sobre todo, una respuesta a la grave crisis que afectaba a la agricultura andaluza. Las tormentas primaverales habían arruinado la cosecha de aceituna, lo que no sólo privó a los trabajadores sin tierra de la mayor parte de sus ganancias anuales, obtenidas normalmente durante la recogida de la aceituna de mediados de noviembre a mediados de enero, sino que además disminuyó la cantidad de trabajo disponible durante el período restante. Jaén, dos tercios de cuya producción agraria consistía en aceitunas, fue la provincia más afectada, seguida por Córdoba y Sevilla. A las tormentas de primavera había seguido un verano tan seco y tan duradero que en noviembre Sierra Nevada no tenía nieve. Esto afectó gravemente al cultivo de cereales. El desempleo resultante fue desde un 12 por 100 en Cádiz, un 13 por 100 en Huelva y Córdoba y un 16 por 100 en Granada hasta un 50 por 100 en Jaén y Sevilla^[81]. Las consiguientes penalidades económicas de los braceros se reflejaron claramente en el aumento de las huelgas en el sur.

La FNTT era dirigida por un besteirista, Lucio Martínez Gil; es decir, por un miembro del grupo que se oponía a cualquier forma de colaboración con los republicanos. Pero existía el sentimiento creciente entre la clase obrera en general y entre los jornaleros del sur en particular de que sólo una república podía resolver los problemas económicos y sociales de España. El desarrollo de la concepción de la República como panacea se centró en la perspectiva de una reforma agraria radical^[82]. Al parecer, esta actitud y la evidencia de la creciente militancia tuvo alguna influencia en Largo Caballero. La presteza con que promulgó decretos que favorecían a los jornaleros del sur al ocupar el cargo de ministro de Trabajo, en abril de 1931, demostraba gran sensibilidad a

sus problemas. Y en términos generales es evidente que el aumento de la agitación laboral fue acompañado de un aumento paralelo del interés de Largo Caballero por las vinculaciones de Prieto con el movimiento republicano.

Prieto y De los Ríos asistieron a una reunión de dirigentes republicanos en San Sebastián el 17 de agosto. De esa reunión surgieron el denominado pacto de San Sebastián, el comité revolucionario republicano y el futuro gobierno provisional de la República. Inmediatamente después, De los Ríos marchó a Madrid para informar a la comisión ejecutiva del PSOE. Besteiro no se tomó muy en serio las peticiones republicanas de colaboración socialista. Pero, tras una reunión entre Besteiro, Saborit, Cordero, Prieto, De los Ríos y el republicano Álvaro de Albornoz, se decidió convocar una reunión plenaria del comité nacional del PSOE. Tuvo lugar el 16 de septiembre, y en ella se produjo un enfrentamiento directo entre los besteiristas y De los Ríos. Ningún grupo había cambiado desde la Dictadura. En tanto que Prieto y De los Ríos apoyaban la llegada de la República por razones de ética socialista democrática, Saborit, en nombre del grupo de Besteiro, se adhería a la rígida línea marxista de que era la burguesía quien tenía que realizar la necesaria revolución burguesa. Significativamente, Largo Caballero no asistió. El resultado de la reunión fue una declaración evasiva de que no se había llegado a ningún acuerdo con los republicanos^[83].

Largo Caballero había estado en Bruselas asistiendo a un congreso internacional, pero regresó a España a tiempo de ser informado, en la segunda semana de octubre, del ofrecimiento del comité revolucionario al PSOE de dos Ministerios en un futuro gobierno republicano. Los comités nacionales de la UGT y el PSOE se reunieron el 16 y el 18 de octubre, respectivamente, para discutir el ofrecimiento y el precio pedido a cambio: el apoyo de los socialistas, mediante una huelga general, a un golpe de Estado. Las posturas de los besteiristas y de los prietistas siguieron sin variar. El equilibrio fue roto por Largo Caballero. Tras haberse mostrado durante tanto tiempo de acuerdo con la burocracia sindical besteirista, empezó de pronto a apoyar la línea de Prieto, declarando que el PSOE debía ser un partido más del movimiento republicano. Este cambio fue resultado del mismo oportunismo que había inspirado su inicial colaboración y posterior oposición a la Dictadura. Él mismo dijo entonces: «Estamos en una cuestión de táctica, no de principios». Se decidió que la UGT apoyaría la insurrección militar a cambio del compromiso de que cuando se estableciese la República se tomarían medidas para redistribuir la propiedad, introducir un control obrero en la industria y establecer mecanismos arbitrales mediante un sistema de jurados mixtos. El

comité republicano aumentó entonces su primitiva oferta a tres Ministerios. Cuando la comisión ejecutiva del PSOE se reunió para examinar el ofrecimiento aceptó por ocho votos contra seis, y Prieto, De los Ríos y Largo Caballero fueron designados como los tres ministros socialistas del gobierno provisional^[84].

Como anteriormente, no existía una razón teórica para el brusco cambio de orientación de Largo Caballero. Dada su conocida sensibilidad para detectar el estado de ánimo de la base de la UGT, no resulta difícil ver en su acción una respuesta tanto al aumento de conflictos laborales como al carácter recientemente político de éstos. Además, como Largo Caballero había estado influido a lo largo de toda su carrera por un sentido de rivalidad con la CNT, debe haber acusado los éxitos anarquistas de 1930. Se puede apreciar, pues, una característica de la conducta de Largo Caballero, visible ya durante la Dictadura y que iba a resultar cada vez más evidente durante la República: su tendencia al «seguidismo». No podía dejar de advertir el creciente descontento a nivel local con la línea adoptada por la dirección besteirista en Madrid^[85]. Largo Caballero nunca se permitió apartarse de la base.

Existía también un elemento personal en la repentina desviación de Largo Caballero. Su encono con Prieto se ve con toda claridad en sus memorias, y le resultó evidente incluso a Miguel Maura en la reunión del comité revolucionario^[86]. Saborit pensaba que Largo estaba irritado al ver a Prieto objeto de tanta publicidad y gozando de popularidad entre los trabajadores^[87]. Es interesante observar que poco después de su conversión al republicanismo Largo Caballero superaba en entusiasmo a Prieto^[88]. Pero el elemento primordial de su cambio de actitud podemos encontrarlo en el ofrecimiento de Ministerios en el gobierno provisional. Interesado como estaba en el bienestar material de la UGT, no le podían pasar inadvertidas las ventajas que se derivarían de la dirección del Ministerio del Trabajo. El control de los mecanismos de arbitraje podía utilizarse a favor de la UGT y en contra de la CNT. Se podía situar a miembros de la burocracia ugetista en puestos lucrativos del Ministerio. Y, sobre todo, podía establecerse una amplia legislación social. Todo esto se hizo al implantarse la República y demuestra la primacía de los intereses materiales de la UGT en el pensamiento de Largo Caballero.

Al tender a ver las cosas en términos personales, Largo Caballero desarrolló pronto un fuerte resentimiento hacia la fracción besteirista del partido socialista^[89]. Fue algo que se puso inmediatamente de manifiesto

durante las negociaciones para la participación de la UGT en el movimiento revolucionario convenido en octubre. Después de varios aplazamientos, fue finalmente acordado para mediados de diciembre. Como se había decidido, la UGT apoyaría un golpe militar con una huelga. Las cosas se complicaron por la precipitación de los capitanes Galán y García Hernández, que se alzaron en Jaca (Huesca) el 12 de diciembre, tres días antes de la fecha fijada (acción motivada quizá por la sospecha de que los demás conspiradores no eran totalmente dignos de confianza). Pero el golpe siguió adelante, a pesar de la oposición apenas disimulada de la dirección besteirista en Madrid. Al menos en parte, a causa de esta oposición, el movimiento planeado para el 15 de diciembre fue un fracaso total. Tras la ejecución de Galán y García Hernández el día 14, la artillería se retiró de la conjura. Y aunque fuerzas del general Queipo de Llano y aviadores de la base de Cuatro Vientos siguieron adelante, se dieron cuenta de que se encontraban en una situación desesperada cuando la huelga general acordada no tuvo lugar en Madrid^[90].

Puesto que al cabo de cuatro meses se estableció la República, después de unas elecciones municipales, el fracaso del movimiento de diciembre no fue un revés definitivo. Además, si la República hubiese sido traída por un golpe militar, habría tenido un carácter considerablemente distinto y quizá menos capacidad para proyectar vastas reformas. No obstante, el fracaso de la huelga madrileña fue objeto de acerbos discusiones en el movimiento socialista. Se debatió en el XIII Congreso del PSOE, en octubre de 1932, y condujo a la derrota de los besteiristas en la dirección. Resulta difícil saber la verdad entre tantísimas acusaciones personales, pero las fuentes disponibles indican que el fracaso se debió, en gran parte, a la resistencia de los besteiristas, si es que no se trató de un verdadero sabotaje ante la huelga, como aseguraron más tarde los partidarios de Largo Caballero^[91].

El 10 de diciembre, por ejemplo, Julio Álvarez del Vayo, uno de los socialistas envueltos en la conspiración, trató de que el manifiesto revolucionario para el día de la huelga propuesta fuese impreso en la Gráfica Socialista, la imprenta del diario del PSOE, *El Socialista*. El director, Saborit, se negó rotundamente^[92]. Y, además, resulta significativo que fuese Madrid la única ciudad importante en que no hubo huelga, pues Madrid era el reducto de la facción besteirista de la burocracia de la UGT. El general Mola, que estaba en contacto con Manuel Muiño, el presidente de la casa del pueblo socialista, confiaba la noche del 14 en que la UGT no se uniría a la huelga al día siguiente, basando su certeza en los informes policíacos y en otras

«seguridades»^[93]. Tales seguridades difícilmente podían proceder de otras fuentes que la burocracia sindical, pues Largo Caballero estaba trabajando activamente en pro de la huelga y su consternación al ver que no se producía parece que fue sincera. La tarea de Largo Caballero consistía en transmitir las instrucciones definitivas de la huelga la noche anterior. Lo hizo con Muiño como contacto^[94]. No obstante, el grupo de Besteiro se defendió posteriormente, alegando que Largo Caballero no logró transmitir la información necesaria. En cualquier caso, Besteiro afirmó en el XIII Congreso del PSOE que, habiendo visto aviones que arrojaban propaganda revolucionaria sobre Madrid y apremiado por miembros de la Federación de Juventudes Socialistas a actuar, llamó a la huelga a mediodía del 15. Aunque después dijo a Muiño que se siguiera adelante, no se hizo nada aparte de enviar un mensaje de la casa del pueblo al gobierno amenazando con una huelga si se procedía a más ejecuciones. Ninguno de los poderosos sindicatos controlados por la burocracia sindical besteirista cesó el trabajo. Posteriormente esto se atribuyó a la apatía de la base. Es extraño que tal apatía no se viese en los meses anteriores y que en provincias hubiese importantes acciones huelguísticas. La UGT fue predominante en los paros de Asturias y el País Vasco e incluso Barcelona^[95].

El debate en el interior del movimiento socialista sobre las responsabilidades del fracaso tuvo considerable importancia. Indicaba que, aunque Besteiro era un marxista teórico, representaba una fuerte corriente de reformismo práctico, centrada en la burocracia sindical con base en Madrid y dispuesta a actuar en contra de los deseos de sectores de la base. El debate indicó igualmente en qué medida Largo Caballero, impulsado siempre por un cálculo pragmático del ánimo de los militantes de base y un agudo sentido de las ventajas prácticas que podría conseguir la UGT, se había distanciado de la postura que había mantenido en los años veinte. El debate originó también una carga de rencores que iban a exacerbar las posteriores divisiones internas del movimiento socialista. Fue quizá por ello por lo que Besteiro admitió más tarde que la responsabilidad del fracaso de diciembre de 1930 era enteramente suya^[96].

El resultado inmediato de este fracaso fue la derrota de los besteiristas y la aceptación por el partido socialista y la UGT de una política de colaboración total con el movimiento republicano. El 22 de febrero de 1931 se celebró una reunión conjunta de los comités nacionales del PSOE y la UGT. Besteiro propuso que los socialistas abandonasen el comité revolucionario, y la

propuesta fue derrotada por 35 votos contra 12. Besteiro dimitió de la ejecutiva junto con Saborit, Trifón Gómez y Lucio Martínez Gil. Los miembros restantes propusieron un nuevo grupo de candidatos, todos ellos favorables a la colaboración, que fue elegido por una mayoría considerable. Era evidente que el deseo de la base de que hubiese un cambio de régimen, alentado por la actitud adoptada por Prieto y Largo Caballero, había acabado por influir en todo el movimiento. Sólo la Agrupación Socialista Madrileña seguía siendo un fiel baluarte de Besteiro^[97].

De hecho, las dos posturas, la colaboracionista y la abstencionista, participaban del mismo supuesto: que la república que estaba a punto de ser establecida sería una república democrática burguesa que realizaría una revolución igualmente burguesa como primer paso esencial en el camino del progreso y el socialismo, pero las conclusiones que se extraían de tal premisa eran muy distintas. Besteiro pensaba que los socialistas deberían dejar que la burguesía hiciese su propia revolución, pues existía la posibilidad de que los socialistas se encontrasen en la posición contradictoria de sacar adelante una política burguesa. Prieto opinaba que los socialistas debían colaborar: en primer lugar, porque el establecimiento de derechos democráticos era un fin valioso en sí mismo, y en segundo lugar, porque estaba convencido de que la burguesía era demasiado débil para llevar adelante su propia revolución sin ayuda. Largo Caballero estaba igualmente a favor de la colaboración, pero más bien por los beneficios materiales inmediatos que podía acarrear al movimiento socialista y por la oportunidad que daba de preparar la futura implantación del socialismo. El hecho de que la premisa en que se basaban tales conclusiones fuese errónea ocasionaría divisiones aún mayores en el movimiento socialista, dado que cada sector reaccionó de modo distinto al advertir que las esperanzas depositadas en la República no se estaban cumpliendo.

La creencia socialista de que la vieja España iba a transformarse en una sociedad burguesa moderna se basaba en dos nociones erróneas. La primera consistió sencillamente en considerar a los políticos republicanos del comité revolucionario y al gobierno provisional como la «burguesía» que iba a cumplir el papel histórico de la burguesía inglesa en el siglo XVII y de la francesa en el XVIII. En realidad, los políticos republicanos pertenecían simplemente a la intelectualidad pequeñoburguesa urbana. La oligarquía económicamente poderosa no constituía, como se imaginaba la izquierda, una estructura feudal, sino que había integrado ya sectores de la burguesía^[98].

Esto era el segundo error de análisis. El momento en que la «burguesía» española podía haber tratado de barrer la obsoleta estructura del antiguo régimen había pasado hacía ya mucho. El impulso progresista de la burguesía había sido lo suficientemente débil como para impedir todo cambio de importancia en la estructura del poder político y económico. En los dos primeros períodos de presión, 1833-1843 y 1854-1856, la burguesía había sido virtualmente comprada con la desamortización de las tierras de la Iglesia y la entrega de las tierras comunales al mercado libre. En este proceso se invirtió mucho capital mercantil urbano en la tierra, consolidándose el sistema de grandes propiedades latifundistas. La clase que los socialistas esperaban que fuese progresista se encontraba ya ligada a la vieja oligarquía. Los latifundios se habían convertido en parte del sistema capitalista y no eran vestigios feudales, como creían los socialistas. Parte del proceso de integración de la burguesía urbana con la oligarquía terrateniente consistía en determinada penetración de la oligarquía financiera por capital aristocrático y eclesiástico^[99]. Los dos períodos posteriores más importantes de impulso burgués, 1868-1874 y 1916-1917, pusieron de manifiesto más que nunca la debilidad de la burguesía como fuerza revolucionaria. En ambas ocasiones, la conjunción de agitaciones obreras y campesinas bastó para inducir a la oligarquía urbana a aumentar sus vinculaciones con la rural^[100]. Una vez que los industriales catalanes se retiraron de la alianza de fuerzas progresistas en 1917 y aceptaron participar en el gobierno de la coalición de 1918, la posibilidad de una revolución burguesa tal y como la concebían los dirigentes del PSOE no resultaba viable^[101].

En gran medida, el desarrollo del movimiento socialista durante los años treinta estuvo influido por la importancia de un análisis histórico esencialmente incorrecto de lo que estaba sucediendo en España. Los cálculos de los tres sectores del PSOE se basaban en la certeza de que iba a ocurrir una revolución progresista dirigida por la burguesía. Cuando en 1933 quedó claro que no ocurriría tal cosa, cada sector reaccionó según las normas de conducta que había establecido durante el período prerrepublicano. Besteiro hizo una retirada quietista a su teoría; Prieto intentó por todos los medios reforzar a la República y ayudarla a cumplir sus tareas históricas; Largo Caballero comenzó oportunistamente a canalizar el descontento de las secciones más disconformes de la amargada base.

CAPÍTULO II

BARRICADAS CONTRA LA REFORMA: LA DERECHA LEGALISTA, 1931-1933

La victoria de los candidatos republicanos y socialistas en las grandes ciudades en las elecciones municipales de 12 de abril de 1931 preocupó considerablemente a muchos miembros de las clases media y alta. La decisión subsiguiente de Alfonso XIII de apartarse de España y la proclamación de la República el 14 de abril significó para ellos mucho más que un simple cambio de régimen. La monarquía simbolizaba para ellos un concepto jerárquico de sociedad, con la educación controlada por la Iglesia y el orden social defendido celosamente contra el cambio. Hasta entonces, el creciente resentimiento popular contra unas condiciones industriales duras y una distribución de la tierra manifiestamente injusta había sido contenido por la Guardia Civil y, en momentos de mayor tensión, por el ejército. Hasta 1923, aunque con crecientes dificultades, el sistema de monarquía parlamentaria estaba tan manipulado por la falsificación electoral que el sufragio universal no amenazó nunca seriamente el monopolio de poder de los grandes partidos oligárquicos, el liberal y el conservador. Sin embargo, ese año, los partidos fueron sustituidos por la Dictadura. Los viejos políticos que no se unieron al dictador no perdonaron nunca al rey su brusca destrucción del sistema constitucional. Ahora, el dictador había desaparecido, y tras él, el rey. Ante la nueva situación, las clases altas se vieron momentáneamente sorprendidas sin la formación política necesaria para defenderse de la amenaza implícita en la implantación de una república popular. Incluso, aunque no tuviera lugar la gran revolución burguesa prevista por los socialistas, una república apoyada por el movimiento socialista suponía claramente algún tipo de reforma, aunque fuese tibia, y algunos cambios en los privilegios políticos y sociales.

Las clases privilegiadas no estaban totalmente indefensas. La forma pacífica en que se estableció la República había dejado su poder económico y social intacto. Además, existían organizaciones de derechas que durante los últimos veinte años se habían esforzado en combatir el poder creciente de los trabajadores rurales y urbanos. Entre ellas destacaban la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y la Confederación Nacional Católico-Agraria, ambas capaces de movilizar el apoyo de masas contra la orientación

progresista de la nueva república^[1]. Su éxito sería tal que acabaría con las esperanzas que los socialistas tenían en la República.

El éxito de la ACNP y de la CNCA tendría lugar en el futuro. Por el momento, fueron los grupos más combativos los que trataron de salir en defensa del viejo orden. En Burgos, un monárquico excéntrico trató, sin éxito, de reclutar un ejército de «legionarios» para combatir la revolución. En Madrid, otros, dirigidos por el miembro de la ACNP, Eugenio Vegas Latapié, trataron de fundar un periódico contrarrevolucionario y en seguida empezaron a conspirar para destruir la República violentamente. Antes de las elecciones, los exministros de Primo de Rivera habían fundado la Unión Monárquica Nacional para fortalecer la monarquía con las ideas autoritarias del dictador. La UMN había emprendido una amplia campaña de propaganda en provincias para luchar contra el republicanismo en las elecciones. El tono de su campaña mostraba que sabían bien lo que se jugaban en un posible cambio de régimen. En un mitin en Santander, un joven abogado católico, José María Gil Robles, miembro también de la ACNP, manifestaba: «El régimen monárquico..., al defender la monarquía, defiende los principios básicos de la sociedad». En otro lugar, Antonio Goicoechea, que había sido ministro del rey, insistía en el mismo tema: «La candidatura monárquica no significa sólo la permanencia de las instituciones fundamentales. Significa a la vez el orden, la religión, la familia, la propiedad, el trabajo»^[2].

La derrota electoral y el reconocimiento del rey de la inutilidad de defender el trono por la fuerza había cogido desprevenidos a los conservadores. Mientras la izquierda se había preparado para el éxito, la derecha apenas se había imaginado un fracaso tan rotundo. Sin embargo, a pesar de toda la confusión aparente, la derecha daría pronto una respuesta al nuevo régimen bajo dos formas. La primera, adoptada por los seguidores más radicales de Alfonso XIII y por los carlistas, pretendía derribar la República por medios violentos^[3]. La otra, la de la ACNP, era menos dramática y más realista a corto plazo. Consistía en aceptar el juego democrático, intentando hacerse con la República y privarla de significado. Surgió de la conciencia de la debilidad política de la derecha y de la percepción táctica de que sus intereses podían defenderse mejor dentro de la ley. Esta táctica legalista, conocida como «accidentalismo», fue, en términos del desarrollo de la República, la más importante de las dos. Es verdad que los «catastrofistas» estuvieron detrás del levantamiento militar de 1936, que terminó por destruir el régimen; sin embargo, hasta ese momento, sus actividades quedaron al

margen del centro de la política republicana. Los accidentalistas, por otra parte, construyeron un partido de masas de derechas, lo utilizaron para bloquear la vía reformista de la República y, en consecuencia, alteraron totalmente, la opinión socialista sobre las posibilidades de una democracia burguesa. Esto aceleró la polarización de la política republicana y creó el contexto en el que las actividades de los conspiradores catastrofistas adquirieron una relevancia falsa.

El accidentalismo creía que las formas de gobierno eran accidentales, de importancia secundaria, y lo esencial era el «contenido» u orientación socio-económica del régimen. Ésta era la teoría propugnada por el líder de la ACNP, Angel Herrera, director del diario *El Debate*, militante católico y, hasta entonces, militante monárquico igualmente. Basándose en las encíclicas de León XIII y en los escritos del pensador tradicionalista Balmes, el accidentalismo no suponía la renuncia a los objetivos fundamentales, sino más bien una táctica prudente de adaptación a las circunstancias desfavorables, sin necesidad de defender causas perdidas. Era mejor luchar por los objetivos propios dentro del sistema establecido, especialmente cuando estaba claro que no había posibilidades de derribarlo. Sin duda, el accidentalismo de *El Debate* no era más que una adaptación política a unas circunstancias desagradables. La mañana del 14 de abril, el editorial de *El Debate* decía: «La monarquía española, tras quince siglos de vida, no puede acabar así». El día de las elecciones había proclamado la necesidad de una gran afirmación monárquica para proteger «los principios básicos de la sociedad» contra la «negativa barbarie» representada por la República. Incluso cuando se conocieron los resultados de las elecciones, el consejo de redacción se reunió para buscar una fórmula que permitiese al rey quedarse. Sin embargo, el 15 de abril, *El Debate* proclamaba la necesidad de respetar el nuevo régimen *de facto*. Los republicanos de todas las tendencias tenían motivos para pensar que este repentino abandono del ardiente monarquismo del día anterior no era totalmente sincero. Más bien se consideraba como un ejemplo de esa «habilidad de sacristía» que permitía a *El Debate* estar siempre al lado de los ganadores^[4]. El otro editorial, publicado el 15 de abril, se titulaba «Nuestro homenaje al rey Alfonso XIII». Por cierto, que el manual de los accidentalistas daba una indicación retrospectiva de su actitud ante el advenimiento de la República: «Las turbas, siempre irresponsables por razón de su incoherencia, se adueñaron de los resortes de gobierno...; las cloacas abrieron sus esclusas y los detritus sociales inundaron las calles y las plazas»^[5]. De hecho, hasta que la resolución del rey de abandonar el país no

fue definitiva, no decidieron «intentar la lucha en el único terreno posible entonces: dentro de la legalidad republicana»^[6].

Ángel Herrera mantuvo este tono combativo al dirigirse a los miembros de la ACNP el segundo día de existencia de la República, pidiendo que se lanzasen a una batalla defensiva contra «la avalancha que arrollaba las bases de la Iglesia». Sus objetivos debían ser la reorganización de las fuerzas dispersas, dotar de una ideología común a la derecha española y, dentro de la legalidad, «reconquistar todo lo perdido»^[7]. Según escribió Gil Robles, colaborador de *El Debate*, que había participado en la campaña electoral monárquica y que se convertiría en el líder de los accidentalistas, «liquidados los partidos políticos conservadores, imposible la reacción de los elementos monárquicos dispersos, era urgente establecer un fuerte núcleo de resistencia». La «resistencia» se dirigiría contra cualquier amenaza de cambio en el orden religioso, económico o social. Los propagandistas comenzaron en toda España una campaña entusiasta «con el propósito de agrupar a las fuerzas *no republicanas*, destrozadas y maltrechas»^[8].

El desarrollo de la campaña reveló parte de los intereses políticos por los que se emprendía la lucha. El 21 de abril, *El Debate* se dirigía «a todos los elementos de orden no adheridos ni antes ni ahora a la revolución triunfante» pidiéndoles que se unieran en una organización única. Puesto que la «revolución triunfante» no había hecho nada para cambiar ningún aspecto de la vida española, salvo la forma de gobierno, se veía que el llamamiento iba dirigido a los que abrigaban una hostilidad anterior a la República. La izquierda tenía que sospechar que su objetivo era, si no la vuelta inmediata del rey, al menos la limitación del régimen naciente a una forma indistinguible de la monarquía. El lema bajo el que las fuerzas «antirrevolucionarias» debían unirse era «Religión, patria, orden, familia y propiedad». El republicano consciente no podía dejar de ver el parecido con los utilizados por la Unión Monárquica Nacional hacía menos de dos semanas. En cualquier caso, el propio llamamiento de *El Debate* resaltaba la analogía: «Acaso alguien eche de menos en ese lema un miembro (una palabra afirmativa de la monarquía). Deliberadamente la omitimos, a pesar de nuestros conocidos y sinceros sentimientos monárquicos».

Tan claras como los lazos con la monarquía eran las conexiones con el Vaticano. La ACNP y *El Debate* tenían una tradición de sometimiento a los deseos de la jerarquía eclesiástica, y, a lo largo de la República, Ángel Herrera siguió escrupulosamente las instrucciones de Roma, que recibía a través del

nuncio papal, monseñor Tedeschini^[9]. No es de sorprender que la línea editorial de *El Debate* y las tácticas adoptadas por la ACNP siguieran fielmente las instrucciones cursadas por el cardenal Pacelli, secretario de Estado del Vaticano, al cardenal Vidal i Barraquer. Pacelli recomendó que los católicos españoles siguieran el ejemplo de los bávaros en 1918 y se uniesen contra la amenaza comunista^[10]. Vidal respondió inmediatamente con una carta pastoral redactada en términos similares, en la que virtualmente ordenaba la aplicación a la nueva organización fundada por Angel Herrera. Los católicos recibieron instrucciones de votar en las elecciones para Cortes constituyentes a los candidatos que protegieran los derechos de la Iglesia y que defendiesen el orden social^[11]. A mediados de mayo, el Papa daba a la luz su encíclica antisocialista y antiliberal *Quadragesimo Anno*.

Los lazos estrechos con la jerarquía eclesiástica subrayaban hasta qué punto la omisión de cualquier afirmación monárquica en el lema del nuevo grupo era oportunismo manifiesto. Alfonso XIII se había identificado siempre con el clericalismo militante^[12]. Además, tomar partido en materia religiosa suponía una posición social clara, ya que era la piedad de las clases media y alta la que se sentía ofendida por el laicismo de la República. Los vínculos estrechos con la Iglesia se habían ido limitando progresivamente a la aristocracia, los grandes terratenientes del sur y los pequeños propietarios conservadores de Castilla, Levante y las provincias vasconavarras. En consecuencia, la recién creada organización accidentalista iba a caracterizarse por una mezcla de religión y reacción: «Todos hemos de defender a España, y a nosotros mismos, y a nuestros bienes materiales y espirituales, convicciones..., conservación de la propiedad; jerarquía en la sociedad y en el trabajo»^[13], lo que difícilmente sugería un espíritu amplio en las cuestiones de reforma social y era el corolario de un clericalismo activo. La Iglesia era todavía el símbolo viviente de la vieja España que los republicanos esperaban modernizar y, junto con la monarquía, el eje del mundo conservador. Además, la religión constituía un tema que podía utilizarse para movilizar el apoyo de las masas campesinas tras los intereses de la oligarquía. Habiendo perdido su hegemonía política en abril de 1931, la clase dirigente se aferró con más ahínco a la Iglesia como uno de los reductos claves de su dominio económico y social. Por su parte, la jerarquía eclesiástica, uno de los mayores terratenientes, tenía un punto de vista semejante sobre el valor de una alianza con la nueva formación política, creada para defender los intereses de la oligarquía agraria^[14]. No es sorprendente, pues, que, a lo largo de la República, el clero utilizara tanto el púlpito como el confesonario para

defender el orden económico-social existente y para hacer propaganda electoral a favor de Acción Nacional.

El 10 de mayo, el crecimiento del accidentalismo recibió un impulso considerable. Los seguidores de Alfonso XIII habían tratado públicamente de reagruparse como Círculo Monárquico Independiente. Su postura provocativa dio lugar a una reacción popular apasionada que fue la base de los célebres incendios de iglesias del 10 al 12 de mayo. Los orígenes de este furor incendiario continúan siendo oscuros, aunque Miguel Maura, el ministro de la Gobernación, estaba convencido de que los inductores fueron agentes provocadores sacados de los «sindicatos libres», sindicatos amarillos, que pretendían desacreditar al nuevo régimen. Los informes de algunos testigos oculares tienden a apoyar esta opinión. Tanto si los incendios se atribuyen a extremistas de izquierdas o a agentes provocadores de derechas, hay algo claro: la respuesta de la muchedumbre mostró hasta qué punto identificaban a la Iglesia con la monarquía^[15]. Además, la intensidad de la reacción popular ante una demostración abierta de sentimientos monárquicos destacó las grandes ventajas del accidentalismo, que ya había decidido el 26 de abril formar un grupo que se llamaría Acción Nacional, para unir a todos «los elementos de orden». Mientras los propagandistas comenzaron a trabajar en provincias en los preliminares de la organización, Herrera se reunió con otros dirigentes de derechas para tratar de formar una coalición para la campaña electoral. Especialmente tras la lección del 10 de mayo, los conservadores de todas clases, incluyendo los monárquicos más extremistas, acudieron en tropel a la organización^[16].

A los futuros miembros no se les pidió ninguna profesión de fe republicana. En León, Acción Nacional se fundó en las oficinas de las juventudes monárquicas^[17]. Incluso los carlistas, fanáticamente antirrepublicanos, deseaban unirse^[18]. En Madrid, la gigantesca tarea de enviar circulares y crear un archivo de votantes fue realizada por voluntarios. Uno de ellos escribiría más tarde: «En Acción Nacional se volcaron todas las colaboraciones, las primeras sumas importantes de dinero, casi todas las esperanzas de los que no podían transigir, y mucho menos legitimar, el nuevo orden... Todos los que allí ingresaron eran monárquicos. Ni un solo republicano encontré en los muchos días en que desinteresadamente presté mi trabajo escribiendo fichas o revisando listas electorales»^[19]. En consecuencia, Antonio Goicoechea se encargó de la presidencia interina de la organización. Otros alfonsinos destacados, que simultáneamente conspiraban para derribar

la República por la fuerza de las armas, ocuparon también puestos importantes en Acción Nacional.

La naturaleza conservadora, por no decir reaccionaria, del nuevo grupo era aún más acusada en provincias. En Cáceres, «todas las fuerzas vivas de la provincia, grandes terratenientes, significados políticos de todos los partidos y personas de influencia social» se reunieron, presididos por un monárquico, para fundar la sección local. En Córdoba, el comité de once personas incluía cuatro terratenientes, dos directores de fábrica y cuatro ingenieros. En Jerez, el predominio de los caciques era aún más marcado^[20]. Menos espectacularmente derechista, pero igualmente conservador, y mucho más numeroso, era el apoyo existente en Castilla la Vieja y Salamanca, donde Acción Nacional heredó la influencia de la Confederación Nacional Católico-Agraria. Fundada por el terrateniente palentino Antonio Monedero Martín y ampliamente financiada por donaciones de los grandes terratenientes y suscripciones organizadas por *El Debate*, la CNCA se preciaba de tener 500 000 miembros en 1919. Es cierto que la organización había conseguido gran número de partidarios facilitándoles una serie de servicios. Cajas rurales de ahorro, entidades de crédito agrario, cooperativas para la venta de cosechas y las compras al por mayor, seguros, alquiler de maquinaria, todo contribuía a mitigar las condiciones sociales de la llanura castellana. Todas estas facilidades estaban sólo a disposición de los campesinos que dejaban claros sus sentimientos religiosos y conservadores. Su principal inspiración era el tradicionalismo; sus principales enemigos, «los principios paganos del liberalismo» y el socialismo. La CNCA afirmaba «los principios de religión, familia y propiedad como fundamentos del orden social en contra de las negaciones del socialismo». La CNCA tenía una orientación marcadamente contrarrevolucionaria y en ocasiones había organizado acciones antihuelguísticas. Antes de abandonar el país, Alfonso XIII había sido presidente de una de sus ramas más importantes^[21].

La heredera inmediata de esta organización de campesinos ultraconservadores fue Acción Castellana, con base en Salamanca, una de las principales organizaciones que componían Acción Nacional. El desarrollo de Acción Castellana mostró hasta qué punto las organizaciones católicas estaban dispuestas a lanzar todo el peso de sus masas campesinas tras la oligarquía territorial local. Algunos de los terratenientes locales más reaccionarios, como el carlista Lamamié de Clairac y Cándido Casanueva, eran dirigentes destacados. Las sucursales de Acción Nacional en esta zona

defendieron sistemáticamente los intereses de la élite agraria a lo largo de la República. Este compromiso se generalizaba hábilmente en su propaganda presentándolo como una preocupación patriótica por los «intereses agrarios», sobre todo para el consumo de los pequeños agricultores que constituían la base de su apoyo. Sumidos a menudo en la pobreza, consiguiendo de sus posesiones lo justo para vivir y trabajando al mismo tiempo como jornaleros en los latifundios, estos campesinos se consideraban, a pesar de todo, como «propietarios». Puesto que a veces, durante la cosecha, ellos contrataban a su vez mano de obra eventual, la prensa de derechas no tuvo dificultad en persuadirles de que la legislación laboral para el campo y los sindicatos socialistas les perjudicaban lo mismo que a los grandes propietarios. La utilización ambigua de palabras como labrador y agricultor, aplicadas indistintamente a los terratenientes grandes y a los pequeños y haciendo referencia tanto a los que cultivaban la tierra como a los que gozaban de buena posición social, era una de las técnicas más usuales para lograrlo. Así, los pequeños propietarios de Castilla, conservadores y católicos, a los que los párrocos les habían imbuido ya una gran desconfianza por la democracia, se sintieron en seguida identificados con los intereses de la oligarquía local, compartiendo con ella una devoción por la Iglesia y la monarquía como los dos pilares del orden social.

Al unirse a Acción Nacional, Acción Castellana hizo pública una declaración indicando que hubiera preferido dar la batalla a «los enemigos del orden social» a la sombra de la monarquía, pero, puesto que ésta ya no existía, la lucha continuaría sin ella. Su actitud inflexible ante la reforma social se revelaba en la afirmación de que cualquier cambio en la estructura de propiedad de la tierra sería comunismo y convertiría en esclavo al propietario. Durante la República, Salamanca iba a proporcionar a Acción Nacional gran parte de su apoyo más beligerante, pero no sería la única. Los cultivadores de naranjas que constituían la base de su sección en Valencia, la Derecha Regional Valenciana, contaban con unos dirigentes católicos más progresistas, pero también fueron los primeros accidentalistas que se levantaron en armas en 1936. La Unión Castellana Agraria de Palencia se aproximaba posiblemente más a la norma general al considerar su finalidad la defensa de los intereses de las «fuerzas sociales conservadoras»^[22].

La aceptación táctica forzada de la República por parte de Acción Castellana era típica del grupo a escala nacional. Ya el 21 de abril, *El Debate* mostraba por qué aceptaba el accidentalismo: «Sin seguridad de éxito, menos con ciertas probabilidades de fracaso, no hay derecho a destrozar a España

con discordias civiles y fraticidas». Por tanto, la derecha «moderada» evitaba la violencia no por convicción, sino por reconocimiento de su debilidad. Herrera sabía que iba a ser más fácil volver inocua la República trabajando dentro de ella que atacándola.

La naturaleza estrictamente limitada hasta de este tipo de aceptación de la República pudo verse en la belicosidad de la campaña de Acción Nacional para las elecciones de junio de 1931. Entre sus candidatos había varios antiguos dirigentes de la UMN, y su manifiesto dio el tono de la hostilidad mal encubierta a la República. La clave era la batalla contra el comunismo soviético, con el que se decía que la República era consustancial, lo que, como mínimo, era una exageración demagógica. El manifiesto describía la República como «la masa que niega a Dios y, por ende, los principios de la moral cristiana, que proclama, frente a la santidad de la familia, las veleidades del amor libre; que sustituye la propiedad individual, base y motor del bienestar de cada uno y la riqueza colectiva, por un universal proletariado a las órdenes del Estado». Puesto que este tipo de propaganda se lanzaba a un público rural semianalfabeto y políticamente inmaduro en unos momentos en que el gobierno se caracterizaba por su timidez en las cuestiones sociales, sólo puede definirse como deliberada o irresponsablemente provocadora. De hecho, el manifiesto se expresaba abiertamente en términos de declaración de guerra social «para decidir el triunfo o el exterminio de esos principios imperecederos. En verdad, ello no se ha de resolver en un solo combate; es una guerra, y larga, la desencadenada en España»^[23].

El primer mitin electoral confirmó la impresión dada por el manifiesto. Celebrado en Ávila, lo abrió Bermejo de la Rica con una llamada a la intransigencia: «La falta de masculinidad de la aristocracia y la burguesía española había permitido el surgimiento de las más bajas e ínfimas turbas». Otro orador, Pérez Laborda, que más adelante dirigiría las juventudes de Acción Nacional, igualaba la República con el bolchevismo y apelaba a su público de agricultores locales para que defendiesen los principios de Acción Nacional, si no querían echarse atrás mientras la República asesinaba a dos millones de personas. Otros oradores, entre ellos Angel Herrera, admitieron abiertamente sus convicciones monárquicas, que únicamente silenciaban por oportunismo. Herrera dijo que habían decidido no alzar la bandera de la monarquía, a pesar del monarquismo de la mayoría de los miembros del movimiento. El ejemplo a seguir era el de Hindenburg. Todo esto derivaba de

la convicción de que nada podía consolidar más la República que los ataques frontales, la lección del 10 de mayo^[24].

Característico de la campaña fue la unión constante de la religión y el conservadurismo social. En el mitin de Ávila se afirmó que el orden social se había basado en dos principios, la monarquía y la Iglesia; al haber desaparecido uno, la defensa del otro tenía que ser más decidida. En otro mitin, en Tamames (Salamanca), Gil Robles afirmó: «La religión es un freno que evita que la sociedad marche en la anarquía... No hacemos promesas irrealizables de reparto de tierras o proyectos de socialización que conducen a catástrofes como la de Rusia en 1920». Se hicieron carteles en los que se decía simplemente: «¡Propietarios! Acción Nacional será la mejor salvaguardia de la propiedad en las Cortes constituyentes»^[25]. Sin embargo, los resultados de las elecciones fueron decepcionantes. La campaña consiguió 24 diputados de las dos Castillas y de León, que serían conocidos como la minoría agraria. Acción Nacional se había fundado para organizar la propaganda de las elecciones. Ahora, precisamente porque la victoria de las izquierdas había confirmado la «amenaza revolucionaria», se decidió mantener la organización para defender los intereses de la derecha dentro de la arena política y legal^[26].

La primera tarea de la minoría fue la de dejar sus huellas en la redacción de la nueva constitución. El tipo de mandato que poseían se vio en una serie de mítines contra la reforma agraria que las federaciones de agricultores celebraron en todo el país, pero especialmente en el sur. *El Debate* informó de los mítines, simpatizando con ellos, y se hizo eco de sus quejas en los editoriales^[27]. Inevitablemente, las cláusulas de la Constitución que más interesaban a los diputados de la minoría agraria eran las que se referían a la posición de la religión organizada en la sociedad y a la posibilidad de reforma agraria, lo que lógicamente hizo que su oposición se centrara en dos puntos principales: los artículos 26 y 44. El primero de ellos se refería a la supresión de ayuda económica oficial al clero y a las órdenes religiosas, a la disolución de las órdenes con cuarto voto, como los jesuitas, y a la limitación de los derechos económicos de la Iglesia. La actitud republicana hacia la Iglesia se basaba en la creencia de que, si se iba a construir una nueva España, habría que terminar con la fortaleza de la Iglesia en muchos aspectos de la sociedad. No se atacaba a la religión como tal, pero la Constitución tendría que terminar con el apoyo del gobierno a la posición privilegiada de la Iglesia como institución. La minoría agraria en el Parlamento y la cadena de periódicos, de

la que *El Debate* era el centro, lo presentaron como anticlericalismo virulento, permitiendo así que los que se oponían a todo tipo de reforma uniesen su reaccionarismo a la causa de la religión. El artículo 44 establecía en uno de sus apartados que «la propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes».

En alianza con la minoría ultracatólica vasconavarra, los agrarios opusieron una terca resistencia a cada cláusula progresista que suponía un cambio en el orden social existente. Cuando se les acusaba de «trogloditas» antidemocráticos y monárquicos, los agrarios respondían con débiles protestas de accidentalismo, convicciones democráticas y amor a los pobres. Sin embargo, cuando se debatían los artículos referentes a la autonomía regional, a la propiedad privada, a un enfoque más flexible y humano de las relaciones laborales, amontonaban enmienda tras enmienda intentando bloquear la aprobación de la Constitución^[28]. Era difícil desterrar la impresión de que, bajo la bandera del catolicismo perseguido, se estaba defendiendo la estructura de la sociedad existente bajo la monarquía. Además, las cordiales relaciones de republicanos prominentes, como Manuel Azaña, Luis de Zulueta, Jaume Carner y Luis Nicolau D'Olwer, con eclesiásticos liberales, como el cardenal Vidal, desmentían los gritos accidentalistas de que la Iglesia estaba siendo perseguida sin merced^[29].

A pesar de los esfuerzos de los agrarios, los artículos 26 y 44 se incluyeron en el proyecto aprobado de Constitución, lo que afianzó la oposición de la derecha. El manual de los accidentalistas describía la aprobación del artículo 26 en términos que revelan la extensión de la flexibilidad del grupo: «Cayó la razón, aplastada por la pezuña de la bestia, con todos los horrores del Apocalipsis y con toda la majestad hollada y escarnecida»^[30]. La minoría agraria se retiró inmediatamente de las Cortes y anunció el lanzamiento de una campaña para la reforma de la Constitución. El llamamiento para la revisión se convirtió en un grito de unión contra la República. Un tremendo esfuerzo de propaganda en la prensa y en una serie de mítines a escala nacional intentaron formar una reserva de sentimiento conservador antirrepublicano. Gil Robles, que durante la campaña emergió como una de las principales figuras de Acción Nacional, escribió más tarde que la finalidad era dar a la derecha un apoyo de masas que la preparase para luchar con la izquierdista «por la posesión de la calle»^[31]. El tono de la

campaña fue beligerante e incendiario y tuvo bastante éxito, cambiando la forma en que la población católica, especialmente en las áreas rurales, percibía la República. Se abrió con una convocatoria en *El Debate* a todos los católicos para que «se defienda y defiendan a la vez, por todos los medios y con todos los recursos, la existencia amenazada de España». Miguel Maura, que había dimitido del gobierno en protesta por su tono marcadamente laico, intentando mantener su propia credibilidad entre las derechas, había comentado que el lenguaje de Gil Robles respecto a la Constitución era una incitación a la guerra religiosa y dañaría irreparablemente a la República^[32].

La prensa católica difundió una interpretación de la Constitución presentándola como un anteproyecto para la persecución de la religión y de los ciudadanos respetables. Centenares de oradores fueron enviados a toda España a presentar una visión deliberadamente distorsionada de la situación política. Las aspiraciones reformistas de la República se describían como revolucionarismo violento, y su laicismo, como un satánico asalto a la religión. En el primer mitin de la campaña, celebrado en Ledesma (Salamanca), Gil Robles dijo: «Mientras las fuerzas anárquicas, pistola en mano, siembran el pánico hasta en las alturas gubernamentales, éstas atropellan a seres indefensos, como pobres monjas». Acción Nacional de Toledo redactó un manifiesto en el que se afirmaba: «Cuando no se respeta la religión en un Estado, no se han de guardar mayores consideraciones ni a la propiedad ni a la familia»^[33]. Los términos de esta propaganda estaban totalmente fuera de proporción, con los pasos vacilantes hacia la reforma que la República había dado hasta entonces e iban concebidos de forma que los pequeños propietarios rurales, sencillos y conservadores, o los dueños de pequeños negocios, cuyos intereses no estaban amenazados por la República, pensarán que podían temerlo todo del nuevo régimen. De esta forma, los acaudalados promotores de la costosa campaña de prensa y propaganda de Acción Nacional ganaban un apoyo de masas contra las futuras reformas que amenazaban *sus* intereses. A finales de 1931, Acción Nacional tenía 26 organizaciones afiliadas en provincias, y un año más tarde esta cifra se había elevado a 36.

En Madrid, en un mitin celebrado bajo los auspicios de Acción Nacional, Goicoechea afirmaba ante un público entusiasta que habría una lucha a muerte entre el socialismo y la nación, y que, por tanto, sería necesario defender la propiedad y fortalecer las fuerzas del orden. Gil Robles, dirigiéndose a los acaudalados hombres de negocios del Círculo de la Unión

Mercantil, pidió la unidad de todos los hombres de derechas, monárquicos o republicanos. El alboroto de toda esta propaganda no pasó inadvertido en la izquierda, y el ministro socialista del Trabajo, Largo Caballero, protestó por la acritud de los ataques a su partido. La campaña estaba llegando a unos límites en los que el gobierno se vería forzado a prohibirla. El 8 de noviembre hubo un gran mitin revisionista en Palencia organizado por los miembros de la minoría agraria y algunos tradicionalistas. Joaquín Beunza, carlista moderado, tronó ante un público de 22 000 personas: «¿Somos hombres o no? Quien no está dispuesto a darlo todo en estos momentos de persecución descarada, no merece el nombre de católico. Hay que estar dispuesto a defenderse por todos los medios, y no digo por los medios legales, porque a la hora de la defensa todos los medios son buenos». Después de declarar que las Cortes eran un zoo, dijo: «Estamos gobernados por unos cuantos masones. Y yo digo que contra ellos todos los medios, los legales y los ilegales, son lícitos». Cuando la semana siguiente el alfonsista Sainz Rodríguez pronunció una conferencia atacando a las Cortes y al partido socialista, el gobierno puso fin a la campaña antirrepublicana^[34].

En diciembre, Acción Nacional celebró una asamblea deliberante que no hizo nada por borrar excesos como los de Beunza. Aunque en ella se confirmó que Gil Robles sucedería en la presidencia a Goicoechea, la asamblea adoptó el programa establecido por éste. Mínimo y circunstancial, reconocía la libertad individual de los miembros para defender sus propias opiniones sobre las formas de gobierno. Redactado de tal forma que permitiese a los alfonsistas radicales continuar en la organización, el programa hizo inevitable que Acción Nacional quedara marcada por la huella de sus extremistas. También tenía afirmaciones políticas que no se referían a las formas de gobierno. La premisa básica era que la nación se veía amenazada por el socialismo internacional y el extremismo separatista. Se reafirmaba el principio de la propiedad privada y se expresaba una hostilidad fundamental a la reforma agraria, definiéndola como un intento de sacrificar los derechos individuales y la salud pública a «la conveniencia malsana» de halagar a las masas obreras con «programas pomposos». Sobre todo había que revisar la Constitución^[35]. La izquierda sólo podía ver en esto una declaración de guerra a la esencia de la República.

Mientras tanto, *El Debate* hablaba de fundar un partido político. El manifiesto publicado con motivo de la fundación de la Juventud de Acción Nacional proporcionaba un indicio inquietante de la intransigencia que esto

podía llevar a la política española. Estrechamente vinculado a la organización madre, este movimiento de la juventud declaraba: «Somos hombres de derechas... Acatamos las órdenes legítimas de la autoridad; pero no aguantaremos las imposiciones de la chusma irresponsable. No nos faltará nunca el valor para que se nos respete. Declaramos la guerra al comunismo, así como a la masonería»^[36]. Puesto que, a los ojos de la derecha, estos últimos conceptos estaban representados por el partido socialista y la izquierda republicana, tales excesos hacían poco por la credibilidad de la noción tan cacareada de Acción Nacional de oposición constructiva dentro de la legalidad republicana.

Esta belicosidad parece haber sido un reflejo exacto del tono que Gil Robles intentaba dar a su grupo. Abriendo una campaña de reclutamiento masivo, dijo en Molina de Segura (Murcia) el 1 de enero: «En este año de 1932 hemos de imponernos con la fuerza de nuestra razón y con otras fuerzas si no bastara. La cobardía de las derechas ha permitido que los que en las charcas nefandas se agitaban han sabido aprovecharlo para ponerse al frente de los destinos de nuestra patria»... No había duda en nombre de quién se pregonaba esta militancia: «Yo me dirijo a los poderosos, a los que tienen mucho que perder, y yo les diría: si en los momentos oportunos os hubierais desprovisto de una pequeña cantidad, es seguro que habríais perdido mucho menos que ahora, porque lo que se da para la prensa, para la prensa de derechas, que defiende los principios fundamentales de toda sociedad: religión, familia, orden, trabajo, es un verdadero seguro de la personal fortuna». En la misma línea, un periodista de la órbita de Acción Nacional escribía: «El peligro que amenaza a nuestros altares, amenaza también a nuestros bolsillos»^[37].

Para defender estos intereses se estaba creando un partido político. Se aceptaba el parlamento como campo de batalla más conveniente. Todo esto quedaba claro mitin tras mitin, mientras Gil Robles trabajaba para crear un gran partido de masas de la derecha. En Málaga, dijo: «El ideal de la derecha española no es otro, hoy por hoy, que formar un frente único contra el peligro que nos amenaza. Ese peligro está en el partido socialista español... Hay que constituir el frente único para acabar y evitar que el socialismo combata. Hay que luchar por la conquista del parlamento»^[38]. Gil Robles hizo un esfuerzo sobrehumano de organización y propaganda, viajando sin cesar por toda España, tratando de dar a Acción Nacional el apoyo de masas necesario para la «conquista» legal del poder. Hubo momento en que pronunció discursos en

quince pueblos en menos de dos días. Como él mismo ha admitido, lanzaba siempre a su público en una escalada de conflictos con las autoridades. Afirmaba que les estaba preparando para que pudieran defender sus derechos en la calle. Y todo esto, en unos momentos en que la República se había limitado a emprender una marcha vacilante hacia una reforma agraria limitada. En 1937, y en sus memorias, Gil Robles ha afirmado con orgullo que la beligerancia que él creó hizo posible la victoria de la derecha en la guerra civil^[39].

El movimiento creció con rapidez, especialmente en las zonas conservadoras que se iban a ver afectadas por la reforma agraria. En Castilla la Nueva y en Extremadura, organizaciones como Acción Popular Agraria de Badajoz, Derecha Regional Agraria de Cáceres, Acción Agraria Manchega y Acción Ciudadana y Agraria de Cuenca se afiliaron a la organización madre. El crecimiento numérico destaca la ambigüedad del programa. Los numerosos monárquicos de Acción Nacional estaban más de acuerdo con la oposición abierta a la República que con el accidentalismo. Bajo la égida de la organización supuestamente legalista se hicieron virulentas afirmaciones en ese sentido. Mientras el reclutamiento era la principal prioridad, la propaganda tendía hacia la demagogia. En abril, el movimiento sobrevivió al cambio de su nombre por el de Acción Popular y continuó creciendo^[40].

Un tema provechoso para la oligarquía agraria y sus representantes políticos fue la cuestión de las existencias y los precios del trigo. La situación podía explotarse ventajosamente para fomentar la hostilidad contra la República, haciéndolo de tal manera que se movilizase el apoyo de los numerosos pequeños propietarios productores de trigo. Esto era posible porque el trigo se cultivaba en Castilla, Aragón y partes de Andalucía; es decir, tanto en las zonas de pequeñas propiedades como en las de latifundio, y en los problemas relativos al almacenamiento y a los precios a escala nacional era siempre relativamente fácil crear una identificación aparente entre los intereses de todos los cultivadores de trigo, grandes y pequeños.

Éste fue el caso de la campaña organizada durante el otoño y el invierno de 1931 para asegurar un aumento en el precio mínimo del trigo, la tasa, que entonces era de 46 pesetas el quintal métrico. Organizada por los grandes productores, la campaña, por razones obvias, contó con el apoyo de los pequeños agricultores, los arrendatarios y los aparceros. En realidad, sin embargo, sólo los grandes cultivadores iban a beneficiarse. Sus costes de producción eran menores por las economías de escala y a menudo porque sus

tierras obtenían mejores rendimientos. Muchos productores acomodados, incluso en las zonas castellanas de pequeña propiedad, contaban con capital suficiente y con las instalaciones de almacenamiento necesarias para poder conservar el trigo fuera del mercado hasta el momento más favorable para su venta. Un aumento en el precio incrementaría sus ya confortables márgenes de beneficio y lógicamente no perjudicaría los intereses de los pequeños propietarios. Sin embargo, los pequeños cultivadores no iban a mejorar su posición precaria. Siempre escaso de dinero en efectivo, ya fuera para las semillas, los fertilizantes o para alimentar a su familia, el pequeño propietario estaba siempre a merced del acaparador local cuando llegaba el momento de desprenderse de su cosecha. El acaparador, a veces un comerciante, a veces un prestamista o incluso un terrateniente, compraba las cosechas a los pequeños cultivadores, que no tenían ni almacenes ni sistemas de transportes propios. Cualquiera que fuese el precio mínimo oficial, el pequeño agricultor tenía que vender normalmente al precio dictado por el acaparador, bien por necesidad inmediata, bien porque la necesidad de devolver algún préstamo al propio acaparador le obligaba a vender en momentos en que el mercado contaba con excedentes.

A pesar de todo, una campaña para subir los precios podía contar con el apoyo de todos los cultivadores de trigo. Los propietarios querían aumentar el precio de 46 a 53 pesetas. La campaña estaba dirigida por dos diputados de Valladolid, Antonio Royo Villanova y Pedro Martín y Martín, al que los socialistas acusaban de ser un acaparador^[41]. En las Cortes, Royo Villanova afirmaba que los aumentos de los salarios agrícolas aprobados por Largo Caballero habían incrementado los costes de producción del trigo en un 30 por 100, 54-55 pesetas el quintal métrico. Pedro Martín insinuaba hábilmente que eran los trabajadores urbanos los que mantenían la pobreza de los pequeños agricultores, afirmando que un aumento en los precios del pan podía ser fácilmente absorbido por las ciudades. La campaña continuó con el apoyo de la cadena de prensa de Acción Popular. Cuando Marcelino Domingo, el nuevo ministro de Agricultura, tomó posesión del cargo en diciembre, ordenó inmediatamente una investigación sobre la necesidad de revisar la tasa. Las informaciones locales mostraron que los costes de producción variaban de 33,25 pesetas el quintal métrico en Salamanca a 41,77 en Badajoz. En consecuencia, como no estaba dispuesto a aumentar el precio del pan en unos momentos de gran desempleo y de disminuciones salariales y como se daba cuenta de que los acaparadores impedirían que los beneficios

reales alcanzasen a los pequeños agricultores, Domingo optó contra el aumento de la tasa^[42].

El ministro se vio sometido a una virulenta campaña de prensa que culpaba a su acción de todos los males del campo. Los propietarios que contaban con existencias y que habían esperado beneficiarse de la mala cosecha de 1931 empezaron a retener los suministros. En enero de 1932, Marcelino Domingo recibió informes sobre la escasez y replicó con un decreto bastante ineficaz prohibiendo la acumulación clandestina. Algunas existencias tuvieron que salir al mercado, pero no en cantidad suficiente para calmar el miedo a la subida del pan, con los consiguientes problemas de orden público. La prensa empezó a hablar de la necesidad de levantar las restricciones a la importación de trigo, una decisión delicada políticamente, dada la debilidad de la peseta y el hecho de que los altos costos del trigo español sólo le permitieran sobrevivir a la competencia del trigo argentino y norteamericano a través de una rígida protección. El 12 de abril autorizó la importación de 50 000 toneladas para las provincias más necesitadas y a continuación pidió a los almacenistas que revelasen las existencias y a los cultivadores que hicieran un cálculo de la próxima cosecha. Los informes recibidos sugerían que se avecinaba una escasez drástica. Domingo autorizó más importaciones —100 000 toneladas el 27 de abril, 100 000 toneladas el 26 de mayo y 25 000 el 15 de junio^[43].

Los precios continuaron subiendo, hasta alcanzar el nivel más alto de todos los tiempos en julio, momento en que milagrosamente aparecen unas 250 000 toneladas en el mercado, coincidiendo con la entrega de los envíos extranjeros. A continuación siguió un período largo de buen tiempo y relaciones laborales estables que produjeron una cosecha abundante. A lo largo del otoño, los precios del trigo cayeron rápidamente, hasta llegar al punto mínimo desde 1924. Aproximadamente dos millones de personas que de una u otra forma estaban relacionadas con la producción de trigo se vieron perjudicadas por la caída, que en gran parte había sido causada por la especulación de los grandes propietarios. Sin embargo, la prensa de derechas comenzó inmediatamente a trabajar para convencer a los pequeños propietarios de que las importaciones de Marcelino Domingo habían provocado el desastre. Los agrarios le acusaron de haberse propuesto deliberadamente destruir la agricultura española. La campaña tuvo considerable éxito y fue uno de los datos decisivos para que los partidos de la

derecha consiguieran el apoyo de los pequeños propietarios castellanos en las elecciones de noviembre de 1933.

En la primavera de 1932, la cuestión de cómo oponerse mejor a la reforma agraria propuesta y al estatuto catalán, cuya discusión empezó en mayo, planteó el problema de hasta dónde debía llegar el respeto a la República. Los ultramonárquicos del grupo de Acción Española conspiraban activamente contra la República sin ver ninguna incompatibilidad entre su actuación y su pertenencia a Acción Popular^[44]. Gil Robles, por otra parte, creía que no había posibilidad inmediata del triunfo de una solución de fuerza, cuando la derecha podía conseguir mejor los mismos objetivos infiltrándose en la República y apoderándose de ella^[45]. Se trataba simplemente de una cuestión táctica. Según el propio Gil Robles, la inmensa mayoría de los miembros de Acción Popular eran monárquicos y sentían una «repugnancia invencible» ante la idea de aceptar la República. Lo mismo podía aplicársele a él: «En un orden teórico fui y soy monárquico... Los mismos motivos que le impedían al noventa por ciento de los afiliados de Acción Popular admitir la declaración de republicanismo, me vedaban, incluso por razones de buen gusto, hacer declaraciones de fervorosa adhesión a un régimen cuyos primeros pasos habían hollado mi conciencia de cristiano»^[46].

La eficacia de la táctica legalista quedó demostrada durante la primavera y los comienzos del verano. *El Debate* publicó comentarios hostiles a los proyectos de reforma agraria y del estatuto catalán, mientras la minoría agraria comenzaba en las Cortes una campaña de obstrucción. Su éxito fue notable. Entre mayo y septiembre de 1932 un tercio del tiempo de debate en las Cortes se ocupó en discusiones de la reforma agraria. Los debates se alargaban mientras los diputados de derechas planteaban cuestiones técnicas complejas. Cada miembro de la minoría agraria tenía una enmienda para cada cláusula del proyecto de ley. Para agosto, sólo se habían aprobado cuatro de los 24 artículos^[47].

Sin embargo, este éxito se vio anulado por la primera manifestación de la otra táctica, la «catastrofista», que tomó la forma del levantamiento fracasado de 10 de agosto, que sería conocido como la «sanjurjada». El resultado adverso del levantamiento destacó la relativa eficacia de la táctica parlamentaria para detener la reforma. Según Gil Robles, «la obstrucción tenaz a varios de los proyectos y la fiscalización constante de la obra gubernativa no sólo impidió que se aprobaran muchas leyes, sino que desgastó extraordinariamente a los gobiernos de izquierdas»^[48]. La respuesta

decidida del gobierno al golpe de estado mostró que la táctica «catastrofista» era contraproducente para los intereses materiales de la derecha. La ola de fervor republicano que se produjo hizo que los dos proyectos se aprobasen sin dificultad en septiembre. Más aún, produjo una represión general de las actividades de la derecha. Quedaba probado que los ataques frontales sólo podían fortalecer a la República. A pesar de que la derecha aplaudiera los motivos del 10 de agosto, y lo hizo descaradamente, en la práctica constituyó un retroceso considerable.

Gil Robles estaba decidido a que esto no volviera a ocurrir. La ambigüedad del programa de Acción Popular, que había sido una ventaja, era ahora un inconveniente. Se convocó para octubre una asamblea de Acción Popular para limpiar el ambiente tras el levantamiento. *El Debate* había dicho en el primer número tras el intento de golpe de Estado: «hemos sido, y seremos, los paladines de la lucha legal y del acatamiento a los poderes constituidos... No estábamos en el secreto de la conjura», lo cual no era totalmente cierto. Una serie de reuniones de dirigentes de la derecha, entre ellas una en Biarritz el 7 de agosto, habían puesto a Gil Robles al corriente. Claro que, si los miembros alfonsistas estaban claramente implicados, él tenía públicamente las manos limpias. Era lógico que no quisiera que su movimiento sufriese innecesariamente. A los alfonsistas les decepcionó la maniobra dirigida a renegar de ellos, convencidos como estaban de que si el levantamiento no hubiera sido un fracaso, su actitud hubiera sido diferente^[49].

La asamblea se inauguró en Madrid el 22 de octubre. El debate ilustró la divergencia de opiniones dentro de Acción Popular. Fernández Ruano, de Málaga, dijo: «¿Declaración de fe republicana? ¡Jamás!», entre aplausos entusiastas. Fernández Ladreda, de Asturias, declaró que en Acción Popular algunos pensaban que una república en España no era un régimen, sino una doctrina revolucionaria. Dimas Leal, director de la *Gaceta Regional*, de Salamanca, afirmaba que «acatamiento significa aceptación», siendo respondido por gritos de «¡no!, ¡no!, ¡no!». Según se había anunciado, el objeto del congreso sería la solución de los problemas tácticos surgidos a causa de los acontecimientos de agosto. Moreno Dávila dio el argumento final más logrado a favor del accidentalismo cuando, refiriéndose a la rápida aprobación de las leyes republicanas en septiembre, dijo que lo que se había perdido se debía al 10 de agosto: «Nuestra táctica nos trajo la victoria y otra táctica nos hizo perder lo ganado. Es preciso seguir la táctica de ayer, que nos

proporcionará la victoria de mañana». La asamblea votó a favor de la táctica legalista^[50].

La victoria no se llevó a sus conclusiones lógicas por miedo a alienarse a los grupos fuertemente monárquicos dentro de Acción Popular, como la sección asturiana, con cerca de 30 000 miembros. Sin embargo, los preparativos para la creación de un partido católico federal avanzaron. Se recalcó el accidentalismo, pero, aunque esto excluyese a los conspiradores activos de Acción Española, no suponía una ruptura definitiva con el monarquismo, puesto que la gran mayoría de los miembros de Acción Popular «conservaba íntegro su espíritu antirrepublicano»^[51]. Gil Robles no rompió con los alfonsinos porque encontrara ofensivo su monarquismo. Si éste hubiera sido el caso, podría haberse declarado republicano. Era más bien que la táctica «catastrofista» abiertamente antirrepublicana estaba minando la eficacia de su política de «caballo de Troya». La cosa quedó clara cuando Goicoechea dimitió de la junta de gobierno de Acción Popular. La carta de respuesta de Gil Robles declaraba que cualquier incompatibilidad entre su grupo y Goicoechea «no es por razón de ideología o posición política respecto al problema de las formas de gobierno, sino por razones de táctica»^[52]. Los miembros de ambos grupos continuaron tratándose, acudiendo unos a los mítines de los otros, leyendo unos la prensa de los otros e incluso perteneciendo a más de una organización. Goicoechea continuó siendo miembro de Acción Popular.

Lógicamente, la izquierda en general y los socialistas en particular no se sintieron impresionados por las credenciales republicanas de los accidentalistas. El tipo de ideales políticos que Acción Popular parecía valorar se publicaban regularmente en *El Debate* a finales de 1932. Su encomiástico editorial de 28 de octubre mostraba un interés creciente por el fascismo italiano. Titulado «Diez años de fascismo», estaba redactado en términos que sugerían una fuerte identificación con los objetivos fundamentales del fascismo. El gran triunfo de Mussolini consistía en la sustitución del «motín diario» por «la autoridad, la disciplina, el sentido jerárquico, el orden», lo que era significativo, puesto que *El Debate*, junto con otros periódicos de derechas, insistía cada vez más en el desorden de España^[53]. No escatimaban las alabanzas al fascismo: «El Estado fascista puede gloriarse de haber libertado a Italia del parlamentarismo y haber podido de este modo estimular sus actividades, dirigir su economía, resistir a las crisis económicas y fortalecer los resortes morales de la nación». La clave de este éxito había sido

la destrucción del socialismo. Los socialistas españoles no tardaron en sacar la conclusión de que a ellos les esperaba un destino similar si la derecha conseguía hacerse con el poder^[54]. El tono de los editoriales de *El Debate* difícilmente admitía otra interpretación. Uno de sus temas habituales era la necesidad de la unión de las derechas para aniquilar el socialismo^[55]. La reiteración constante de tal hostilidad provocó naturalmente la aprensión de los socialistas.

Mientras tanto, Gil Robles preparaba el terreno para la formación de su partido político. En una carta abierta a la prensa dejaba bien claro que las exigencias que se hicieran a la conciencia de los miembros no serían excesivas, podrían mantener sus convicciones y defenderlas fuera de la organización^[56]. Era el resultado natural de la asamblea de octubre: sólo los que insistiesen en atacar abiertamente a la República serían excluidos. A finales de febrero de 1933 se celebró en Madrid un congreso de los distintos grupos provinciales afiliados a Acción Popular. Quinientos delegados, que representaban a 735 058 miembros de 42 grupos de derechas, dieron su acuerdo para la creación de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Los objetivos generales del nuevo partido eran «la defensa de los principios de la civilización cristiana» y la revisión de la Constitución, especialmente en las cláusulas que se referían a la religión, la educación y la propiedad. En el discurso de clausura, Gil Robles clarificó la terminología ostensiblemente moderada del programa: «Los católicos..., cuando el orden social está en peligro, deben unirse para defenderle y salvar eficazmente los principios de la civilización cristiana... Iremos juntos a la lucha, cueste lo que cueste... Estamos ante una revolución social. En el panorama político de Europa veo sólo la formación de grupos marxistas y antimarxistas. Eso ocurre en Alemania y también en España. Ésa es la gran batalla que tendremos planteada este año». Habiéndose alineado así en la corriente central de la derecha europea, no era de extrañar que un poco más tarde el mismo día, en un mitin en el teatro Fuencarral (Madrid), dijera que no veía inconveniente en pensar en el fascismo como un medio para curar los males de España^[57].

En el congreso inaugural de la CEDA se habló mucho de un programa social avanzado. Teniendo en cuenta las fuerzas sociales que la CEDA representaba, la izquierda no se impresionó. *El Socialista* vio al nuevo partido como una mezcla de todas las tendencias retrógradas de España, como la unificación de todo lo que era viejo, ruinoso y estaba podrido^[58]. Además, la

subida de Hitler al poder y el incendio del Reichstag eran recuerdos recientes para los socialistas, que estaban dispuestos a que los elementos agrarios y católicos no hiciesen con la II República lo que habían hecho con la de Weimar. La decisión de la CEDA de revisar la Constitución la veían como el principio del fin, como la primera provocación: «¿Cómo fiarnos de un sector político aliado espiritual y material del fascismo italiano, de Hitler y de Horthy?». Conscientes de lo que estaba sucediendo a judíos, comunistas, socialistas y liberales en Alemania, la izquierda española estaba sensibilizada en extremo a la conducta de la derecha. La insistencia en el desorden por parte de la prensa de derechas la veía como la preparación para un aproximamiento al fascismo^[59]. Y, por encima de todo, los socialistas españoles estaban decididos a no cometer los mismos errores que sus camaradas del extranjero^[60]. Su preocupación era comprensible cuando *El Debate* afirmaba de la situación alemana que el nazismo tenía ideales dignos de encomio, especialmente en su consolidación de «muchos conceptos indispensables para la sociedad». La actitud de Gil Robles ante el fascismo era ambigua. Le atraían sus formas de organización social y la eliminación implacable de la lucha de clases, pero le desagradaba su recurso a la violencia. Para los socialistas, esta reserva carecía de importancia, más aún cuando en una ocasión, al hablar Gil Robles contra el fascismo, en un mitin público celebrado en Barcelona el 21 de marzo de 1933, sus palabras fueron acogidas por sus seguidores con abucheos. No volvió a repetir la experiencia^[61].

A lo largo de 1933, la CEDA propagó el descontento con la República entre los círculos agrarios. No es de extrañar que la izquierda considerase las declaraciones de legalidad como una pura ficción, un instrumento táctico para que la CEDA pudiese trabajar en sus objetivos antirrepublicanos con todas las ventajas de hacerlo legalmente^[62]. Las preocupaciones de la CEDA revelaban sus orígenes. En mayo, *El Debate* dio un cóctel a una delegación de terratenientes y empresarios sevillanos que habían ido a quejarse al gobierno del creciente desorden y de las subidas salariales. Para ellos, el problema no estaba en la necesidad de reforma, sino en la falta de represión gubernamental antes de que se produjera «una ofensiva antisocial, anárquica, monstruosa, contra todas las industrias, contra el comercio entero, contra la agricultura»^[63]. Al mismo tiempo, la CEDA suscribía las exigencias de la Asamblea Nacional Cerealista de un aumento en el precio mínimo del trigo y una actuación contra la legislación laboral existente. Esta última se refería a las dos principales reformas introducidas por Largo Caballero como ministro

de Trabajo, los jurados mixtos y la ley de términos municipales, que impedía la contratación de mano de obra fuera de un municipio hasta que todos los trabajadores de éste no tuvieran trabajo. La ley había impedido la contratación de mano de obra barata para apoyar las disminuciones salariales y la utilización de esquirolles en tiempos de huelga. Los productores de cereales castellanos pretendían que se reformasen los jurados mixtos para que no favoreciesen los intereses de los trabajadores y que se aboliese el decreto de términos municipales. Era un ataque a gran parte de lo que los socialistas consideraban progresista en la República y un golpe al trabajador urbano, que dependía en gran medida del pan barato^[64].

El Socialista comentó con acritud que las peticiones de la delegación sevillana equivalían a exigir los beneficios realizados «cuando en España no había legislación social, se pagaban salarios misérrimos y todos los conflictos se resolvían llamando a la Guardia Civil»^[65]. Para los socialistas, el desorden que siempre se aducía para condenar a la República había sido provocado por la clase alta, furiosa por las limitaciones que la ley imponía a su explotación de las clases trabajadoras^[66]. La extensión del desorden durante este tiempo es difícil de calcular. El embajador americano se dedicó cuidadosamente a su búsqueda sin encontrar el menor rastro: «Viajamos de un extremo de España al otro en busca de los desórdenes “rayanos en la anarquía” de los que tanto habíamos oído en los salones de Madrid y no encontramos nada semejante». Desde luego, la izquierda no tenía nada que ganar del desorden, mientras que la derecha siempre podía utilizarlo en apoyo de sus demandas en favor de un gobierno más autoritario^[67].

Mientras tanto, la CEDA exhibía regularmente sus ideas sociocatólicas tanto en la prensa como en sus frecuentes mítines. Uno de los ejemplos típicos fue el discurso pronunciado en Sevilla en mayo por Federico Salmón, uno de los líderes más liberales de la CEDA, en el que se refirió en términos vagos a la «armonía entre las clases», a la necesidad de caridad cristiana y de trabajar para la supresión de las desigualdades. Todo esto parecía una maraña pía que apenas tenía que ver con los intereses reales servidos por la CEDA. Además, los oyentes que aplaudían ante la decisión de terminar con los abusos de la propiedad nunca podían imaginar que las censuras del orador pudiesen ir dirigidas contra ellos^[68]. La única solución práctica sugerida con cierta regularidad para la situación agraria era la de aumentar las fuerzas del orden y adoptar los métodos utilizados en Italia contra la anarquía^[69].

La mayoría de las declaraciones de la CEDA tenían doble sentido, pero el aspecto católico social era el que menos parecía corresponderse con sus actos. En agosto volvió a las Cortes la imagen familiar de la minoría agraria obstruyendo la reforma. Esta vez se trataba del proyecto de ley de arrendamientos rústicos, un elemento crucial en la proyectada reforma agraria que podría haber mejorado la suerte de los arrendatarios del norte y el centro de España, que habían votado por los diputados de la minoría. Se propusieron 250 enmiendas como parte de una técnica planeada de obstrucción. Gil Robles, con no demasiada sinceridad, explicaba las enmiendas como resultado de la preocupación de su grupo por los arrendatarios. Una vez que tuvieran la seguridad de la posesión podían perder la tierra ante los prestamistas y contribuir así a crear latifundios o dividirla entre sus herederos y crear minifundios. El nivel de aburrimiento creado por esta hipocresía evidente disminuyó la asistencia a las Cortes de los diputados hasta el punto que cuando llegaba el momento de votar no se obtenía el *quorum* suficiente^[70]. La oposición agraria en el Parlamento a la ley de arrendamientos y la campaña de Acción Popular contra la legislación religiosa de la República condicionaron inevitablemente la respuesta de la izquierda a la CEDA, como se vería durante a preparación de las elecciones de noviembre de 1933, cuando la campaña de la CEDA giró en torno a la oposición a todo lo que la izquierda podía considerar como progresista en la República.

La continua identificación de la CEDA y sus líderes con el antirrepublicanismo se había acentuado durante el verano. Sabiendo que la mayoría de sus seguidores eran monárquicos, Gil Robles temía que Alfonso XIII declarase la afiliación a la CEDA incompatible con los ideales monárquicos. En consecuencia, en junio visitó en Fontainebleau al monarca exiliado, consiguiendo persuadirle sin demasiadas dificultades de que la CEDA era un método útil de desarrollar un sentimiento de derechas sin consolidar en modo alguno la República^[71].

Gil Robles estaba estrechamente vinculado a la vieja España por razones familiares. Su padre era el famoso teórico carlista Enrique Gil Robles. En José María hablaba el carlista cuando más adelante se refería a «la repugnancia casi física que me causaba actuar en un medio cuyos defectos se me revelaban tan palpables. Mi formación doctrinal, mis antecedentes familiares, mi sensibilidad, se rebelaban a diario». En diciembre de 1932 había declarado que sólo la falta de abierto monarquismo separaba a su

movimiento del tradicionalismo^[72]. En estas condiciones era inevitable que la izquierda asumiese que estaba utilizando la táctica legalista como el mejor medio de los disponibles para defender la estructura socioeconómica y los valores culturales religiosos de la España tradicional.

Las sospechas de la hostilidad esencial de Gil Robles hacia la democracia se veían reforzadas por el hecho de que hubiese ocupado un cargo oficial durante la Dictadura y hubiese sido director de *El Debate* cuando éste era uno de los apologistas más líricos del régimen de Primo de Rivera. Pero había razones más simples de la creciente tendencia de la izquierda a identificar a Gil Robles y a la CEDA como protofascistas. En primer lugar, las semejanzas entre la CEDA y el Partido Católico de Dollfus, en Austria, eran cada vez más acusadas. Ambos grupos eran autoritarios, corporativistas y furiosamente antimarxistas. Las coincidencias eran muchas: ambos manifestaban una hostilidad implacable hacia el socialismo, ambos encontraban su apoyo de masas entre los pequeños propietarios rurales más atrasados, resentidos por el predominio socialista de la capital, y ambos tenían un movimiento semifascista de juventudes.

Durante el verano de 1933 la izquierda española se sensibilizaba progresivamente a los peligros del fascismo. Weimar se citaba insistentemente como una advertencia^[73]. No era difícil encontrar paralelismos con la situación española. La prensa católica aplaudía la destrucción nazi de los movimientos socialista y comunista en Alemania. La derecha española admiraba al nazismo por su énfasis en la autoridad, la patria y la jerarquía, todas ellas preocupaciones centrales de la propaganda de la CEDA. Una vez que Von Papen firmó el concordato con el Vaticano, el entusiasmo de *El Debate*, contenido hasta entonces por la preocupación por el anticatolicismo nazi, no conoció límites. Los nazis lo sabían y lo agradecían. Cuando Angel Herrera visitó Alemania en mayo de 1934, los funcionarios de la Wilhelmstrasse quisieron prepararle una entrevista con Hitler, dada la importancia que atribuían a lo que consideraban la línea pronazi inspirada por Herrera^[74].

Justificando la táctica legalista en España, *El Debate* señalaba que Hitler había llegado al poder legalmente^[75]. El paralelo se resaltaba totalmente en el editorial más elogioso de todos, el 4 de agosto, cuando el editorialista, tras haber alabado a Hitler y a Mussolini por la actitud adoptada ante «la nivelación comunista», se congratulaba de que la clase media española tuviese ya su propia organización para encargarse de esta tarea. Al mismo

tiempo se hacían constantes llamamientos en favor de la adopción de una organización económica corporativa que situase a España en línea con Italia, Austria, Alemania y Portugal. Mientras la prensa católica incitaba a sus lectores a seguir el ejemplo de Italia y Alemania y a organizarse contra el dragón revolucionario, difícilmente podía preguntarse la CEDA por qué la izquierda veía todo esto con preocupación^[76]. Un libro brillante sobre la ascensión de Hitler, escrito por un socialista español y publicado en 1933, mostraba claramente el paralelismo con la táctica accidentalista, señalando cómo «los enemigos de la democracia se apoyan en ella para llegar al poder, y una vez en el poder, enterrarla con todos los deshones». Y cuando *El Debate* alababa a Hitler por renovar los valores morales y espirituales de Alemania, *El Socialista* se preguntaba si la CEDA, que a menudo proclamaba la necesidad de una renovación similar en España, estaba dispuesta a utilizar los mismos procedimientos^[77]. La subida de Hitler al poder aumentó la aprensión, especialmente en el ala izquierda del partido socialista, uno de cuyos teóricos más destacados había sido embajador en Berlín. Tampoco podía habersele escapado a este grupo el hecho de que el corresponsal de *El Debate* en Berlín, Antonio Bermúdez Cañete, fuese un entusiasta del primer nazismo. Había traducido partes de *Mein Kampf* y mantenía contactos con el grupo de la *Conquista del Estado*, uno de los primeros intentos de introducir el fascismo en España^[78].

Por tanto, una considerable sospecha rodeaba las intenciones de la CEDA cuando comenzó la campaña para las elecciones de noviembre^[79]. La extrema belicosidad del tono de Gil Robles no era tranquilizadora. Acababa de volver del Congreso de Nuremberg y parecía muy influido por lo que había visto. Sus impresiones aparecieron en el boletín interno de la CEDA, describiendo favorablemente su visita oficial a la Casa Parda, a las oficinas de propaganda nazi y a los campos de concentración, y cómo había visto a las milicias nazis adiestrándose. Aunque expresaba vagas reservas sobre los elementos panteístas del fascismo, concretaba los elementos más dignos de emulación en España: su antimarxismo y su odio a la democracia liberal y parlamentaria. El mismo número reimprimía un trabajo llamado «Hacia una nueva concepción del Estado», que había escrito en septiembre y que era un relato elogioso de cómo el totalitarismo hacía frente al «liberalismo corrosivo», en el que Gil Robles se mostraba dispuesto a seguir las nuevas corrientes políticas del mundo^[80].

La campaña electoral de la CEDA mostró lo bien que Gil Robles había aprendido la lección. La gira alemana había tenido como finalidad «estudiar detalles de organización y propaganda»^[81] y, con el mismo motivo, había visitado Italia en enero. La clave de la campaña sería el antisocialismo. El anuncio de *El Debate* de la inminencia de las elecciones era combativo en extremo. Apelando a que colaboraran todos los de ideas de derechas, el diario afirmaba: «Saben los avaros que por cada moneda que no quisieron dar, perdieron, después, diez veces su valor»^[82]. Quedaba claro que la CEDA estaba dispuesta a ganar a costa de todo. El comité electoral se decidió por un frente único, antimarxista y contrarrevolucionario. En otras palabras, la CEDA no tenía escrúpulos en ir a las elecciones en coalición con otros grupos como Renovación Española y los carlistas que estaban conspirando para destruir la República por la fuerza de las armas. Se reconocía así que los intereses materiales de la derecha podían defenderse mejor dentro del Parlamento, con independencia de como se obtuviera la mayoría. El manifiesto del movimiento de juventudes de la CEDA, JAP, afirmaba que no esperaba nada de un sistema parlamentario obsoleto, pero que por el momento aceptaba las Cortes como un simple campo de batalla^[83].

El momento cumbre de la campaña de Gil Robles llegó en un discurso pronunciado el 15 de octubre en el cine Monumental de Madrid. Su tono sólo podía hacer preguntarse a la izquierda qué iba a suponer para ellos una victoria de la CEDA: «Es necesario ir a la reconquista de España... Se quería dar a España una verdadera unidad, un nuevo espíritu, una política totalitaria... Para mí sólo hay una táctica por hoy: formar un frente antimarxista, y cuanto más amplio, mejor». En este momento, Goicoechea, que estaba presente, fue invitado a levantarse y recibió una tumultuosa ovación. Gil Robles continuó con un lenguaje que no se diferenciaba del de la extrema derecha conspiratoria: «Hay que fundar un nuevo Estado, una nación nueva, dejar la patria depurada de masones judaizantes... Hay que ir al Estado nuevo, y para ello se imponen deberes y sacrificios. ¡Qué importa si nos cuesta hasta derramar sangre!... Necesitamos el poder íntegro y eso es lo que pedimos... Para realizar este ideal no vamos a detenernos en formas arcaicas. *La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer*»^[84]. Este discurso, descrito por *El Socialista* como «una auténtica oración fascista», fue considerado por la izquierda como la expresión más cristalina de la ortodoxia de la CEDA^[85]. Y, desde luego, cada frase fue recibida con aplausos arrebatados. Había algo

ominoso en la forma en que Gil Robles terminó el discurso pidiendo ayuda financiera bajo la amenaza de «una lista negra de los malos patriotas» que no contribuyeran. El tenor del discurso se continuaba en los carteles electorales, que resaltaban la necesidad de salvar a España de «marxistas, masones, separatistas y judíos»^[86].

Se gastó una fuerte suma de dinero en una campaña técnicamente reminiscente de los procedimientos nazis. Se imprimieron millones de octavillas que fueron lanzadas a los pueblos desde el aire. Se imprimieron 200 000 carteles en color. Había camiones que recorrían las calles de las principales ciudades con pantallas donde se proyectaban películas del discurso de Gil Robles. Veinte veces al día las cuñas publicitarias de la radio exhortaban a los oyentes: «¡Votad a las derechas!» o «¡Votad contra el marxismo!»^[87]. El fondo electoral era gigantesco, basado en las donaciones generosas de los adinerados, especialmente de Juan March, el millonario enemigo de la República, y del conde de Romanones, el exconfidente de Alfonso XIII. Aparte de la radio, se utilizaron todos los medios modernos de transporte y los anuncios de neón para llevar la propaganda de la CEDA a todos los rincones de España. A lo largo de noviembre aparecía de forma clara que si la CEDA conseguía una victoria aplastante procedería al establecimiento de un régimen autoritario de tipo semifascista, según las líneas del austríaco^[88].

El programa mínimo básico que mantenía a la CEDA en coalición con sus compañeros de viaje monárquicos difícilmente podía ser más extremo. Sus tres puntos eran: 1) la revisión de la legislación laica y socializante de la República; 2) la defensa de los intereses del campo, especialmente de la agricultura, y 3) una amnistía. De hecho era un desafío abierto a los republicanos. La legislación religiosa era considerada por amplias capas de la izquierda como el único golpe asestado al antiguo régimen. La legislación social, bajo la forma de jurados mixtos y de ley de términos municipales, era la única reforma práctica a favor del campesinado sin tierra. La «defensa de los intereses económicos» significaba, en el lenguaje de la derecha, la protección de la tierra y de la industria contra las reclamaciones de los trabajadores. La amnistía se aplicaría a los colaboradores del general Primo de Rivera y a los que habían estado implicados en el levantamiento del 10 de agosto. Para éstos era una virtual invitación a continuar conspirando, como efectivamente lo hicieron. La alianza con los grupos monárquicos, conocidos por ser violentamente hostiles a la República, asociaba irrevocablemente a la

CEDA con ellos a los ojos de la izquierda. Las afirmaciones de que la coalición era puramente circunstancial no podía borrar la impresión de coincidencia de fines y de métodos. Había poca diferencia de tono entre los discursos de Gil Robles y los escritos enviados desde el extranjero por José Calvo Sotelo, el líder extremista exiliado de Renovación Española. En un mitin en Valladolid a principios de noviembre, Gil Robles hizo una referencia amenazadora a «un fuerte movimiento contra la democracia, contra el parlamentarismo y el liberalismo, como sucede en Italia, Alemania y otros países. Las Cortes que se van a elegir pueden ser el ensayo decisivo para la democracia en España»^[89].

Además de la coalición nacional de derechas, la CEDA hizo cierto número de alianzas a nivel local antes de la primera vuelta de las elecciones. Estas alianzas locales tuvieron lugar en zonas donde la coalición antimarxista era relativamente débil y donde existían otras fuerzas conservadoras importantes. Así, en Asturias se llegó a un acuerdo con el partido reformista de Melquíades Álvarez; en Alicante, con Joaquín Chapaprieta, un monárquico convertido en republicano conservador; en las islas Baleares, con Juan March; en Guadalajara, con el conde de Romanones. En Badajoz, Cáceres, Ceuta, Granada, Jaén y Zamora, el acuerdo fue con los radicales locales. Las elecciones se celebraron el 19 de noviembre. A pesar de las diversas alianzas y de que, especialmente en las áreas rurales, la derecha dispusiese de considerable fuerza de presión sobre los desempleados, los resultados fueron decepcionantes. De 378 diputados que habían sido elegidos hasta el momento, la CEDA tenía 67 escaños y los radicales 78, lo que suponía un avance apreciable, pero nada excepcional a la vista de las vastas inversiones en propaganda del año anterior. En consecuencia, Gil Robles, intentando aprovechar que la ley electoral favorecía las coaliciones, decidió ampliar sus alianzas aún más y se aferró en el sur a los acuerdos locales con los radicales, los grandes maestros de la falsificación electoral. Esto le supuso retractarse de compromisos previos y provocó considerable resentimiento en la derecha. En Córdoba, por ejemplo, el monárquico José Tomás Valverde había sido convencido con dificultad de que se presentase en la primera vuelta; tras ésta se le abandonó sin ningún tipo de ceremonias para dejar sitio a un radical de la localidad, con gran indignación de los monárquicos locales. Sin embargo, la táctica dio sus frutos. Tras la segunda vuelta, los cedistas obtuvieron 115 escaños y los radicales 104^[90]. El hecho de que las alianzas locales se hubieran hecho a expensas de los aliados de la derecha no significaba nada para la izquierda, salvo que Gil Robles estaba dispuesto a todo y a

comprometer cualquier principio con tal de conseguir una mayoría parlamentaria y deformar la República desde dentro^[91].

CAPÍTULO III

DEMOCRACIA SOCIAL Y CONFLICTO SOCIAL: EL PSOE EN EL PODER, 1931-1933

Sin saber el éxito con que la derecha iba a organizar su oposición a la reforma, la dirección socialista vio la llegada de la República con gran optimismo. Dos semanas antes de las elecciones municipales que revelaron al rey que ya no contaba con «el amor de mi pueblo», Largo Caballero habló en un mitin electoral en Madrid y expresó las esperanzas que él y otros muchos tenían en un cambio de régimen. Declarando que, puesto que él era socialista, era también necesariamente republicano, afirmó que sólo el derrocamiento de la monarquía podía remediar el hambre en Andalucía y cambiar una situación en la que el orden social tenía que ser defendido por la Guardia Civil. En una reunión similar en Granada, Fernando de los Ríos dijo que los socialistas iban a ayudar a las clases medias para que realizaran su revolución democrática^[1]. Por poco que analizasen la situación, la mayoría de la dirección socialista estaba convencida de que una revolución burguesa clásica era inminente. Aunque hubiera diferencias respecto a la táctica a seguir —Besteiro aconsejaba que se dejase a la burguesía cumplir su tarea, Prieto estaba convencido de que sin la ayuda socialista la burguesía sería demasiado débil para realizarla y Largo Caballero deseaba participar en la esperanza de obtener beneficios para el partido y para la UGT—, todos estaban unidos en la convicción de que el progreso era inevitable. De hecho, la burguesía no iba a asaltar el feudalismo. La clase media comercial se había integrado desde hacía tiempo en la vieja oligarquía terrateniente y la que fue clase feudal dirigente había adoptado formas de explotación capitalista de la tierra y tenía intereses variados en la industria y el comercio. La adopción de formas democráticas fue aceptada por las clases económicamente dominantes de muy mala gana y sólo ante la evidencia de la bancarrota de la monarquía. Que aceptasen el cambio de forma política no significaba que desearan cambios en la estructura económica y social del país. Si los socialistas se hubieran dado cuenta, tal vez su amargura hubiera sido menor al tomar conciencia de la fuerte oposición que levantaban sus tímidos intentos de reformas.

En consecuencia, la partida del rey el 14 de abril y el establecimiento de un régimen parlamentario constituyeron un cambio mucho menor de lo que pensaban las alegres muchedumbres de las calles y muchos líderes socialistas.

Creyendo que se seguiría un período clásico de democracia burguesa antes de que pudiera establecerse el socialismo, la jerarquía del PSOE supuso que la nueva República permitiría la mejora de las condiciones sociales dentro del orden económico existente. De lo que no se dieron cuenta es de que las brutales condiciones de los jornaleros del sur o de los mineros asturianos difícilmente podrían mejorarse con medias tintas. Los grandes propietarios de las minas y los terratenientes, nada acostumbrados a hacer concesiones, considerarían los intentos de reforma como una agresión al equilibrio existente de poder económico y social. Y tenían razón. Así, la visión idílica de los socialistas de una república social-reformista les iba a dejar aprisionados entre una impaciencia popular que clamaba por más reformas y más rápidas y la decidida resistencia al cambio de las clases poseedoras. Las diferentes respuestas cuando advirtieron que darle un sentido social a la República suponía crear en el partido contradicciones dolorosas provocarían una intensificación en las divisiones que habían aparecido en los años veinte.

Por el momento, sin embargo, el PSOE iba a comprometerse públicamente en la defensa y protección de la República. Cuando las muchedumbres comenzaron las celebraciones callejeras, los comités ejecutivos del PSOE y de la UGT hicieron pública una declaración conjunta que terminaba con la promesa de que «si en cualquier instante fuera preciso hacer uso de nuestra fuerza para salvaguardar el régimen que nace, el partido socialista y la UGT han de cumplir con su deber sin vacilación de ninguna clase»^[2]. En otro lugar de Madrid, las juventudes socialistas se cogían del brazo alrededor del Palacio Real para contener a las masas y evitar los incidentes desagradables. También evitaron la quema de la casa del general Mola^[3].

Esto simboliza el papel que los socialistas adoptarían en los primeros años de la República, el de contener el entusiasmo de sus seguidores para dar al régimen una imagen aceptable a las clases medias. El primer ministro, Niceto Alcalá Zamora, republicano conservador, lo resaltaba agradecido en un artículo escrito seis semanas después de la proclamación de la República, viendo en el movimiento socialista «un muro de contención frente al asalto y fortaleza tranquilizadora en el nuevo régimen republicano»^[4].

Que los socialistas hiciesen sacrificios por un régimen que no era el suyo parecía natural en el ambiente de euforia de la primavera y verano de 1931. Pero el grado en que las masas, políticamente poco preparadas, especialmente en el sur rural, asociaban el advenimiento de la República con la

emancipación proletaria iba a ser pronto causa de lamentaciones para algunos socialistas, especialmente entre los seguidores de Besteiro. El sindicalista moderado Manuel Cordero veía el optimismo y las ilusiones de las masas como un impedimento a la necesidad de que los socialistas se aprovecharan de la República poco a poco. Creyendo que al día siguiente a la proclamación de la República todos los problemas del país quedarían solucionados, que los privilegios de clase desaparecerían y que se establecería un régimen de igualdad y de justicia social, pronto las masas se verían decepcionadas por la lentitud del progreso hacia la reforma^[5]. Largo Caballero no compartía este punto de vista. De hecho, Largo era lo suficientemente entusiasta de la situación como para pensar que las divisiones de los años anteriores desaparecerían automáticamente. Ofreció al segundo de a bordo de Besteiro, Andrés Saborit, un puesto importante en el Ministerio de Trabajo, y su oferta fue inmediatamente rechazada. El gobierno, del que ahora formaban parte Largo, Prieto y De los Ríos, ofreció también al propio Besteiro un puesto atractivo como delegado estatal en el monopolio nacional de petróleo, CAMPSA, y a continuación el puesto de embajador en Francia. Ambas ofertas fueron rechazadas por el interesado^[6].

No era sólo la derecha del partido, tradicionalmente abstencionista, la que tenía sus dudas sobre la conveniencia de comprometerse demasiado con la República. Pronto emergieron otras voces discordantes, sólo que esta vez más radicales. Aunque por el momento en minoría, era significativo que perteneciesen a miembros del partido cuyas opiniones pesaban en sectores militantes claves del movimiento socialista. Javier Bueno, que publicó un libro en junio de 1931, sería más tarde director del periódico de los mineros asturianos, *Avance*, que se radicalizaría progresivamente después de su fundación en noviembre de 1931. El libro de Bueno incitaba a sus compañeros socialistas a aprovechar la oportunidad que se les presentaba con el nacimiento de una nueva era. Declarando que la sociedad capitalista había terminado, rechazaba el reformismo evolucionista del partido: «Si el futuro es un régimen social que libere al hombre, ninguna razón hay para aplazar el momento de romper las cadenas»^[7].

En la atmósfera optimista de 1931, las opiniones de Bueno tuvieron poco impacto. Sin embargo, pronto se convertiría en uno de los portavoces de la sección del PSOE que empezaba a pensar que era precisamente el compromiso del partido con la República lo que estaba aplazando la ruptura de las cadenas. Tal vez de más importancia eran los recelos de Gabriel Morón,

el líder rural militante de Córdoba que había sido la punta de lanza en la protesta interna del partido contra la colaboración con Primo de Rivera. Morón y un grupo de sus amigos pensaban que las esperanzas reformistas de una república progresista eran ilusiones. Argumentando que los acontecimientos contemporáneos sugerían que el socialismo era objeto de una ofensiva mundial por parte de la burguesía, creían que la democracia burguesa y las libertades burguesas se habían convertido en conceptos vacíos. En consecuencia, la táctica reformista y revisionista del PSOE no respondía a la realidad. En su lugar, afirmaba Morón, los socialistas debían aprender que se aproximaba una lucha fundamental entre el viejo orden capitalista y las aspiraciones políticas de los trabajadores^[8].

Lo que añadía importancia a las opiniones de Morón era que precisamente en el sur agrario había de encontrarse la primera línea para la batalla por una república progresista. Además, era allí donde se estaba produciendo una afiliación masiva a la UGT. El crecimiento vertiginoso de la federación de trabajadores de la tierra, la FNTT, era totalmente desproporcionado al crecimiento general de la UGT. El total de afiliados al sindicato creció de 277 011 miembros en diciembre de 1930 a 958 451 en diciembre de 1931 y a 1 041 539 en junio de 1932. La FNTT creció de 36 639 miembros en junio de 1930 a 392 953 en junio de 1932^[9]. El cambio de orientación de la UGT como un todo fue inmenso. A mediados de 1930, mientras aumentaba la crisis agraria, los trabajadores rurales constituían el 13 por 100 de los miembros de la UGT. Dos años más tarde, con el rencor de clase aumentando día a día en los pueblos del sur, la proporción de trabajadores de la tierra en la UGT había crecido al 37 por 100. Largo Caballero estaba encantado de ver a su querido sindicato crecer más deprisa que la CNT: «Nuestro rápido crecimiento no nos puede asustar, no nos debe asustar», declaró^[10]. Los miembros más prudentes de la burocracia sindical tenían la preocupación de que los jornaleros analfabetos que inundaban el movimiento, brutalizados por las condiciones de las tierras del sur, empujasen a la UGT a un conflicto violento con los terratenientes y que la organización sindical tuviese que enfrentarse a la tarea de moderar la exaltación descontrolada de los jornaleros^[11]. Incluso si el miedo tenía su origen en un paternalismo burocrático, no era por ello menos justificado. El cambio de orientación de la UGT —de un sindicato formado predominantemente por la élite de la aristocracia obrera a un sindicato de masas de obreros y campesinos poco preparados en unos momentos de depresión económica y creciente desempleo— iba a colocarla en el centro del principal conflicto de la República: el que tuvo lugar entre los grandes

terratenientes y los jornaleros sin tierra. Cada parte del conflicto estaba representada en la arena política nacional por un partido parlamentario de masas; los terratenientes, por la coalición Acción Popular-Agrarios; los campesinos, por el PSOE. De este modo, la supervivencia del régimen parlamentario dependía en gran medida de la resolución del conflicto.

En los primeros días de la República, pocos socialistas se dieron cuenta de las sombrías implicaciones del auge de afiliación en la UGT. Además, los tres socialistas del gobierno provisional se comprometieron solemnemente a mejorar las condiciones de vida del campesinado español. La promesa tomó la forma del Estatuto Jurídico de la República, una declaración formal en la que el gobierno provisional establecía sus objetivos y circunscribía sus poderes hasta que se pudiese elegir un Parlamento^[12]. La cláusula cinco declaraba que la ley garantizaba la propiedad privada, que sólo podría expropiarse por razones de utilidad pública y con compensación. Continuaba reconociendo el abandono de los gobiernos anteriores de grandes masas de campesinos y de la agricultura en general y se comprometía a cambiar la legislación agraria para hacerla corresponder a la función social de la tierra. En una reunión del gobierno, el 21 de abril, se discutió la aplicación específica de este compromiso. Se persuadió a los tres ministros socialistas de que aplazasen los deseos de su partido de una redistribución general de la tierra, al menos hasta que fuese posible su aprobación parlamentaria. A cambio de su tolerancia se les permitía publicar una serie de decretos para ocuparse de las causas más inmediatas de la miseria en el campo^[13].

Un informe del Ministerio del Trabajo, encargado en noviembre de 1930 y publicado a principios de 1931, mostraba un cuadro sombrío de la miseria causada en el sur por la sequía del invierno^[14]. El hambre de los campesinos sin tierra era tal que se necesitaban paliativos urgentemente. La solución normal de aumentar las obras públicas era inadecuada. El gobierno republicano había llegado al poder con el mayor déficit presupuestario de la historia de España a causa de los grandiosos proyectos del general Primo de Rivera. Se debían 300 millones de pesetas a los contratistas y, en un contexto de incertidumbre financiera internacional, no se conseguían préstamos a largo plazo. La financiación deficitaria era imposible. Por tanto, una mejora de las condiciones de vida en el campo sólo podía lograrse reajustando las desigualdades económicas existentes, es decir, a costa de los agricultores ricos. El sistema latifundista de tenencia de la tierra se apoyaba en gran medida para su viabilidad económica en la existencia de una gran reserva de

campesinos sin tierra a los que se pagaba salarios mínimos por el período más corto posible. Los aumentos salariales y la protección contra el despido de esos campesinos amenazaban las bases de todo el sistema. Lo que los socialistas podían pensar que eran simplemente paliativos reformistas limitados iba a tener así implicaciones de amplio alcance.

En una época de prosperidad económica, los aumentos salariales podían haber sido absorbidos por los incrementos en los beneficios. Pero los intentos de los socialistas de mejorar las condiciones económicas coincidieron con los años de la gran depresión. La situación consiguiente de exacerbada lucha de clases sólo podía empujar a los campesinos sin tierra a exigir más reformas, y a los terratenientes, a oponerse a todo tipo de reformas. La depresión afectó principalmente de dos formas al campo español: cerrando la válvula de seguridad de la emigración y forzando a la baja los precios agrícolas. Después de cuarenta años de una alta tasa de emigración, que se situaba en los 32 000 anuales, en 1931 se produjo una vuelta neta de emigrantes cifrada en 39 582. Para finales de 1933, las barreras a la emigración en Francia e Iberoamérica habían provocado la vuelta a España de 100 000 españoles, que se unieron a un número similar que en condiciones normales habría emigrado, pero que no pudieron hacerlo. La depresión industrial impedía aliviar la situación por medio de la migración interna a las ciudades, por lo que los emigrantes que volvían tenían que dirigirse al campo. Durante la época de prosperidad en los años veinte hubo un éxodo rural considerable, provocado en gran parte por los grandes planes de construcción de Primo. Los obreros de la construcción no especializados volvían ahora a sus pueblas. Puesto que la depresión mundial pronto iba a dejar sentir sus efectos en las exportaciones agrícolas españolas de vinos, frutas y aceite de oliva, los grandes terratenientes estaban poco dispuestos a crear puestos de trabajo para las masas rurales. Dado que el 45,5 por 100 de la población activa, 3 900 000 campesinos con tierra o sin ella, trabajaba en el campo y que 2 000 000 de ellos eran jornaleros sin tierra, la resolución del conflicto de intereses entre los terratenientes y los trabajadores del campo era el principal problema con que se enfrentaba el gobierno provisional^[15].

Éste era el contexto en el que el ministro de Trabajo, Largo Caballero, y el ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, empezaron, a finales de abril de 1931, a publicar decretos referentes a la cuestión rural. Entre el 28 de abril y la apertura del Parlamento, el 14 de julio, publicaron una serie de disposiciones legales de crucial importancia. Los que emanaban del Ministerio de Justicia se referían a los arrendamientos rurales; los del

Ministerio de Trabajo se ocupaban de las condiciones laborales de los braceros. Un decreto de 29 de abril congeló todos los arrendamientos, renovó automáticamente todos los que caducaban e impidió el desahucio por causas que no fuesen el impago de la renta o la falta de cultivo. Su objetivo era impedir que los terratenientes absentistas hasta entonces tomaran posesión de su tierra para evitar las consecuencias de la reforma agraria propuesta. A partir del 11 de julio se permitió a los arrendatarios que se dirigiesen a los tribunales pidiendo una reducción de la renta. Los decretos introducidos por Largo Caballero tenían un impacto más dramático. El más importante fue el de términos municipales, publicado el 28 de abril, que prohibía la importación de mano de obra exterior a un municipio mientras quedasen trabajadores locales sin trabajo. El 7 de mayo se introdujeron los jurados mixtos para arbitrar los conflictos laborales rurales. Es significativo que el general Primo de Rivera no se hubiera atrevido nunca a extender sus comités paritarios, en los que se basaban los jurados mixtos, a las áreas rurales por miedo a la reacción de los propietarios. Un nuevo decreto de 1 de julio estableció, en teoría al menos, la jornada de ocho horas para el campo. Puesto que los jornaleros ganaban sus salarios trabajando de sol a sol y las jornadas de dieciséis horas no eran raras, el decreto suponía un incremento de los ingresos de los braceros, bien en la forma de horas extraordinarias, bien en la de más trabajo para más hombres. Para impedir que los propietarios sabotearan estas medidas dejando simplemente de cultivar la tierra, el Ministerio de Economía Nacional aprobó el 7 de mayo un decreto complementario de laboreo forzoso^[16].

Los efectos acumulativos de estos decretos iban, sobre el papel, a golpear en el centro de las relaciones económicas represivas que prevalecían en la España rural, especialmente en las zonas de grandes latifundios. Sin embargo, parece que, al promulgarlas, Fernando de los Ríos, y Francisco Largo Caballero no tenían objetivos revolucionarios, sino que intentaban aliviar las condiciones de aguda miseria en que se encontraba Andalucía en la primavera de 1931. Además del informe del Ministerio de Trabajo sobre la crisis agraria, el gobierno tenía también a su disposición un número de advertencias alarmantes. El general Sanjurjo, jefe de la Guardia Civil, informó al ministro de la Guerra, Manuel Azaña, que la agitación iba en aumento. El 21 de julio, todos los alcaldes de la provincia de Jaén, una de las más afectadas, vinieron a pedir ayuda al gobierno, afirmando que necesitaban subsidios por valor de dos millones de pesetas diarios y al menos durante tres meses para evitar el hambre de numerosas personas e impedir una insurrección^[17]. Se planearon

proyectos de obras públicas con los escasos fondos disponibles, pero la cantidad inicial atribuida a todo el sur fue sólo de diez millones de pesetas^[18]. En tales circunstancias, no es de extrañar que el gobierno pensase que los patronos debían contribuir a aliviar la crisis.

Por muy limitadas que fuesen las intenciones de los ministros, seguía existiendo, sin embargo, la amenaza implícita a las posiciones hasta entonces dominantes. La ley de términos municipales cercenó efectivamente la introducción de esquiroles para romper las huelgas y mantener los salarios bajos. Los jurados mixtos reconocieron que los trabajadores también tenían derechos y no estaban simplemente sujetos a las necesidades económicas de los propietarios. La jornada de ocho horas aumentó los costos en un mercado deprimido. El decreto de laboreo forzoso introdujo una noción de utilidad social que limitaba los derechos del propietario a disponer de su tierra libremente, de tal manera que neutralizaba una de las formas principales de dominación social. Los grandes terratenientes empezaron a movilizarse contra la amenaza. Se fundaron o se revitalizaron varias federaciones de propietarios: la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas, la Confederación Española Patronal Agraria, asociaciones de ganaderos, asociaciones de cultivadores de aceite, etc^[19]. Gran parte del éxito de la campaña de afiliación de Acción Nacional durante el verano de 1931 puede atribuirse al resentimiento generado por esos primeros decretos y al miedo a futuras medidas más completas. La red de prensa y propaganda de ACNP iba a ponerse pronto en marcha para atacar los decretos. En este tema, como en otros, obtuvo un éxito considerable creando una aparente identificación de intereses entre los pequeños y los grandes propietarios, lo que era relativamente fácil, puesto que muchas de las consecuencias de los decretos afectaban a todos los que contrataban mano de obra, en pequeña o en gran cantidad.

Algunas de las críticas de la derecha estaban justificadas desde el punto de vista de los propietarios, pero otras formaban parte de una campaña de denigración que distorsionaba hábilmente los auténticos detalles y funciones de los decretos. El decreto de términos municipales, por ejemplo, privaba de trabajo a los obreros emigrantes y alcanzaba también en sus efectos a los habitantes de los pequeños pueblos satélites que estaban cerca, pero fuera de los límites de un pueblo mayor. Sin embargo, que tal fuese el caso no constituía tanto un fallo del decreto como una prueba de la necesidad de cambios fundamentales en la estructura agraria de España. Es también posible

que los trabajadores locales utilizaran su nueva seguridad en el empleo para alargar los trabajos y garantizar así sus exiguos salarios unos días más, pero eso no era suficiente para justificar las acusaciones de Gil Robles, en una visita al Ministerio de Trabajo, de que el decreto sólo beneficiaba a los «vagos profesionales». Hay pruebas que sugieren que los concejales socialistas encargados de aplicar el decreto no tuvieron inconveniente en aprovecharse del cambio en el equilibrio legal de poderes. En algunos casos, por ejemplo, utilizaron el decreto de laboreo forzoso para arar los pastos, lo que no debe sorprender, puesto que los propietarios tampoco habían dudado en sacar todo el beneficio posible de la situación anterior. Y en cualquier caso no siempre los alcaldes y concejales socialistas se salieron con la suya. Los mecanismos para hacer cumplir los decretos eran casi inexistentes. Sin embargo, el problema era inmenso. Mientras miles de braceros estaban al borde del hambre, amplias áreas de tierra permanecían sin cultivar. En Andalucía y en Extremadura, entre el 40 y el 60 por 100 de las tierras útiles no se cultivaban^[20]. Sin embargo, las multas por infringir el decreto de laboreo forzoso no excedían de 500 pesetas y normalmente eran mucho menos. De hecho, Largo Caballero se quejaba amargamente de la forma en la que funcionarios importantes, como los gobernadores civiles de varias provincias, sabotaban la aplicación de los distintos decretos dando órdenes que contrariaban su espíritu. Además, especialmente en los pueblos remotos, el poder de la Guardia Civil continuaba intacto. Incluso el general Sanjurjo le comentó a Azaña que la Guardia Civil se sentía comprometida con las clases altas rurales y en contra de los alcaldes y concejales anarquistas y comunistas, a los que había estado deteniendo hasta hacía poco. Y, por encima de todo, el poder consiguiente al hecho de ser los únicos proveedores de trabajo continuaba en manos de los propietarios^[21].

La campaña de propaganda llevada a cabo por la prensa católica simplemente inflamó la decisión de los terratenientes del sur de no obedecer las provisiones de los decretos. Se fomentó la idea de que una de las consecuencias de la ley de términos municipales era que barberos, zapateros, maestros desempleados y otros trabajadores sin cualificar estaban siendo utilizados para tareas especializadas con detrimento de la agricultura nacional. Por una disposición complementaria del 6 de agosto se autorizó la importación de la necesaria mano de obra especializada. Por otra del 30 de septiembre se estableció que la lista de trabajadores de un término municipal a los que debía darse trabajo antes de permitir la introducción de mano de obra foránea debía estar compuesta exclusivamente de trabajadores agrícolas.

La prensa de derechas se quejaba también de que se estaban perdiendo cosechas valiosas por culpa de la rigidez de la ley que impedía obtener la mano de obra extraordinaria necesaria. De hecho, una vez que todos los trabajadores de un pueblo tenían trabajo, nada impedía introducir trabajadores de fuera. Además, la ley se suspendió, el 15 de octubre, mientras durase la recogida de la naranja y, el 29 de octubre, para la cosecha de la aceituna en las provincias productoras. Los diferentes decretos requerían algún tipo de adaptación al ponerlos en práctica. Sin embargo, lo que atrajo la atención de la prensa de derechas era la rigidez teórica y no la flexibilidad práctica^[22].

Menos directamente ofensivos para los grandes propietarios, pero igualmente irritantes, eran los decretos publicados por Fernando de los Ríos para mejorar la apurada situación de los arrendatarios. Además de la zona tradicional de minifundio en el norte y en el centro de España, había una cantidad creciente de tierras cultivadas en pequeños arrendamientos en las zonas predominantemente latifundistas. Dada la aguda hambre de tierras y la consiguiente competencia por parcelas, los arrendamientos se aceptaban en términos económicamente ruinosos y por períodos tan cortos como un año. Los decretos de Fernando de los Ríos mitigaron algunos de los peores resultados de la desastrosa cosecha de 1930-1931, haciendo casi imposible la evicción e impidiendo el aumento de la cantidad a pagar por los arrendamientos en unos momentos de caída de los precios. Muchos grandes terratenientes lo consideraron como un intolerable quebrantamiento de sus derechos de propiedad. Sin embargo, la auténtica batalla sobre este problema no surgiría hasta que el ministro de Agricultura liberal de la CEDA emprendió la defensa de los pequeños arrendatarios en 1935. No se sabe si este aplazamiento se debió a que las formaciones políticas que protegían los intereses de los grandes propietarios estaban demasiado preocupadas por ganar el apoyo de los pequeños agricultores como para arriesgarse a hacer frente al problema o si fue simplemente una cuestión de prioridades.

Desde luego, para finales de 1931, era evidente que el resentimiento inicial de los propietarios ante los decretos que regulaban las condiciones de trabajo de los jornaleros iba madurando en un deseo de destruirlas por medio de un auténtico *lock-out* rural. Sin embargo, a principios del verano, la mayoría de los dirigentes del PSOE no preveían este futuro conflicto. La facción abstencionista de Besteiro tenía sus dudas, pero otros tendían a ver el aumento de las expectativas de los trabajadores rurales y su consiguiente influjo en la UGT como un indicador de las posibilidades de una democracia burguesa reformista. En las elecciones a Cortes constituyentes, celebradas el

28 de junio, el PSOE obtuvo 116 escaños. Este triunfo planteó el problema del papel que iban a desempeñar los socialistas dentro de la República. En consecuencia, se convocó un congreso extraordinario del partido para el 10 de julio, cuatro días antes de la apertura de las Cortes, para debatir la política que iban a seguir los diputados del PSOE. Un indicio del entusiasmo de la base por la colaboración pudo verse en el resultado de las votaciones para delegados en el congreso. El abstencionista Andrés Saborit, sorprendentemente, no fue elegido en la, hasta entonces fuertemente probesteirista, Agrupación Socialista Madrileña^[23].

El principal problema debatido en el congreso fue si los tres ministros socialistas del gobierno provisional debían continuar su participación. La comisión delegada para examinar la cuestión estaba dominada por Besteiro, pero incluía al prietista Teodomiro Menéndez y al consejero de Largo, Luis Araquistáin. La recomendación central de su informe era que los tres ministros deberían permanecer en el gobierno mientras se elaborase la Constitución. Prieto propuso una enmienda al texto, redactada en los siguientes términos:

1. En este momento histórico constituye obligación fundamental para el PSOE defender la República y contribuir por todos los medios a la consolidación de ésta.
2. Considerando que la obra encomendada al gobierno provisional como continuación de la del comité revolucionario no queda concluida al abrirse las Cortes Constituyentes, el partido continuará representado en el gobierno hasta ser aprobada la Constitución y elegido el órgano supremo del poder.
3. El grupo parlamentario, aunque responsable directamente de su gestión ante los congresos de nuestro partido, cuando se trate de casos de excepcional importancia en que su actitud pueda imprimir rumbos decisivos a la política española, apelará a la comisión ejecutiva en demanda de resolución conjunta.
4. Si al aprobarse la Constitución y elegirse el órgano supremo del poder se requiere al partido para continuar en el gobierno y el requerimiento surgiera en condiciones tales de urgencia que imposibilitara la convocatoria de un congreso extraordinario, el grupo parlamentario y la comisión ejecutiva resolverán conjuntamente, y de haber disparidad de criterio entre ambos organismos, decidirá el comité nacional.
5. Como norma para estas resoluciones, el partido se pronuncia en principio por la no participación en el poder; pero, fiel a lo consignado en el artículo primero de este acuerdo y en defensa de la República, la

aceptaría si advirtiera que al inhibirse determinaba derroteros derechistas contrarios a los anhelos hondamente radicales del país, revelados el 12 de abril y ratificados el 28 de junio, y al deseo vehemente de España de que una rígida austeridad administrativa robustezca, por medio de profundas diferenciaciones con respecto a tradicionales vicios políticos, el prestigio de pureza que debe aureolar al nuevo régimen, o si, por falta de cohesión entre los grupos republicanos, careciese el gobierno de indispensable solidaridad.

El texto de Prieto implicaba que la participación era un sacrificio necesario por parte del PSOE. Sin embargo, abría el camino a una colaboración total y comprometía claramente al PSOE en el éxito o en el fracaso de la República. Besteiro se opuso alegando que el partido haría la tarea de la burguesía y, en consecuencia, perdería el contacto con sus seguidores. El congreso aceptó el texto de Prieto por 10 607 votos contra 8362. El resto del congreso se dedicó a la elaboración de los objetivos socialistas en las Cortes constituyentes. Objetivos básicamente reformistas, pero no por ello menos ambiciosos, incluyendo, como lo hacían, una declaración de derechos de la persona, la nacionalización de los ferrocarriles, los Bancos, las minas y los bosques, la solución del problema agrario, la introducción del divorcio, la construcción de un sistema educativo laico y la declaración de independencia religiosa del Estado^[24].

Las implicaciones generales del compromiso socialista en la defensa de la república burguesa iban a aparecer pronto, tendiendo a justificar los peores miedos de Besteiro. A pesar de la buena disposición de los socialistas para posponer sus reformas más ambiciosas, las clases altas no quedaron satisfechas. Al fugarse del país grandes cantidades de capital, la peseta comenzó a depreciarse, hasta tal punto que el viejo consejero del rey, el conde de Romanones, declaró que si él estuviera en el poder fusilaría a los pesimistas^[25]. Al mismo tiempo que las clases altas mostraban así su hostilidad a la República, la clase obrera empezó a revelar la impaciencia de sus expectativas por medio de una serie de huelgas a lo largo de 1931. Para un partido obrero en un gobierno burgués la situación era delicada. Para impedir el descrédito de la República por el malestar industrial y agrario, los ministros socialistas consintieron la supresión, a menudo de forma violenta, de las huelgas organizadas por comunistas y por anarquistas, mientras que la burocracia sindical de la UGT trabajaba en firme para suprimir la militancia de sus propios militantes. Dada la tradicional rivalidad con la CNT, no derramaron muchas lágrimas por la represión de los anarquistas. Sin embargo,

la base no siempre compartió esta visión egoísta de los burócratas pagados, sintiendo una solidaridad de clase más básica. Especialmente, éste era el caso en las áreas rurales. Aunque la prensa socialista se refería a los desórdenes anarquistas, no había gran diferencia entre los anarquistas y los miembros de la FNTT. En muchos pueblos, la organización local de braceros se había afiliado ingenuamente a la UGT, la CNT y el Partido Comunista. En otros lugares, el hecho de que los jornaleros analfabetos se hubiesen afiliado a la FNTT no les convertía de un día para otro en marxistas sofisticados, y había poca diferencia en madurez política y en aspiraciones entre ellos y los miembros de la CNT. También en las minas, la dureza sustancial de las condiciones creó una solidaridad por encima de las rivalidades de las diferentes facciones. No es de extrañar, pues, que las críticas agudas de colaboracionismo y reformismo hechas a la dirección socialista tuvieran su efecto en la base militante de la UGT. Precisamente fueron los líderes socialistas que estaban más cerca de los trabajadores los que finalmente rechazaron el reformismo como peor que inútil: Largo Caballero, Luis Araquistáin, subsecretario del Ministerio de Trabajo, y Carlos de Baraibar, director general de Trabajo^[26].

La causa principal del malestar de los socialistas era que los anarquistas consideraban la república burguesa semejante a la monarquía y estaban poco dispuestos a escuchar los argumentos del PSOE en favor de la paciencia. A finales de mayo hubo una huelga de obreros portuarios en Pasajes (San Sebastián). El ministro del Interior, Miguel Maura, mandó a la Guardia Civil y hubo ocho muertos y numerosos heridos entre los trabajadores. El incidente de Pasajes tuvo repercusiones inmediatas en Asturias, donde el Sindicato Minero Asturiano, afiliado a la UGT, se veía sometido a la presión creciente del mucho más militante Sindicato Único, controlado conjuntamente por anarquistas y comunistas. Desde la muerte del gran reformista Manuel Llaneza el SMA estaba dirigido por prietistas como Teodomiro Menéndez y Ramón González Peña, defensores ardientes de la línea que iba a prevalecer en el congreso extraordinario. Así, condenaron la huelga de solidaridad propuesta como una irresponsabilidad reaccionaria dirigida a desacreditar a la República. Sin embargo, la base se mostraba de acuerdo con las afirmaciones de los anarquistas de que la dirección del SMA estaba actuando como aliada a los odiados dueños de las minas, lo que finalmente forzó la participación del SMA en la huelga general que empezó el 1 de junio. Los socialistas utilizaron entonces toda su influencia para terminar la huelga rápidamente y de forma pacífica^[27].

En otros sitios, la historia era similar. En Andalucía y en Extremadura los braceros y yunteros hambrientos atacaban las grandes propiedades; la Guardia Civil fue enviada una vez más. La dirección besteirista de la FNTT, que crecía rápidamente, tenía que utilizar todos sus poderes de persuasión para mantener la militancia de sus nuevos miembros dentro de la legalidad republicana. Los principales conflictos del verano tuvieron lugar en Madrid, Barcelona y Sevilla. El primero de ellos, la gran huelga de teléfonos que estalló el 6 de julio, destacó claramente el dilema de los socialistas en el gobierno. El monopolio telefónico en España había sido establecido durante la Dictadura por la corporación americana ITT en medio de un gran escándalo. Desde finales de los años veinte hasta la llegada de la República, los socialistas habían condenado sus irregularidades y habían prometido apoyar las reivindicaciones salariales de sus trabajadores. Sin embargo, cuando estalló la huelga, el gobierno estaba intentando por todos los medios crear confianza en el régimen y se encontraba sometido a fuertes presiones por parte del embajador americano. En consecuencia, Miguel Maura, con el acuerdo de sus colegas socialistas en el gobierno, movilizó fuertes contingentes de policía contra los huelguistas y dio instrucciones de disparar contra cualquier huelguista que intentase sabotear la propiedad de la compañía. La prensa socialista denunció la huelga como una provocación reaccionaria, y la UGT recomendó a sus militantes que no colaborasen con los huelguistas. Sin embargo, se trataba de una huelga popular contra una empresa multinacional y muchas secciones de la UGT enviaron mensajes de solidaridad y dinero a los huelguistas. La huelga fracasó y dejó un legado considerable de acritud entre la República y la CNT^[28].

Aún más dramático fue el resultado de un período de agitación anarquista en Sevilla. Como culminación de una serie de huelgas, la CNT convocó a un paro general para el 18 de julio. Ésta fue la señal para una serie de desórdenes y batallas callejeras con disparos entre los anarquistas y la Guardia Civil. En una reunión del gobierno, el 21 de julio, Largo Caballero pidió que Miguel Maura interviniese para terminar con los desórdenes que estaban perjudicando la imagen de la República. Cuando el primer ministro, Niceto Alcalá Zamora, preguntó si todo el mundo estaba de acuerdo en que se necesitaban medidas enérgicas contra la CNT, el gobierno dio su consentimiento unánime y Largo llegó a mostrar un proyecto de decreto en el que se declaraban ilegales las huelgas bajo ciertas circunstancias. Al día siguiente, Maura, que siempre había sido bastante impulsivo, autorizó el bombardeo de artillería de uno de los lugares de reunión de los anarquistas, la Casa Cornelio en Sevilla. Esto

terminó la huelga, pero también provocó una oleada de críticas de los socialistas, tanto en la prensa como en las Cortes. Los diputados catalanes, que habían sido elegidos con votos anarquistas, expresaron en las Cortes la opinión de la CNT. Replicando a las acusaciones de que la UGT estaba utilizando la presencia socialista en el gobierno, Largo Caballero y Manuel Cordero adujeron que la CNT preparaba el derrumbamiento de la República para perjudicar a la UGT y que la participación gubernamental sólo suponía sacrificios para los socialistas^[29].

Para los socialistas era agotador tener que soportar el peso de la defensa de la República contra la derecha y contra la izquierda; pero, en el verano de 1931, la tarea parecía aún provechosa, como ponía de manifiesto Luis Araquistáin en una serie de artículos que publicó cuando todavía se estaban produciendo las huelgas de Sevilla y la huelga de teléfonos. En «El anti-Cristo sindicalista» intentaba mostrar cómo la conducta de la CNT estaba siendo aprovechada por la derecha, permitiendo que se creara de la República una imagen de caos y desorden. En el segundo artículo de la serie, «¿Por qué hay tantas huelgas?», sugería que los anarquistas estaban motivados por un deseo de venganza por la colaboración socialista con la Dictadura. En contraste con esta irresponsabilidad egoísta, alababa el heroísmo cívico de los miembros de la UGT, a los que la depresión económica perjudicaba exactamente igual que a los anarquistas, pero que ponían la salud de la República por encima de sus propios intereses. En el tercero y último artículo, «Contra el abuso de la huelga», afirmaba que los mecanismos existentes de conciliación y arbitraje podían atender cualquier queja justa sin necesidad de recurrir a la huelga^[30]. Esto no era cierto, pero los socialistas deseaban por todos los medios reducir las tensiones y el malestar social.

Mientras transcurría el verano, los ataques por ambos lados del espectro político empezaron a hacer mella en los socialistas. Prieto, que siempre tendió al pesimismo, se desilusionaba progresivamente por su incapacidad para cambiar la estructura financiera del país y empezaba a hablar de dimisión. También opinaba que, al tener un socialista como ministro de Trabajo, el PSOE se estaba atrayendo el descontento popular a causa de la imposibilidad de solucionar todos los problemas sociales a la vez. Largo continuaba convencido de que ocupando el Ministerio ayudaba a mejorar las condiciones, pero también se mostraba preocupado por la hostilidad que estaba provocando entre los anarquistas, y el 7 de agosto habló de dimitir. Dos días antes había manifestado en las Cortes que los labradores de Cádiz, Málaga y Sevilla se

negaban a sembrar en un intento de romper los jurados mixtos. Tanto Prieto como Largo fueron convencidos por sus colegas de gobierno de que permaneciesen en sus puestos, aunque probablemente la resistencia a la reforma de la clase alta hubiera sido suficiente para recordarles que las cosas se deteriorarían si el PSOE abandonaba el gobierno. La actitud de Largo se revelaba en el preámbulo a un proyecto de ley sobre contratación laboral, en el que se describía a sí mismo como «un socialista con ideales avanzados que colabora desde hace treinta años con las clases capitalistas para arrancarles gradualmente y por medios legítimos... sus ya imposibles privilegios». Con tal que la política reformista consiguiese hacer avanzar a la clase obrera, y en especial a la UGT, Largo continuaría colaborando. Sin embargo, la experiencia de su reacción ante las frustradas esperanzas en la Dictadura sugería que en el caso de sufrir una desilusión semejante podía esperarse de él un cambio de línea de conducta. A la izquierda del PSOE había ya algunos que estaban totalmente desilusionados con la colaboración. Es bastante significativo que cuando, en 1929, Largo rechazó la colaboración con el dictador, su decisión estuviese precedida de una aguda crítica del colaboracionismo hecha por Gabriel Morón. Ahora, en un libro escrito a finales de 1931, Morón criticaba la participación en el gobierno como carente de sentido, y predecía que si los socialistas no se retiraban del poder y se preparaban para la batalla con la burguesía serían destruidos cuando finalmente sus esfuerzos reformistas provocasen una reacción de las clases dirigentes. Sólo era cuestión de tiempo el que Largo llegase a conclusiones similares^[31].

Sin embargo, a causa del fracaso de las diferentes huelgas, se produjo un momento de calma en la agitación anarquista, puesto que, además de haber agotado a los trabajadores anarquistas, las huelgas estaban provocando divisiones internas en la CNT. La crisis se presentó en agosto, cuando 30 moderados firmaron un manifiesto contra la violencia esporádica de los anarquistas puros de la Federación Anarquista Ibérica^[32]. Pronto, el descontento iba a volver a surgir, pero este respiro permitió a los socialistas concentrarse durante el otoño en los debates parlamentarios referentes a la elaboración de una nueva Constitución.

Después de que un primer proyecto del político conservador Angel Ossorio y Gallardo hubiese sido rechazado, el 28 de julio se constituyó un nuevo comité constitucional bajo la presidencia del profesor socialista de Derecho Luis Jiménez de Asúa. Apenas tuvo tres semanas para redactar el

anteproyecto. En consecuencia, algunos de sus términos poco sutiles dieron lugar a tres meses de ásperos debates. Al presentar el proyecto, el 27 de agosto, Jiménez de Asúa lo describió como un documento liberal y democrático con gran contenido social. Fernando de los Ríos, hablando en su favor el 3 de septiembre, declaró su compromiso con la democracia liberal y con la economía planificada. Luis Araquistáin se apuntó la primera victoria socialista cuando persuadió a la Cámara de que votase a favor del artículo primero, redactado en los siguientes términos: «España es una República democrática de trabajadores de toda clase...». Sin embargo, recordó también a sus oyentes que una constitución impresa en un papel no alteraba por sí misma las relaciones existentes entre las fuerzas económicas de un país. No obstante, el proyecto provocó la oposición acervo de los agrarios y otros diputados de derechas, especialmente la cláusula que probablemente significaba más para los socialistas, la número 42 en el proyecto y 44 en el texto final, que afirmaba que toda la riqueza del país estaría subordinada a los intereses de la economía nacional y que la propiedad de toda clase podría ser expropiada por causa de utilidad social. Antes de que fuera aprobada, fue necesario un discurso magistral de Besteiro el 6 de octubre. El discurso de Besteiro, como el de Fernando de los Ríos un mes antes, expresaba un compromiso más o menos fabiano con una economía mixta. Sin embargo, para el monárquico alfonsino Pedro Sainz Rodríguez la noción de utilidad social era «una espada de Damocles suspendida sobre los derechos de la propiedad». No obstante, en conjunto, la Constitución era satisfactoria para los socialistas y cumplía los objetivos que se habían propuesto en el congreso extraordinario. Tal vez sólo hubo un tema en el que no tuvieron éxito, y fue cuando un brillante discurso de Azaña les convenció para que no presionasen para la disolución completa de las órdenes religiosas. Aparte de esto, la Constitución aprobada finalmente el 9 de diciembre de 1931 era tan democrática, laica y reformista como los socialistas habían deseado^[33].

Tras la aprobación de la Constitución se planteó el problema de si los socialistas podían continuar en el gobierno y de si el gobierno debía disolver las Cortes y convocar unas nuevas elecciones. De hecho, durante el período en que se debatía la Constitución, hubo cierta controversia sobre el tema tanto en la prensa como dentro del gobierno^[34]. De los Ríos y Largo Caballero estaban totalmente dispuestos a continuar; Prieto, como siempre, a dimitir. Hubo un momento en el que Largo llegó a hablar de un gobierno totalmente socialista. Con las cotas de afiliación a la UGT en el punto más alto de su historia y con muchos burócratas sindicales disfrutando de puestos lucrativos

en la administración, Largo se sentía satisfecho de los beneficios que la UGT conseguía del acuerdo existente^[35]. Además, a pesar de la creciente agresión a su reforma por parte de los terratenientes del sur, tenía que pensar que con los socialistas fuera del gobierno las condiciones hubieran sido peores. También debía saber que, tras la movilización política masiva emprendida por Acción Nacional, si las Cortes fuesen disueltas, era probable que los socialistas perdieran cierto número de escaños en las elecciones subsiguientes. El compromiso de Largo Caballero con la República era tal que tuvo una actuación destacada en la elaboración de la relativamente autoritaria ley de defensa de la República y también, en un vano intento de afianzar la confianza conservadora en el régimen, había apoyado la candidatura de Alcalá Zamora para el puesto de presidente de la República. A pesar de la hostilidad de Alcalá Zamora a la Constitución, que le había llevado a dimitir como primer ministro el 14 de octubre, Largo y Prieto consiguieron imponerse a Besteiro por 53 votos contra 38 en la reunión de la minoría parlamentaria del PSOE que discutió las candidaturas^[36].

Hasta qué punto los ministros socialistas estaban dispuestos a sacrificarse para defender la República quedó especialmente de manifiesto a lo largo de noviembre, cuando ayudaron a evitar una importante huelga de ferrocarriles. El líder de los ferroviarios, el besteirista Trifón Gómez, era hostil a la idea de una huelga, pero no podía frenar la militancia de la base. En un momento en que sus hombres habían rechazado una oferta del gobierno, Trifón hizo una observación a Azaña extraordinariamente significativa: «Si en el gobierno no hubiese tres ministros socialistas, estas concesiones serían recibidas por los obreros con aplauso y gratitud; pero habiendo ministros socialistas, creen que han de entregarles el ferrocarril». Aparte de la actitud paternalista de la burocracia sindical que esto revelaba, mostraba el dilema ante el que se encontraban los ministros, en especial Largo Caballero. Azaña ponía de manifiesto la anomalía de su situación cuando se preguntaba en su diario «si la presencia de los tres ministros socialistas no sirve para evitar el conflicto, ¿para qué sirve?». Finalmente, a fuerza de persuasión, Trifón Gómez consiguió imponerse en el congreso de ferroviarios convocado para discutir la huelga propuesta^[37].

La controversia de los ferrocarriles tipificó la forma en que los socialistas estaban dispuestos a sacrificar su popularidad restringiendo la militancia de sus seguidores. En ningún sitio fue esto tan cierto como en Asturias, donde la UGT se encontró en medio del fuego cruzado entre los patronos y los

militantes del Sindicato Único. El 6 de diciembre el SMA conseguía terminar una huelga de mineros en Mieres, declarando que «los paros que se tratan de hacer por sorpresa y sin un estudio premeditado de las consecuencias que éstos pueden acarrear, han de fracasar». Cuando los anarquistas comenzaron una huelga general en Gijón, durante la cual fueron muertos como mínimo cuatro trabajadores por la Guardia Civil, la UGT asturiana la condenó afirmando que sólo podría acarrear hambre y miseria a los trabajadores. El sindicato de trabajadores del gas y la electricidad, el SMA y la Federación Provincial de Trabajadores de la Construcción dieron instrucciones específicas de que sus miembros no se uniesen a la huelga^[38], lo que constituía un riesgo considerable, puesto que en unos momentos de crisis económica aguda, especialmente en el sector minero, la base simpatizaba cada vez más con la acción militante. Además, mientras anarquistas y comunistas multiplicaban las acusaciones de traición a su clase, la moderación de la UGT no consiguió disminuir la hostilidad de la derecha. Bajo tales circunstancias, los sacrificios continuados en favor de la República sólo podían justificarse por un progreso social ininterrumpido.

La prensa socialista empezó a reconocerlo progresivamente hacia finales de 1931. El entusiasmo desinteresado por la República empezó a ceder ante una línea más dura. Se recordó que los socialistas estaban en el gobierno para asegurar las reformas sociales. Si el espíritu de la Constitución no se transmitía a las leyes complementarias que tenían que llevarla a la práctica, los socialistas podrían recurrir a las tácticas revolucionarias. Como advertía *El Socialista*: «Es necesario que los elementos burgueses comprendan que el pueblo no ha rendido aún las armas revolucionarias, sino que las tiene en suspenso». Sin embargo, quedaba aún una reserva de optimismo de que el gobierno de Azaña, habiendo ayudado a la aprobación de la Constitución en las Cortes, podría llenar su marco de un contenido social progresista^[39].

Donde el progreso social tenía que verse inevitablemente puesto a prueba era en el sector más atrasado de la sociedad española, en el sur rural. En él, a pesar de las promesas de reforma agraria y de las mejoras introducidas por los primeros decretos de Largo Caballero, en donde podían hacerse cumplir, las condiciones continuaban siendo brutales. A lo largo de todo el sur, muchos propietarios habían declarado la guerra a la coalición republicano-socialista negándose a sembrar las cosechas. Los diputados socialistas de Badajoz, Jaén, Málaga y Huelva denunciaron casos de éstos en las Cortes. En Jaén, por ejemplo, la Sociedad de Labradores provincial había pedido a sus miembros

que combatiesen los diversos decretos que defendían a los braceros, dejando de cultivar las tierras^[40]. Con excepción de la recogida de aceituna, durante la cual se había suspendido la aplicación de la ley de términos municipales, había un desempleo agrario masivo en la provincia. En Badajoz, la historia era la misma. El coronel que mandaba la Guardia Civil de la provincia y el gobernador civil estaban en connivencia con los caciques locales contra la legislación social vigente. Finalmente, el 21 de diciembre de 1931 la sección local de la FNTT decidió convocar una huelga general para que se trasladase a los dos. De la forma más dramática imaginable, esta huelga iba a forzar a los socialistas a plantearse la cuestión de si la reforma social era posible sin cambio revolucionario.

La huelga de Badajoz tuvo lugar el 30 y 31 de diciembre. En líneas generales, fue una huelga pacífica, de acuerdo a las instrucciones de sus organizadores. Sin embargo, en un pueblo aislado llamado Castilblanco hubo derramamiento de sangre. Castilblanco está situado en la parte más árida e inhóspita de Extremadura, llamada la Siberia extremeña. Sus habitantes vivían en una situación de miseria absoluta. Las tierras comunales del pueblo les habían sido arrebatadas en el siglo XIX por medio de subterfugios legales. Ahora estaban en manos del latifundista local, y el alcalde del pueblo era incondicional suyo. Castilblanco no se diferenciaba mucho de cientos de pueblos del sur de España. Cuando se convocó la huelga, los trabajadores de Castilblanco habían pasado el invierno sin trabajo. Todos ellos eran miembros de la FNTT. El 30 de diciembre realizaron una manifestación pacífica y disciplinada que intentaban repetir al día siguiente. Lo hicieron así y volvían a sus casas cuando el alcalde, temiendo que su demostración de disciplina anunciase un cambio en la estructura de poder del pueblo, dio instrucciones a la Guardia Civil para que disolviese la concentración. Algunas mujeres recibieron empujones, se oyeron protestas, y un guardia abrió fuego, matando a un hombre e hiriendo a otros dos. En ese momento, los aldeanos, en un frenesí de miedo, rabia y pánico, se lanzaron sobre los cuatro guardias y les golpearon hasta matarles con piedras y cuchillos^[41].

El escándalo subsiguiente mostró de forma clara el abismo que existía entre los que defendían el orden social existente y los que querían cambiarlo. La derecha acusó a los socialistas de incitar a los braceros contra la Benemérita. Los socialistas creían que el auténtico criminal de Castilblanco había sido el sistema represivo de tenencia de tierras y pensaban con amargura que una y otra vez la Guardia Civil había causado la muerte de

trabajadores sin que la prensa de derechas se interesara lo más mínimo por el tema^[42]. La nueva coalición republicano-socialista de Azaña, que se había formado a mediados de diciembre con cierta dificultad, sufrió un duro golpe. Prieto no quería continuar en el gobierno, y sólo se plegó a ello tras una llamada de Largo Caballero a la disciplina del partido. De hecho, aunque el grupo parlamentario socialista estaba a favor de continuar la participación, en la base una corriente de opinión cada vez mayor mostraba su disconformidad^[43]. Castilblanco se convirtió así en una inoportuna advertencia de los obstáculos que habría que superar en el camino de la reforma. Incluso antes de que el gobierno tuviese tiempo de asimilarlo ocurrió otra tragedia igualmente inquietante, en la que la hostilidad de la Guardia Civil a la clase obrera iba de nuevo a jugar un papel fundamental.

Arnedo, pueblo en el norte de la provincia de Logroño, tenía como una de sus principales fuentes de empleo una fábrica de calzado, y hacia finales de 1931 varios trabajadores fueron despedidos por pertenecer a la UGT. El caso se planteó ante el jurado mixto local, que falló a favor de los trabajadores, pero el propietario se negó a readmitirlos. En protesta se celebró un mitin público ante el Ayuntamiento. Sin motivo aparente, la Guardia Civil abrió fuego, matando a cuatro mujeres, un niño y un trabajador e hiriendo al menos a 30 personas. El incidente tenía toda la apariencia de un acto de venganza por lo de Castilblanco, especialmente a la luz de los comentarios del general Sanjurjo tras las muertes del pueblo extremeño. Mientras algunos heridos morían, la prensa socialista expresaba su indignación. La acción de la Guardia Civil parecía justificar la acusación de que era una fuerza represiva al servicio de la clase dirigente. Luis Araquistáin declaró que había sido creada por un régimen despótico para atemorizar al pueblo y, aunque el régimen monárquico había desaparecido, los que se habían beneficiado de él continuaban utilizando a la Guardia Civil como un instrumento contra el espíritu reformista de la República. Dos semanas más tarde, en un mitin tradicionalista en Bilbao, dos socialistas y dos republicanos fueron muertos por pistoleros de derechas. La Guardia Civil no apareció en ningún momento^[44]. Esta situación hacía mucho más difícil que la UGT justificase sus llamadas a la disciplina sindical, apoyándose en que la República estaba terminando con las injusticias del régimen anterior.

Sin embargo, en la UGT estaba fuertemente arraigada la opinión de que cientos de años de opresión no podían rectificarse en una noche. Defensores del gradualismo desde hacía tiempo, los funcionarios sindicales estaban

decididos a que se estableciera el régimen democrático. En consecuencia, cuando la CNT convocó una huelga general para la cuarta semana de enero de 1932, la condena de los líderes de la UGT fue unánime. A nivel nacional, una nota oficial de la UGT se declaraba en contra de cualquier acción de solidaridad. En Asturias, el SMA denunciaba el terrible despilfarro de las energías de los trabajadores. Incluso la FNTT, bajo la dirección del besteirista Lucio Martínez Gil, exigió disciplina. No es de extrañar que la jerarquía reformista no estuviese preparada para abandonar a la República «a merced de los extremistas». El sentimiento general era que las actividades de los anarquistas hacían el juego a los reaccionarios y sólo servían para «elevar recios muros que se oponen a la marcha normal, reflexiva y serena del proletariado hacia su emancipación»^[45]. Después de todo, se estaba progresando visiblemente, a pesar de la hostilidad de la derecha y la depresión económica. Esto era particularmente cierto en el campo de la legislación laboral, pero también en el de la educación se avanzaba a grandes pasos. De 1908 a 1930, la monarquía había construido 11 128 escuelas, un término medio de 505 anuales. Sólo en su primer año, la República había construido 7000^[46].

Sin embargo, a pesar de la evidencia de que valía la pena defender a la República, había una falta de entusiasmo perceptible por la continuada participación en el gobierno, como se vio en una reunión del comité nacional de la UGT celebrada el 1 de febrero de 1932, sólo una semana después de la severa represión de la huelga anarquista, especialmente en el Bajo Llobregat. La dirección de la UGT no simpatizaba con el aventurerismo de la CNT. Sin embargo, era imposible ignorar la incómoda posición de un gobierno del que formaban parte los socialistas y que aparentemente reservaba sus mayores energías para la represión de huelgas. La base no siempre tomaba en cuenta las perspectivas a largo plazo. Antonio Muñoz, uno de los dirigentes de la Federación de Artes Gráficas, mostró su preocupación porque la presencia de los socialistas en el gobierno estaba dañando las relaciones entre el PSOE y las masas de la UGT, lo cual era comprensible, puesto que el gobierno era responsable, al menos en teoría, de la actuación de la Guardia Civil. Muñoz también dijo que, puesto que las esperanzas surgidas con el advenimiento de la República habían sido tan grandes, la desilusión por la lentitud de las reformas era más aguda. Alegando que gran parte de esta desilusión surgía del hecho de que los ministros socialistas estuviesen ayudando a consolidar la economía burguesa, pedía que se retirasen. Sin embargo, cuando se debatió el tema, los discursos persuasivos de Largo Caballero y De los Ríos

consiguieron que se apoyase una resolución de solidaridad con los ministros^[47].

Por el momento, la burocracia sindical seguía comprometida a continuar su política de restringir la militancia. Aparte de otras ventajas de la República, había una consecuencia positiva en la permanencia de Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo que no podía dejar de influir en los funcionarios sindicales: el auge de la afiliación a la UGT. En los primeros meses de 1932, los nuevos miembros acudían en tropel a una media de 4000 o 5000 por semana. Sin embargo, de 2000 a 3000 lo hacían a la FNTT^[48]. Para mantener la disciplina era necesario hacer progresos en la cuestión agraria. Sin embargo, la depresión empezaba a hacer mella en todos los sectores de la economía y la base de los trabajadores se veía empujada a la militancia por las acciones de los patronos. La devaluación de la libra esterlina disminuyó los ingresos por las exportaciones agrícolas españolas e hizo más competitivo el carbón británico, lo que proporcionó la excusa para una ofensiva de los terratenientes y los propietarios de las minas contra los sindicatos. Tal vez el dato más destacable de la primavera de 1932 fuese la moderación mostrada por la FNTT y el SMA frente a una intensa hostilidad patronal.

El tema principal del manifiesto de la UGT para el 1 de mayo de 1932 difícilmente hubiese podido ser más reformista: «Por la democracia y la semana de cuarenta horas», lo que tipificaba el estado de ánimo de todo el movimiento. La FNTT, por ejemplo, se veía sometida a intensas presiones, pero no vaciló en recomendar la moderación. A principios de año, una vez terminada la recogida de aceituna, había un desempleo masivo en Andalucía. Además, los terratenientes ignoraban de forma sistemática la ley de laboreo forzoso y no se ocupaban de las tareas agrícolas fundamentales. En algunos lugares, donde las autoridades mandaron trabajadores a las propiedades para que se encargasen ellos de realizar los trabajos, los propietarios se negaron a pagarles^[49]. En La Mancha se negó el trabajo a miembros de la FNTT por estar afiliados a un sindicato. El sindicato se mantuvo firme y ordenó a sus miembros que resistiesen a las provocaciones. La segunda semana de febrero, 200 delegados, que representaban a 80 000 miembros del sindicato de Andalucía y Extremadura, se reunieron en Montilla (Córdoba) para un congreso. Decidieron evitar todo tipo de extremismos y hacer frente a los ataques siguiendo las tácticas recomendadas a nivel nacional por la UGT. Además, en unos momentos en que sus miembros se impacientaban por el fracaso del gobierno en materializar la reforma agraria, el periódico de la

FNTT reiteraba que la reforma tardaría años y aconsejaba a sus miembros que no esperasen demasiado^[50].

Considerando las provocaciones a las que se veían sujetos los jornaleros, es de destacar que durante ese verano no hubiese más conflictos que el que a continuación veremos. El 1 de abril, en Miguel Esteban (Toledo), el terrateniente local organizó una manifestación de sus trabajadores fijos durante la cual un obrero fue muerto y la Casa del Pueblo asaltada; también se arrojaron piedras a un pozo en el que se creía que estaba trabajando el presidente de la UGT local^[51]. Este incidente y otros similares hicieron que se pidiese en las Cortes el desarme de los caciques. Los gritos de protesta de la prensa de derechas mostraron la actitud general de los terratenientes. Si se les quitaban las armas de fuego, se afirmó, se verían obligados a utilizar medios menos dignos, como porras y cuchillos, y con mayor frecuencia^[52]. En este contexto, la FNTT continuaba abogando por la moderación, a pesar de las presiones a favor de la acción por parte de las organizaciones de base. Se condenó la violencia y los extremismos, especialmente en el caso de un levantamiento inspirado por los comunistas en Villa de Don Fadrique (Toledo) el 8 de julio, en que fueron muertos tres trabajadores^[53]. Sin embargo, la campaña de los propietarios contra la legislación social de la República desesperaba cada vez más a las masas rurales, impacientes por la reforma agraria. A pesar de lo cual, lo más parecido que hizo la dirección de la FNTT a una acción militante fue protestar al gobierno por la negativa de los propietarios a obedecer las leyes laborales y por la lentitud del estatuto agrario. De hecho, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, el 83 por 100 de todas las infracciones de normas laborales en 1932 fue cometido por los patronos^[54]. Mientras la prensa de derechas lanzaba invectivas contra la reforma agraria y alababa el sistema agrario existente, los diputados agrarios en las Cortes organizaban una obstrucción sistemática de la aprobación de la ley. Dado el tono conservador del proyecto de ley, la FNTT no podía por menos que poner en tela de juicio la intransigencia de las clases poseedoras^[55]. La base empezó a tomar los asuntos por su mano uniéndose a los trabajadores anarquistas en los destrozos de máquinas y las acciones huelguísticas a lo largo del verano.

Una situación conflictiva semejante se estaba produciendo en Asturias. La República había abierto a los mineros la posibilidad de reformas esenciales en la aplicación de normas de seguridad, regulación de accidentes, condiciones de trabajo y pensiones. Sin embargo, los propietarios de las minas no querían

aceptar el aumento de costos que estas reformas suponían. Los beneficios disminuían a medida que la depresión industrial afectaba a la demanda. El carbón inglés importado resultaba 12 pesetas más barato por tonelada que el asturiano, de peor calidad. Por tanto, reformas tan tenues, como la introducción de la jornada de siete horas, se convertían en una amenaza al sistema existente. Los propietarios estaban decididos a reducir los salarios, aumentar las horas de trabajo y despedir a trabajadores. Inicialmente, el SMA respondió a la crisis condenando las huelgas, temiendo que provocaran importaciones temporales de carbón, mientras tanto los propietarios almacenarían existencias y, cuando la huelga terminase, empezarían los despidos. En su manifiesto del 1 de mayo, el SMA declaraba que la prioridad la había tenido siempre la obtención de concesiones sociales de los propietarios, sin conflictos violentos ni sacrificios innecesarios de los trabajadores. Sin embargo, la moderación cada vez era más difícil. Después de que el jurado mixto de las minas mejorase las condiciones de trabajo, los mineros empezaron a sufrir retrasos en la percepción de sus salarios. A pesar de que los mineros estuviesen dispuestos, como declararon, a redistribuir el trabajo para evitar el desempleo, los propietarios empezaron a cerrar algunos pozos. El SMA declaró que las minas podían ser rentables si se dirigían adecuadamente y pidieron su nacionalización. Los funcionarios sindicales estaban convencidos de que las acciones de los propietarios perseguían como único objetivo romper el nuevo acuerdo laboral. De mala gana convocaron un paro general para el día 15 de mayo, apelando al gobierno para que evitase que los propietarios monárquicos del carbón sabotearan la República. Por el momento al menos, la huelga consiguió detener la mayoría de los cierres^[56].

La difícil posición de los socialistas puede imaginarse fácilmente. Para justificar las llamadas a la paciencia de la base y contrarrestar las acusaciones de «socialfascismo» de los comunistas eran esenciales algunas reformas visibles. Pero la situación económica y la hostilidad de los patronos hacían imposible llevar a la práctica las reformas que estaban sobre el papel. A pesar de todo, el movimiento socialista seguía apegado a la tarea de guardián de la República que se había propuesto, aunque con crecientes dudas internas. El 24 de junio la UGT publicó un manifiesto subrayando lo absurdo de las huelgas en unos momentos de alto desempleo: «Aun desarrollándose con tranquilidad, el balance final de una huelga que tenga como origen la crisis del trabajo, no puede causar, generalmente no causa, otro resultado que la pérdida de jornales de aquellos que por tener donde trabajar hayan sido en realidad los únicos huelguistas. Vean, si no, nuestros compañeros cómo todas

las huelgas promovidas a título de protesta contra la crisis del trabajo fracasaron..., y en muchos casos el número de parados aumentó en vez de disminuir». En lugar de hacer huelgas, instaba el manifiesto, los trabajadores deben dedicar sus energías a obligar a los patronos a que cumplan los contratos de trabajo y a que apliquen la legislación existente. No se especificaba cómo podía conseguirse esto sin recurrir a la huelga, sino que, una vez más, se condenaban las huelgas, afirmando que hacían el juego a los extremistas de derechas y de izquierdas^[57].

Como mucho, la oposición a las intenciones reformistas del gobierno tendía a confirmar a los ministros socialistas que su participación era esencial. Ahora era menos firme la convicción de que colaborando con la República ayudarían a la burguesía a realizar su papel histórico de destruir el feudalismo. El auge del fascismo en el extranjero y la decidida resistencia a la reforma de la burguesía rural y urbana en el interior indicaban la naturaleza errónea del análisis del partido sobre el desarrollo de España. Sin embargo, la conclusión que se sacaba era que si el progreso de la reforma era menor y más lento de lo que se había esperado, sin los socialistas en el gobierno hubiera sido virtualmente nulo. La reacción de los socialistas a un discurso de Lerroux, pronunciado en Zaragoza en julio, en el que abogaba por su salida del gobierno, ilustró este particular. De hecho crecía la animosidad entre Lerroux y los socialistas, quienes, no sin razón, le consideraban corrompido y sediento de poder^[58]. También estaban preocupados porque, en su intento de conseguir el poder, se inclinaba considerablemente hacia la derecha, aceptando en su partido a muchos terratenientes monárquicos del Sur^[59]. Lerroux, por su parte, veía en los socialistas un obstáculo para el poder que él, como republicano más antiguo, sentía que le correspondía.

Lerroux estaba en contacto con Sanjurjo y con otros generales que estaban preparando un levantamiento. Por tanto, en su discurso dijo que el país estaba bajo la amenaza de una dictadura militar por los agravios causados por la República a la Iglesia y al ejército. Si los socialistas se retiraban del gobierno, todo iría bien. En el mejor de los casos fue un intento torpe de intimidación. Largo Caballero montó en cólera e inspiró un manifiesto conjunto del PSOE y la UGT el 16 de julio. El manifiesto no sólo declaraba la decisión del movimiento socialista de hacer frente con resolución a cualquier amenaza de golpe, sino que rechazaba el intento de chantaje de Lerroux en términos inequívocos. El 20 de julio, Prieto se levantó en las Cortes para aclarar el manifiesto en unos términos más políticos y mesurados. Reiterando la

decisión socialista de permanecer en el gobierno hasta que se aprobasen las leyes complementarias de la Constitución, expuso la fatuidad de los argumentos de Lerroux. Señaló que las medidas que habían provocado la enemistad de los generales no habían sido obra de los socialistas. Si los enemigos de la República atacaban la presencia de los socialistas en el gobierno, quedaba probado, según Prieto, cómo ésta fortalecía al régimen. No dejaba de ser significativo que *El Debate* hubiese publicado un editorial alabando el discurso de Lerroux como prueba del éxito de la gran campaña de propaganda de la derecha contra la Constitución. Lerroux se vio obligado a retractarse^[60].

El levantamiento del general Sanjurjo tuvo lugar, según estaba planeado, el 10 de agosto. Fue un fracaso. Confiada en que el gobierno podía hacerle frente, la UGT ordenó a sus militantes que no abandonasen el trabajo. En cierto modo, este ataque a la República por uno de los héroes del régimen anterior, un general monárquico, benefició al gobierno, generando una ola de fervor republicano. Fue esto lo que hizo posible, el 9 de septiembre, la aprobación de la ley de reforma agraria, que había estado detenida tanto tiempo en el Parlamento. Moderada y contradictoria, como era la reforma, los anarquistas la denunciaron como una farsa. Aunque la FNTT ya había prevenido a sus miembros de que no esperasen demasiado, la decepción que se sintió en sus filas no podía esconderse. El segundo congreso de la Federación se celebró casi inmediatamente después de la aprobación de la ley de la reforma. Besteiro, dirigiéndose al congreso, condenó el lenguaje excesivamente legalista en que la ley estaba redactada. El 1 de octubre la FNTT publicó un manifiesto expresando su decepción por la estructura burocrática y pesada del Instituto de la Reforma Agraria. El hecho de que ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas e incluso un representante del Banco Hipotecario superaran a la representación de los trabajadores en el Instituto se veía como una confirmación de que el alcance de la reforma sería limitado^[61].

Aunque la reforma fuese limitada, provocó una declaración general de guerra de los terratenientes a la República. La decisión de oponerse a la legislación reformista aprobada por la coalición republicano-socialista no era ninguna novedad, pero nunca la derecha se había manifestado antes de una forma tan abierta. El Bloque Agrario de Salamanca encabezó una campaña para que los propietarios no cultivasen las tierras. Afirmando que los salarios decretados por el jurado mixto provincial eran ruinosamente altos, el Bloque

envió circulares a los propietarios de tierras, grandes y pequeños, de la provincia pidiéndoles que firmasen un compromiso de no cultivar la tierra. El gobernador civil mandó detener a la junta directiva del Bloque^[62]. Inmediatamente los representantes políticos del Bloque, Gil Robles, Cándido Casanueva y Lamamié de Clairac, entraron en acción para extender el conflicto más allá de los estrechos confines de la provincia. Según Gil Robles, los salarios absurdamente altos que se pagaban a los braceros no hacían económicamente viable la siembra de las cosechas. Aunque afirmaba representar en esto los intereses de los pequeños propietarios, a los que de hecho les afectaba gravemente el aumento de salarios, no reconocía que la táctica del Bloque sólo podían seguirla los grandes propietarios, que podían convertir sus tierras en pastizales. En un discurso vehemente en las Cortes, en el que defendió la convocatoria de un *lock-out* rural, adujo una serie de cifras discutibles, intentando mostrar que los jornaleros ganaban 15 pesetas diarias. En realidad, el salario establecido en las bases de trabajo del jurado mixto era de cinco pesetas^[63].

Estas cifras son más significativas cuando se examinan en su contexto. Para empezar, las cifras de Gil Robles pueden desecharse, porque es inconcebible que algunos de los terratenientes más antirrepublicanos de España pagasen unos salarios tres veces más altos que los establecidos oficialmente. También debe recordarse que éstos eran los salarios de la recolección, de los que los braceros tenían que ahorrar para los seis u ocho meses de paro que les aguardaban. Además, ni siquiera todos los braceros podían encontrar trabajo en la época de la recolección^[64]. Sin embargo, Gil Robles había afirmado en las Cortes que «antes existía en el campo un régimen de opresión, pero se ha pasado radicalmente de un extremo a otro».

¿Qué significaban cinco pesetas diarias en 1932? Sin tener en cuenta la necesidad de ahorrar para los meses sin trabajo o de devolver los créditos adelantados por el tendero del pueblo, una familia con un promedio de tres hijos necesitaba más de 35 pesetas semanales para poder pagarse la mínima dieta de subsistencia. Esta dieta nunca contenía más que fuentes secundarias de proteínas, ya que la carne, el pescado y los huevos estaban por encima de los medios de un bracero^[65]. No deja de ser significativo que en aquellos tiempos se produjesen de forma creciente en las grandes propiedades los robos de bellotas y de otros alimentos destinados al ganado. La derecha no dudaba en calificar a los miembros de la FNTT como ladrones comunes, sin pararse a pensar que es el hambre más que la perversión lo que lleva a un

hombre a robar bellotas. Si, como Gil Robles afirmaba, los labradores no podían sembrar las cosechas a menos que se redujeran drásticamente los salarios, estaba admitiendo que el sistema económico existente dependía para su supervivencia de que los trabajadores rurales aceptasen salarios de hambre^[66].

Las mejoras en las condiciones de trabajo introducidas por la República constituían una amenaza económica para todos los terratenientes. Los que más sufrieron las consecuencias fueron, naturalmente, los pequeños propietarios. Sin embargo, la campaña de la derecha contra los salarios rurales excesivos, según afirmaban, ignoraba hasta qué punto gran parte de las dificultades sufridas por los arrendatarios y aparceros era consecuencia de los términos desfavorables de arrendamiento que les imponían los propietarios. Los límites del interés de Acción Popular por los pequeños arrendatarios se iba a revelar inequívocamente por la infatigable oposición del grupo a cualquier intento de introducir reformas en los arrendamientos. En la protesta de 1932 por los salarios agrícolas hay pocas dudas de que el impacto propagandístico entre los pequeños propietarios fue enorme, pero sus intereses fueron marginales. La convocatoria para que se abandonasen los cultivos respondía más a finalidades directamente políticas que a un deseo de mejorar los ingresos de los pequeños arrendatarios. El motivo principal del *lock-out* del otoño de 1932 fue la existencia de la legislación agraria introducida por la República.

Incluso teniendo en cuenta la disminución de los beneficios provocada por los decretos de Largo Caballero, muchos latifundios estaban lejos de la ruina económica descrita por Gil Robles. En las áreas productoras de trigo, por ejemplo, los beneficios de los mayores propietarios eran bastante sustanciosos^[67]. En otras zonas en las que se cultivaban productos de exportación, desde luego, no era ése el caso. Sin embargo, la negativa de los propietarios a sembrar las cosechas no estaba totalmente motivada por los problemas económicos del momento. La respuesta de la FNTT al *lock-out* mostró que lo que estaba en juego era algo más que la autodefensa económica. Si los propietarios consideran que no vale la pena el esfuerzo de cultivar la tierra, declaraba *El Obrero de la Tierra* el 8 de octubre, que se la entreguen a nuestros afiliados, que la cultivarán colectivamente y conseguirán un nivel de vida muy superior al que tienen bajo el actual sistema. Sin embargo, guardas armados impedían a los campesinos que entrasen en las

propiedades, y durante el año siguiente los choques fueron cada vez más frecuentes.

La decisión de los grandes propietarios de terminar con la legislación republicana parecía justificarse por el hecho de que había muchos propietarios que se situaban entre las categorías de latifundistas y campesinos que subsistían. No es de sorprender que sus simpatías estuviesen con los grandes terratenientes. Eran católicos, leían la prensa local de derechas y eran «labradores», como sus vecinos más poderosos. Después de todo, el intento de terminar con los salarios de hambre de los jornaleros les estaba costando dinero. En un período de prosperidad, el conflicto de intereses casi irreconciliables respecto a la tierra se hubiera visto suavizado por una reducción de los excedentes de mano de obra, absorbidos por las ciudades industriales, y por un aumento de la productividad estimulado por la irrigación y los fertilizantes. Sin embargo, la depresión económica se limitó a exagerar la dicotomía básica que Gil Robles había destacado inconscientemente: o se mantenía hambrienta a la población campesina o había que transferir la riqueza de los grandes propietarios, causando perjuicios en el proceso a muchos agricultores medianos y pequeños. Una solución colectivista que incorporase a los pequeños agricultores tal vez hubiese sido una respuesta viable. Pero el propósito del *lock-out* no era acelerar una futura solución agraria que beneficiase a la mayoría, sino forzar una vuelta a la situación anterior a 1931.

Por todo esto, cada vez era más difícil para la dirección besteirista de la FNTT contener la militancia de sus seguidores. Las mejoras visibles, que hasta entonces habían sido la mejor justificación de la disciplina, se estaban desgastando por la ofensiva de los patronos. Otro sector de la UGT que se veía empujado hacia posiciones más militantes y que, sin embargo, mantenía su fe en el gobierno era el SMA. Se estaban cerrando más minas y se pedía a los mineros que aceptasen menos horas de trabajo, salarios reducidos e incluso pago en especie. En el contexto de esta crisis, tanto los propietarios como los mineros estaban furiosos porque el consumo nacional era inferior en 2 000 000 de toneladas al total de la producción de las minas españolas. El SMA convocó un congreso extraordinario para debatir la acción huelguística. Celebrado el 11 de septiembre, el congreso pidió al gobierno que solucionara la crisis del carbón y aprobó una huelga general que empezaría el día 19 si sus peticiones no hallaban respuesta. De hecho, el gobierno trataba de buscar una solución por todos los medios. El ministro de Marina estaba estudiando la posibilidad de que se utilizase el carbón asturiano en los barcos de guerra. Se

presionó también a los responsables de los ferrocarriles para que utilizaran carbón español. Se prometió hacer más restrictiva la legislación referente a las importaciones de carbón. Ante esto, el SMA canceló la huelga. «Jamás gobierno alguno se ha tomado con tanto interés la solución de un problema», decía su declaración. Se pensaba que continuar con la huelga sería simplemente una intransigencia contraproducente^[68].

En este sentido, la cuestión de si la República representaba un beneficio positivo para los trabajadores se convirtió en la primordial para los delegados en los congresos del PSOE y de la UGT que se celebraron en Madrid en octubre de 1932. El XIII Congreso del PSOE se inauguró el 6 de octubre. Desde el congreso extraordinario del año anterior, la facción besteirista, tan hostil como siempre a la participación socialista en el gobierno, se había vuelto a hacer con el control de la Agrupación Socialista Madrileña. El propio Besteiro, sin embargo, había modificado considerablemente su posición. Prieto presentó una moción a favor de continuar la participación ministerial. Hablando efectivamente en su defensa, Besteiro dijo: «Si se separan los ministros socialistas del gobierno, el equilibrio político de la República se rompe, la vida de las Cortes se acorta extraordinariamente y unas elecciones prematuras pueden ser una aventura demasiado peligrosa». La propuesta de Prieto fue aprobada por 23 718 votos a favor y 6356 en contra. El tema principal debatido en el congreso fue la fracasada huelga de 1930. Largo Caballero consideraba que el partido había sido traicionado por las maquinaciones de los besteiristas Saborit y Muiño. Aparte del deseo de arreglar viejas cuentas, el tema, al referirse al papel representado por el partido en el advenimiento de la República, tenía cierta relevancia para la cuestión de continuar la colaboración en el gobierno. Después de una lucha vitriólica entre Largo y Saborit, el debate tuvo que cortarse de raíz para que no condujese a un cisma en el partido. Se aprobaron las actividades de los que habían estado a favor de la huelga, es decir, de Largo, Prieto, De los Ríos y gran parte de la base. Se votó a Largo Caballero como presidente del PSOE por 15 817 votos contra 14 261 de Besteiro, que no se había presentado para el puesto. Sin embargo, es difícil determinar si el gran número de votos que recibió reflejaba algo más que veneración por un miembro del partido antiguo y respetado. Su aparente aprobación de la participación ministerial también debió influir en los votos^[69]. Cualquiera que fuera el caso, el XIII Congreso del PSOE representó el último voto de confianza importante de los socialistas a favor de la eficacia de la colaboración gubernamental.

El congreso del PSOE terminó el 13 de octubre. Al día siguiente, empezó el XVII Congreso de la UGT. El contraste entre las dos asambleas fue notable. El congreso de la UGT constituyó un gran triunfo para Besteiro, lo cual no es extraño dada la forma en la que se organizaban los congresos de la UGT. Cada sección nacional de la UGT, ferroviarios, impresores, panaderos, trabajadores de la construcción, mineros, trabajadores de la tierra, etc., estaba representada por sus propios funcionarios sindicales y tenía un número de votos en función al total de sus miembros. Esto significaba que los votos de una federación dada representaban en el congreso la opinión de la burocracia sindical de la Federación y no necesariamente la de la base^[70]. Esto supuso una considerable desventaja para Largo Caballero, ya que, aunque tenía una inmensa popularidad entre los trabajadores en general, no controlaba los votos de ningún sindicato específico. Los besteiristas, en cambio, sí tenían este control: Saborit, de artes gráficas; Trifón Gómez, de los ferroviarios; Lucio Martínez Gil, de la FNTT.

Una enfermedad, que posiblemente sólo fue diplomática, apartó a Largo del congreso. Una vez más se discutió la huelga de diciembre de 1930, y esta vez se aprobó la conducta del comité ejecutivo de la UGT, que había sido hostil a la huelga. Se eligió una nueva ejecutiva con Besteiro como presidente y todos sus principales seguidores en los puestos claves. A Largo Caballero se le eligió secretario de la UGT. Sin embargo, inmediatamente mandó una carta de dimisión afirmando que la reivindicación del congreso de la ejecutiva de 1930 constituía una desaprobación de sus actividades en diciembre de aquel año. Los otros caballeristas elegidos, Rafael Henche y Pascual Tomás, también dimitieron, dejando la ejecutiva de la UGT exclusivamente en manos besteiristas. Largo se quejó de que los votos en bloque de Lucio Martínez Gil, por la FNTT, y de Trifón Gómez, por el Sindicato Nacional Ferroviario, iban en contra del espíritu del congreso^[71]. Posiblemente fuera así, pero es difícil de demostrar tanto entonces como ahora.

De hecho, la oposición derechista a la reforma y el crecimiento del fascismo en el extranjero iban pronto a minar la fe de Largo Caballero en la eficacia de la colaboración gubernamental con la izquierda republicana. Sin embargo, este cambio, cuando se produjo, no iba a salvar las diferencias entre él y los besteiristas. Puede que todos fueran reformistas, pero lo eran de una clase radicalmente diferente. Los funcionarios sindicales que seguían a Besteiro creían que su deber era mantenerse al margen y dejar a la burguesía que cumpliera su tarea histórica. Mientras tanto, ellos continuarían

defendiendo a la clase obrera dentro del sistema económico existente como lo habían hecho bajo la monarquía. Las opiniones de Largo Caballero eran más pragmáticas. Sabía que su participación en el gobierno había supuesto grandes avances en las condiciones de vida de la clase obrera y un aumento masivo en la afiliación de la UGT, y, puesto que había ambicionado las dos cosas durante toda su vida, haría todo lo posible para impedir una vuelta a las condiciones anteriores a 1931. Ahora, a finales de 1932, la derecha estaba amenazando sus reformas y las expectativas de las masas de la UGT de que éstas continuaran. Si para los besteiristas esto era una prueba de que la colaboración era peligrosa para la clase trabajadora, para Largo Caballero sólo podía ser un estímulo para defender el trabajo que llevaba realizado.

Así, en 1932 empezó el proceso de radicalización de Largo Caballero. Por encima de todo fue una respuesta al estado de ánimo de la base, impaciente por la lentitud de la reforma y por el éxito de la derecha en la obstrucción de su aplicación. Sin embargo, también le influyó en gran medida la progresiva toma de conciencia de la proliferación del fascismo. Sus consejeros más directos, Carlos de Baraibar, Luis de Araquistáin y Antonio Ramos Oliveira, le tenían informado del fracaso del reformismo social-demócrata en Europa^[72]. Dentro del PSOE surgía la creencia de que Gil Robles podía jugar en España el papel fascista. En consecuencia, la resistencia de la derecha a la reforma era para Largo Caballero una prueba de que, lejos de retirarse a un reformismo clásico que siguiese las líneas besteiristas, los socialistas tal vez debiesen avanzar hacia una forma más radical de organización social. Sin embargo, esta convicción estuvo gestándose mucho tiempo. Largo sólo empezó el proceso de radicalización pública cuando se vio forzado a salir del gobierno en el verano de 1933. Incluso entonces, dada su moderación fundamental en la práctica, nunca fue más allá de la retórica.

Durante el invierno de 1932-1933, dos factores le hicieron empezar a reflexionar sobre la inadecuación del reformismo como medio de cambiar las estructuras sociales en un tiempo de depresión. El primero fue la ofensiva de los patronos, que causó grandes tensiones en la disciplina de los militantes de la UGT. El segundo fue la obstrucción de toda la legislación del gobierno por el partido radical. En ambos casos, la sección de la UGT más directamente afectada fue la FNTT. A nivel nacional, con los besteiristas controlando la ejecutiva, la FNTT continuaba defendiendo la moderación y el reformismo gradual. Los informes que había enviado a los congresos del PSOE y de la UGT habían insistido especialmente en la necesidad de un cumplimiento más

estricto de la legislación existente^[73]. A nivel local, sin embargo, la base se impacientaba por la ineficacia de esa legislación. En Salamanca, por ejemplo, el éxito de los patronos en evadir las decisiones del jurado mixto estaba creando un rencor intenso en la federación local de trabajadores de la tierra. Miles de trabajadores no habían recibido los salarios de la recolección y ni un solo terrateniente había sido multado. Los dirigentes locales pensaban que, obedeciendo la disciplina de la UGT y sometiéndose al jurado mixto, las condiciones de los trabajadores habían empeorado. Se acusaba a Largo Caballero de ser «el único responsable moral y material»^[74]. Ya no era posible frenar la militancia de los trabajadores locales, que habían acudido a todos los medios legales para proteger sus derechos. Se habló de escisiones en la UGT. Seguro que todo esto influyó considerablemente en Largo Caballero. Después de todo, en la toma de posesión del presidente había mostrado su preocupación por algo menos importante: «¡Qué dirían los obreros si me viesen de frac!»^[75]. Su cambio de táctica repentino al final de la Dictadura fue el resultado de ver que los trabajadores estaban abandonando la UGT en protesta por la política de colaboración. Ahora era difícil que reaccionara de otro modo.

En protesta porque los terratenientes no pagaban los salarios que debían y por el funcionamiento inadecuado de la legislación social rural, la Federación de Trabajadores Socialistas de Salamanca convocó una huelga general para el 10 de diciembre. La huelga fue casi general y paralizó la provincia durante diez días. Se produjo cierta violencia, pero fue pronto reprimida por las fuerzas de orden. Desde Madrid, la ejecutiva de la UGT exigió el fin rápido de una huelga insensata. No sólo se ignoraron sus exigencias, sino que se interpretaron como la prueba de la traición de la burocracia a la base. Dada la decidida intransigencia de los propietarios salmantinos, es difícil ver lo que podía ganarse con la huelga. Del mismo modo, con los parados llevados a la desesperación por el *lock-out*, los llamamientos a la paciencia y a la disciplina, tenían que caer en oídos sordos y además provocar el rencor contra los socialistas del gobierno. La huelga terminó finalmente en punto muerto, los detenidos fueron puestos en libertad, las Casas del Pueblo volvieron a abrirse y se prometió, sin cumplirlo, solucionar los problemas del desempleo^[76].

La militancia creciente de la base estaba creando divisiones en la jerarquía central de la UGT, en el gobierno y en la dirección sindical local. Para que sus miembros no desertaran a grupos más extremistas, los líderes locales se veían

cada vez más obligados a dar su consentimiento a las huelgas. En Asturias, por ejemplo, después de haberse estado cociendo desde septiembre, se convocó una huelga general para mediados de noviembre. Los líderes del SMA, Amador Fernández, Ramón González Peña y Teodomiro Menéndez, no tenían otra elección. Por una parte, los propietarios estaban cerrando los pozos, despidiendo mineros e ignorando las normas de seguridad. Por otra, el Sindicato Único de Obreros Mineros, patrocinado por comunistas y anarquistas conjuntamente, veía aumentar sus miembros y su militancia. Si los dirigentes no seguían las exigencias de acción de los mineros, el SMA corría el riesgo de perder miembros, como había ocurrido en los años veinte. Sus peticiones no eran extremadas, simplemente que el gobierno tomase medidas para remediar la crisis de la industria. Una acción de este tipo suponía limitar las importaciones de chatarra, que estaban disminuyendo la demanda de carbón para las fundiciones; obligar a las entidades estatales a utilizar carbón español y persuadir a los consumidores de que almacenasen carbón para reducir los excedentes inmediatos. Los anarquistas de la región convocaron amplias huelgas de solidaridad, especialmente en Gijón, donde tenían el control sindical total. El SMA condenó estas huelgas como irresponsables. Sin embargo, a nivel de base, representaban una solidaridad creciente que, poco a poco, obligaría a la dirección moderada de la UGT a competir en militancia con anarquistas y comunistas. Las huelgas terminaron con las seguridades dadas por el gobierno de que se tomarían medidas a favor de las minas y con la derrota de la CNT en Gijón^[77].

En la segunda mitad de diciembre volvió a evidenciarse la escisión entre la burocracia sindical y la base militante, cuando la huelga de ferrocarriles, que había sido evitada por poco a finales de 1931, amenazó finalmente con producirse. Algunos disidentes del Sindicato Nacional Ferroviario, que se oponían a la dirección reformista de Trifón Gómez, habían fundado un sindicato rival, la Federación de la Industria Ferroviaria, y presionaban para que se atendiesen las peticiones que habían quedado en suspenso el año anterior. El 10 de diciembre la UGT publicó una nota, firmada por Besteiro y Trifón Gómez, indicando a las federaciones afiliadas que no convocasen huelgas sin consultar previamente con la ejecutiva. Esto aumentaba el riesgo de perder miembros, pero era típico de la moderación responsable mostrada por los líderes reformistas. Para los socialistas fue especialmente mortificante cuando los radicales, siempre dispuestos a ponerle las cosas difíciles al gobierno, afirmaron demagógicamente que debían atenderse las peticiones de los ferroviarios. Prieto expuso en las Cortes la maniobra de los radicales.

Adoptó una línea patriótica y declaró que, si estallaba la huelga, no dudaría en sacrificar los intereses de su partido para defender la República. Sin duda, era una amenaza a los ferroviarios de someterles al mismo trato severo que hasta entonces se había reservado, en general, a los anarquistas y comunistas. La huelga no tuvo lugar, pero se produjo una escisión importante en la que miles de miembros abandonaron el Sindicato Nacional Ferroviario^[78].

El golpe peor lo sufrió Largo Caballero, y todo el gobierno, a mediados de enero. Los anarquistas habían organizado un levantamiento para el 8 de enero. En Cataluña, Zaragoza, Sevilla y Madrid fue reprimido sin grandes dificultades. Sin embargo, el pueblo de Casas Viejas (Cádiz) fue escenario de los acontecimientos más violentos de la revuelta y de su represión. Casas Viejas formaba parte de una zona de hambre endémica y de desempleo, exacerbados por el boicot de los patronos a la República. Si acaso, era aún más pobre que Castilblanco. Las viviendas de los braceros consistían en una cueva excavada, unas paredes de barro de un metro y un techo de ramas. El hecho de que parte de la mejor tierra del pueblo estuviera dedicada a la cría de reses bravas empeoraba una situación que un observador describía en los siguientes términos: «Los pobres, enloquecidos del hambre, y los ricos, enloquecidos de miedo». Cuando la declaración de la FAI, de comunismo libertario, llegó al líder local de los braceros, el septuagenario Curro Cruz, apodado «Seisdedos», decidió apoyarla. De una forma ingenua y milenaria, él y sus seguidores supusieron que automáticamente toda la tierra se había convertido en comunal. No esperando ningún derramamiento de sangre, decidieron olvidar el pasado y ofrecer a los terratenientes locales y a la Guardia Civil la oportunidad de unirse a la nueva empresa colectiva en plano de igualdad. Ante su sorpresa, la Guardia Civil respondió con disparos a la oferta. Se enviaron refuerzos y, tras una noche de sitio, la Guardia Civil y los guardias de Asalto prendieron fuego a la casa de «Seisdedos». Dentro estaban «Seisdedos», su yerno, sus dos hijos, su primo, su hija, su nuera y sus dos nietos. Los que intentaron escapar fueron recibidos a tiros. Otras 12 personas fueron también muertas a tiros a sangre fría^[79].

La reacción inmediata de la prensa de derechas fue relativamente favorable, puesto que llevaba mucho tiempo pidiendo medidas severas de ley y orden en el campo^[80]. Sin embargo, cuando los enemigos del gobierno se dieron cuenta del caudal político que podía sacarse del incidente, se levantó un grito de indignación. Los anarquistas, lógicamente, montaron en cólera, pero los grupos de derechas que normalmente aplaudían las acciones de este

tipo de la Guardia Civil añadieron también sus voces a la campaña. Antes de que se conociesen todos los detalles, los tres ministros socialistas expresaron a Azaña su satisfacción por la represión del levantamiento anarquista, especialmente Prieto. Fernando de los Ríos dijo que lo que había ocurrido en Casas Viejas era necesario dados los antecedentes anarquistas de la provincia de Cádiz. Largo Caballero aconsejó medidas rigurosas mientras continuase la agitación^[81]. Sin embargo, a pesar de su hostilidad a los anarquistas, los socialistas no podían aprobar el alarde gratuito de brutalidad llevado a cabo por las fuerzas de orden público. Además, su indignación aumentó por los intentos de la derecha y los radicales, especialmente, de demostrar que las salvajes represalias de Casas Viejas eran el resultado de órdenes específicas del gobierno^[82], lo que no parece probable vistos los esfuerzos del gobierno por investigar el asunto. Sin embargo, la campaña de calumnias cobró su parte del tiempo y de la moral del gobierno. Los esfuerzos para probar la inocencia del gobierno absorbieron virtualmente todos sus esfuerzos durante los tres primeros meses de 1933. Como la campaña iba unida a una obstrucción sistemática de los intentos de aprobar leyes en las Cortes, todo ello desmoralizó considerablemente al gobierno^[83].

Casas Viejas y sus repercusiones mostraron gráficamente a los socialistas el precio de la colaboración en el gobierno. Mostró más que nunca que para defender una república burguesa estaban sacrificando su credibilidad ante las masas socialistas. Ese sacrificio parecía haber valido la pena en 1931, cuando las mejoras del nuevo régimen suponían un beneficio real para la clase obrera. En 1933, sin embargo, con la legislación paralizada en las Cortes por los radicales y los agrarios y en las zonas rurales por el boicot de los patronos, sólo la convicción de que las cosas empeorarían si lo abandonaban persuadía a los socialistas de continuar en el gobierno. El 3 de marzo fue convocada una reunión de la ejecutiva del PSOE por su vicepresidente, Remigio Cabello, quien propuso la retirada socialista del gobierno. Largo Caballero no se opuso, pero un discurso enérgico de Prieto convenció a los reunidos de que sería un error que sólo beneficiaría a Lerroux. El gabinete estaba convencido de que un gobierno de Lerroux sería desastroso para la reforma, además de corrompido e ineficaz^[84]. Paradójicamente, fue la oposición radical la que convenció a los diputados en Cortes del PSOE para que continuaran apoyando la participación socialista en el gobierno^[85].

Durante la primavera y el verano de 1933, la presencia socialista en el gobierno asumió de forma creciente una postura defensiva, destinada, sobre

todo, a excluir a los radicales. Esto no sólo significó que se hiciera poco en el campo de la nueva legislación, sino también que los grupos que componían la coalición republicano-socialista se viesan sometidos a una presión creciente a medida que aumentaba la oposición. Los radicales, sedientos de poder, iban aproximándose a los grupos derechistas; mientras tanto, los radical-socialistas se dividían en dos facciones: una, que se oponía al gobierno desde posiciones derechistas, y otra, desde la izquierda. Los dos motivos utilizados para justificar la oposición eran Casas Viejas y las elecciones municipales de 1933. Aproximadamente, el 10 por 100 de los votantes españoles iba a elegir nuevos concejales y alcaldes para sustituir a los que habían sido nombrados al no presentarse ningún otro candidato en abril de 1931. Cataluña no tomaba parte, y las elecciones tuvieron lugar en su mayoría en las provincias conservadoras del norte y en Castilla la Vieja. De 16 000 concejales elegidos, aproximadamente 10 000 eran republicanos de un tipo o de otro. De ellos, 1826 eran socialistas, 3222 eran republicanos de izquierdas que apoyaban a los grupos que formaban el gobierno, 2479 eran radicales y el resto de otros grupos republicanos. Eran derechistas declarados 4954. Puesto que las zonas en las que se realizaron las votaciones eran tradicionalmente derechistas, y en las elecciones previas muchos caciques habían nombrado a sus propios candidatos, los partidos del gobierno habían quedado razonablemente bien, especialmente tras el asunto de Casas Viejas y sus consecuencias. Sin embargo, quedó por debajo de las expectativas de socialistas y republicanos y fue saludado por la derecha y por los radicales como un plebiscito nacional contra el gobierno y los socialistas^[86].

Besteiro vio en la obstrucción parlamentaria que siguió a las elecciones un buen pretexto para que los socialistas se retiraran del gobierno^[87]. Largo no estaba de acuerdo, sobre todo porque el conflicto social creciente, visible en las zonas rurales, le convenció de que su presencia era esencial para proteger los intereses de la clase trabajadora. La lentitud con que funcionaba el Instituto de Reforma Agraria estaba creando un resentimiento considerable, sobre todo porque gran parte de los retrasos se debían al estudio de las demandas de los grandes de España para que no les fuese aplicada la confiscación de septiembre de 1932 de las tierras de la aristocracia^[88]. El decreto de laboreo forzoso de Marcelino Domingo, aparte de enfurecer a los terratenientes, había hecho poco para mitigar la crisis creciente de desempleo en las áreas rurales. Si no se respetaba el decreto, se podía llamar a un inspector. Éste tenía una semana para informar a la Comisión Técnica Central de la Provincia, que a su vez tenía ocho días para dictar sentencia. Si la

sentencia fallaba en contra del propietario y éste no emprendía las tareas prescritas en el decreto, el sindicato local estaba facultado para comenzar los trabajos una vez que hubieran pasado doce días. Incluso entonces no había ningún mecanismo para obligar a que el propietario pagase el trabajo realizado^[89]. En consecuencia, en el sur, pueblo tras pueblo, los lugares de contratación se veían atestados de parados todos los días. La violencia se iba acumulando. Algunas propiedades fueron invadidas. Los braceros hambrientos robaban bellotas y aceitunas. Los incidentes sangrientos no eran raros, al abrir fuego los propietarios contra los trabajadores que entraban en sus tierras y robaban las cosechas o al atacar los trabajadores a los propietarios que les denegaban trabajo^[90]. La violencia latente a nivel local se iba transmitiendo a la política nacional, en la que la hostilidad mutua del PSOE y la CEDA crecía con rapidez.

Esta hostilidad se veía acentuada por la convicción del PSOE de que la CEDA iba a jugar un papel fascista en España, acusación que el partido católico apenas negaba, si es que alguna vez lo hizo^[91]. De aquí se sacaron dos conclusiones totalmente diferentes. Largo Caballero empezó a proclamar que si la democracia burguesa era incapaz de impedir la ascensión del fascismo, la clase trabajadora buscaría formas políticas diferentes con las que defenderse. Besteiro, por otra parte, sacó una conclusión mucho más defensiva. A lo largo de la primavera y el verano de 1933 dio una serie de discursos condenando la línea colaboracionista y abogando porque el movimiento socialista se retirase totalmente a la esfera sindical. Besteiro tenía fama de ser el marxista más consumado del PSOE. Sin embargo, aunque sus discursos tenían un barniz de retórica marxista, nunca consiguió llegar a unas conclusiones respecto al fenómeno del fascismo. La línea seguida por Largo, aunque tampoco fuese la última palabra en sofisticación teórica, iba a estar más cerca de parte del pensamiento marxista más avanzado sobre el tema. Las diferencias entre los dos iban a profundizar las divisiones existentes en el PSOE.

Puesto que Besteiro mantenía la opinión marxista rígidamente ortodoxa de que España debía pasar por una revolución burguesa clásica y sacaba la consecuencia de que la clase obrera no debía mezclarse en la tarea histórica de la burguesía, consideraba que su postura era más revolucionaria que la de Largo Caballero. Así, el 26 de marzo, en la conmemoración del cincuenta aniversario de la muerte de Marx, organizada por la Agrupación Socialista Madrileña, condenó el reformismo de los colaboracionistas. Denunciando la

insuficiencia del reformismo en unos momentos de crisis económica, se pronunció también contra el radicalismo. En otras palabras, aconsejaba la inacción. Su aparente pureza revolucionaria no era más que un reformismo extremadamente puritano. Esto quedó confirmado el 2 de julio cuando habló en la Casa del Pueblo de Mieres en un homenaje a Manuel Llaneza, el gran líder sindical asturiano. Se reafirmó en la opinión de que había que dejar a la burguesía que llevara a cabo sus propias tareas y avanzó la singular teoría de que los socialistas italianos y alemanes estaban sufriendo el fascismo como consecuencia de haber participado en los gobiernos burgueses. La conclusión era que si los socialistas no hubieran tratado de defender a la clase trabajadora con el apoyo del Estado, no hubieran provocado a la burguesía para que se volviese hacia el fascismo. La noción fue ampliada el 26 de julio en el discurso de clausura del congreso del Sindicato Nacional Ferroviario. Haciéndose eco de las ideas expresadas por Turati en el período en que los socialistas italianos se veían sujetos a los ataques de los *squadristi*, Besteiro afirmó que los socialistas no debían arriesgarse a provocar la venganza de sus enemigos. En otra ocasión, Besteiro declaró, en una reunión del comité nacional de la UGT, que el fascismo «era el ruido de ratones en una vieja casa que asusta a los pusilánimes»^[92].

La posición de Largo Caballero era muy diferente. Creyendo que la República estaba amenazada por el fascismo y totalmente consciente del fracaso de los socialistas alemanes e italianos para oponerse al fascismo a tiempo, abogaba no por la retirada, sino por tomar la iniciativa. Durante la primera mitad de 1933, la prensa socialista había mostrado claramente tanto su interés por los acontecimientos de Alemania como por su creencia de que Gil Robles y sus seguidores intentaban seguir los pasos de Hitler y Mussolini. En el verano, Largo y sus consejeros se dieron cuenta del asalto unido de los patronos industriales y agrícolas contra la legislación social de la República^[93]. Era evidente que los días de presencia socialista en el gobierno estaban contados, puesto que Alcalá Zamora ya había tratado de persuadir a Azaña de que formase gobierno sin participación del PSOE. Así, Largo Caballero empezó a intentar recuperar el contacto con la base, que había perdido mientras ocupaba el Ministerio.

La revelación pública de las opiniones radicales recién adquiridas de Largo Caballero comenzó en un discurso, en el cine Pardiñas, de Madrid, el 23 de julio, dirigido al sector más militante del partido socialista, la Juventud Socialista. Una de las razones principales por las que rompía su silencio, dijo,

era por la creciente hostilidad contra el movimiento socialista. Su discurso fue esencialmente moderado y dirigido especialmente a defender la colaboración ministerial contra las críticas de Besteiro. Sin embargo, se vio cómo endurecía sus posiciones. Sacó el tema de las afirmaciones de Besteiro de que la participación gubernamental había llevado el fascismo sobre las cabezas de los socialistas alemanes e italianos y señaló que el fascismo era el último recurso de la burguesía en una época de crisis del capitalismo. Por esto continuó haciendo hincapié en que el PSOE y la UGT tenían la obligación de evitar el establecimiento del fascismo en España. Si esto significaba tomar el poder, los socialistas, aunque muy de mala gana, estaban preparados para hacerlo. Es posible que el principal motivo del discurso fuese advertir al presidente y a los radicales de las consecuencias de obligar al PSOE a salir del gobierno. Sin embargo, las aclamaciones entusiastas que saludaron las partes más extremistas de su discurso sólo podían confirmarle la validez de su nueva línea^[94].

El PSOE se estaba dividiendo claramente al provocar la ofensiva de los patronos diversas respuestas en el movimiento socialista. Esto se vio claramente en la Escuela de Verano de las Juventudes Socialistas, en Torreloredón, cerca de Madrid, durante la primera mitad de agosto. Besteiro fue el primer líder de facción que se dirigió a los jóvenes socialistas. Su discurso iba dedicado principalmente a refutar la línea adoptada por Largo Caballero en el cine Pardiñas. Para él, la agresión de los capitalistas no era una razón para pasar al ataque, sino más bien una prueba de disciplina: «Si un estado mayor lleva a un ejército a una batalla en condiciones desfavorables y viene la derrota, y viene la desmoralización, la responsabilidad es del estado mayor, no tiene duda». Sin llegar a nombrarle, Besteiro acusó a Largo Caballero de adoptar una línea radical para ganar una popularidad fácil entre las masas y, al hacerlo así, correr el riesgo de una derrota del proletariado. Condenó cualquier alusión a la dictadura socialista para derrotar al fascismo como «un absurdo y una vana ilusión infantil». Añadió que «muchas veces se es más revolucionario resistiendo una de estas locuras colectivas que dejándose arrastrar por ellas». Su discurso revelaba que o no conocía las corrientes marxistas de pensamiento poshitleriano o no simpatizaba con ellas. Fue acogido con cierta hostilidad y *El Socialista* se negó a publicarlo^[95].

Al día siguiente, 6 de agosto, habló Prieto. Sus palabras fueron más moderadas que las de Besteiro, aunque también previno contra los peligros de un radicalismo demasiado fácil. Defendió, lo mismo que Largo Caballero, lo

que la República había conseguido hasta entonces. Sólo el que hubiese esperado que la República cambiase la estructura económica de España de la noche al día, declaró, podía estar insatisfecho, especialmente a la vista de la desastrosa depresión económica. Reconocía que el salvajismo de los ataques de la clase dirigente a la legislación de la República y a los socialistas era irritante. De hecho, en la parte más radical, e inevitablemente la más aplaudida, de su discurso llegó a decir que hubiese sido mejor tomar algunas represalias en 1931 por los años de opresión anteriores. Sin embargo, pidió a su público que considerase que la fuerza del ataque de la derecha hacía dudar de la capacidad de los socialistas para hacer frente al inmenso poder económico, que aún estaba en manos de las clases altas. El realismo, dijo Prieto, mostraba que «nuestro reino no es de este instante». Los que abogaban por el radicalismo habían comparado a la España de 1933 con la Rusia de 1917 para justificar, como habían hecho los bolcheviques, un salto por encima de la fase democrática burguesa de la revolución. Prieto señalaba que no era una comparación válida, puesto que la debilidad de las clases dirigentes rusas y sus instituciones estatales y militares en 1917 difícilmente podían aplicarse a España. También advertía de que, incluso si la toma del poder por los socialistas fuera posible, los restantes capitalistas de Europa no iban a quedarse cruzados de brazos. Fue un discurso muy hábil, en el que aceptaba la justificación moral del radicalismo, pero rechazaba la noción de que debía haber un cambio dramático en la política del partido. Realista como era, el discurso no fue lo que su joven público quería oír. Fue recibido fríamente, aunque no tanto como el de Besteiro, y no se publicó en *El Socialista*^[96].

No estaba programado que Largo Caballero hablase en la Escuela de Verano. Sin embargo, algunos dirigentes de la Juventud Socialista le informaron de la decepción creada por los discursos de Besteiro y Prieto. Largo, siempre orgulloso de sus relaciones con las masas, no era un hombre como para ignorar los sentimientos de la base. Durante la Dictadura había dado pruebas suficientes de lo que los trotskistas llamaban «seguidismo», dirigir desde atrás. Entonces el entusiasmo de los militantes de base le había convertido en republicano; ahora le estaba convirtiendo en revolucionario. Su discurso trataba de la imposibilidad de una legislación auténticamente socialista dentro de los confines de una democracia burguesa. Fue un discurso bastante amargo, que reflejaba su consternación ante la virulencia de los ataques de la derecha. Afirmó que se había radicalizado por la intransigencia de la burguesía: «Creíamos antes que el capitalismo era un poco más noble, que sería más transigente, más comprensivo. No; el capitalismo en España es

cerril, no le convence nadie ni nada». Sin embargo, Largo afirmaba que continuaba defendiendo la legalidad, a pesar de hablar de una futura transición al socialismo^[97]. El discurso encantó a los jóvenes socialistas por sus implicaciones de que el partido adoptaría pronto una política revolucionaria en toda línea.

Hasta cierto punto, la retórica revolucionaria de Largo Caballero no era enteramente lo que les parecía a los jóvenes radicales. No era el resultado de una luz marxista. No puede descartarse un elemento de rivalidad personal con Besteiro, e incluso tal vez con Prieto. También es posible que con su nueva postura Largo estuviese intentando disuadir al presidente de que sustituyera a la coalición republicano-socialista por los radicales. Sin embargo, el nuevo revolucionarismo de Largo respondía, sobre todo, a un sentido de atropello ante la creciente agresión de los patronos contra la legislación social y los efectos que esto estaba teniendo en la UGT. A lo largo del verano aumentaron las pruebas de que los jurados mixtos y las diferentes leyes sociales no estaban siendo obedecidos. Se ignoraban las oficinas de empleo oficiales y se ofrecía trabajo sólo a los que renunciaban a pertenecer a la UGT y se afiliaban a los sindicatos de la patronal. No se cultivaba la tierra. Aumentaban los casos de terratenientes que disparaban sobre grupos de trabajadores. Una larga reunión del comité nacional de la UGT, celebrada el 16, 17 y 18 de junio, discutió hasta qué punto los intentos socialistas de mantener la disciplina de los trabajadores frente a la provocación no estaba sirviendo más que para perder miembros en el sindicato^[98]. Largo estaba decidido a mantener la lealtad a la base.

En cierto sentido, era un dilema terrible. Puesto que los trabajadores se veían forzados a una militancia creciente por la negativa de los patronos a plegarse a la legislación social, Largo se veía obligado a un radicalismo verbal que cada vez iba a más. De no hacerlo así, los trabajadores acudirían a la CNT y a los comunistas y recurrirían a huelgas contraproducentes. De hacerlo, sólo podía exacerbar la polarización política de la República y, al mismo tiempo, proporcionar una justificación al extremismo de derechas^[99]. Además, si Largo optaba por la línea dura que cada vez exigían más militantes, no iba a solucionar el problema de la intransigencia de los patronos sin un avance paralelo hacia una praxis revolucionaria activa. Prieto lo había reconocido en su discurso, pero había límites claros al punto en que se podía imponer una política de moderación a la base que, después de todo, estaba en la primera línea de una lucha de clases cada vez más cruenta. Era un dilema

que iba a someter a fuertes tensiones la unidad socialista y que finalmente llevaría a Largo Caballero a su poco entusiasta participación en la insurrección de octubre de 1934.

Mientras los socialistas permanecieron en el gobierno fue posible apelar a la disciplina sindical y a la paciencia mientras se llevaban a cabo las reformas sociales. Sin embargo, esa situación no podía durar. En junio, Alcalá Zamora había utilizado como excusa para retirar su confianza al gobierno el que Azaña tuviese que cambiar por enfermedad al ministro de Hacienda, Jaime Carner. Alcalá Zamora invitó primero a Besteiro y luego a Prieto a formar gobierno, cosa imposible, ya que insistía en la inclusión de los radicales, que tanto habían obstaculizado la obra gubernamental de los socialistas. Puesto que ningún otro podía obtener la mayoría en las Cortes, el presidente se vio obligado a dejar que el gobierno continuase durante el verano. Consciente de la creciente oposición al gobierno, y siempre a la expectativa de un primer ministro más flexible que Azaña, Alcalá Zamora deseaba un cambio, incluso si esto significaba elecciones. Las dificultades de permanecer en el poder bajo tales circunstancias se manifestaron en agosto, cuando los diputados de derechas, con la complicidad de los radicales, consiguieron mutilar el proyecto de ley de Marcelino Domingo sobre los arrendamientos rústicos, traicionando así su cacareada preocupación por los pequeños arrendatarios^[100]. A principios de septiembre, a pesar de un voto de confianza del Parlamento a Azaña, el presidente decidió que la victoria conservadora en las elecciones para el Tribunal de Garantías Constitucionales justificaba su petición a Lerroux de que formase gobierno. Éste lo hizo el 11 de septiembre, pero no podía enfrentarse a las Cortes sin una derrota cierta. Gobernó con las Cortes cerradas. Para gran satisfacción de los terratenientes, la legislación social de Largo Caballero fue virtualmente abandonada. La ley de términos municipales quedó sin aplicación en provincias enteras y las infracciones de la ley no se castigaban^[101].

En el movimiento socialista había desde hacía tiempo un sentimiento de rabia y frustración de que la ligera reforma social conseguida hasta entonces hubiese provocado una oposición tan feroz. Ahora la velocidad con la que un gobierno republicano sin socialistas permitía la evasión de la legislación social empezó a minar seriamente la fe socialista en la democracia burguesa. Entrevistado el 23 de septiembre en el periódico de la juventud socialista *Renovación*, Largo Caballero declaraba que el nuevo gobierno había creado graves dudas sobre la posibilidad de que los trabajadores pudiesen conseguir

sus aspiraciones mínimas dentro de la República. Para muchos izquierdistas, el asalto de las derechas a los resultados del socialismo reformista era el primer paso hacia el desastre fascista. La asociación de ideas no era difícil. Los terratenientes habían lanzado los ataques más violentos contra las reformas sociales de la República. Hitler y Mussolini no habían tardado en dismantelar la legislación social en cuanto llegaron al poder. La prensa y los representantes políticos de los terratenientes españoles no se cansaban de alabar los éxitos nazis y fascistas. En agosto, *El Debate* había comentado la necesidad que se hacía sentir en España de una organización como las que regían en Alemania e Italia y apuntaba que Acción Popular era esa «organización necesaria»^[102]. Puede que Gil Robles no fuese un fascista, pero la izquierda española le veía como si lo fuese.

La clase obrera pronto sintió los efectos de la ausencia de Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo. Los funcionarios de la UGT se quejaron al comité nacional de que perderían miembros si la ejecutiva no se manifestaba contra el abandono del gobierno de la legislación social^[103]. En un discurso a los tranviarios, el 1 de octubre, se vio que Largo ya se había dado cuenta de ello. Declaró que la primera tarea del movimiento socialista era proteger lo que hasta entonces habían conseguido. Para Largo, para la mayoría de los socialistas y para muchos republicanos, la República era consustancial con sus reformas; si no, no se diferenciaba de la monarquía. Por tanto, razonaba Largo, puesto que se asaltaban sus reformas, la República estaba en peligro. Los acontecimientos del mes anterior habían mostrado que Lerroux era un saboteador del régimen. Ya había colaborado con los monárquicos y con los agrarios para bloquear la reforma. Largo continuó afirmando que la vehemencia de la oposición a una legislación que simplemente ayudaba a los trabajadores a defenderse no presagiaba nada bueno para las ambiciones a largo plazo de los socialistas. Así, mientras afirmaba que respetaría la legalidad, recordaba el compromiso revolucionario del PSOE de una completa transformación de la estructura económica de la sociedad. Si, concluía, el gobierno cae en las manos de los que van a utilizar la legalidad y la Constitución contra la clase trabajadora y sus aspiraciones, los socialistas tendrán que pensar en dejar a un lado la legalidad^[104].

Es posible que en esos momentos Largo adoptase en parte posturas radicales como una advertencia al presidente. Sin embargo, pronto iban a cambiar las cosas. Al día siguiente, hablando en las Cortes, Prieto declaraba que todos los compromisos de los socialistas con los republicanos habían

terminado. Un día más tarde caía el gobierno^[105]. Alcalá Zamora pidió al radical Diego Martínez Barrio que formase un gobierno para celebrar elecciones. Marcelino Domingo persuadió a Martínez Barrio de que un gobierno de ese tipo debería incluir a todas las fuerzas republicanas, incluso a los socialistas. Largo Caballero, después de consultar al resto de la minoría parlamentaria, dio su acuerdo, lo que confirma bastante el elemento premonitorio de su radicalismo. Sin embargo, al mismo tiempo que se veía que no era posible la participación socialista a causa de un tecnicismo constitucional, llegaban noticias de la oposición dentro del partido a una acción de este tipo^[106]. Martínez Barrio formó un gobierno exclusivamente republicano el 8 de octubre. Las elecciones se anunciaron para el 19 de noviembre.

Largo Caballero, la Juventud Socialista y gran parte de la UGT se lanzaron a la campaña electoral con entusiasmo y optimismo. Otros dirigentes del PSOE no compartían la euforia de Caballero y estaban preocupados por la imprudencia de ir solos a las urnas en un sistema electoral que favorecía a las coaliciones amplias. De los Ríos confió sus dudas al embajador americano^[107]. Prieto se aseguró de que en Bilbao no hubiera divisiones del voto de la izquierda, incluyendo a Azaña y a Domingo en la lista socialista^[108]. Los socialistas no podían competir con la campaña masiva de propaganda montada por la derecha y empezaron su campaña dos semanas después que sus oponentes. Largo Caballero dominó la campaña, lo mismo que Gil Robles en el «frente antimarxista». Hizo una gira por el país durante la primera mitad de noviembre, y su lenguaje se hacía más revolucionario a medida que viajaba. Esto era una respuesta, primero, a la campaña de las derechas, cuyo tema principal era la necesidad de aplastar al socialismo, y segundo, al entusiasmo sin límites de las masas, que aclamaban sus discursos mucho antes de que hubieran terminado^[109].

El 15 de octubre, Gil Robles había expresado su determinación de establecer el Estado corporativo. Los discursos de Largo anunciaban la determinación socialista de impedir que lo hiciese. El 5 de noviembre, en la plaza de toros de Jaén, el presidente del PSOE dijo ante 12 000 trabajadores que debían prepararse para defender las conquistas de la República y llevarlas más adelante en la vía hacia el socialismo. En Albacete, el 12 de noviembre, Largo fue más explícito. Afirmó que la oposición a sus débiles reformas mostraba que las tácticas legales reformistas eran fútiles. Si el progreso social iba a ser imposible, como seguramente lo sería en un régimen corporativo

derechista, los socialistas tendrían que abandonar la democracia burguesa y proceder a la conquista revolucionaria del poder. El 14 de noviembre, hablando en Murcia, Largo declaró que nunca podría haber auténtica democracia en España mientras la feroz opresión económica fuese cosa corriente. Reconoció que sólo la dictadura del proletariado podía llevar adelante el desarme económico necesario de la burguesía^[110]. Tales observaciones, por mucho que le gustasen a su público, sólo podían servir para provocar el encono de la derecha y justificar su postura agresiva. Dada la fuerza, tanto económica como política, de la derecha española, la línea adoptada por Prieto en Torrelodones parecía mucho más realista que los objetivos de Largo, comprensibles pero irrealizables.

Los resultados de las elecciones supusieron una amarga decepción para los socialistas, que sólo obtuvieron 58 escaños. Diversos factores contribuyeron a la derrota. No puede subestimarse la eficacia de la campaña de propaganda de las derechas. La izquierda afirmó también que se produjeron presiones considerables de la derecha sobre votantes potenciales de la izquierda en forma de soborno y de intimidación. Parece que en el sur, la Guardia Civil y algunos matones a sueldo de los terratenientes locales hostigaron bastante a los campesinos^[111]. Muchos observadores creen que la introducción del voto femenino perjudicó a la izquierda. Las mujeres de clase obrera, se ha sostenido, votaron como sus maridos, mientras que las de clase media, cuyos maridos votaban republicano, siguieron el consejo del confesor^[112]. Sin embargo, las dos razones principales de los pobres resultados obtenidos por la izquierda fueron la fragmentación electoral y la oposición de los anarquistas. Puesto que los socialistas se negaron a aliarse con los republicanos, fue necesario el doble de votos socialistas para conseguir un diputado que de votos de derechas. Los oradores de izquierdas eran recibidos con gritos de «¡Asesinos!» y «¡Casas Viejas!» por los anarquistas del público. En 1931, a pesar del apoliticismo de la CNT, muchos anarquistas habían votado por los candidatos republicanos. Ahora, o votaron por los radicales o se abstuvieron. El porcentaje nacional de abstenciones fue del 32 por 100; en las zonas de influencia anarquista fue mucho más alto. En Barcelona, Zaragoza, Huesca y Tarragona fue alrededor del 40 por 100, y en Sevilla, Cádiz y Málaga, más del 45 por 100. La victoria de las derechas no fue tan grande como parecía. Incluso con los radicales en las coaliciones más amplias, no consiguieron más del 40 por 100 de los votos en ningún sitio^[113]. Todos estos factores sólo podían aumentar la desilusión de los socialistas con la democracia burguesa y facilitar el camino para una mayor radicalización.

CAPITULO IV

LA POLÍTICA DE REPRESALIAS: LA CEDA, EL PSOE Y LA INSURRECCIÓN DE 1934

Entre 1931 y 1933 la coalición republicano-socialista se había esforzado en crear una república socialmente progresista. En un contexto de depresión mundial es inconcebible que su programa experimental de reformas pudiese haber resuelto los problemas económicos y sociales altamente conflictivos heredados de la monarquía. Sin embargo, los republicanos de izquierda y los socialistas creyeron que habían hecho lo suficiente para distinguir el nuevo régimen del antiguo y para encauzar los primeros pasos vacilantes de España hacia la modernidad. Estaban de acuerdo en que cualquier retroceso del mínimo conseguido sería desastroso para la mayoría de la población. Los socialistas, sin embargo, estaban preocupados por la vehemencia de la oposición a lo que ellos consideraban como una legislación humanitaria básica. A la luz de esto, un sector creciente del movimiento sindical y de la Juventud Socialista, fomentado por el apoyo bastante temerario de Largo Caballero, estaba perdiendo la fe en la posibilidad de que una democracia burguesa permitiese el establecimiento de una justicia social mínima, por no hablar de un socialismo acabado.

Diversas razones habían llevado a muchos socialistas de la base a esta conclusión. La inmensa campaña de propaganda de las derechas contra la República y sus proyectos reformistas había tenido el suficiente éxito como para convencerles de que el proceso democrático podía ser fácilmente manipulado. La incapacidad de una amplia mayoría para superar los obstáculos a la reforma de una minoría determinada había creado una desilusión considerable. La facilidad con que los patronos evadían las provisiones de la legislación que había sido aprobada minó aún más la fe en la equidad de un régimen burgués. Incluso más importancia tuvo el saber cuál había sido el sino de los regímenes similares en el extranjero. La derecha española no escondía sus simpatías por las realizaciones de Hitler y Mussolini. La CEDA tenía muchos de los signos exteriores de una organización fascista con sus manifestaciones, su movimiento de juventudes uniformado y sus técnicas de propaganda masiva. Durante la campaña para las elecciones de noviembre, Gil Robles había confirmado los peores temores de los socialistas al declarar su decisión de establecer un Estado corporativo

en España. Había afirmado su preferencia por hacerlo legalmente, lo mismo que habían hecho Hitler y Mussolini, pero también había declarado que estaba dispuesto a lograrlo por otros medios si era necesario. Entre los socialistas europeos crecía la convicción de que la única forma de tratar la amenaza del fascismo era destruir el sistema capitalista, que en un momento de crisis lo había engendrado. No es sorprendente, pues, que un sector significativo del movimiento socialista español empezase a pensar de forma similar^[1].

La desilusión socialista con la República era una consecuencia directa del éxito de la táctica legalista de Gil Robles para frustrar el celo reformista del nuevo régimen. De hecho, la política de la República era cada vez más una batalla entre el PSOE y la CEDA para decidir cuál de los dos iba a imprimir su marca en el régimen. Desde luego, era así como ambos grupos percibían la situación. A pesar de que los extremistas violentos de la derecha y de la izquierda desempeñaron un papel considerable en la polarización de la política republicana, nunca fueron el principal objeto de denuncia de la prensa socialista ni de la católica. La propaganda socialista destacaba al partido católico, más que a los carlistas o a los monárquicos alfonsinos, como el enemigo más peligroso, en la derecha. Igualmente, la máquina propagandística de la ACNP, a pesar del insurreccionismo revolucionario de los anarquistas, señalaba consistentemente al socialismo como el enemigo a destruir. Esto no es de extrañar. Tanto el PSOE como la CEDA tenían confianza en que el aparato represivo del Estado podía ocuparse adecuadamente de la conspiración monárquica o de la subversión anarquista. Lo que realmente temía cada uno era que el otro llegase al poder legalmente y le diese al régimen un contenido legal y constitucional que dañase los intereses materiales de sus seguidores. En un régimen democrático, la ventaja numérica hubiera jugado normalmente a favor de un partido de la clase trabajadora. En consecuencia, en 1931 los socialistas participaron en el gobierno con optimismo. Sin embargo, para finales de 1933 Acción Popular había demostrado que unos amplios recursos financieros y una propaganda hábil también podían conseguir un apoyo popular.

Lo que especialmente preocupaba a muchos socialistas y republicanos en el invierno de 1933 era la probabilidad de que la victoria de las derechas en las elecciones se utilizase para revocar las reformas conseguidas hasta el momento. El restablecimiento de las relaciones sociales represivas existentes bajo la monarquía sería para ellos un asalto a todo lo que había defendido la República. Sin embargo, la hostilidad de la CEDA al programa legislativo republicano-socialista se había manifestado lo suficiente como para dejar

clara su decisión de anularlo a la primera oportunidad. Ahora, la victoria en las elecciones hacía posible que la CEDA diese sanción legal al resentimiento de sus patrocinadores financieros por la amenaza de los dos primeros años de régimen.

Este cambio iba a producirse en el momento de mayor intensidad en la crisis de desempleo. En diciembre de 1933 había 619 000 parados, el 12 por 100 del total de la población activa. Esta cifra era considerablemente inferior a las de Alemania e Italia, cuya economía era tan admirada por *El Debate*, pero, a pesar de esto, suponía una carga inmensa, dada la falta de sistema de seguridad social en España. Sin la ayuda de Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo para disminuir los efectos, el impacto en la fuerza laboral fue aún mayor. El empeoramiento de las condiciones era el fundamento principal de la presión de la base sobre los funcionarios sindicales para la acción militante. Los sectores más afectados eran la agricultura, la industria del metal y la construcción, todos ellos agrupaciones importantes dentro de la UGT. En el sur agrario, el número de parados era mucho mayor que en el resto de España. Las provincias más afectadas eran Jaén, Badajoz y Córdoba, donde el porcentaje de desempleo era un 50 por 100 más alto que la media nacional. En cuanto los terratenientes comenzaron a ignorar totalmente la legislación social y a tomar represalias por las incomodidades de los dos años anteriores, el paro aumentó aún más. Para abril de 1934 había llegado a 703 000^[2]. El crecimiento subsiguiente de la militancia dentro de la FNTT iba a llevar pronto a la sustitución de su presidente, el besteirista Lucio Martínez Gil, por un seguidor de Largo Caballero, Ricardo Zabalza. Los otros dos sindicatos afectados seriamente por la crisis estaban ya dirigidos por caballeristas fieles. El líder de los metalúrgicos era Pascual Tomás, y los trabajadores de la construcción estaban dirigidos por Anastasio de Gracia. Estos tres sindicatos representaban más de la mitad de la fuerza total de la UGT, que ascendía a 1 041 539 miembros, de los que la FNTT totalizaba 445 414; los metalúrgicos, 33 287, y los trabajadores de la construcción, 83 861. De los tres sindicatos que les seguían en fuerza, el de los ferroviarios con 49 117 miembros, el de los mineros con 40 635 y el de los transportes urbanos con 34 435, dos estaban adoptando una línea cada vez más militante. Los ferroviarios continuaban bajo la dirección del besteirista Trifón Gómez, pero los trabajadores del transporte estaban dirigidos por el seguidor de Largo más extremista, Carlos Hernández Zancajo, y el de los mineros, sin un cambio de dirección, estaba adoptando una línea más dura^[3].

La militancia de la base era así un elemento crucial en la adopción por Largo Caballero de una retórica revolucionaria. Había, sin embargo, otros factores. El más urgente era, paradójicamente, el deseo de corregir el error, cometido antes de las elecciones, de rechazar la alianza con las fuerzas republicanas de izquierdas. Los socialistas tenían toda la culpa de no haber aprovechado el sistema electoral. Esto no mitigó su amargura por los resultados. Por encima de todo querían persuadir a Alcalá Zamora de que convocase nuevas elecciones porque, en su opinión, las recientes no habían tenido auténtica validez como voto popular. Los socialistas habían obtenido 1 627 472 votos, seguramente más de los que podía haber obtenido cualquier otro partido solo de los que se presentaban. Estos votos les habían dado 58 diputados, mientras los radicales, con 806 340, habían conseguido 104 escaños. Según los cálculos, realizados por el secretariado del PSOE, la derecha unida había conseguido un total de 3 345 504 votos frente a 3 375 432 de la izquierda desunida, consiguiendo 212 escaños frente a los 99 de la izquierda^[4]. Los resultados se prestaban a varias interpretaciones. Incluso si los resultados, algo sospechosos, del PSOE fueran correctos, esto no alteraba el hecho de que el principal factor determinante de los resultados había sido el error táctico del partido.

Sin embargo, los socialistas tenían otras razones para rechazar la validez de las elecciones. Estaban convencidos de que en el sur los manejos electorales les habían arrebatado escaños. En los pueblos donde la única fuente de empleo eran uno o dos hombres era relativamente fácil conseguir votos por una promesa de trabajo o una amenaza de despido. Para muchos trabajadores en los límites del hambre, el ofrecimiento de alimentos o de una manta bien valía un voto. En Almendralejo (Badajoz), el marqués de la Encomienda distribuyó pan, aceite y chorizo. En Granada, matones armados impidieron que hablara Fernando de los Ríos^[5]. Las urnas de cristal y la presencia de los hombres de los caciques convirtieron en una burla el voto secreto. Las autoridades pasaron por alto los abusos que favorecían a los radicales, que en gran parte del sur iban en coalición con la CEDA. Tras las elecciones, el ministro de Justicia, Juan Botella Asensi, dimitió como protesta por el nivel de falsificación electoral. Los socialistas estaban también convencidos de que el cinismo con que la derecha y los republicanos de centro formaban coaliciones electorales constituía una burla del sistema democrático. En ningún sitio quedó esto tan bien ilustrado como en Asturias, donde parecía que iba a haber lucha en tres frentes entre los socialistas, Acción Popular y los liberales demócratas de Melquíades Álvarez. La

campaña comenzó con la prensa liberal, reservando sus ataques más feroces para los «trogloditas» de Acción Popular. Después, a finales de octubre, los liberales demócratas, que habían sido monárquicos reformistas, hicieron un pacto con Acción Popular y volvieron sus esfuerzos contra los socialistas. Una contienda en la que los socialistas podían haber esperado ganar razonablemente, terminó con la victoria de la coalición centro-derecha, que consiguió 13 escaños contra cuatro del PSOE. Si los anarquistas no se hubiesen abstenido, los socialistas, casi con seguridad, hubieran obtenido la mayoría^[6].

Así, a finales de 1933 los líderes socialistas se encontraron con un crecimiento de la militancia de la base que era consecuencia, por una parte, de la ofensiva de los patronos y, por otra, del resentimiento por haber perdido injustamente las elecciones. Largo Caballero no era un hombre que rehuyese a los militantes de base. En consecuencia, sus declaraciones de finales de 1933 y posteriores reanudan el tono revolucionario que había adoptado antes en el cine Pardiñas y en la Escuela de Verano de Torrelodones. Su retórica no iba, sin embargo, acompañada de intenciones revolucionarias serias. No se hicieron planes concretos para un levantamiento y, en diciembre de 1933, los socialistas permanecieron ostentosamente fuera de un intento de insurrección de la CNT. Además, los socialistas proclamaban sus aspiraciones revolucionarias en la forma más opuesta a la eficacia subversiva. Es más que posible que el revolucionarismo verbal del PSOE intentase simplemente satisfacer las aspiraciones de la base y, al mismo tiempo, inculcar a Alcalá Zamora la necesidad de convocar nuevas elecciones. Se trataba de un juego peligroso, puesto que, si el presidente no sucumbía a tales presiones, a los socialistas no les quedaría más opción que aumentar sus amenazas o perder credibilidad entre sus propios militantes. La situación subsiguiente sólo podía beneficiar a la CEDA.

Gil Robles también se enfrentaba a la necesidad de hacer un juego sutil. Los resultados electorales habían justificado su táctica, pero estaban lejos de constituir una victoria global que le permitiese instalar su «nuevo Estado» y un sistema corporativo. Además, se daba cuenta de que su victoria era mucho más precaria de lo que parecía. Incluso si el presidente le pedía que formara gobierno, no podía hacerlo. Tratar de gobernar con una coalición de derechas estaba fuera de cuestión, puesto que todos los elementos de derechas de la cámara no constituían una mayoría. Además, un gobierno que comprendiese a todos los enemigos declarados de la República sólo podía despertar el fervor republicano de la izquierda, llegando incluso hasta los radicales. Con las

divisiones de la izquierda selladas, el gobierno sería derrotado. Tendría que constituirse entonces un gobierno de izquierdas y republicanos del centro o, si esto no era posible, convocar nuevas elecciones. Era inconcebible que los socialistas cometieran el mismo error táctico dos veces. Inquieto, por tanto, para no arriesgar su frágil victoria en otras elecciones, Gil Robles buscó otra solución, decidiéndose por un gobierno del centro apoyado por los votos de la CEDA, puesto que no tenía fuerza para hacerse con el poder por la violencia.

El 19 de diciembre, Gil Robles se levantó en las Cortes para expresar la posición de la CEDA y explicar detalladamente el tipo de política para la que el gobierno radical podía esperar su apoyo. Aunque el tono del discurso fue moderado, sólo podía causar gran preocupación en la izquierda. Si no pedía el poder inmediatamente, dijo Gil Robles, era porque la cólera era todavía demasiado alta en la derecha después de las tensiones y las fricciones de los dos últimos años de República. Este altruismo sólo reflejaba que era consciente de la debilidad básica de su posición. Afirmó que la victoria de las derechas en las elecciones mostraba la reacción nacional contra la política del primer bienio, y pidió que el nuevo gobierno realizase una política de acuerdo con lo que él veía como los deseos del electorado. La relación detallada de la política deseada revelaba los intereses estrechos defendidos por la CEDA. Gil Robles pedía la amnistía para los condenados a prisión por el levantamiento militar de agosto de 1932. Pedía también una revisión de la legislación religiosa de las Cortes constituyentes. Sin embargo, era respecto a las reformas sociales donde sus exigencias eran más radicales. Todos los decretos que habían sido mejor acogidos por los campesinos sin tierras —la ley de términos municipales, la de laboreo forzoso y los jurados mixtos— se vieron sujetos a un ataque abrumador. A continuación, Gil Robles pidió una reducción de la superficie de tierra sujeta a expropiación por la ley de reforma agraria, justificando sus peticiones con una condena del concepto socializante de asentar a los braceros en la tierra. Después de haber desmantelado así, sucintamente, toda la legislación social de la República, tal y como se aplicaba en las áreas rurales, el líder de la CEDA pasó, con bastante cinismo, a afirmar el compromiso de su partido con la justicia social. La CEDA, dijo, «antes renunciaría a sus puestos y rasgaría sus actas que consentir que sus votos en el Congreso sirvieran para perpetuar injusticias sociales». Pidió también que se actuase contra el paro, sugiriendo la realización de proyectos de obras públicas y prometiendo el apoyo de la CEDA a la reforma fiscal necesaria para financiarlos^[7]. De hecho, los votos de la CEDA se dieron sin

dificultad para la aprobación de la legislación social, pero cuando el partido apoyó una tenue reforma fiscal en 1935, hubo una revuelta interna.

Respondiendo a Gil Robles, Prieto afirmó que la colaboración de Lerroux con la CEDA para dismantelar la obra de las Cortes constituyentes era una traición al Pacto de San Sebastián. A continuación declaró que los socialistas defenderían la República contra las ambiciones dictatoriales de la derecha desencadenando la revolución. Para los socialistas, esa legislación que Gil Robles estaba decidido a echar abajo, era lo que justificaba la defensa de la República^[8]. Convencidos de que la CEDA, con la complicidad de Lerroux, iba a destruir el contenido progresista de la República, los socialistas jugaban la única carta que les quedaba. La amenaza de revolución tenía la doble pretensión de hacer que Lerroux y Gil Robles lo pensasen dos veces antes de llevar a cabo sus planes y de inculcar a Alcalá Zamora la necesidad de convocar nuevas elecciones.

En el contexto de este tipo de oposición a los planes de la CEDA, la táctica de apoyar al gobierno radical desde fuera era la mejor de las que disponía Gil Robles. Un gobierno de este tipo podía ser controlado sin compromisos morales y sin riesgos de provocar la formación de una coalición de izquierdas. Sin ningún remordimiento de conciencia, Gil Robles abandonó a sus aliados electorales monárquicos. La amargura de éstos puede imaginarse. El 27 de septiembre había jurado no aceptar pactos ni tratos con nadie hasta que no se revocase el artículo 26 de la Constitución. En su discurso del 15 de octubre había asegurado que no aceptaría compromisos políticos con nadie. Sus antiguos aliados, tal vez más que sus enemigos de la izquierda, veían en su conducta el mayor de los cinismos^[9]. Los defensores de Gil Robles han estimado que su decisión de cooperar con los radicales fue el gesto supremo de sacrificio que permitió que la República continuara existiendo y que, por tanto, fue la mayor prueba posible de su lealtad a la República. Desde luego, se ha afirmado que la benevolencia de la CEDA y los agrarios posibilitó el gobierno y tal vez salvó al país de una guerra civil inmediata^[10]. Es difícil, sin embargo, no ver más interés que idealismo en una decisión que derivaba de saber que si se celebraban nuevas elecciones la CEDA sólo podía perder lo que había conseguido y que la derecha no estaba aún preparada para una confrontación violenta con la izquierda. En otras palabras, era la única táctica evidente e inevitable.

En cualquier caso, una asociación con los radicales era inútil como gesto de fe republicana. La carencia por parte de los radicales de una postura

política consistente había perjudicado ya considerablemente a la República. Apoyando al grupo que tenía más posibilidades de ganar, Lerroux había exagerado peligrosamente el efecto pendular incorporado en el sistema electoral y, en consecuencia, fomentado la política de represalias. La izquierda veía en el brusco giro de los radicales a la derecha en busca de votos la primera causa del éxito de la CEDA. Se pensaba que, a pesar de su reputación como el partido republicano «histórico», el partido radical estaba infiltrado por elementos monárquicos. En agosto de 1931 Lerroux había declarado que el partido radical era básicamente conservador y había abierto sus brazos a los exmonárquicos. En muchos lugares del sur, ante el horror de la prensa de derechas, muchos monárquicos decidieron que podían defender mejor sus intereses dentro de un partido republicano^[11]. Esto simplemente confirmaba la convicción de la izquierda de que Lerroux carecía de principios y siempre vendería sus servicios al mejor postor. *El Socialista* regularmente destacaba casos de corrupción radical, de los que había una larga historia. Largo Caballero creía que en el partido radical había elementos que «si no han estado en presidio merecerían estarlo»^[12]. Un diputado de la CEDA comentaba: «Esta minoría radical me hace el efecto del pasaje de un buque: gentes de todas las edades, de todas las condiciones, de las más diversas ideologías; unidos sólo para viajar»^[13]. La izquierda, además, conocía las siniestras conexiones de los radicales con Juan March, el contrabandista millonario y enemigo declarado de la República, que había financiado en parte la campaña electoral de la derecha^[14].

El partido radical era, por tanto, un partido sin ideas ni ideales, unido por una cierta lealtad a Lerroux, unos recuerdos nostálgicos de su lucha contra la monarquía, especialmente en sus secciones de Valencia, y, sobre todo, la perspectiva del disfrute del poder. El mismo Lerroux le admitía a Santiago Alba que no tenía un conocimiento profundo de ninguno de los problemas de España^[15]. A los radicales les interesaba el poder como un fin en sí mismo, como un medio de acceso a un sistema de prebendas. Una vez en el gobierno, establecieron una oficina para organizar la distribución y venta de recompensas ministeriales en forma de monopolios, comisiones, concesiones, pedidos del gobierno, licencias y cartas de recomendación^[16]. Lógicamente, los socialistas temían que no fuera éste el partido más indicado para defender los preceptos básicos de la República contra los ataques de la derecha. De hecho, el apoyo de la CEDA a los radicales, manteniéndoles en el poder con sus votos, dependía de que éstos realizaran una política satisfactoria para el partido católico. Gil Robles no ocultaba que en un primer momento facilitaría

la formación de gobiernos del centro; después, cuando llegara el momento, exigiría el poder y llevaría a cabo la reforma de la Constitución; si no obtenía el poder, advertía, y si los acontecimientos mostraban que no era posible una evolución política hacia la derecha, la República pagaría las consecuencias^[17].

Cuando Prieto se refería a las mal encubiertas ambiciones dictatoriales de Gil Robles, era en respuesta a observaciones de este tipo. Los socialistas estaban francamente preocupados por el uso que la derecha pudiera hacer de su nuevo poder. Estaban convencidos de que no sólo la legislación de la República, sino también su propia seguridad personal corría un grave riesgo ante la posibilidad de un golpe de Estado fascista. De los Ríos facilitó información a la comisión ejecutiva del PSOE que parecía indicar que estaban en marcha planes para la toma del poder por las derechas y la detención de los líderes socialistas^[18]. Posiblemente no fuera más que un rumor, pero los socialistas lo temían realmente. Desde que la coalición republicano-socialista había dejado el poder en septiembre, llegaban continuos informes de que en las zonas rurales la derecha adoptaba posturas cada vez más violentas y provocativas con la aquiescencia de la Guardia Civil^[19]. Con un gobierno radical dependiente de los votos de la CEDA, la situación sólo podía deteriorarse. A lo largo de noviembre y diciembre, la prensa socialista aireó su certeza de que Lerroux estaba sirviendo al fascismo de Gil Robles como puente hacia el poder. Se publicaron documentos que mostraban que Acción Popular estaba intentando crear unas fuerzas civiles que se enfrentasen a cualquier actividad revolucionaria de la clase obrera. Otros documentos mostraban que Acción Popular, en connivencia con la policía, trataba de organizar un fichero masivo de todos los trabajadores políticamente activos que había en España. Las actividades de las milicias uniformadas de la Juventud de Acción Popular se consideraban como una confirmación de que pronto se intentaría establecer el fascismo en España^[20].

Acción Popular no estaba en condiciones de hacerse con el poder, pero tampoco lo necesitaba mientras estuviese en el gobierno un partido tan acomodaticio como el radical. Los temores socialistas eran exagerados, pero a la luz de lo que estaba ocurriendo en Alemania eran comprensibles. Especialmente en la juventud socialista había una profunda convicción de que la única respuesta efectiva al fascismo era la revolución social, convicción reforzada durante la campaña electoral por un discurso de Luis Araquistáin el 29 de octubre, que tuvo una influencia extraordinaria. La Federación de

Juventudes Socialistas publicó y distribuyó el discurso en forma de folleto^[21]. Araquistáin había sido embajador de España en Berlín durante los primeros meses de gobierno de Hitler y había desplegado gran actividad intentando organizar la huida de judíos e izquierdistas del terror nazi^[22]. Para él, la pasividad del SPD había facilitado la victoria del nazismo. Si necesitaba algún estímulo, la juventud socialista se valió en seguida de la teoría de Araquistáin de que sólo la revolución podía hacer frente a la amenaza fascista.

La combinación de una clase patronal que había recobrado la confianza aprovechando el cambio de la situación política y el miedo al fascismo tuvo efectos inmediatos en la base socialista. Según Largo Caballero, venían a Madrid delegaciones en representación de los trabajadores de provincias pidiendo a la comisión ejecutiva que organizase una contraofensiva. En consecuencia, la ejecutiva caballerista del partido pidió a la ejecutiva besteirista de la UGT que asistiese a una reunión conjunta el 25 de noviembre en la sede del partido. De los Ríos, que acababa de volver de una gira por la provincia de Granada, se dirigió a los presentes. Pintó un cuadro sombrío de los sufrimientos del proletariado rural a manos de los vengativos caciques que habían recobrado la confianza. La ejecutiva del PSOE, convencida de que esto sólo era el principio de una ofensiva de la derecha a escala nacional, deseaba emprender alguna acción positiva. La ejecutiva de la UGT era hostil a cualquier tipo de aventurerismo. Besteiro, Saborit y Trifón Gómez sostuvieron que lo más prudente sería esperar los acontecimientos y mantener unida la organización hasta que mejoraran las circunstancias. Largo estaba furioso por su inmovilismo, que para él era incomprensible. Mostrando su sentido de las prioridades, se opuso a la ejecutiva de la UGT porque «los mismos trabajadores reclaman una acción rápida y enérgica». Como de costumbre, temía que la base se dirigiese a organizaciones revolucionarias más decididas. Prieto, finalmente, se mostró de acuerdo con Largo Caballero en la necesidad de «una acción defensiva». De la reunión salió una declaración pidiendo a los trabajadores que estuvieran preparados para alzarse «ante el peligro de que el adueñamiento del poder por los elementos raccionarios les sirva para rebasar los cauces constitucionales en su público designio de anular toda la obra de la República». El 26 de noviembre la ejecutiva del PSOE sometió su análisis de la situación al comité nacional del partido. Se aprobó la línea de la ejecutiva y se hizo pública una declaración advirtiendo que, con los derechos de la clase trabajadora amenazados por el fascismo, había una «necesidad absoluta de que las organizaciones del partido estén preparadas para oponerse con el máximo empeño, llegado el caso, al

logro siniestro de los propósitos acariciados por las derechas españolas». Se trataba de una referencia a la intención declarada de Gil Robles de implantar el Estado corporativo en España^[23].

Puede que la CEDA no fuese una organización fascista en el sentido de la definición académica posterior a 1945. En 1933 no se conocía totalmente la extensión de los horrores nazis^[24]. A la luz de lo que se sabía de la persecución nazi y fascista de los elementos de izquierdas, las intenciones aireadas por la CEDA de aplastar el socialismo, las ambiciones corporativas de Gil Robles y los ataques de los patronos, fomentados por la CEDA, contra los trabajadores sindicados no se distinguían del fascismo coetáneo para la mayoría de la izquierda española. Con cierto grado de exageración nerviosa, los socialistas en particular estaban obsesionados por la necesidad de evitar los errores tácticos cometidos por sus camaradas alemanes e italianos. Sin embargo, tras las consiguientes posturas revolucionarias, se mantenía una larga tradición de reformismo. Apenas hay duda de que incluso los dirigentes socialistas más radicales en sus declaraciones veían con considerable preocupación la posibilidad de organizar realmente una revolución. Más bien esperaban que sus amenazas de revolución sirvieran para lo mismo que ésta: para satisfacer las demandas de la base y para hacer vacilar a la derecha. Era una táctica sujeta a la ley de los rendimientos decrecientes, pero a la que, lógicamente, se aferraban unos políticos atrapados entre sus propias masas militantes y una derecha agresiva.

Los límites del revolucionarismo retórico de los socialistas se vieron dos semanas después de la firma de la declaración conjunta de las ejecutivas del PSOE y de la UGT. Los anarquistas, como corolario a su campaña electoral abstencionista, habían organizado un levantamiento para el 8 de diciembre. La finalidad del abstencionismo era asegurar la vuelta de un gobierno burgués puro para que así, pensaban los anarquistas, la clase obrera viese sin lugar a dudas que la República era tan opresora como lo había sido la monarquía y ayudar a que los socialistas se olvidaran de sus ilusiones reformistas. Era una estrategia irresponsablemente ingenua. Sólo las zonas tradicionalmente anarquistas respondieron a la convocatoria para el levantamiento —Aragón, la Rioja, Cataluña, Levante, partes de Andalucía y Galicia—. Hubo una oleada de huelgas violentas, se volaron trenes y se asaltaron puestos de la Guardia Civil. En pocos días se acabó con el levantamiento^[25]. En ningún sitio tomaron parte los militantes socialistas. Además, un manifiesto conjunto del PSOE y la UGT anunciaba terminantemente que «los organismos

nacionales a quienes estas comisiones ejecutivas representan no han tenido ni tienen participación alguna en el movimiento». Sin embargo, el manifiesto culpaba del levantamiento al gobierno, «que, por su menosprecio de las reivindicaciones sociales, ha desviado la República de aquellos cauces en que la voluntad del pueblo la situó». En las Cortes, Prieto condenó este «movimiento perturbador». Sin embargo, cuando Goicoechea y Gil Robles ofrecieron su apoyo entusiasta al gobierno para aplastar la subversión, Prieto reaccionó airado. Le molestaba que «los enemigos de la República» sólo apoyasen al régimen en aquellas empresas que suponían la represión de la clase trabajadora. Con la resolución de silenciar a las organizaciones obreras, declaró Prieto, «nos cerráis todas las salidas y nos invitáis a la contienda sangrienta». La postura revolucionaria de los socialistas pretendía evitar que la derecha fuera demasiado lejos. En el manifiesto citado, las dos ejecutivas lo habían subrayado reafirmando «su firme decisión, cuando la hora sea llegada, de ampliar los deberes que nuestros representantes y nuestros ideales nos imponen»^[26]. En otras palabras, las amenazas revolucionarias se aplicarían si se producía algún intento de establecer el fascismo.

La naturaleza premonitoria de las declaraciones revolucionarias de líderes como Prieto y Largo Caballero no puede subestimarse. Sin embargo, entre los miembros más jóvenes del sindicato se produjo un entusiasmo irresponsable a favor del revolucionarismo, que empezó a hacer insostenible la posición de la comisión ejecutiva de la UGT. El 31 de diciembre de 1933 el comité nacional de la UGT se reunió para discutir la situación política y para examinar la política propuesta por la ejecutiva del PSOE. Amaro del Rosal, el joven caballerista presidente de la Federación de Trabajadores de Banca y Bolsa, propuso una moción para «la inmediata y urgente organización de acuerdo con el partido socialista de un movimiento de carácter nacional revolucionario para conquistar el poder político íntegramente para la clase obrera». La propuesta fue rechazada por 28 votos contra 17. Aparte de los votos esperados de la ejecutiva en contra de la moción, excepto el de Besteiro, que estaba enfermo, además del de la FNTT y el de los gráficos de Saborit, dos de los votos «conservadores» más inesperados fueron los de Anastasio de Gracia, el líder de los obreros de la construcción, y el de Ramón González Peña, del SMA. Esto confirma que eran los elementos más jóvenes los que presionaban a favor de la táctica revolucionaria. El voto fue revocado por la otra moción del día, presentada por la comisión ejecutiva, que simplemente reiteraba la total identificación de la UGT con la declaración conjunta de las ejecutivas de

25 de noviembre, que había amenazado con la acción revolucionaria sólo en el caso en que la derecha fuese más allá de los límites de la Constitución^[27].

La estridente retórica revolucionaria de la Juventud Socialista aumentaba las presiones para que la dirección socialista adoptase una línea insurreccional. El dilema que esto les creaba lo reveló De los Ríos en una visita a Azaña el 2 de enero de 1934 para buscar su consejo. El relato de Azaña de la reunión es revelador en extremo: «Me hizo relación de las increíbles y crueles persecuciones que las organizaciones políticas y sindicatos padecían por obra de las autoridades y de los patronos. La Guardia Civil se atrevía a lo que no se había atrevido nunca. La exasperación de las masas era incontenible. Les desbordaban. El gobierno seguía una política de provocación, como si quisiera precipitar las cosas. ¿En qué pararía todo? En una gran desgracia, probablemente. Le argüí en el terreno político y en el personal. No desconocía la bárbara política que seguía el gobierno ni la conducta de los propietarios con los braceros del campo, reduciéndolos al hambre. Ni los desquites y venganzas que, en otros ramos del trabajo, estaban haciéndose. Ya sé la consigna: “comed República” o “que os de de comer la República”. Pero todo eso, y mucho más que me contara, y las disposiciones del gobierno, y la política de la mayoría de las Cortes, que al parecer no venía animada de otro deseo que el de deshacer la obra de las Constituyentes, no aconsejaba, ni menos bastaba a justificar, que el partido socialista y la UGT se lanzasen a un movimiento de fuerza»^[28]. Azaña replicó a De los Ríos, en términos que no dejaban lugar a duda, que era el deber de los líderes hacer que las masas entraran en razón, aun a riesgo de perder su propia popularidad. Sin embargo, a pesar de la intemperancia de su lenguaje, es difícil ver, dada la intransigencia de los patronos, cómo podía la dirección socialista pedir a sus seguidores que fueran pacientes.

De toda Andalucía y Extremadura llegaban informes de provocaciones considerables, tanto por parte de los patronos como de la Guardia Civil. Se burlaba la ley en todas las ocasiones. En Real de la Jara (Sevilla) unos trabajadores que habían robado bellotas fueron golpeados salvajemente por la Guardia Civil. En Venta de Baúl (Granada) los guardas armados del cacique, un cedista, vapulearon a los líderes sindicales locales. En Fuente del Maestre (Badajoz) fue la Guardia Civil la que dio las palizas. Se negaba sistemáticamente el trabajo a los miembros de la FNTT y los salarios habían descendido en un 60 por 100. La ejecutiva de la FNTT había enviado varias peticiones al ministro de Trabajo, Ricardo Samper, para que se aplicase la

legislación social existente. Una delegación fue a visitar a Samper el 8 de enero. No sirvió para nada^[29].

Difícilmente podía sorprender esto dada la composición del gobierno y la naturaleza de su apoyo parlamentario. Al formar su gobierno, Lerroux había buscado la colaboración del partido agrario de José Martínez de Velasco, que representaba a la oligarquía triguera de Valladolid y Burgos. La inclusión de José María Cid, un monárquico agrario, como ministro de Comunicaciones, le causó una crisis de conciencia a Diego Martínez Barrio, el republicano más auténtico de los radicales. La lealtad republicana de los agrarios inspiraba poca confianza más que la de la CEDA. Cuando Martínez de Velasco anunció la decisión de su grupo de adherirse a la República, ocho de sus 31 diputados lo abandonaron en señal de protesta. La izquierda estaba convencida de que los votos de la CEDA en las Cortes daban a los radicales patente de corrupción a cambio de la protección de los intereses materiales de la oligarquía agraria. En diciembre se presentó a las Cortes un proyecto de ley para la expulsión de los campesinos que habían ocupado tierras en Extremadura el año anterior. En enero, la ley de términos municipales fue revocada provisionalmente. La CEDA introdujo también proyectos para mutilar la reforma agraria de 1932, reduciendo la superficie de tierra sujeta a expropiación, y para que se devolviesen las tierras confiscadas tras el levantamiento militar de 10 de agosto de 1932^[30].

El aumento de la «brutalidad preventiva» de la Guardia Civil fue consecuencia de los nombramientos por el gobierno de gobernadores civiles conservadores. De hecho, el mantenimiento de la autoridad se convirtió en una de las mayores preocupaciones de la CEDA en las Cortes. El 26 de enero, Gil Robles y una representación de diputados de la CEDA visitaron a Lerroux para quejarse del desorden. Aunque reconocían que el origen estaba en el desempleo, pedían medidas más severas por parte de las fuerzas de orden. *El Debate* dedicó un editorial favorable a la ley de Hitler de regimentación del trabajo. Se hablaba de que el Ministerio de Justicia iba a establecer campos de concentración para los vagabundos sin trabajo. A los socialistas les preocupaban las pruebas crecientes de que la CEDA estaba elaborando unos ficheros de los trabajadores de todos los pueblos con información detallada de su «grado de subversión», lo que equivalía a su pertenencia a un sindicato. Mientras los choques entre la Guardia Civil y los braceros aumentaban a diario, *El Socialista* comentaba que «nunca, ni en los tiempos de la monarquía, se han sentido los campesinos más profundamente esclavos y

miserables que ahora». El presidente del Tribunal Supremo pidió que se aplicasen los principios de justicia social en el funcionamiento de los jurados mixtos, que ahora habían caído bajo el control derechista. Gil Robles, sin embargo, se alineó abiertamente con los propietarios y la CEDA presentó una propuesta de que se aumentasen los créditos destinados a la Guardia Civil^[31].

En este contexto era difícil para la dirección socialista retener a sus seguidores. Largo Caballero tendía a ceder ante la impaciencia revolucionaria de las masas, aunque su retórica, que éstas aplaudían, era vaga y estaba plagada de tópicos marxistas. Para hacer la revolución, decía, es necesario controlar el aparato del Estado. Si la clase obrera conquistaba el poder, había que armar al pueblo. Para conquistar el poder, había que derrotar a la burguesía. En los discursos de Largo Caballero de principios de 1934 no había ninguna referencia concreta a los acontecimientos políticos del momento ni se daba ninguna fecha para la futura revolución. Sin embargo, insistía en una cosa: en que la lección que se desprendía de la derrota del socialismo europeo, como había mostrado Otto Bauer, era que sólo la destrucción del capitalismo podía terminar para siempre con la amenaza fascista. Sin embargo, es probable que Largo intentase conjurar esa amenaza con su propia amenaza revolucionaria. En un discurso se preguntaba retóricamente si los republicanos del gobierno no veían que con su política estaban dando la idea a la clase obrera de que la lucha legal era inútil. Sólo podían hacer semejante cosa, dijo, si no se daban cuenta de que estaban provocando un movimiento revolucionario^[32].

Puesto que las amenazas y las llamadas de atención de los discursos de Largo Caballero no servían para mitigar las agresiones de los patronos rurales y de la Guardia Civil, las presiones de la base a favor de la radicalización del movimiento socialista continuaron a lo largo de enero y febrero. Reuniones constantes entre las ejecutivas del partido y del sindicato les llevaron casi a un acuerdo. Besteiro siguió varias tácticas para frenar el proceso de bolchevización. Primero afirmó que un cambio de táctica semejante no podía decidirse por el comité nacional, sino que debía plantearse ante el congreso en pleno de la UGT. Los seguidores de Largo querían no ya que un congreso aprobase su línea, sino que, al hacerse públicas las diferencias tácticas, se produjese un cisma del grupo besteirista. Largo superó los obstáculos amenazando con que el PSOE actuaría unilateralmente. El PSOE llegó incluso a nombrar una comisión especial, presidida por Largo y con Enrique de Francisco como secretario, para examinar los aspectos prácticos de la

organización de un movimiento revolucionario^[33]. Entonces, Largo insistió en que la política del PSOE se sometiese al comité nacional de la UGT, que iba a reunirse a finales de enero.

Mientras tanto, Besteiro insistía en que no se avanzara más hacia el radicalismo hasta que no se estableciese un programa revolucionario. Probablemente se trataba de una táctica dilatoria. Prieto y Besteiro se reunieron varias veces para elaborar un programa de este tipo, pero nunca llegaron a un acuerdo. Finalmente, cada uno elaboró un programa separado. Prieto redactó un proyecto en 10 puntos en el que proponía: 1) La nacionalización de «todas las tierras de España». 2) La dedicación del mayor porcentaje posible del ahorro nacional a proyectos de regadío. 3) Reforma radical de la enseñanza pública. 4) Disolución de todas las órdenes religiosas, incautación de sus bienes y expulsión de las que se considerasen peligrosas. 5) Disolución del ejército y reorganización inmediata del mismo sobre una base democrática. 6) Disolución de la Guardia Civil y creación de una milicia popular. 7) Reforma de la burocracia y separación de los elementos desafectos al régimen. 8) Medidas encaminadas al mejoramiento moral y material de los trabajadores industriales, excluyendo por el momento la nacionalización de la industria dada su debilidad incipiente. 9) Reforma del sistema tributario partiendo de la modificación de las cuotas en el impuesto sobre la renta y en las transmisiones hereditarias. 10) Implantación rápida mediante decreto de las medidas anteriores, ratificadas por los órganos legislativos «que libremente se diera el pueblo», y cesación en sus funciones del presidente de la República. Este programa no se publicó hasta quince meses más tarde. Además, se establecían cinco puntos concretos de acción a desarrollar, redactados, según parece, por el propio Largo Caballero: 1) Organización de un movimiento francamente revolucionario. 2) Declaración de ese movimiento en el instante en que se juzgue adecuado, incluso antes de que el enemigo tome precauciones definitivas o ventajosas. 3) Ponerse el partido y la UGT en relación con los elementos que se comprometían a cooperar en el movimiento. 4) Si la revolución triunfase, hacerse cargo del poder político el partido socialista y la UGT, con la participación en el gobierno de representaciones de elementos que hubiesen cooperado de modo directo a la revolución. 5) Desarrollar desde el poder el programa redactado por Prieto. El proyecto de Besteiro era bastante inadecuado. Proponía que se convocase una gran asamblea corporativa que asesorara sobre un programa masivo de regeneración económica nacional y de nacionalizaciones a lo largo de varios años^[34].

El comité nacional de la UGT se reunió el 27 de enero para discutir los diversos proyectos. La ejecutiva se opuso a la línea revolucionaria del PSOE. Besteiro utilizó algunos argumentos curiosos contra el proyecto de Prieto. Afirmó que supondría que los socialistas tendrían que declarar la guerra a la CNT. Llegó a decir que la conquista violenta del poder era contraria al espíritu del marxismo cuyas armas eran la ciencia y la técnica económica. Cuando se sometió a votación, la línea del PSOE fue aprobada por 33 miembros del comité. Sólo el Sindicato Ferroviario Nacional y la FNTT votaron a favor de la ejecutiva, que inmediatamente dimitió en masa. Se eligió una nueva ejecutiva con Anastasio de Gracia de presidente y Largo Caballero de secretario general. Al día siguiente se reunió el comité nacional de la FNTT para examinar la línea revolucionaria. La situación que se planteó fue idéntica. La ejecutiva, todos besteiristas, dimitió en su totalidad y se eligió una nueva comisión de jóvenes caballeristas. Las organizaciones del movimiento socialista iban cayendo en rápida sucesión en manos de la juventud extremista. Una reunión de la Agrupación Socialista Madrileña se llenó de jóvenes socialistas, que aprobaron una moción de censura contra su presidente, Trifón Gómez, obligándole a dimitir. Fue sustituido por un grupo de los bolcheviques más fervientes, Carlos Hernández Zancajo, Santiago Carrillo y Rafael Henche^[35].

El primer objetivo de cualquier movimiento revolucionario organizado por los socialistas sería impedir que la CEDA entrase en el gobierno. Sin embargo, mientras los jóvenes revolucionarios voceaban sus amenazas, Gil Robles iba consiguiendo su fin de llegar al poder gradualmente. Los votos de la CEDA en las Cortes aseguraban que los radicales llevaban a cabo una política aceptable para la derecha, y Gil Robles apoyaba sus exigencias a los radicales con amenazas apenas veladas. Dirigiéndose a los diputados radicales en las Cortes, anunció que si la derecha no podía realizar su programa completo dentro del Parlamento, se vería obligada a trasladar su campo de acción a otra parte. Estas observaciones las hizo en un debate que se había centrado en gran medida en la adopción de una línea revolucionaria por parte de los socialistas. Prieto había afirmado que la postura del PSOE era una consecuencia directa de la violencia diaria llevada a cabo contra la clase trabajadora por los seguidores de Gil Robles. Gil Robles negó que ése fuese el caso, apoyándose en el argumento bastante engañoso de que la CEDA estaba completando sus ambiciones legalmente. Esto era verdad, pero era precisamente la protección de la ley la que hacía posible la violencia a la que se refería Prieto. El debate había comenzado porque cierto número de

diputados de derechas había pedido que el ministro del Interior, el liberal radical Martínez Barrio, emprendiese una acción firme contra los «actos de indisciplina» que venían registrándose en las zonas rurales. Tales «actos» incluían el robo de bellotas y aceitunas por los jornaleros hambrientos. Gil Robles, que consideraba a Martínez Barrio demasiado liberal, pidió seguridades de que el gobierno tomaría medidas contra tal «criminalidad» y se opondría también a las aspiraciones revolucionarias de los socialistas. Ante la indignación de Gil Robles, Martínez Barrio replicó que era su obligación atajar la violencia tanto si partía de la derecha, de la izquierda o del centro. En respuesta a esto, Gil Robles lanzó su amenaza de ir más allá del Parlamento si no conseguía lo que se proponía dentro de éste^[36].

Lo que podían significar sus amenazas se veía ilustrado por los sucesos que en aquellos momentos tenían lugar en otros países. A finales de la segunda semana de febrero el gobierno austríaco comenzó su represión del movimiento socialista. Al informar sobre las luchas en Linz y en Viena, *El Socialista* sacaba las lógicas analogías al afirmar que «el gobierno clérico-fascista inició la ofensiva contra el proletariado». La reacción de la prensa de ACNP al bombardeo de Dollfus sobre el Karl Marx Hof fue entusiástica. Había sido «una lección para todos». Se exhortaba al gobierno español para que siguiese los ejemplos de Italia, Alemania y ahora Austria frente al «desorden». Esta alabanza extravagante de Dollfus provocó una respuesta rápida de los socialistas: «Como siempre, los clericales españoles extienden su certificado de estadista al canciller austríaco después de una represión feroz e inhumana que no tiene que envidiar nada a la crueldad del fascismo italiano ni a los horrores del hitlerismo... Para nosotros, el mejor gobernante no es aquel que fusila a niños y mujeres, como Dollfus». Los socialistas tenían en cuenta las advertencias de Otto Bauer y Julius Deutsch, que empezaron a llenar sus publicaciones. Estaban decididos a no compartir el sino de sus camaradas austríacos. La lectura de la prensa de la CEDA les confirmaba que para evitar el aniquilamiento tendrían que luchar^[37].

La actitud de Gil Robles no servía precisamente para calmar a los jóvenes socialistas. Para ellos, cualquier ataque a la República, tal y como había salido de las Cortes constituyentes, era fascismo y un preludio de ataque al movimiento socialista. El líder de la CEDA mostraba una consistente aversión a declarar su lealtad a la República. El 4 de enero, en las Cortes, evitó un reto directo para que gritase: «¡Viva la República!». En estos casos recurría normalmente a expresiones como «disposición a trabajar dentro de...»,

«acatamiento a...», «deferencia a» la República, e incluso entonces lo menos posible, en los momentos en que se encontraba ante presiones directas y presumiblemente con reservas mentales. Miguel Maura, al que le había escandalizado la aprobación total de *El Debate* de los acontecimientos de Austria, observó que, a pesar de la aceptación de Gil Robles de la existencia de la República, continuaba evidentemente en contacto con Alfonso XIII^[38]. Al líder de la CEDA, sin embargo, no le preocupaba por el momento la restauración de la monarquía. Le interesaba el poder estatal, republicano si era necesario, para llevar a cabo objetivos concretos. Hablando en Pamplona, el 18 de febrero, llegó a admitir: «¿Cuál es nuestra posición? ¿Gobernar con el régimen actual? ¿Por qué no? Un partido político tiene un programa, y ese programa se realiza desde el poder». Los objetivos a seguir cuando consiguiera el poder estatal eran, como había mostrado la conducta de su partido desde su fundación, opuestos a la obra de las Cortes constituyentes. *El Debate* lo subrayaba tres días más tarde al pedir la formación de un frente patronal que se movilizase contra el socialismo^[39].

El compromiso de la CEDA para la promoción de esos intereses de clase quedó demostrado a lo largo del mes de marzo. El hecho más preocupante, desde el punto de vista republicano, fue la calculada eliminación de los miembros más moderados del gobierno a principios del mes. Martínez Barrio expresó la incomodidad que le producía verse forzado a realizar la política de la CEDA. Aunque el ministro del Interior había permitido que la Guardia Civil endureciese su actitud y había nombrado gobernadores civiles de derechas, todo esto no era suficiente para Gil Robles. A los terratenientes no les agradaba la idea de tener a un liberal en un puesto clave para el control social. Los intentos de imparcialidad de Martínez Barrio fueron denunciados como laxitud. Gil Robles retiró su apoyo al gobierno, declarándolo totalmente gastado, y pidió un gobierno que respondiera más de cerca a las fuerzas representadas en las Cortes. Martínez Barrio y otros dos ministros radicales moderados, Antonio de Lara y Zárata (Hacienda) y José Pareja Yébenes (Educación), se vieron obligados a dimitir. El reaccionario y volátil Rafael Salazar Alonso fue nombrado ministro del Interior. Todo ello produjo un cisma del ala izquierda del partido radical, que se convirtió en la Unión Republicana. El resto del partido se encontró aún más prisionero de la CEDA. Éste fue el primer paso de Gil Robles en un hábil proceso de eliminación progresiva de los radicales del camino de la CEDA hacia el poder^[40].

El 11 de febrero, Azaña, en un discurso monumental, había analizado cómo la CEDA estaba consiguiendo subvertir la naturaleza progresista de la República. Gil Robles, dijo el líder republicano, estaba utilizando el deseo de poder de Lerroux para imponer una política estrecha de clase. La revocación contrarrevolucionaria de los modestos intentos de la coalición republicano-socialista de mejorar el nivel de vida de las clases bajas estaba provocando ahora una guerra social. Era trágico que por el desprecio del gobierno hacia la justicia social los socialistas se vieran obligados a adoptar una postura revolucionaria. Azaña consideraba que a la derecha le interesaba provocar a los socialistas a un levantamiento. Una vez que los radicales hubieran utilizado el aparato represivo del Estado para aplastar al proletariado, Gil Robles exigiría que se le dejase gobernar para implantar su Estado corporativo^[41]. Esto fue en gran medida lo que iba a ocurrir entre octubre de 1934 y noviembre de 1935, aunque al llegar el momento Gil Robles iba a calcular mal su puja final por el poder. En una gran medida, los socialistas le estaban haciendo el juego. Muchos de ellos, desde luego, esperaban que nunca fuera necesario poner en práctica el levantamiento con que amenazaban. Hablando en el cine Pardiñas una semana antes que Azaña, Prieto había dejado claro que, al menos para él, el fin de la revolución sería defender la obra de las Cortes constituyentes. Su programa, el mismo que había redactado y presentado a la UGT, no era incompatible con la Constitución^[42]. La evolución de la política en general y el nombramiento de Salazar Alonso en particular mostraron, sin embargo, que no era probable que se cumpliesen las esperanzas de Prieto de que el gobierno modificase su política derechista agresiva.

Además, Prieto, dadas sus reservas en la aceptación de una línea revolucionaria, estaba lejos de ser el más extremista de los socialistas. La juventud, que había conseguido conquistar sindicato tras sindicato, incluso la fortaleza besteirista de los gráficos, se había decidido por la revolución no para revivir la república burguesa, sino para establecer el socialismo^[43]. En la práctica, sin embargo, su revolucionarismo no iba más allá de un izquierdismo verbal infantil. Su propaganda extremista, que no se apoyaba en ninguna preparación revolucionaria seria, se estaba utilizando para justificar una postura cada vez más autoritaria del gobierno. A principios de marzo mordieron el cebo ofrecido por la intransigencia de los patronos y lanzaron una serie de huelgas. Las de la industria del metal y de la construcción terminaron en punto muerto, pero la más importante, la de artes gráficas, terminó con la derrota absoluta de los partidarios de la línea dura.

De hecho fue la disputa de artes gráficas la que reveló hasta qué punto el reciente reajuste en el gobierno marcaba un giro abrupto a la derecha. El 7 de marzo Salazar Alonso declaró el estado de alarma, clausurando las sedes de la Juventud Socialista, de los comunistas y de la CNT. La huelga de artes gráficas había sido provocada por la utilización de mano de obra no sindicada por parte del diario monárquico *ABC*. El propietario de *ABC*, Juan Ignacio Luca de Tena, consiguió que Salazar Alonso le diera seguridades de que el gobierno apoyaría su intento de romper la huelga. Así, cuando los trabajadores expresaron sus deseos de volver al trabajo, Luca de Tena se negó a readmitir a los huelguistas. Salazar Alonso no hizo ningún intento de conciliación entre ambas partes. Estaba decidido a terminar con una huelga que, dijo, hubiera supuesto «el yugo del despotismo rojo». Los periódicos de derechas se aprovecharon del apoyo del ministro y de la crisis de desempleo para despedir a los trabajadores sindicados y crear una fuerza laboral más dócil. La huelga terminó con la derrota de los gráficos socialistas^[44].

La derecha estaba encantada con Salazar Alonso. El día siguiente a la declaración del estado de alarma, su energía fue aplaudida por Gil Robles, que declaró que, mientras defendiera de ese modo el orden social y fortaleciera el principio de autoridad, el gobierno tenía asegurado el apoyo de la CEDA. Sus intenciones quedaron claras en una serie de artículos publicados en *El Debate*, pidiendo medidas severas contra lo que llamaba «la subversión» de los trabajadores que protestaban por las disminuciones salariales. La prensa de la CEDA pidió la abolición del derecho de huelga. El gobierno respondió anunciando que serían suprimidas sin contemplaciones las huelgas que tuvieran implicaciones políticas. Para la prensa de derechas y, desde luego, para Salazar Alonso todas las huelgas parecían caer dentro de esta categoría. El 22 de marzo, *El Debate* se refería a los paros de camareros en Sevilla y de transportistas en Valencia como «huelgas contra España» y recomendaba la adopción de una legislación antihuelga como las de Italia, Alemania, Portugal y Austria. El gobierno intentó extender su aparato represivo aumentando el número de guardias civiles y de guardias de asalto y restableciendo la pena de muerte^[45].

Simultáneamente, se iba revocando la legislación religiosa de 1931-1933. Dentro de esta corriente general, la CEDA pidió al gobierno que introdujese la amnistía para los ataques contra la República, lo que había formado parte del programa electoral de la derecha. El proyecto fue redactado por Gil Robles, el alfonsino Goicoechea, el agrario Martínez de Velasco y el carlista Rodezno.

Puesto que los principales beneficiarios iban a ser los asociados con la Dictadura y con el levantamiento del 10 de agosto, los socialistas y los republicanos de izquierdas intentaron en vano bloquear la medida. Para ellos era la confirmación, si es que se necesitaba una, de que la República estaba siendo conquistada por sus enemigos. Incluso después de que las Cortes aprobasen la amnistía, el presidente de la República retuvo su promulgación temiendo que el ejército se llenase de oficiales que habían manifestado claramente su decisión de derribar al régimen. Durante el fin de semana del 20 al 23 de abril lo estuvo dudando y, finalmente, firmó, haciendo pública una nota en la que expresaba sus reservas^[46].

Mientras el presidente vacilaba, la CEDA tuvo un gesto amenazador bajo la forma de una gran concentración de su movimiento de la juventud, la Juventud de Acción Popular. Se había planeado en poco tiempo, pero en todos sus detalles. Se celebraron cientos de mítines en busca de apoyo y se prepararon trenes especiales con billetes a precios reducidos. En uno de los mítines, Gil Robles hizo algunas observaciones ilustrativas de su estrategia política. El Parlamento era algo repugnante, pero lo aceptaba como un sacrificio necesario para conseguir los fines de la CEDA. La CEDA estaba más a la derecha que ningún otro grupo; sin embargo, podía defender la táctica parlamentaria que hasta entonces había conseguido con éxito revocar la legislación del primer bienio. «Vamos hacia el poder, como sea. ¿Con la República? A mí eso no me importa. Lo contrario sería insensato y suicida»^[47]. Tales afirmaciones sólo podían convencer a la izquierda de que Gil Robles estaba explotando la legalidad republicana lo mismo que Hitler había utilizado la de Weimar. El estilo de la concentración debía mucho a la visita a Alemania de Gil Robles.

Puesto que la concentración coincidía con la crisis política motivada por la amnistía, tenía toda la apariencia de un intento de presionar a Alcalá Zamora mediante una demostración de fuerza. La elección del monasterio de El Escorial, de Felipe II, como lugar de reunión era evidentemente un gesto antirrepublicano. En consecuencia, se convocó una huelga general en previsión a la «marcha fascista sobre Madrid». Significativamente, la dirección en la organización de la huelga la llevó la Izquierda Comunista, trotskista, puesto que los socialistas no querían arriesgarse a un conflicto con la nueva legislación sobre la huelga de Salazar Alonso^[48]. La concentración hizo poco por aquietar los temores de la izquierda. Una muchedumbre de 20 000 personas se reunió bajo una lluvia torrencial en una réplica próxima a

las concentraciones nazis. Juraron lealtad «a nuestro jefe supremo» y gritaron: «¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe!», el equivalente español a *Duce*. Se recitó el programa de 19 puntos de la JAP, poniendo especial énfasis en el punto dos: «Los jefes no se equivocan», un préstamo directo de los fascistas italianos. El tono general fue belicoso. Luciano de la Calzada, diputado de la CEDA por Valladolid, afirmó que España tenía que defenderse contra «judíos, heresiarcas, masones, krausistas, liberales y marxistas». Ramón Serrano Súñer, diputado de la CEDA por Zaragoza y más adelante arquitecto del Estado nacional-sindicalista de Franco, fulminó a la «democracia degenerada».

El punto culminante de la concentración fue, naturalmente, un discurso de Gil Robles. Su agresiva arenga fue recibida con aplausos delirantes y gritos prolongados de «¡Jefe!». «Somos un ejército de ciudadanos... dispuestos a dar la vida por nuestro Dios y nuestra España... —gritó—; el poder vendrá a nuestras manos...; nadie podrá impedir que imprimamos nuestro rumbo a la gobernación de España». Estuvo despectivo con los ejemplos extranjeros, pero sólo porque pensaba que las mismas ideas autoritarias y corporativas podían encontrarse en la tradición española^[49]. «Yo quisiera que ese sentimiento español se exaltara hasta el paroxismo», declaró. Este tono, junto con los desfiles, los saludos y las aclamaciones, fue interpretado por el corresponsal inglés Henry Buckley como un ensayo para la creación de tropas fascistas de choque. En este sentido, parcialmente fracasó. Se esperaban unas 50 000 personas, pero llegaron menos de la mitad, a pesar de las facilidades de transporte, la campaña gigantesca de publicidad y las grandes sumas invertidas. Además, como Buckley observó, «había demasiados campesinos en El Escorial que contaron alegremente a los periodistas que les había enviado el cacique local, con transporte y gastos pagados»^[50].

Lo que hubiera ocurrido si la concentración hubiese tenido más éxito entra en el terreno de la especulación. Puesto que toda la propaganda de la CEDA se dejó en manos de la JAP, no es sorprendente que los socialistas —e incluso los monárquicos— interpretasen las posturas fascistas de la juventud como un indicativo de las predilecciones de sus mayores. Después de todo, estaban teniendo lugar a la sombra de los acontecimientos ampliamente divulgados de Alemania y Austria. Incluso José Antonio Primo de Rivera, jefe de la Falange, describió la concentración de El Escorial como un «espectáculo fascista»^[51].

El desenlace inmediato de la crisis fue que Lerroux dimitió como protesta por el retraso de Alcalá Zamora en la firma de la amnistía y fue sustituido por

Ricardo Samper, un radical ineficaz, incapaz de realizar una política independiente. Lerroux nunca había pensado en la posibilidad de que el presidente aceptase su dimisión. Sin embargo, le dio permiso a Samper para que formase gobierno, pues temía que, si no, el presidente disolvería las Cortes y llamaría a un socialista para presidir las nuevas elecciones. Cándido Casanueva, el líder de la minoría parlamentaria de la CEDA, propuso otra solución: que la CEDA y los diputados monárquicos se uniesen a los radicales para dar un voto de confianza a Lerroux, provocando así la dimisión de Alcalá Zamora. El plan propuesto por la CEDA se vería completado por la elevación de Lerroux a la presidencia de la República^[52]. Se trataba de un intento de Gil Robles para acelerar su avance hacia el poder, puesto que el nuevo presidente le tendría que llamar a él para formar un gobierno. Lerroux era demasiado astuto para caer en la trampa y sabía que era sólo cuestión de tiempo el que volviera a ser primer ministro. En consecuencia, Samper formó un gobierno virtualmente idéntico al de su predecesor y continuó realizando una política grata a la CEDA. Un decreto de 11 de febrero que había desahuciado a miles de yunteros en Extremadura, fue seguido por otro de 4 de mayo que anulaba las expropiaciones que habían seguido al 10 de agosto y por otro de 28 de mayo que dejaba los salarios rurales al capricho de los patronos^[53].

La mayor victoria tangible de los terratenientes promotores de la CEDA fue la revocación definitiva de la ley de términos municipales. El asalto definitivo de esta ley en las Cortes había sido dirigido por los más agresivos de los diputados de la CEDA, Dimas de Madariga (Toledo) y Ramón Ruiz Alonso (Granada), ambos representantes de provincias donde la aplicación de la ley había despertado las iras de los grandes terratenientes^[54]. Su derogación, el 23 de mayo, poco antes de que empezase la recolección de la cosecha, permitía a los propietarios contratar mano de obra portuguesa y gallega con detrimento de los trabajadores locales. Las defensas del proletariado rural se desmoronaban rápidamente ante la embestida furiosa de la derecha. El último vestigio de protección de su trabajo y de sus salarios que tenían los trabajadores de izquierdas en las zonas rurales era el que les proporcionaba la mayoría socialista en muchos ayuntamientos de pueblos y aldeas. Salazar Alonso había empezado ya a destituir a la mayoría con el menor pretexto. Desde el momento en que se hizo cargo del Ministerio empezó a dar órdenes de destitución «donde no se tuviera confianza en el alcalde para el mantenimiento del orden público». Todo esto dejaba a los

trabajadores cada vez más en manos de los matones de los caciques y de la Guardia Civil^[55].

La situación en el campo se estaba haciendo crítica a medida que los propietarios aprovechaban la aprobación oficial para rebajar los salarios y discriminar a la mano de obra sindicada. Incluso *El Debate* comentó la dureza de muchos terratenientes, aunque continuaba abogando porque sólo se diese trabajo a los afiliados a sindicatos católicos. En Badajoz, los jornaleros hambrientos pedían limosna por las calles. El especialista monárquico en cuestiones agrarias, el vizconde de Eza, afirmó que en mayo de 1934 más de 150 000 familias no cubrían ni siquiera las más elementales necesidades de vida. A los trabajadores que se negaban a romper sus carnés sindicales se les negaba trabajo. El boicot de los propietarios a la mano de obra sindical y la célebre campaña de «comed República» iban dirigidos a reafirmar las formas de control social anteriores a 1931 y a asegurar que la amenaza reformista al sistema puesta en marcha por el primer bienio no se repetiría jamás. En muchos pueblos, esta decisión se concretó mediante ataques materiales a la Casa del Pueblo. Un incidente típico tuvo lugar en Puebla de Don Fadrique, cerca de Huéscar, en la provincia de Granada. El alcalde socialista fue sustituido por un oficial retirado del ejército, que estaba dispuesto a terminar con lo que él consideraba la indisciplina de los trabajadores. La Casa del Pueblo fue rodeada por un destacamento de la Guardia Civil y según salían los trabajadores iban siendo golpeados por los guardias y los matones de los propietarios locales^[56].

La respuesta de la FNTT a este desafío es un ejemplo revelador de cómo los recién radicalizados socialistas reaccionaban ante la creciente agresión de los propietarios. Tras la separación de la ejecutiva besteirista el 28 de enero, el periódico de la FNTT, *El Obrero de la Tierra*, había adoptado una línea revolucionaria. La única solución a la miseria de la clase trabajadora rural, mantenía, era la socialización de la tierra. Mientras tanto, sin embargo, la nueva ejecutiva adoptaba una política práctica indistinguible de la de sus predecesores. Envío a los Ministerios de Trabajo, Agricultura e Interior una serie de peticiones para la aplicación de la ley de laboreo forzoso, de los acuerdos laborales, de la rotación estricta del trabajo y de las disposiciones referentes a las oficinas de colocación, así como diversas protestas ante la sistemática clausura de las Casas del Pueblo. Todo esto tuvo lugar durante la tercera semana de marzo. Al no tomarse ninguna medida y al aumentar la persecución de los trabajadores de izquierdas según se aproximaba la

recolección de la cosecha, se envió una petición redactada en términos correctos a Alcalá Zamora, también sin ningún resultado. La FNTT declaró que miles de personas morían lentamente de hambre y publicó una lista interminable de pueblos, con pormenores, donde se negaba trabajo y se atacaba físicamente a los miembros de los sindicatos^[57].

Finalmente, en un estado de desesperación aguda, la FNTT se decidió por la huelga. La decisión no se tomó a la ligera. El primer anuncio de una posible huelga iba acompañado de una petición a las autoridades para que impusiesen el respeto a las bases de trabajo y al reparto equitativo del trabajo^[58].

La comisión ejecutiva de la UGT aconsejó a la FNTT contra la huelga general del campesinado aduciendo varias razones. En primer lugar, la cosecha estaba lista en momentos distintos en cada zona; por tanto, la selección de un día para la huelga iba a plantear problemas de coordinación. En segundo lugar, una huelga general, en lugar de una limitada a las grandes propiedades, causaría dificultades a los arrendatarios y aparceros que necesitaban contratar uno o dos trabajadores. La tercera razón mostraba la persistencia de la tradición reformista de la UGT mucho mejor que las otras dos. Ésta era que las provocaciones de los propietarios y las autoridades serían tales que impulsarían a los campesinos a las confrontaciones violentas. En una serie de reuniones entre las ejecutivas de la UGT y de la FNTT a lo largo de marzo y abril se hicieron esfuerzos para persuadir a los representantes de los campesinos de que adoptaran una estrategia más limitada de huelgas dispersas y parciales. La UGT señalaba que el gobierno declararía que una huelga general era revolucionaria, que se corría el riesgo de una represión terrible que a su vez podría provocar una huelga general a escala nacional que la UGT no estaba en condiciones de convocar. Largo Caballero indicó a los líderes de la FNTT que no esperasen ninguna huelga de solidaridad de los trabajadores industriales. Además, el comité conjunto del PSOE-UGT, nombrado en enero para estudiar los problemas de organización de un movimiento revolucionario, envió mensajes en sus secciones en todas las provincias informándoles de que la huelga de los campesinos no tenía nada que ver con tal movimiento^[59].

La ejecutiva de la FNTT comunicó a la UGT que no seguir los deseos de acción de la base sería abandonarles al hambre, a la persecución política y a los despidos patronales. En consecuencia, un manifiesto de huelga anunció el comienzo del movimiento para el 5 de junio. Antes de recurrir a esta medida, que se hizo ajustándose estrictamente a la ley, anunciándola con diez días de

anticipación, los líderes de la FNTT intentaron todos los procedimientos posibles para que los Ministerios competentes aplicasen lo que quedaba de legislación social. Sin embargo, cientos de peticiones para que se pagasen los salarios de la cosecha del año anterior se amontonaron en el Ministerio de Trabajo sin que se les prestase la menor atención. En toda España las condiciones laborales acordadas por los jurados mixtos fueron simplemente ignoradas. Se atendía a las protestas intensificando la represión. En la provincia de Badajoz, por ejemplo, había 20 000 parados y 500 trabajadores en prisión. En Fuente del Maestre la Guardia Civil se enfrentó violentamente a una típica manifestación provocada por el hambre. Cuatro trabajadores fueron muertos a tiros y varios más heridos. Otros 40 fueron detenidos. En la provincia de Toledo era prácticamente imposible que los afiliados a la FNTT encontraran trabajo. Los que finalmente lo encontraron tenían que aceptar las condiciones más opresivas. Las bases de trabajo habían establecido un salario de 4,50 pesetas por una jornada de ocho horas. Los propietarios pagaban, de hecho, 2,50 pesetas por la jornada de sol a sol. En algunos lugares de Salamanca se estaban pagando salarios de 75 céntimos^[60]. El 28 de abril la FNTT mandó una petición al Ministerio de Trabajo para que remediase la situación, haciendo simplemente que se cumpliera la legislación existente. Como no se hizo nada, el comité nacional de la FNTT se reunió el 11 y el 12 de mayo para decidir la acción huelguística. El manifiesto señalaba que esta medida extrema era la culminación de una serie de negociaciones inútiles y que la preparación de la huelga era legal y abierta^[61].

Los 10 objetivos de la huelga difícilmente podían ser considerados como revolucionarios. Tenían dos objetivos básicos: asegurar una mejora de las condiciones brutales que sufrían los trabajadores del campo y proteger a la mano de obra sindicada de la decisión aparente de la clase patronal de destruir los sindicatos rurales. Las 10 peticiones eran: 1) cumplimiento de las bases de trabajo; 2) obligatoriedad del servicio de colocación con turno riguroso, independientemente de la afiliación política; 3) reglamentación del empleo de máquinas y forasteros para asegurar cuarenta días de trabajo a los trabajadores de cada provincia; 4) medidas inmediatas y efectivas contra el paro; 5) apropiación temporal por el Instituto de Reforma Agraria de las tierras cuya expropiación estaba prevista en la ley de reforma agraria y su arrendamiento colectivo a los desempleados; 6) aplicación de la ley de arrendamientos colectivos; 7) reconocimiento del derecho a relevar a todos los beneficiados por la intensificación de cultivos; 8) asentamiento antes del otoño de los campesinos para los que el Instituto de Reforma Agraria tenía tierras

disponibles; 9) creación de un fondo crediticio para ayudar a los arrendamientos colectivos, y 10) rescate de bienes comunales. Antes del anuncio de la huelga, el ministro de Trabajo, el radical José Estadella Arnó, había negado que existiesen salarios de hambre en el campo y que se negase trabajo a los socialistas. Ahora reconocía que había que hacer algo. Empezó a hacer gestos simbólicos, pidiendo a los jurados mixtos que elaborasen contratos laborales y a los delegados de trabajo del gobierno que informasen de los abusos ilegales de los patronos. Se empezaron también negociaciones con los representantes de la FNTT^[62].

Salazar Alonso, sin embargo, no estaba dispuesto a perder esta oportunidad de asestar un golpe mortal a la sección más amplia de la UGT. Después de todo era el representante político de los terratenientes de Badajoz y colaborador próximo de Gil Robles. En el momento en que las negociaciones en busca de un compromiso entre la FNTT y los ministros de Agricultura y Trabajo empezaban a progresar, publicó un decreto declarando la cosecha un servicio público nacional y la huelga un «conflicto revolucionario». Todas las reuniones, manifestaciones y propaganda conectadas con la huelga fueron declaradas ilegales. Se impuso una censura de prensa draconiana. Se cerró *El Obrero de la Tierra*, que no volvería a aparecer hasta 1936. En el debate de las Cortes sobre la línea dura de Salazar Alonso, los votos de la CEDA, junto con los de los radicales y los de los monárquicos, aseguraron una mayoría favorable al ministro del Interior. Sin embargo, las cuestiones planteadas en el debate eran ilustrativas de lo que se estaba jugando.

José Prat García, diputado del PSOE por Albacete, abrió el fuego con un discurso señalando la naturaleza anticonstitucional de las medidas de Salazar Alonso. Reiteró que la FNTT había seguido el procedimiento legal establecido para declarar la huelga. La aplicación de la legislación existente con un espíritu de justicia social sería más que suficiente para solucionar el conflicto, afirmaba Prat, apelando razonadamente al sentido de justicia de las Cortes. Salazar Alonso, a pesar de que fuera posible una solución pacífica, se había limitado a dar al gobierno vía libre para la represión. El ministro replicó beligerantemente que era una huelga contra el gobierno, basándose en que su objetivo era obligar a que el gobierno actuase. Dijo que no podía haber duda de la naturaleza revolucionaria de la huelga, puesto que los miembros de la ejecutiva de la FNTT eran seguidores de Largo Caballero. Es bastante interesante que Largo Caballero se levantase inmediatamente para negar que él hubiese rechazado la legalidad, confirmando, tal vez, que su retórica

revolucionaria pretendía atemorizar al gobierno y satisfacer las demandas impetuosas de sus propios militantes, sin plantearse nunca seriamente la eventualidad de llevarse a la práctica. Prieto gritó: «¡El hecho concreto es que nos hallamos ante un conato de dictadura!». Cuando Salazar Alonso afirmó, falsamente, como se vio, que el gobierno estaba emprendiendo medidas contra los propietarios que imponían salarios de hambre, Prat replicó que, por el contrario, el ministro había frustrado todos los intentos de conciliación anulando las negociaciones entre la FNTT y los Ministerios de Trabajo y Agricultura. Concluyó afirmando que la huelga iba dirigida solamente a proteger a los trabajadores rurales y a terminar con situaciones como la que existía en Guadix (Granada), donde los trabajadores se habían visto reducidos a comer hierba. José Antonio Trabal Sanz, diputado de la *Esquerra* por Barcelona, señaló que Salazar Alonso parecía considerar los intereses de la plutocracia y el interés nacional como sinónimos. Cayetano Bolívar, diputado comunista por Málaga, afirmó que la provocación del gobierno estaba cerrando las puertas a la legalidad y empujando a los trabajadores a la revolución. Cuando se refirió al hambre de los trabajadores, un diputado de la mayoría gritó que también ellos tenían hambre y querían comer. Así se terminó el debate^[63].

De hecho, Salazar Alonso llevaba bastante tiempo planeando la represión de una posible huelga con el director de la Guardia Civil y con el director general de Seguridad. Por tanto, ni siquiera antes de que la huelga empezase había pensado en la conciliación. Sus medidas fueron rápidas y despiadadas. Liberales e izquierdistas fueron detenidos en los distritos rurales sin hacer distinciones. Incluso cuatro diputados socialistas, junto con numerosos maestros y abogados, fueron detenidos en flagrante violación de los artículos 55 y 56 de la Constitución. Cargaron en camiones a millares de campesinos a punta de fusil y los deportaron a cientos de kilómetros de sus casas, abandonándolos para que volviesen por sus propios medios. Los centros obreros fueron clausurados y muchos concejales y alcaldes, especialmente en Cáceres y Badajoz, fueron sustituidos por delegados del gobierno. El gobierno afirmó que no se había obedecido la convocatoria a la huelga. El número de detenciones y el mantenimiento de la censura durante varias semanas sugieren lo contrario. De hecho, la huelga parece haber sido casi completa en Jaén, Granada, Ciudad Real, Badajoz y Cáceres, y bastante importante en el resto del sur. Sin embargo, los huelguistas no pudieron impedir que los propietarios trajesen mano de obra de fuera, de Portugal, Galicia y otras provincias, con la protección de la Guardia Civil. Se recurrió

al ejército para utilizar las máquinas trilladoras, y la cosecha se recogió sin interrupciones serias. Aunque pronto se puso en libertad a la mayoría de los trabajadores detenidos, los tribunales de emergencia sentenciaron a los líderes obreros prominentes a cuatro o más años de prisión. No se volvieron a abrir las Casas del Pueblo y la FNTT quedó realmente paralizada hasta 1936^[64]. En una batalla desigual, la FNTT había sufrido una terrible derrota.

Efectivamente, Salazar Alonso había conseguido retrasar el reloj a los años veinte. Ya no había sindicatos rurales, legislación social ni autoridades municipales que desafiasen la dominación de los caciques. La CEDA no podía estar más satisfecha de esta última demostración práctica de las ventajas del legalismo. Hablando en Badajoz, Gil Robles dijo: «Mientras los radicales desarrollen el programa de la CEDA, ésta no tiene por que cambiar de actitud. ¿Qué más podemos pedir nosotros?». Dos días después, el 2 de junio, dijo que el gobierno había comprendido perfectamente la política de la CEDA. No podía haber otra razón para la actitud beligerante de Salazar Alonso que las presiones de la CEDA y sus propias predilecciones autoritarias, puesto que, evidentemente, la huelga no había sido un intento revolucionario de hacerse con el poder. Si se hubiera planeado como tal, en lugar de limitarse a objetivos materiales, hubiera sido más ambiciosa y hubiera contado con el apoyo de los trabajadores industriales de la UGT. Eligiendo considerar la huelga revolucionaria, Salazar Alonso pudo continuar su ataque a los ayuntamientos socialistas: al finalizar el conflicto había cesado a 193^[65]. Con su acción decidida y agresiva, el ministro del Interior había infligido un golpe terrible al sindicato más numeroso de la UGT. Había hecho frente a las amenazas revolucionarias de Largo Caballero y, por tanto, había alterado significativamente el equilibrio de poderes a favor de la derecha.

De hecho, las derrotas sufridas, tanto en la huelga de artes gráficas como en la de campesinos, plantearon a los socialistas un grave dilema. La postura beligerante del ministro y el apoyo entusiasta que recibía de Gil Robles confirmaban a la izquierda su convicción de que los radicales estaban realizando las ambiciones autoritarias de la CEDA. Era la misma convicción que había alimentado en gran medida las amenazas revolucionarias de finales de 1933 y principios de 1934. De hecho, cuando para la primavera se vio claramente que esas amenazas, lejos de inhibir a la CEDA y precipitar nuevas elecciones, estaban justificando simplemente el giro a la derecha del gobierno, el ardor revolucionario de Prieto, e incluso el de Largo Caballero, empezaron a enfriarse. El único paso significativo que había dado la izquierda

socialista en la dirección de una estrategia revolucionaria había sido el de adoptar la noción de Alianza Obrera. La Alianza había sido una creación de Joaquín Maurín, líder del semitrotskista *Bloc Obrer i Camperol*. Frustrado en sus intentos de infiltrarse en la CNT y convertirla en una vanguardia bolchevique^[66], Maurín había empezado a abogar por la Alianza Obrera a lo largo de 1933 como la única respuesta válida de la clase obrera a los grandes avances de la derecha autoritaria en España y en otros países. Tras la derrota electoral de noviembre, los socialistas empezaron a mostrar un interés lógico en la noción.

Sin embargo, desde el principio parecía que los socialistas veían la Alianza Obrera como un posible medio de dominar el movimiento obrero en las zonas donde el PSOE y la UGT eran relativamente débiles. Más que un instrumento de base para la unidad de la clase obrera, los socialistas veían la Alianza Obrera como un comité de coordinación de las organizaciones existentes^[67]. En Madrid, la Alianza estaba dominada por los socialistas que imponían su propia política. A lo largo de la primavera y a principios del verano de 1934 bloquearon todas las iniciativas revolucionarias propuestas por el representante de la Izquierda Comunista, Manuel Fernández Grandizo, sobre la base de que la UGT tenía que evitar las acciones parciales y reservarse para la lucha final contra el fascismo. Los debates sobre la huelga de los campesinos lo iban a poner aún más de manifiesto. Una vez que Salazar Alonso había dejado claro que no habría conciliación y que su objetivo era romper la FNTT, la única posibilidad de éxito para ésta era una acción masiva de solidaridad de los trabajadores industriales. Si tal acción hubiera tenido lugar, o hubiese derribado al gobierno o hubiese provocado una confrontación sangrienta entre los sindicatos y las fuerzas de orden. Sin embargo, no declarar la solidaridad industrial iba a ser condenar a los campesinos a la derrota. Enfrentado a la cruda realidad de llevar a la práctica sus amenazas, Largo Caballero se negó a tomar una iniciativa tan peligrosa. Asqueado por una política que sólo podía fortalecer a la derecha, el representante de la izquierda comunista se retiró ostentosamente de la Alianza de Madrid^[68].

Las razones de la precaución de Largo Caballero quedaron claras cuando el comité nacional de la UGT se reunió el 31 de julio para realizar una investigación del fracaso de la huelga de campesinos. Ramón Ramírez, el representante de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, el pequeño sindicato de maestros y profesores de instituto, atacó a la ejecutiva de la UGT

por no acudir en ayuda de los campesinos, acusando virtualmente a Largo Caballero de ser un reformista. Largo señaló que había advertido a Ricardo Zabalza, el secretario general de la FNTT, antes de la huelga de que no se emprendería ninguna acción de solidaridad. Zabalza replicó que sus militantes no le habían dado otra alternativa que seguir adelante con la huelga. Cuando la huelga comenzó y se encontró con dificultades, importaba poco que la UGT hubiera predicho su derrota. Una vez que Salazar Alonso había forzado la confrontación, la UGT tenía que elegir entre asistir al desmembramiento de su sección más importante o arriesgarse a una prueba de fuerza con el gobierno y la derecha. El dilema era terrible. Cuando se planteó, prevalecieron los antecedentes reformistas de Largo Caballero. No estaba dispuesto, dijo, a ver una repetición de la derrota de 1917. Atacó el extremismo frívolo de Ramón Ramírez y, con palabras aplicables a su propia conducta de hacía cuatro meses, declaró que el movimiento socialista debía abandonar su peligroso revolucionarismo verbal. Cuando Ramírez leyó a los asistentes algunos textos de Lenin, Largo replicó que la UGT no iba a actuar en cada ocasión según Lenin o cualquier otro teórico. Con un realismo incontrovertible, el secretario de la UGT le recordó a su joven camarada que la España de 1934 no era la Rusia de 1917. No había un proletariado armado; la burguesía era fuerte. En tales circunstancias, Lenin no recomendaría aventuras revolucionarias. Otras intervenciones en la reunión revelaron la fuerza del pragmatismo reformista dentro de la UGT. La única sección del movimiento socialista que mantuvo el torrente de su ruidosa retórica revolucionaria fue la Juventud Socialista. Aunque los elementos más jóvenes reconocían en Largo su líder espiritual, parece que a él cada vez le molestaba más su extremismo fácil y se quejaba de que «actuaban como les venía en gana, sin consultar a nadie»^[69].

A los revolucionarios más genuinos no les sorprendió en absoluto que el tono beligerante con que los socialistas habían acogido su salida del poder no hubiera provocado ningún cambio fundamental en la táctica de la UGT. Largo Caballero había ido a Barcelona en febrero de 1934 para negociar la formación de la Alianza Obrera con la Izquierda Comunista y el *Bloc Obrero i Camperol*, trotskistas, con los disidentes anarcosindicalistas, los «treintistas» y con varios grupos catalanistas que incluían a la *Unió Socialista* y a la *Unió de Rabassaires*. La CNT se negó a unirse basándose en que «toda la campaña socialista por la insurrección es una plataforma demagógica». Los anarquistas desconfiaban del revolucionarismo del PSOE, especialmente tras la falta de solidaridad mostrada durante su levantamiento de diciembre de 1933. Estaban

convencidos de que lo único que pretendían los socialistas era provocar nuevas elecciones y volver al gobierno en coalición con los republicanos. Un llamamiento público de la CNT a la UGT, a mediados de febrero, para que probase su sinceridad revolucionaria había quedado sin respuesta. Incluso los partidos que sí se unieron a la Alianza se encontraron en seguida con la atadura del cauteloso dominio de la UGT. Dentro del mes siguiente a la creación de la Alianza, la *Unió Socialista de Catalunya* la abandonó en protesta por la tutela de Largo Caballero^[70].

La Izquierda Comunista consideraba también fraudulento el revolucionarismo de los socialistas y rompería con Trotsky en parte por esa creencia. Les parecía que Largo Caballero solamente estaba haciendo el juego de la revolución para mantener su influencia entre los militantes de base y lo único que pretendía era controlarlos, el pecado clásico del «seguidismo»: la táctica social demócrata de flanquear a la vanguardia verbalmente para neutralizar su militancia^[71]. Cuando Manuel Fernández Grandizo se separó temporalmente de la Alianza durante la huelga de campesinos, afirmó ante los demás delegados que la falta de solidaridad de la UGT con la FNTT revelaba «una vez más que la Alianza Obrera no es para los socialistas un organismo de frente único revolucionario, sino algo con que amagar a la burguesía sin llegar a pegarle». La Izquierda Comunista tenía pocos seguidores, pero contaba con un equipo muy competente de teóricos marxistas dirigido por Andrés Nin^[72]. Trotsky les recomendaba que siguiesen la táctica del «entrismo», es decir, que se unieran al PSOE con la esperanza de acentuar su línea revolucionaria. Excepto unos cuantos, el resto de la Izquierda Comunista rechazó las recomendaciones de Trotsky porque estaban convencidos de que no se podía terminar con el control reformista de Largo Caballero. En su lugar optaron por una alternativa marxista válida, esperando que la base socialista terminara por advertir cómo habían sido traicionados y se apartasen de Largo Caballero^[73].

Sin embargo, los trotskistas sí estaban suficientemente de acuerdo con Trotsky como para seguir convencidos de la necesidad de un frente unido contra el fascismo. En consecuencia, continuaron en la Alianza Obrera como el único instrumento potencialmente revolucionario que había en España. En Madrid, la Alianza nunca pudo superar la irresolución de la UGT, y en Barcelona se encontró con el obstáculo casi insuperable de la falta de disciplina de la CNT. La zona donde la Alianza fue un éxito, uniendo la disciplina y el apoyo de las masas, fue Asturias. Había muchas razones para

ello. La CNT asturiana tenía una larga tradición de apoyo a las iniciativas para la unidad de la clase obrera. Los líderes locales de la CNT, Eleuterio Quintanilla y José María Martínez, veían con simpatía las propuestas de los socialistas. El alto nivel de madurez del proletariado asturiano conseguido en las grandes huelgas mineras aseguraba un amplio apoyo de la base a la unidad. Los mineros, tal vez más que los campesinos, se dieron cuenta de la forma violenta en que el capitalismo en crisis podía reaccionar ante la amenaza del reformismo. Tenían pocas dudas de que existía un peligro fascista. El periódico del SMA, *Avance*, dirigido por Javier Bueno, lo reiteraba día tras día. Con la vida sometida a condiciones brutales y con un riesgo constante de muerte violenta, los mineros no tenían miedo a luchar para defender lo que habían ganado a lo largo de años de luchas graduales. La Alianza Obrera asturiana quedó formada definitivamente el 28 de marzo de 1934 con la participación de los socialistas, los anarquistas, la Izquierda Comunista y el BOC, sólo los comunistas quedaron fuera. La Alianza mantuvo una fuerte disciplina, evitando las huelgas esporádicas para conservar su fuerza para el esperado asalto fascista^[74].

Fascista o no, la fuerza de Gil Robles parecía crecer durante el verano de 1934. Después de haber derrotado a los campesinos, el gobierno ya se sintió lo suficientemente seguro como para extender su ofensiva a otro frente. La nueva zona de operaciones iba a ser Cataluña, la región de España donde, a causa del estatuto de autonomía, el ataque a las conquistas de la República había sido menos efectivo. Durante el verano se provocó una crisis a causa de la agricultura catalana, que se desarrollaba de tal forma que parecía que el último bastión republicano iba a ser atacado ahora. La *Generalitat* de Cataluña, en manos de la *Esquerra* republicana, había aprobado la ley de contratos de cultivo, una medida progresista que daba a los arrendatarios cierta seguridad en la posesión y el derecho a comprar las tierras que hubieran trabajado durante dieciocho años. Los terratenientes que arrendaban las parcelas se opusieron implacablemente. El partido conservador catalán, la *Lliga*, que representaba a los terratenientes catalanes y a los industriales, protestó al gobierno central con el apoyo entusiasta de la CEDA. Como consecuencia, se plantearon una serie de problemas constitucionales complejos sobre la competencia del gobierno central para intervenir en Cataluña. El gobierno, bajo la presión de la CEDA, pasó la cuestión al Tribunal de Garantías Constitucionales, cuyos miembros eran predominantemente de derechas^[75].

La izquierda se sintió ultrajada cuando el Tribunal falló a favor de la *Lliga* y en contra de la *Generalitat*. En junio, Azaña dijo en el Parlamento que «así como hoy Cataluña es el último bastión que le queda a la República, el poder autónomo de Cataluña es el último poder republicano que queda en pie en España». La *Generalitat* respondió al reto aprobando de nuevo la ley a mediados de junio, algo que Azaña consideraba su «obligación republicana». El jefe del gobierno, Samper, se inclinaba por la negociación, pero la CEDA presionaba por una línea dura. Gil Robles se oponía incluso a que el asunto se discutiese en las Cortes. Cuando se discutió, pronunció dos discursos pidiendo la aplicación rigurosa de la ley contra la «rebeldía separatista» de la *Generalitat*. Como Samper vacilaba, el apoyo de Gil Robles al gobierno comenzó a debilitarse. A lo largo de la crisis, *El Debate* pedía que el gobierno obligara a los catalanes a someterse. Esta actitud reflejaba el centralismo tradicional de la derecha castellana, aunque derivaba también del hecho de que los terratenientes de la CEDA acusaban cualquier amenaza a sus privilegios^[76].

Esto se demostró claramente el 8 de septiembre, cuando la federación de terratenientes catalanes, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, organizó una asamblea en Madrid. De mala gana, los socialistas convocaron una huelga general^[77]. El Bloque Patronal, que acababa de anunciar su decisión de someter a los sindicatos, publicó instrucciones detalladas para la utilización de esquiroles y sobre las represalias que se tomarían contra los huelguistas. A la asamblea acudieron representantes de todos los grupos de presión importantes de la oligarquía rural: la Asociación General de Ganaderos, la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas, la Asociación de Olivareros, la Confederación Española Patronal Agrícola y muchas organizaciones regionales. La policía preparó la reunión cerrando la Casa del Pueblo y las oficinas de la UGT y arrestando a gran número de socialistas y a otros izquierdistas. La asamblea no se distinguía en nada de las celebradas por los terratenientes de la CEDA. Sus objetivos —la limitación de los derechos de los sindicatos, el fortalecimiento de las fuerzas de autoridad y, más específicamente, el aplastamiento de la «rebelión» de la *Generalitat*— eran los de la CEDA. Gil Robles intervino; el tono de la asamblea podía medirse por las frecuentes ovaciones a los líderes monárquicos agresivos, como Calvo Sotelo y Goicoechea, así como al carlista catalán Joaquín Bau^[78].

La asamblea de propietarios catalanes formaba parte de una campaña orquestada por Gil Robles para mostrar al presidente la insatisfacción de la

derecha con el gobierno de Samper y su reticencia a adoptar métodos más duros. Ya, a mediados de agosto, Gil Robles había decidido aclarar a Samper que su gobierno no era del agrado de la CEDA. El 5 de septiembre previno a Samper y a Salazar Alonso de que iba a anunciar públicamente su descontento con la forma poco satisfactoria con que el gobierno enfocaba el orden público en una concentración de la JAP que tendría lugar el día 9. Durante todo el verano sus propósitos eran del dominio público. El 21 de agosto, *El Socialista* había informado de que Gil Robles intentaba retirar su apoyo a Samper y solicitar su participación en el gobierno. El lugar para la concentración de la JAP iba a ser Covadonga, el punto donde comenzó la reconquista, una elección con un carácter simbólico claramente beligerante. La concentración se parecía bastante a la de El Escorial en la organización y tenía una finalidad similar: la de hacer una demostración de fuerza durante una crisis de gobierno.

La Alianza Obrera de Asturias vio en la concentración una provocación fascista por la que la CEDA iba a forzar su acceso al poder. Se convocó una huelga general, se bloquearon las carreteras de acceso a la provincia y se sabotearon las líneas de ferrocarril. Salazar Alonso organizó dos trenes con personal naval y Guardia Civil de escolta^[79]. Así, la concentración se celebró, aunque en una escala reducida. El líder local de la CEDA, José María Fernández Ladreda, anunció amenazadoramente que «las masas de Acción Popular, pese a quien pese, conquistarán el poder para preparar la redención de España». Gil Robles también habló en términos belicosos de la necesidad de hacer frente a la «rebeldía separatista» de los catalanes y de los nacionalistas vascos, con quienes también había conflictos a causa de la torpeza del gobierno. El jefe supremo de la JAP llegó a alcanzar un éxtasis de retórica patriótica y pidió que se exaltase el sentimiento nacionalista «con locura, con paroxismo, con lo que sea; prefiero un pueblo de locos a un pueblo de miserables». A continuación dijo que la CEDA iba avanzando hacia el poder a pasos de gigante^[80].

En lo que estaba sucediendo había no poco de provocación a la izquierda. Gil Robles sabía que la izquierda le consideraba fascista. También sabía que intentaba evitar su acceso al poder, porque para ella era sinónimo del establecimiento del fascismo. Tenía confianza en que la izquierda no se encontraba en condiciones de triunfar en un intento revolucionario. La actividad constante de la policía había mostrado que los preparativos para un levantamiento eran de lo más irregular. Las compras de armas de la izquierda

habían sido pocas y las autoridades parecían estar bien informadas de ellas. La adquisición más famosa, hecha por Prieto y transportada en el barco «Turquesa», había caído en parte en manos de la policía. El resto no tenía importancia. Las excursiones dominicales de los jóvenes socialistas para hacer prácticas militares, provistos de más entusiasmo que de armas, no asustaban a nadie. Además, Salazar Alonso no tuvo prácticamente ninguna dificultad para prohibir estas actividades^[81]. Sin embargo, la izquierda intentaba impedir que la CEDA accediese al poder. Gil Robles deseaba entrar en el gobierno en cualquier caso, a pesar de que el hecho tendría serias consecuencias. «Más pronto o más tarde habíamos de enfrentarnos con un golpe revolucionario —escribió más tarde—; siempre sería preferible hacerle frente desde el poder, antes de que el adversario se hallara más preparado». Lerroux también conocía este razonamiento, puesto que Salazar Alonso lo había estado pregonando de la forma más descarada durante bastante tiempo. Si la entrada de la CEDA en el gobierno era el pretexto necesario para provocar un intento revolucionario de la izquierda y para justificar un golpe definitivo contra ésta, había que invitar a la CEDA a que entrase en el gobierno. «El problema —dijo Salazar Alonso— era nada menos que iniciar la ofensiva contrarrevolucionaria y proseguir una obra de gobierno decidida, continuada, para acabar con el mal»^[82].

Gil Robles llegó a admitir incluso en aquellos momentos que compartía estas provocativas intenciones. Sabía que la izquierda intentaba reaccionar violentamente a lo que veía como un intento de establecer un régimen semejante al de Dollfus. Sabía también que sus posibilidades de éxito eran remotas. En diciembre, hablando en las oficinas de Acción Popular, dijo: «Yo tenía la seguridad de que la llegada nuestra al poder desencadenaría inmediatamente un movimiento revolucionario..., y en aquellos momentos en que veía la sangre que se iba a derramar me hice esta pregunta: Yo puedo dar a España tres meses de aparente tranquilidad si no entro en el gobierno. ¡Ah!, ¿pero entrando estalla la revolución? Pues que estalle antes de que esté bien preparada, antes de que nos ahogue. Esto fue lo que hizo Acción Popular: precipitar el movimiento, salir al paso de él; imponer desde el gobierno el aplastamiento implacable de la revolución»^[83]. La reunión de Covadonga sugiere que la CEDA estaba ya preparada para saltar.

El momento era el más propicio. Según una fuente informada, «los contactos previos informales con altos elementos militares parecían cubrir cualquier posibilidad de victoria revolucionaria; sin pactos expresos, la CEDA

creía poder contar con el ejército como cobertura *in extremis*..., era conveniente para la derecha que la izquierda acabase de aniquilarse en una algarada otoñal»^[84]. Durante el mes de septiembre había un ambiente tremendo de crisis. En la izquierda, muchos, y no sólo los socialistas, creían que había que hacer algo para detener la erosión de la República. El 30 de septiembre, Martínez Barrio cerraba el congreso de la Unión Republicana, el partido que él había formado con los elementos liberales de los radicales, con un discurso sobre «esta República desfigurada que va camino a ser una república envilecida», «todavía en España, de derecho, el régimen es un régimen republicano; pero de hecho, si lo vamos a juzgar por la fisonomía política y administrativa de los pueblos de España, ya no es un régimen republicano: es un régimen monárquico y dictatorial». La izquierda esperaba que la crisis se resolviera convocando elecciones, y los socialistas empezaron a subir el tono de su retórica revolucionaria como parte de su intento de convencer a Alcalá Zamora de los peligros de dejar entrar a la CEDA en el gobierno^[85].

El 26 de septiembre la CEDA abrió la crisis anunciando que ya no podía apoyar a un gobierno de la minoría. En vista de la debilidad del actual gobierno respecto a los problemas sociales, decía su comunicado, e independientemente de las consecuencias, tenía que formarse un gobierno fuerte con participación de la CEDA. La dimisión de Samper se precipitó, como estaba previsto, el 1 de octubre. Samper anunció a las Cortes que estaba próxima una solución del problema catalán. Gil Robles respondió con un ataque a la falta de decisión del gobierno, pidiendo que fuera sustituido por otro que reflejase la composición numérica de la cámara. La petición iba apoyada por una amenaza que no dejaba lugar a dudas: «Nosotros tenemos conciencia de nuestra fuerza, aquí y fuera de aquí». Alcalá Zamora celebró las consultas normales para la resolución de la crisis. Los republicanos moderados, como Martínez Barrio y Sánchez Román, le aconsejaron que no permitiese la entrada de la CEDA en el gobierno. Los socialistas consultados, Julián Besteiro y Fernando de los Ríos, abogaron por la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Era una decisión difícil. La CEDA era el partido más numeroso de las Cortes, pero, como señaló Besteiro, su programa estaba en franca oposición tanto con el espíritu como con la letra de la Constitución. La decisión de Gil Robles de establecer un Estado corporativo convertía la inclusión de su partido en el gobierno en una amenaza al régimen. Se le dijo a Alcalá Zamora que a causa del poder de presión electoral de la derecha, la fuerza numérica de la CEDA en las Cortes

era una exageración considerable de la expresión numérica de su apoyo popular. En consecuencia, había razones para la disolución y la convocatoria de elecciones. Sin embargo, el presidente decidió encargar a Lerroux de la tarea de formar un gobierno con participación de la CEDA, esperando que ésta se limitaría a un ministro. Gil Robles insistió en que fueran tres, a pesar de los esfuerzos para persuadirle de lo provocativo de su actitud, afirmando que la dignidad de su partido y la necesidad de contrarrestar la «debilidad congénita» de los radicales le obligaban a fijar en tres el número mínimo aceptable^[86].

La provocación no terminaba ahí. El nuevo gobierno se anunció el 4 de octubre y contenía tres cedistas: José Anguera de Sojo (Trabajo), Rafael Aizpún (Justicia) y Manuel Giménez Fernández (Agricultura). Anguera de Sojo era una elección deliberadamente provocadora^[87]. Por una parte, había sido el fiscal responsable de numerosas multas y del secuestro de 100 números de *El Socialista*. Al mismo tiempo, como uno de los miembros más extremistas del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, era enemigo acérrimo de la *Esquerra*, el partido republicano que gobernaba en la *Generalitat*. La elección fue ofensiva a conciencia, puesto que la *Esquerra* mandó una delegación a ver a Alcalá Zamora y pedirle su exclusión. Gil Robles se negó totalmente a las sugerencias del presidente. Aizpún, diputado de la CEDA por Pamplona, era cualquier cosa menos republicano convencido y no ocultaba sus fuertes convicciones tradicionalistas. Giménez Fernández resultó ser uno de los cedistas más moderados; sin embargo, esto no se sabía entonces y no servía para mitigar la inquietud de la izquierda ante la perspectiva de un ministro de Agricultura de la CEDA. La política dura propiciada por los terratenientes seguidores de la CEDA era de sobra conocida y se pensaba que un ministro de la CEDA sólo podía intensificar la terrible represión que había seguido a la huelga de la recolección. Además, se suponía inevitablemente que Giménez Fernández, como diputado por Badajoz, sería un fiel representante de los agresivos terratenientes de aquella provincia, lo mismo que lo había sido Salazar Alonso. Las suposiciones sobre este ministro eran erróneas; las referentes a los terratenientes de Badajoz, ciertas. A causa de su política, relativamente liberal, no fue aceptado como candidato por Badajoz en las elecciones de 1936 y se vio obligado a presentarse por Segovia.

A la luz de la política seguida por la CEDA cuando no estaba en el gobierno, los socialistas estaban convencidos de que el nuevo gabinete iba a

consolidar la tendencia hacia un gobierno autoritario y reaccionario. El 1 de agosto, el comité nacional de la UGT había publicado una denuncia detallada de la situación política desde que los radicales estaban en el poder. Señalaba que de los trescientos quince días de gobierno radical, durante doscientos veintidós el país había estado sometido al estado de alarma oficial, lo que significaba la suspensión de las garantías constitucionales. De los noventa y tres restantes en los que había habido normalidad constitucional, sesenta habían sido durante el período electoral de finales de 1933. La censura de prensa, las multas y los secuestros de periódicos, las limitaciones de los derechos de reunión y asociación, la declaración de ilegalidad de casi todas las huelgas, la protección para las actividades fascistas y monárquicas, la reducción de los salarios y la destitución de los socialistas libremente elegidos para los ayuntamientos suponían, para la UGT, el establecimiento de «un régimen de terror blanco». Sin embargo, Gil Robles había denunciado la debilidad de esta política e intentaba claramente imponer una más represiva. A finales de septiembre, mientras quedaban ligeras esperanzas de persuadir al presidente de que solucionase la crisis convocando elecciones, la prensa socialista recurrió a las amenazas desesperadas. Hablando como si la revolución estuviese perfectamente preparada, *El Socialista* anunciaba que sólo quedaban por atar los últimos cabos para movilizar al ejército de los trabajadores. «El mes que viene —exclamaba— podría ser nuestro octubre». Es inconcebible que Zugazagoitia, director del periódico del PSOE, no supiera que el movimiento socialista no estaba, ni mucho menos, preparado para una confrontación revolucionaria con el Estado. Si la línea de su periódico no era de una irresponsabilidad insensata, y Julián Zugazagoitia, fiel seguidor de Prieto, no era ningún extremista, la amenaza sólo puede interpretarse como la quema del último cartucho dirigiéndose al presidente^[88].

Tres días antes de que se anunciase el nuevo gobierno, De los Ríos hizo la última llamada en favor de un cambio de dirección en la política republicana. Señalaba que en unos momentos en que un número creciente de trabajadores y de elementos de la clase media se volvían hacia el movimiento socialista, la persecución de sus organizaciones, la detención de sus miembros, la clausura de sus sociedades y la destitución de sus alcaldes y concejales formaban parte de una estrategia deliberada para forzarlo a la ilegalidad. Alegando que la entrada de la CEDA en el gobierno desembocaría en una política que había sido la finalidad de la República evitar, pedía al presidente que llamase a los socialistas al gobierno como preludio de nuevas elecciones^[89]. Difícilmente

estos objetivos eran revolucionarios. Lejos de dedicarse a los preparativos finales para la conquista del poder, el comité revolucionario de Largo Caballero pasó los tres días siguientes esperando «con ansiedad» la noticia de la composición del gobierno en el apartamento de Prieto. El propio Largo estaba convencido de que Alcalá Zamora nunca entregaría el poder a la CEDA. A las once de la mañana del 3 de octubre llegaron dos periodistas socialistas, Carlos de Baraibar y José María Aguirre, con la noticia de que se había formado un gobierno con participación de la CEDA. Aunque la noticia no era todavía oficial, varios miembros del comité revolucionario declararon que había llegado la hora de empezar el movimiento. Sin embargo, Largo declaró tajantemente que no lo creería hasta que no lo viese en la *Gaceta*. Sólo la llegada, poco después, de varios soldados anunciando que el nuevo gobierno había proclamado ya la ley marcial le convenció. Incluso entonces, parece que los socialistas se prepararon para la acción de mala gana. Sin embargo, pensaban que no tenían otra alternativa. «La suerte estaba echada», escribió Largo Caballero^[90].

La respuesta de todas las fuerzas republicanas de España, con la lógica excepción de los radicales, al nuevo gobierno fue unánime. Todos declararon que la entrada de la CEDA en el gobierno era un asalto directo a la esencia de la República. Los socialistas no estaban solos en sus apreciaciones sobre la CEDA. La izquierda republicana de Azaña declaró: «El hecho monstruoso de entregar el gobierno de la República a sus enemigos es una traición», y rompió con las instituciones del régimen. Una nota similar de la Unión Republicana de Martínez Barrio se refería a la falsificación de la República. Una de las notas más significativas provenía del Partido Republicano Conservador de Miguel Maura, que era cualquier cosa menos izquierdista y que había formado coaliciones electorales con la CEDA en las elecciones de 1933. En su nota se afirmaba que la política «de entrega de la República a sus enemigos declarados y encubiertos estaba engendrando la guerra civil». La hostilidad pública de la CEDA a los postulados esenciales con que el régimen estaba comprometido provocó que Maura declarase su «incompatibilidad con esta República desfigurada». Es imposible exagerar la importancia de este momento. Aunque las diferencias políticas iban a intensificarse entre octubre de 1934 y el estallido de la guerra civil, la polarización básica de fuerzas que existía en aquellos momentos no iba a sufrir cambios sustanciales. Los partidos que se opusieron a la entrada en el gobierno de la CEDA iban a ser los que resistiesen el levantamiento militar de 1936, y viceversa^[91]. La división en 1934, cómo lo sería en 1936, era entre los que deseaban que la

República reformase las estructuras socio-económicas represivas del régimen anterior y los que defendían esas estructuras.

La decisión de defender el concepto de la República desarrollado entre 1931 y 1933 era la fuerza motriz de los acontecimientos de octubre de 1934. Los resultados inmediatos de la entrada de la CEDA en el gobierno fueron la existencia durante diez horas de una república catalana independiente, una huelga general deshilvanada en Madrid y el establecimiento de una comuna de trabajadores en Asturias. Con la excepción de la revuelta de Asturias, que se mantuvo durante dos semanas de lucha feroz y que debió su «éxito» al terreno montañoso y a la destreza especial de los mineros, la tónica del octubre español fue su falta de entusiasmo. Ningún acontecimiento de ese mes, incluyendo los de Asturias, sugiere que la izquierda hubiese preparado un levantamiento general bien planeado^[92]. Las precauciones de los delegados de la UGT habían impedido, en la mayor parte de España, que las bases ideales de los consejos revolucionarios locales de trabajadores se convirtieran en *soviets* potenciales.

Una vez que comenzaron los acontecimientos de octubre, los socialistas rechazaron la participación de grupos trotskistas y anarquistas que les ofrecieron ayuda para dar un golpe revolucionario en Madrid. Las pocas armas que tenían no se distribuyeron. En Madrid, el 4 de octubre, la UGT comunicó al gobierno con veinticuatro horas de antelación que estaba prevista una huelga general pacífica, posiblemente para dar tiempo al presidente para que cambiase de opinión. Tal y como ocurrieron las cosas, este gesto de compromiso dio al gobierno la oportunidad de detener a los dirigentes obreros y tomar precauciones contra las posibles insubordinaciones en la policía y el ejército. Los socialistas que no fueron detenidos, o se ocultaron, como Largo Caballero, o huyeron al exilio, como Prieto. Las masas fueron abandonadas, malgastando su entusiasmo mientras esperaban en las esquinas que les llegasen instrucciones^[93].

En Asturias, las cosas fueron diferentes. Sin embargo, incluso en Asturias, es significativo que el movimiento revolucionario no empezase en Oviedo, bastión de la burocracia del partido, sino que fuese impuesto desde las zonas periféricas de Mieres, Sama de Langreo y Pola de Lena. Durante toda la insurrección, el presidente del SMA, Amador Fernández, estuvo en Madrid, y el 14 de octubre, sin que la base se enterara, trató de negociar una rendición pacífica^[94]. Los críticos de izquierdas del PSOE han señalado que la revolución fue más fuerte donde la burocracia del partido era más débil: así,

en el País Vasco, por ejemplo, los trabajadores se hicieron con el poder en los pueblos, como Eibar y Mondragón, mientras que Bilbao estuvo relativamente tranquilo^[95]. No hay duda de que fue la militancia espontánea de la base la que impulsó a los líderes locales del PSOE a llevar adelante el movimiento revolucionario. Sabían que sin la solidaridad de resto de España estaban condenados a la derrota, pero, al contrario que la dirección de Madrid, se mantuvieron con sus seguidores. Teodomiro Menéndez, lugarteniente de Prieto, se opuso al movimiento, que consideraba suicida, pero se quedó en Oviedo, siendo capturado y torturado horriblemente por las fuerzas del gobierno. Los mineros lucharon sobre todo con dinamita, puesto que tenían poca munición para las armas que habían capturado. En unos pocos días organizaron el transporte, los hospitales, la distribución de alimentos e incluso los teléfonos. Sometidos a ataques de artillería pesada y bombardeos aéreos, lucharon con un valor indomable, pensando que era mejor morir por el ideal de la república de trabajadores que en el fondo de una mina^[96]. Cuando convergieron hacia Oviedo cuatro columnas militares, el comité revolucionario decidió que el movimiento había sido derrotado y huyó. Sin embargo, los mineros decidieron continuar la lucha. Sabiendo que no quedaban esperanzas, el comité local de Mieres, bajo la dirección de Manuel Grossi, del BOC, y el comité de Sama, bajo la de Belarmino Tomás, del SMA, permanecieron con sus hombres en la esperanza de negociar una rendición más favorable^[97].

La derrota de la comuna asturiana era inevitable desde que se supo que Madrid y Barcelona no se habían levantado. De hecho, en Cataluña, muchos comités de la Alianza Obrera local se apoderaron de sus pueblos y esperaron instrucciones de Barcelona que nunca llegaron^[98]. La iniciativa en Cataluña quedó en manos de los políticos burgueses de la *Esquerra*. Los anarquistas apenas tomaron parte en la revuelta. Por una parte, la CNT se oponía a la Alianza Obrera; por otra, los anarquistas guardaban un profundo resentimiento por la política represiva que había seguido la *Generalitat* contra ellos en los meses previos. Ésta había sido obra del consejero de orden público de la *Generalitat*, Josep Dencás, líder del semifascista y ultranacionalista *Estat Català*. Puesto que el presidente catalán, Lluís Companys, contaba con 3500 guardias de asalto y otros tantos *escamots* armados, la milicia del *Estat Català*, la Alianza Obrera catalana decidió que la iniciativa correspondía a la *Generalitat*. En consecuencia, Companys declaró la independencia catalana el 6 de octubre en un gesto heroico que daba respuesta a las demandas populares de acción contra el gobierno central

y que a la vez impediría la revolución. Joan Lluhí, miembro del gobierno catalán, informó a Azaña de que la *Generalitat* pretendía utilizar su declaración como una contrapartida para negociar su disputa agraria con Madrid^[99]. Como se suponía, siguió una rendición rápida. Aunque la *Generalitat* tenía muchos más hombres armados que los 500 que reunía la guarnición del ejército de Barcelona, Dencás se negó a movilizarlos. Puesto que la clase obrera tampoco tenía armas, el ejército pudo transportar la artillería a lo largo de calles estrechas y la *Generalitat* se rindió en las primeras horas del día 7^[100].

La falta de decisión mostrada por los líderes de la izquierda contrasta notablemente con la conducta de Gil Robles. Desde luego, su política hizo poco, lo mismo durante la revuelta de octubre como después, para borrar las sospechas de provocación deliberada. Si los socialistas buscaban un compromiso el 5 de octubre, no encontraron espíritu de conciliación en el nuevo gobierno radical-cedista, sino más bien la misma decisión de aplastar su movimiento, que era el tema favorito de la propaganda de la CEDA. Gil Robles comunicó a Lerroux que el jefe del Estado Mayor, general Masquelet, conocido republicano, no le inspiraba confianza. Ante su insistencia, la represión del levantamiento de Asturias fue encomendada a los generales Franco y Goded, los dos hostiles a la República. Con la aprobación de la CEDA, Franco insistió en utilizar tropas africanas. Es difícil exagerar el significado de esto. Los valores nacionales que la derecha afirmaba defender descansaban en el símbolo central de la reconquista de España a los moros. Ahora se embarcaba a los mercenarios moros hacia Asturias, la única zona de la península que nunca había estado dominada por la media luna, para luchar contra los trabajadores españoles^[101].

La CEDA insistió en que se aplicase a los rebeldes la política más severa. El 9 de octubre, Gil Robles se levantó en las Cortes para manifestar su apoyo al gobierno y para sugerir que se cerrase el Parlamento hasta que hubiera terminado la represión. De esta forma, la aniquilación de la revolución, que fue particularmente salvaje, tuvo lugar en silencio. No se pudo plantear ninguna cuestión en el Parlamento y la censura de prensa fue total, aunque la prensa de derechas venía llena de historias horribles de la barbarie roja, que nunca fueron demostradas. Más interesantes que las acciones militares fueron para la CEDA las redadas de dirigentes obreros en toda España. Las prisiones se llenaron en zonas donde no había habido movimiento revolucionario, pero donde los terratenientes habían tenido problemas con los braceros. Las Casas

del Pueblo fueron cerradas en ciudades y pueblos de todo el país. Los ayuntamientos socialistas fueron eliminados. La prensa socialista, prohibida. En la misma sesión de 9 de octubre la CEDA votó un aumento de fuerzas de orden y el restablecimiento de la pena de muerte^[102].

Los apologistas de Gil Robles han afirmado que el hecho de no haberse adueñado del poder tras el éxito de la represión muestra su respeto básico por el sistema parlamentario^[103]. Los socialistas, por su parte, sostienen que el éxito relativo del levantamiento de Asturias no le dio oportunidad. Cuatro columnas del ejército con artillería y apoyo aéreo fueron detenidas por mineros mal armados y derrotadas por ellos en dos ocasiones. Las dificultades para pacificar una región no eran buen augurio para un intento de apoderarse de todo el país. El ministro de la Guerra admitió que si hubiera habido levantamientos en otras partes, el ejército no hubiera podido hacerles frente. El ejército se había mostrado suficientemente republicano en espíritu como para que fueran precisos los mercenarios de África. Hay noticias de que al menos un oficial dio orden a sus hombres de que no dispararan contra sus hermanos proletarios^[104]. El 1934 había sido un año en que las direcciones del PSOE y de la CEDA habían entablado una guerra de maniobras. Gil Robles había tenido una posición más fuerte y la había explotado con habilidad y paciencia. Por su relativa debilidad, los socialistas se vieron obligados a recurrir a amenazas de revolución, e incluso esto lo hicieron mal. Tal y como ocurrieron las cosas, y aunque el hecho no se hizo patente durante la represión de octubre, los socialistas fueron salvados del inexorable avance de la CEDA hacia un Estado autoritario por la militancia de su propia base.

CAPITULO V

EL SOCIALISMO EN TENSION: REPRESIÓN, RADICALIZACIÓN

Y EL FRENTE POPULAR

En la perspectiva más amplia, la izquierda española no creyó que el levantamiento asturiano de 1934 hubiera sido una derrota. La convicción de que Gil Robles había intentado establecer el fascismo en España estuvo presente en todas las opiniones posteriores de los izquierdistas sobre el movimiento revolucionario. El balance general, se pensaba, había sido positivo en el sentido de que se había mostrado a Gil Robles que la clase obrera no permitiría el establecimiento pacífico del fascismo. Para muchos hombres de la izquierda, las palabras con las que Belarmino Tomás había explicado a los mineros asturianos la necesidad de rendición se convirtieron en un símbolo. La rendición era simplemente «un alto en el camino»^[1]. Esta actitud fue la adoptada por los trotskistas, el partido comunista ortodoxo y la Juventud Socialista. Por su parte, el PCE se atribuyó públicamente la responsabilidad por Asturias y, al hacerlo, obtuvo considerable gloria entre el proletariado. La atribución era en gran medida falsa. Los comunistas se habían incorporado a la Alianza Obrera de Asturias en el último minuto, tomando la decisión el 11 de septiembre y asegurando realmente su entrada en el comité revolucionario el 4 de octubre. Sin embargo, dado que el PSOE era reacio a aceptar la responsabilidad, la red clandestina de prensa del PCE tuvo bastante éxito en sus afirmaciones^[2].

El movimiento socialista quedó, de hecho, bastante marcado por los acontecimientos de octubre. Aunque la insurrección hubiera sido una «victoria objetiva», seguía siendo una derrota inmediata. La mayoría de los socialistas destacados estaban en la cárcel o exiliados en Francia o en Rusia. En Asturias se prosiguió una lucha de guerrillas deshilvanada hasta principios de 1935, pero en el resto de España el movimiento quedó acobardado^[3]. Se amplió la vigilancia policial. Se utilizó la tortura en los interrogatorios. Los alcaldes y concejales socialistas fueron sustituidos por delegados del gobierno. Se cerraron las Casas del Pueblo. Los sindicatos, aunque no se desmantelaron formalmente, eran incapaces de cumplir sus funciones. Toda la ejecutiva de la UGT estaba en la cárcel, excepto el presidente, Anastasio de

Gracia, y Manuel Lois. Todos los jueves se celebraran reuniones en la prisión en un intento de mantener viva la UGT. Se silenció a la prensa socialista^[4].

Largo Caballero declaró ante el juez militar que investigaba su caso que no había tomado parte en la organización del levantamiento. Teniendo en cuenta el fracaso del movimiento en Madrid, era una afirmación totalmente plausible. Sin embargo, hacía directamente el juego a los comunistas, que estaban deseando asumir la responsabilidad. José Díaz, secretario general del PCE, visitó a Largo Caballero en la cárcel y le sugirió que el PCE y el PSOE se atribuyesen conjuntamente haber organizado la revolución. Largo se negó. Más adelante se afirmó que el líder socialista había negado su participación para impedir que su admisión de culpabilidad se utilizase para justificar que la CEDA llevase adelante su decisión de aplastar tanto al PSOE como a la UGT^[5].

Puede que, efectivamente, la admisión de responsabilidades hubiese sido un gesto romántico fútil y que sólo hubiese servido para hacerle el juego a la justicia burguesa. Sin embargo, en el contexto político de 1935 era una táctica potencialmente perjudicial para el ala caballerista del movimiento socialista. En primer lugar, daba credibilidad a la alegación comunista de que los acontecimientos de octubre mostraban que el PSOE no era un partido revolucionario y que Largo Caballero era incapaz de dirigir una revolución. Además, al negar la participación fortalecía en gran manera el ala prietista del partido. Las únicas partes de España donde los trabajadores habían emprendido una acción efectiva en octubre de 1934, es decir, Asturias y parcialmente Vizcaya, eran aquellas en las que el movimiento socialista estaba dominado por los seguidores de Prieto. Esta influencia, desde luego, no había sido la única que había dictado el curso de los acontecimientos, e incluso, al principio, los líderes prietistas habían sido reacios a lanzarse a una insurrección. Sin embargo, una vez que la base mostró su decisión, Ramón González Peña, Belarmino Tomás y otros dirigentes del SMA habían estado al lado de sus hombres, lo que contrastaba profundamente con el espectáculo penoso que habían dado en Madrid Largo Caballero y la Juventud Socialista. Allí, en cuanto se vio claramente que las amenazas revolucionarias no habían disuadido a Alcalá Zamora de llamar a la CEDA al gobierno, los líderes socialistas se ocultaron. No se repartieron armas y las masas fueron abandonadas sin instrucciones. No se habían hecho planes serios para una insurrección y se había impedido que la Alianza Obrera formase una milicia armada. Amaro del Rosal, uno de los jóvenes socialistas más extremistas y al

mismo tiempo uno de los supuestos líderes de la proyectada revolución, negó su participación. En cierto modo estaba diciendo la verdad. Cuando Manuel Fernández Grandizo, de la Izquierda Comunista, preguntó a Del Rosal, el 5 de octubre, cuáles eran los planes del comité revolucionario, según algunas versiones, el líder socialista replicó: «Si quieren armas, que las busquen, y hagan lo que les de la gana»^[6]. Los acontecimientos de octubre se iban a convertir en el mito central del movimiento socialista, y la conducta de los caballeristas entregaba, de hecho, el monopolio de ese mito a Prieto.

La facción reformista que seguía a Besteiro tenía cada vez menos influencia dentro del movimiento socialista. En unos momentos en que la política revanchista de la coalición radical-cedista estaba provocando la militancia de la base, la conocida hostilidad de los besteiristas a las tácticas revolucionarias tendía a dejarles aislados. Una muestra de la distancia que separaba las alas derecha e izquierda del movimiento socialista nos la ofrece el hecho de que durante los acontecimientos de octubre un grupo de extremistas de la Juventud Socialista asaltase la casa de Besteiro. Lógicamente, entristecido por esto, el profesor se retiró virtualmente de la escena política durante algún tiempo a principios de 1935^[7]. De hecho, los ataques renovados a la posición revisionista de Besteiro y las peticiones para que se le expulsase del partido terminaron por provocar que sus seguidores emprendiesen su defensa contra los jóvenes bolchevizantes. Pero esto no ocurriría hasta junio de 1935, y en los meses siguientes a la insurrección la división crucial en las filas socialistas fue entre Largo Caballero y Prieto.

Aunque los dos adoptaron una postura más o menos revolucionaria tras la derrota electoral de 1933, está lejos de ser paradójico que en 1935 nos los encontremos enzarzados en una lucha por el legado del levantamiento de octubre. Siempre desde la desastrosa huelga general de 1917, las distintas facciones del movimiento socialista solían adoptar ciertos esquemas básicos de conducta en los momentos de crisis. Las previsiones marxistas ortodoxas a largo plazo de Besteiro terminaban normalmente por abogar en favor de que la clase obrera se abstuviese de la política burguesa. Prieto y Largo Caballero habían sido siempre más pragmáticos, aunque de forma distinta. Prieto valoraba la democracia como un fin en sí misma y estaba a favor de un avance gradual en la vía hacia el socialismo en España. Largo tenía unas miras más estrechas, estando siempre a favor de lo que fuese más ventajoso para el movimiento sindical. Los beneficios concretos para la UGT le habían llevado a colaborar con Primo de Rivera, y la retirada de militantes del

sindicato, a unirse a Prieto en el campo republicano. Mientras fueron posibles los avances sociales, no hubo defensor más ferviente de la República que Largo Caballero. Sólo cuando la oposición total de la derecha empezó a hacer imposible la reforma cambió la actitud de Largo. Empezó a adoptar una postura revolucionaria por dos razones. En primer lugar, esperaba atemorizar a la derecha para que tuviese una actitud más flexible. A continuación descubrió que su nueva línea encontraba un eco favorable en las masas. Antes que arriesgarse a perder su apoyo frente a la CNT o los comunistas prefería darles lo que querían oír. Así, en 1934, llegó a coincidir con Prieto, que abogaba por la revolución porque creía que la República se veía amenazada por las tentativas dictatoriales de Gil Robles.

Después del levantamiento asturiano, al haberse contenido momentáneamente las ambiciones más amplias de la derecha, Prieto esperaba reconstruir la República según las líneas establecidas entre 1931 y 1933. Largo Caballero, sin embargo, a pesar de todas sus vacilaciones de octubre, empezó a mostrar un compromiso creciente hacia una postura revolucionaria, al menos en el aspecto retórico. Tenía varias razones para ello, entre ellas un resentimiento personal acusado contra Prieto^[8]. También parece que Largo leyó por primera vez muchos textos básicos del marxismo-leninismo durante su permanencia en la cárcel. Si, por una parte, a Largo le influyeron sus lecturas, por otra, se vio igualmente impresionado por el hecho de que la política agresiva llevada a cabo por el gobierno radical-cedista había minado seriamente la fe de la clase obrera en las posibilidades reformistas de la República.

Las primeras iniciativas en la lucha dentro del movimiento socialista vinieron de Prieto, que no ocultaba su convicción de que el fin inmediato de la izquierda tenía que ser una amplia coalición que asegurase el éxito electoral en el futuro. Sus opiniones provisionales sobre el tema se habían visto confirmadas a mediados de enero por Azaña, con el que había mantenido correspondencia desde finales de noviembre. La idea estaba siendo ya favorablemente examinada por los miembros de la ejecutiva del PSOE que no estaban en la cárcel. El 20 de marzo, uno de ellos, Juan Simeón Vidarte, le escribió a Prieto invitándole a que sometiese sus ideas sobre el tema a la comisión^[9]. Cosa que hizo el 23 de marzo. Concedía especial importancia a la necesidad de una alianza amplia con las fuerzas tanto a la derecha como a la izquierda del movimiento socialista. Lógicamente, a la luz de la experiencia asturiana, a varios militantes les entusiasmó la idea de un bloque totalmente

proletario. Prieto, sin embargo, señalaba que sería difícil llegar a un acuerdo con los anarquistas y con los comunistas. Mostraba también que la exclusión de los republicanos llevaría a una contienda entre tres bandos que, inevitablemente, supondría la pérdida de escaños parlamentarios. Con la posible excepción de la participación electoral de los anarquistas, en lugar de su abstención, si no se conseguía la alianza con los republicanos de izquierdas, en las próximas elecciones se lucharía en las mismas condiciones que en las de 1933. La carta de Prieto mostraba también su decisión de no dejar que el partido cayese en manos de la juventud extremista, lo que, según apuntaba discretamente, llevaría a una preponderancia no socialista y presumiblemente comunista. La Federación de Juventudes Socialistas, decía, tendría que disciplinarse. Prieto estaba francamente preocupado por los efectos que estaban produciendo en la FJS los intentos comunistas de atribuirse el monopolio revolucionario. En lugar del rechazo negativo de la República que propugnaba la Juventud Socialista, Prieto proponía su recuperación por medio de una coalición electoral que suscribiese los 10 puntos del programa reformista que él había elaborado en enero de 1934 y por el compromiso de promulgar la amnistía para los presos políticos^[10].

Su propuesta era realista y se basaba en el conocimiento de la fuerza y la falta de escrúpulos de las oligarquías terrateniente e industrial. Su debilidad estaba en el hecho de que precisamente había sido la tímida política reformista del primer bienio la que había provocado la beligerancia de la derecha. Sin embargo, aunque esto pueda hacer suponer que los problemas estructurales de España requerían una solución revolucionaria, no invalida la afirmación básica de Prieto. La mayoría de los problemas de los socialistas derivaban del error táctico de 1933. Fuera del gobierno no podían introducir ningún cambio reformista ni revolucionario. Puede que octubre hubiese servido como movimiento defensivo para contener las ambiciones dictatoriales de la CEDA, pero había revelado la incapacidad de los socialistas para organizar una revolución. Dadas las circunstancias objetivas, quedaban abiertas dos posiciones válidas a la izquierda: la que sugería Prieto, la vuelta al poder y el avance gradual hacia el socialismo, y la que defendían los trotskistas, que reconocían la incompetencia revolucionaria tanto del PSOE como del PCE y pretendían la construcción a largo plazo de un partido bolchevique genuino. Ambos análisis coincidían en la necesidad de una victoria electoral previa^[11]. Aunque contradictorias, las dos políticas eran coherentes y más realistas que el revolucionarismo utópico de la FJS.

La carta de Prieto de 23 de marzo fue reproducida y distribuida a todo el movimiento socialista. Suscitó una respuesta favorable de los militantes moderados y enfureció al ala izquierda del partido, que empezó a preparar respuestas. Mientras tanto, Vidarte, seguidor de Prieto, que dirigía virtualmente el partido en ausencia de otros líderes, hizo pública una importante circular del partido el 30 de marzo^[12]. Partiendo de la carta de Prieto, la circular intentaba mostrar cómo la República había supuesto un progreso considerable en relación con la monarquía. Afirmaba también que el levantamiento de octubre había sido un intento popular de defender la legislación de la República, amenazada por la oligarquía. «No somos un partido demagógico, ni motinesco, ni terrorista, ni aventurero», decía Vidarte. Puesto que era seguro que la derecha iría unida a las próximas elecciones, la comisión ejecutiva del PSOE recomendaba que las organizaciones socialistas locales mantuviesen buenas relaciones con los republicanos y con otros grupos de izquierdas. La circular era un alegato inteligente a favor de la utilización de las posibilidades legales para defender al movimiento socialista y a la clase obrera.

Por mucho que enfureciese a la izquierda socialista, la línea de Prieto encantó a los republicanos de izquierdas y de centro. Los ataques torpes y virulentos de Gil Robles y Lerroux a Azaña habían impulsado, para marzo de 1935, a las fuerzas republicanas que no estaban en el gobierno a pensar en su supervivencia futura. A finales de mes, la Izquierda Republicana, de Azaña; la Unión Republicana, de Martínez Barrio, y el Partido Nacional Republicano, conservador, de Felipe Sánchez Román, habían llegado a un acuerdo. El 12 de abril, cuarto aniversario de la caída de la monarquía, publicaron una declaración conjunta sobre las condiciones mínimas que consideraban esenciales para la reconstrucción de la coexistencia política en España. Las siete condiciones eran: prohibición de la tortura de prisioneros políticos; restablecimiento de las garantías constitucionales, especialmente las referentes a las libertades personales; puesta en libertad de los detenidos durante los acontecimientos de octubre; terminar con la discriminación contra funcionarios estatales liberales y de izquierdas; readmisión en sus empleos de los trabajadores despedidos a causa de la huelga de octubre de 1934; existencia legal de los sindicatos, y restitución de sus puestos a los alcaldes y concejales libremente elegidos que habían sido destituidos por el gobierno^[13]. Este programa no era tan ambicioso como el plan de Prieto en enero de 1934, pero era también aceptable para los socialistas moderados.

Ya el 31 de marzo, Prieto había recibido una carta, apoyando su posición, de Ramón González Peña, el héroe nacional de octubre. Peña condenaba la actitud «infantil» de la FJS y se mostraba partidario de un amplio frente antifascista en las próximas elecciones^[14]. Copias de la carta circularon ampliamente en el partido socialista, con gran amargura de los caballeristas. Confiando en que contaba con el apoyo de la prestigiosa sección asturiana del movimiento, así como con el del País Vasco y el de los moderados, que en aquellos momentos dirigían la ejecutiva del PSOE, Prieto hizo público su acuerdo de principio con el manifiesto de la alianza Azaña-Sánchez Román Martínez Barrio. El 14 de abril, Sánchez Román y Prieto publicaron sendos artículos sobre la necesidad de una amplia coalición en el periódico de Prieto, *El Liberal*, de Bilbao. Por encima de todo, Prieto condenaba la táctica suicida de haber ido solos a las elecciones de 1933, cuando la ley electoral había sido específicamente elaborada para sacar el máximo beneficio de la colaboración republicano-socialista. A la luz de lo que Gil Robles había hecho con su exigua victoria, quedaban pocas dudas de que otra derrota de la izquierda significaría el fin de la democracia en España. Incluso si se conseguía una unión electoral, escribía Prieto, la victoria estaba lejos de ser segura, dado el aparato masivo de propaganda de la derecha y el hecho de que la crisis de desempleo hiciera fácil la compra del voto de los hambrientos. Citando su carta a la ejecutiva del PSOE, Prieto apelaba al realismo y pedía la creación de una amplia alianza para la defensa de la República, del movimiento socialista y para la liberación de miles de presos políticos^[15].

Pocos días después del artículo de Prieto, la juventud radical lanzó un contraataque en toda regla bajo la forma de un folleto largo, titulado *Octubre-segunda etapa*, firmado por el presidente de la FJS, Carlos Hernández Zancajo. De hecho, el folleto había sido escrito en la cárcel modelo por Hernández, Santiago Carrillo y Amaro del Rosal y aprobado por la ejecutiva de la FJS. La publicación tenía tres objetivos principales: disimular el fiasco de la participación de la Juventud Socialista en los acontecimientos de octubre en Madrid, combatir la interpretación de Prieto del levantamiento de Asturias como un intento de defender la República y erradicar la influencia de Besteiro y Prieto dentro del movimiento socialista como un preludio a su «bolchevización». La primera parte del folleto, redactada por Carlos Hernández, consistía en una interpretación, mendaz en su mayor parte, de las actividades de los socialistas en 1934. Se alegaba en él que huelgas como la de los impresores, la de la construcción, la de los metalúrgicos y la de los campesinos habían disipado las energías de la clase obrera. Esto era verdad,

pero lo que el folleto no mencionaba era que la organización sindical, culpable de esos errores tácticos, estaba dominada en aquellos momentos por miembros de la FJS. La responsabilidad por la derrota inmediata de octubre se atribuía con firmeza a los reformistas de Besteiro. Esto se utilizaba para justificar la «segunda etapa» del título del folleto, la expulsión de los reformistas y la «bolchevización» del PSOE. Este proceso supondría la adopción de una estructura de mando rígidamente centralizada y la creación de un aparato ilegal que preparase una insurrección armada. La parte del folleto dedicada a la necesidad de una bolchevización corría a cargo de Santiago Carrillo^[16]. Este plan nunca se llevó a cabo, en parte porque la fuerza del apoyo a Prieto y a Besteiro lo impidió y además porque sus defensores se unieron al partido comunista antes de que estuvieran en posición de intentarlo. Conscientes del apoyo asturiano de Prieto, la Juventud Socialista no se atrevió a pedir su expulsión, pero pidió que abandonase su línea «centrista» en favor de una revolucionaria^[17].

Octubre-segunda etapa no fue tan fundamental al gran debate socialista de 1935 como se ha afirmado^[18]. Largo Caballero, a pesar de que en el folleto era objeto de desmesuradas alabanzas, afirmó que le había molestado su publicación, preparada sin su consentimiento, y protestó ante Santiago Carrillo, entonces secretario general de la FJS. El mismo Carrillo admitió que la Juventud actuó con total independencia del PSOE^[19]. Durante el debate se hicieron pocas referencias al folleto, excepto para amonestar a la juventud por su temeridad al atreverse a dar órdenes a sus mayores y, sobre todo, por tratar de silenciar la democracia interna del partido. A los pocos días de la publicación del folleto, Manuel Cordero, que se había alineado con Prieto, desautorizó públicamente las ideas que contenía. En una entrevista ampliamente difundida en la prensa republicana, Cordero reafirmaba el compromiso del PSOE con la democracia. Indicaba también que en el partido había sitio para todo tipo de tendencias doctrinales y para constante debate y revisión ideológica, un rechazo claro del tipo de exclusivismo estrecho defendido por los «bolchevizantes»^[20].

La defensa de Prieto del entendimiento con los republicanos y el continuado compromiso caballerista en favor del revolucionarismo parecen haber sido los dos polos principales del pensamiento socialista en la primavera de 1935. Sin embargo, casi al mismo tiempo de la publicación por la FJS del folleto de octubre, Besteiro empezaba a romper su silencio. Su grupo se había opuesto al levantamiento, pero desde entonces habían tratado

de ayudar a los socialistas presos. Sin embargo, habían sido objeto de ataques insultantes por la publicación clandestina de la FJS, *UHP*, y las peticiones de que se les purgase del partido se hacían cada vez más estridentes^[21]. En gran parte como reacción a las demandas del movimiento de la juventud para que se les expulsase, los besteiristas se vieron obligados a buscar una publicación en la que defender sus ideas. Con el nombre de *Democracia* apareció semanalmente del 15 de junio al 13 de diciembre. Dada su línea moderada y el hecho de que sobre todo se refería a asuntos internos del PSOE, el ministro del Interior, Manuel Pórtela Valladares, permitió su aparición, lo cual fue interpretado por los «bolchevizantes» como una prueba de la traición besteirista a la causa socialista^[22].

Seis semanas antes de la aparición de *Democracia*, el propio Besteiro había entrado en la lucha. El 28 de abril pronunció su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, sobre el tema «Marxismo y antimarxismo». Desgraciadamente para Besteiro, había sido elegido en la Academia para ocupar la vacante producida por Gabino Bugallal, en otro tiempo jefe del viejo partido monárquico conservador, célebre por la severidad con que había actuado contra los socialistas después de 1917. El protocolo exigía que Besteiro hiciese un elogio formal de su predecesor. Ese elogio, junto con el contenido de su discurso sobre el marxismo, le supuso una intensificación de la hostilidad de los izquierdistas del PSOE, lo que no era de sorprender, puesto que su discurso constituía una crítica directa de los «bolchevizantes». Besteiro intentó demostrar que el marxismo justificaba al socialismo democrático y que Marx había sido hostil a la noción de dictadura del proletariado. Aunque Besteiro tenía fama de ser el teórico más preparado del PSOE, su marxismo no iba mucho más allá de las posiciones de Kautsky. Rechazaba el pensamiento de Lenin y de Trotsky de forma apresurada, y su análisis del fenómeno fascista era bastante flojo. Sus insinuaciones de que la violencia de la izquierda socialista era difícilmente distinguible de la del fascismo no le granjeó precisamente la simpatía de los caballeristas^[23].

Luis Araquistáin, el consejero teórico más competente de Largo, se encargó de darle respuesta en la revista doctrinal *Leviatán*, que había sobrevivido a la represión de los medios de comunicación socialistas. En una serie de tres largos artículos, Araquistáin demolía los argumentos de Besteiro con vigoroso sarcasmo. Besteiro había defendido a los socialistas que habían terminado por convertirse en políticos burgueses, tales como Millerand, Briand, Ramsay MacDonald, Philip Snowden e incluso Mussolini. Todo ello

formaba parte de su teoría gradualista del socialismo, según la cual la sociedad burguesa sería «impregnada». Un buen ejemplo de la impregnación de la sociedad burguesa por las ideas socialistas era el *New Deal*, de Roosevelt. Araquistáin señalaba que esto era fabianismo y que había poco marxismo válido en el pensamiento de Besteiro. El hecho de que Besteiro pareciera ignorar la relación estrecha entre el capitalismo burgués y el fascismo mostraba, según Araquistáin, que el marxismo del profesor era de lo más endeble. El consejero de Largo reafirmaba la naturaleza revolucionaria del marxismo y la necesidad temporal de una dictadura del proletariado, al tiempo que rechazaba el «seudomarxismo» de Bernstein y Kautsky, con los que asociaba a Besteiro^[24]. Los dos artículos escritos por Besteiro como respuesta protestaban por la vehemencia del tono de Araquistáin, pero no daban ninguna contestación a los problemas planteados en *Leviatán*^[25].

Los artículos de Araquistáin tenían una competencia teórica notablemente más alta que el panfleto inflamatorio publicado por la FJS en abril. En gran medida, la victoria de Araquistáin confirmó la pérdida de opción para Besteiro en la jefatura del PSOE. A pesar de que *Democracia* continuó apareciendo, Besteiro dejó de ser un candidato serio a la dirección del socialismo español. Ya no volvería a surgir como figura importante hasta su participación en el golpe de Casado para terminar la guerra civil en marzo de 1939, aunque esto no le salvó de una muerte cruel en una prisión franquista. A lo largo de 1935 los lugartenientes de Besteiro tendieron a alinearse con Prieto. Curiosamente, *Leviatán*, aunque muy próximo a la izquierda socialista, no dirigió nunca realmente un ataque global a Prieto. Había varias razones para ello. Por una parte, Araquistáin era mucho más responsable que los dirigentes de la Juventud Socialista, que habían publicado *Octubre*. Por otra, puesto que la preocupación fundamental de la revista era el análisis del fascismo y la búsqueda de una respuesta válida de la izquierda ante el fenómeno, Araquistáin no podía ignorar el sentido común fundamental de las llamadas de Prieto a la unidad^[26]. Pronto se ocuparía el periódico *Claridad* de la lucha contra Prieto.

De hecho, en plena polémica entre Araquistáin y Besteiro, Prieto hizo una exposición de sus opiniones que tuvo bastante resonancia a lo largo de cinco artículos publicados a finales de mayo en *El Liberal*, de Bilbao; *La Libertad*, de Madrid, y otros varios periódicos republicanos de provincias. Titulados colectivamente «Posiciones socialistas», los artículos se publicaron poco después como libro^[27]. Sus principales preocupaciones eran las de reafirmar

la necesidad de evitar el gran error táctico de 1933 y contestar a algunas de las acusaciones más ofensivas de *Octubre-segunda etapa*. En el primero rechazaba la afirmación de la ejecutiva de la FJS de que debía mantener silencio, sobre la base de que ellos no habían tenido escrúpulos en dividir las filas socialistas con su folleto y de que había razones para creer que, en áreas como Asturias, la ejecutiva de la FJS no contaba con el apoyo de la base. En el segundo mostraba cómo la alianza electoral propuesta sería mutuamente benéfica para socialistas y republicanos. Rechazaba también las críticas de la ley electoral que favorecía este tipo de coaliciones con una velada referencia al hecho de que Largo Caballero había sido uno de sus defensores más fervientes cuando se presentó el proyecto^[28]. Finalmente, Prieto señalaba que, puesto que la derecha iría unida a las próximas elecciones y una coalición obrera sería víctima de la indisciplina anarquista, no había otro medio para garantizar la amnistía de los prisioneros políticos. Los últimos tres artículos estaban dedicados a exponer algunas de las contradicciones más absurdas de *Octubre* en un lenguaje suave pero firme. Rechazaba el derecho de unos jóvenes inexpertos a pedir la expulsión de militantes que habían dedicado sus vidas al PSOE. Con cierta aversión señalaba que las acusaciones lanzadas contra varias secciones del movimiento socialista por el folleto eran aplicables en su mayoría a la propia FJS. Por encima de todo, denunciaba las tendencias dictatoriales de la FJS y proponía un congreso del partido para fijar la dirección que debía seguir el movimiento.

Era, pues, una condena del extremismo juvenil que contrastaba abiertamente con la complicidad de Gil Robles con las estridentes ambiciones de las JAP. No es de sorprender que provocase la indignación de la izquierda del PSOE. Se volvió a publicar *Octubre* con una respuesta a Prieto. Por otra parte, una edición popular de los cinco artículos se distribuyó profusamente^[29]. En estas condiciones, con conocimiento de Largo Caballero, uno de sus más próximos colaboradores, el periodista Carlos de Baraibar, preparó rápidamente un libro atacando las «falsas posiciones socialistas» de Indalecio Prieto^[30]. Desde una posición que, según él, derivaba de «los principios del marxismo puro», Baraibar denunciaba los argumentos de Prieto como «pueriles y prematuros». Sus principales objeciones eran que Prieto había roto la disciplina del partido al hacer públicas sus ideas y al haberlo hecho en la prensa burguesa. El argumento era bastante tendencioso, puesto que la Juventud Socialista, cuya postura aprobaba Baraibar, había dado a la luz igualmente sus opiniones en su prensa clandestina y en *Octubre*. Además, los periódicos en los que había escrito Prieto eran los más izquierdistas que se

publicaban legalmente. El alegato de Baraibar era de lo más rebuscado. Se oponía a la amplia coalición electoral para asegurar la amnistía política que Prieto propugnaba por dos razones. Por una parte, afirmaba que posiblemente la CEDA cambiase la ley electoral, y por otra, declaraba que la amnistía era un objetivo limitado y que el objetivo de los socialistas debía ser la destrucción de un sistema en el que había presos políticos^[31].

En el libro de Baraibar había más consistencia teórica que realismo práctico. La izquierda del PSOE había reconocido ya, especialmente en las páginas de *Leviatán*, que la República no era sinónimo de revolución burguesa clásica. La burguesía española había mostrado, por su reacción a la legislación reformista de 1931-1933, que su posición era todo menos progresista. Si al comprenderlo así algunos miembros del PSOE habían pensado que sólo una revolución podría cambiar las estructuras regresivas de España, otros, como Prieto, habían llegado a la conclusión de que la fuerza de la burguesía era tal como para obligar a la izquierda a que buscase el poder gubernamental por medio de las elecciones. Para los caballeristas, Prieto mantenía inútilmente sus esperanzas en una democracia burguesa desacreditada. Se podría decir mucho en favor de la validez del análisis revolucionario. Sin embargo, esto no invalida el acierto de Prieto al defender la necesidad del poder estatal. Además, si las actividades de los revolucionaristas del PSOE no iban a ir más allá del extremismo retórico, iban a ser mucho más contraproducentes que los modestos objetivos de Prieto.

El hecho de que el revolucionarismo de los caballeristas fuese en gran medida verbal no alteraba el hecho de que, al menos en las capas superiores del movimiento, el socialismo español estuviese seriamente dividido. Sin embargo, es muy difícil fijar con cierta precisión numérica cómo se reflejaba la división en la base. Indudablemente, la política represiva del gobierno radical-cedista intensificaba la militancia y hacía a las masas socialistas más receptivas a la propaganda revolucionaria. Por otra parte, el recuerdo del octubre asturiano, la existencia de miles de presos políticos y la conducta revanchista de la derecha aseguraban una respuesta masiva favorable a las apelaciones de Prieto en favor de la unidad y de la vuelta a la república progresista del primer bienio. En agosto, Azaña le escribió a Prieto diciendo: «Creo que tiene usted ganada la partida, no sólo en la opinión general, sino dentro de la masa de su propio partido. Ésta no es solamente apreciación mía, sino de muchas personas, socialistas y no socialistas». La polémica continuó entre *Democracia* y el semanario *Claridad*, que los caballeristas habían conseguido sacar el 13 de julio. Azaña creía que, puesto que la mayoría

aceptaba los puntos de vista de Prieto, consideraban la polémica solamente como una pesadez irrelevante, aunque sorprendidos por algunos de los insultos personales utilizados. Según le habían dicho, en Madrid, el socialista medio no se preocupaba de leer a ninguna de las dos partes en la polémica^[32]. Desde luego, se trataba sólo de la opinión de Azaña y él era favorable a Prieto. En cualquier caso, entre mayo y octubre, Azaña pronunció una serie de discursos en favor de la unidad ante numerosas audiencias. Entre los cientos de miles de personas que fueron a escuchar su llamamiento para la «reconquista» de la República había muchos obreros. En Bilbao, en particular, se dieron vivas a Prieto durante el discurso de Azaña. De toda España llegó gente para oírle hablar en Comillas, cerca de Madrid. De un público que se dijo llegaba a los 400 000, una gran proporción deben haber sido socialistas^[33].

Casi con seguridad, las masas socialistas no estaban divididas sobre el tema de la bolchevización de la misma forma que sus dirigentes. La militancia de las masas, que favorecía a Largo, estaba equilibrada por un deseo de unidad, que favorecía a Prieto. En cualquier caso, Prieto ignoraba las críticas de la izquierda a que se veía sometido y continuaba trabajando por la unidad con los republicanos. A lo largo del verano de 1935, Azaña, Martínez Barrio y Sánchez Román trabajaron en la elaboración de un manifiesto. El 27 de agosto, Martínez Barrio anunció que el documento se sometería a la aprobación del PSOE y se publicaría en fecha próxima. Dos días más tarde, un editorialista anónimo, probablemente el propio Prieto, escribió en *El Liberal* que la derecha se beneficiaría inmensamente si el PSOE adoptara una estrategia revolucionaria a largo plazo con exclusión de las necesidades inmediatas, tales como un acuerdo electoral con los republicanos. A mediados de septiembre se entrevistó con Azaña en Bélgica para discutir el proyectado programa de coalición^[34].

Mientras tanto, la batalla entre *Democracia* y *Claridad* se caldeaba. Bajo la dirección de Andrés Saborit, *Democracia* abogaba por la unidad del partido y se mostraba reacia a entrar en polémicas, lo cual no le salvó de una feroz denuncia en forma de una circular de la comisión ejecutiva del PSOE firmada por Largo Caballero^[35]. *Claridad* aceptó la petición de la FJS de expulsión de los besteiristas y la separación de los prietistas de las posiciones de poder dentro del movimiento. Cada bando afirmaba regularmente que contaba con el apoyo de varias organizaciones provinciales, pero no surgió ningún cuadro definitivo de la actitud de la base ante la polémica. *Claridad* aseguraba que

tenía el apoyo de las federaciones socialistas de Valencia, Salamanca y Alicante. La Agrupación Socialista de Alicante llegó a expulsar a Manuel González Ramos, uno de sus diputados en Cortes, por haber escrito en *Democracia*. A su vez, el semanario de Saborit publicaba declaraciones de apoyo de las organizaciones socialistas de Asturias, Badajoz y Albacete. A pesar de que estas declaraciones deban acogerse con reservas, los grupos a favor de *Democracia* eran más importantes por un margen considerable. Al mismo tiempo *Claridad* afirmaba que su circulación aumentaba a gran velocidad, mientras que las ventas de *Democracia* disminuían alarmantemente^[36].

El argumento más eficaz que apareció en las páginas de *Democracia* era el que exponían un asturiano anónimo y una carta de Amador Fernández, presidente del SMA, según el cual toda la campaña de bolchevización no era más que una maniobra para desviar la atención del fracaso de la FJS en Madrid en octubre de 1934. El desconocido asturiano decía que los bolchevizantes no estaban en posición de poder llamar traidores a otros miembros del partido. Amador Fernández señalaba que, puesto que los caballeristas tenían el control exclusivo del movimiento en Madrid, no podían culpar de su fracaso ni a los reformistas ni a los centristas del partido. A continuación acusaba especialmente a Baraibar de una acción que equivalía a haber traicionado al movimiento ante los espías del gobierno, sin especificar realmente si había sido por incompetencia o por deslealtad^[37]. El hecho de que *Claridad* no pudiera encontrar nunca una respuesta satisfactoria a las críticas de los que habían demostrado ser revolucionarios en Asturias tiende a dar credibilidad a las acusaciones de éstos.

De hecho, dado el indiscutible realismo del análisis de Prieto sobre las necesidades electorales de la izquierda, es difícil comprender cómo *Claridad* pudo mantener la oposición a sus ideas. Tal y como resultaron las cosas, los caballeristas se vieron salvados por los comunistas de una situación comprometida. Como parte de sus planes para la bolchevización del PSOE, algunos de los revolucionarios más jóvenes jugaban ya con la idea de unidad con el PCE. El 2 de junio de 1935, el secretario general del PCE, José Díaz, pronunció un discurso en el cine Pardiñas, de Madrid, pidiendo la creación de una «concentración popular antifascista». A continuación, en agosto, en el VII Congreso de la *Komintern*, Dimitrov había lanzado una llamada en favor de un frente proletario unido y de un frente amplio popular de todas las

fuerzas antifascistas. En seguida, los comunistas españoles pidieron abiertamente la unión con el PSOE^[38].

Este cambio de línea política del PCE tuvo un efecto doble en la izquierda del PSOE. A los maximalistas de la FJS les encantó, pero Araquistáin y Largo Caballero mantuvieron sus recelos. El representante de la Juventud Socialista en el congreso de Moscú, José Laín Entralgo, volvió informando entusiásticamente de que el sindicato comunista, la Confederación General del Trabajo Unitaria, se incorporaría a la UGT. También afirmó que el cambio de táctica suponía que Moscú había devuelto la soberanía a los distintos partidos nacionales, lo que significaba que había desaparecido el último obstáculo para la entrada de la FJS en la *Komintern*^[39]. Santiago Carrillo, al que ya le faltaba poco para convertirse en comunista, intentaba arreglar la incorporación del BOC trotskista y de la juventud comunista al PSOE como parte del proceso de bolchevización del partido. Ni Largo ni Araquistáin compartían este entusiasmo, pareciendo sospechar de algún modo que los comunistas querían hacerse con el movimiento obrero, lo que, desde luego, era la ambición que tenía para sí Largo Caballero. Escribiendo en *Leviatán*, Araquistáin sugería que la nueva política de la *Komintern* servía simplemente a los intereses de la política exterior de Rusia. Para él, el objetivo fundamental, tras la táctica de frente popular, era el deseo ruso de asegurar que ocupasen el poder gobiernos liberales y de izquierdas para el caso de guerra con Alemania. Lejos de romper con la vieja costumbre de la *Komintern* de dictar la misma política para cada país, como pensaba indulgentemente la FJS, la nueva táctica confirmaba los hábitos dictatoriales de la III Internacional. Mientras Araquistáin aceptaba la necesidad de unidad proletaria, rechazaba la noción de alianza con la izquierda burguesa^[40]. Largo Caballero, aunque mantenía su entusiasmo por la unidad de la clase obrera, se oponía a la idea de unirse a la *Komintern*. Y, lo mismo que Araquistáin, no era partidario de una coalición electoral con los republicanos de izquierdas^[41].

En la actitud de Largo Caballero había mucho de resentimiento personal. Probablemente, el hecho de que Prieto estuviese a favor de una alianza con la burguesía era suficiente para garantizar la hostilidad de Largo, que no era de los que estaban dispuestos a perdonar. En consecuencia, al haberse convencido en 1933 de que el PSOE había sido traicionado por los republicanos, se oponía a una nueva alianza con ellos. Incluso en esto había un elemento de resentimiento personal. Uno de los más destacados colaboradores de Azaña, Claudio Sánchez Albornoz, siempre fue consciente

de la enemistad de Largo, sin llegar a averiguar la causa^[42]. Deseoso, por encima de todo, de mantener su poco justificada reputación de revolucionario, Largo temía defraudar la militancia de las masas obreras. El 14 de noviembre, Azaña hizo al PSOE una propuesta formal de alianza electoral. La oposición de Largo a la idea preocupaba seriamente al secretariado de la *Komintern*. Prieto era hostil a la inclusión de los comunistas en la coalición electoral. Si no contaban con el apoyo de Largo había peligro de que se quedaran completamente solos. Por tanto, a principios de diciembre la *Komintern* envió a Madrid a Jacques Duclos para entrevistarse con Largo Caballero y hacerle cambiar de parecer; Julio Álvarez del Vayo, consejero procomunista de Largo, preparó la reunión. Durante tres días, Duclos utilizó la alabanza y los argumentos sutiles para romper la obstinada oposición de Largo Caballero al frente popular. Cuando le dijo que en Francia un frente amplio de trabajadores, campesinos e intelectuales había combatido con éxito al fascismo, Largo le citó a Marx y a Lenin para probarle que la clase obrera era la única clase revolucionaria. Finalmente, a fuerza de constantes halagos, Duclos consiguió persuadir al líder del PSOE de que retirase su oposición^[43].

El problema que aún quedaba pendiente era la elaboración del programa de la coalición electoral. Sin embargo, antes de que se pudiera avanzar en su redacción, tuvo lugar un incidente dramático en la lucha interna por el control del PSOE. El 16 de diciembre se celebró una reunión del comité nacional del partido, a la que asistió Prieto, que había regresado en secreto del exilio y que vivía en la clandestinidad. En los términos más simples, lo que ocurrió en la reunión fue que Prieto propuso que la comisión ejecutiva del PSOE se hiciera responsable de las actividades parlamentarias de la minoría; la propuesta fue aprobada por nueve votos contra cinco y dos abstenciones. Largo Caballero, que había sido uno de los cinco, dimitió como presidente del partido. El tema parecía sin importancia y no como para provocar la dimisión de Largo, especialmente teniendo en cuenta que el sometimiento del grupo parlamentario a la ejecutiva era uno de los objetivos de los «bolchevizantes». La reacción de la base socialista ante las consecuencias de la reunión fue de asombro, lo cual era comprensible porque el militante medio no conocía los antecedentes de la reunión. De hecho, el origen de este enfrentamiento a causa de un tecnicismo aparente se remonta al 1 de octubre de 1934.

En 1934, Largo había llevado el doble juego de un extremismo verbal y una moderación práctica o inactividad. Como parte de su creación de una imagen revolucionaria, había atacado a Prieto, el líder *de facto* de la minoría

parlamentaria del PSOE, alegando que seguía una línea insuficientemente revolucionaria. Esto enfurecía a Prieto por diversas razones. Por una parte, las actividades de la minoría en las Cortes habían seguido estrictamente los acuerdos de la ejecutiva, y por otra, Prieto había hecho más que Largo para llevar a la práctica la retórica revolucionaria del PSOE. Además, la actuación de Largo en las Cortes había sido cualquier cosa menos la de un revolucionario. En consecuencia, en la reunión de la comisión nacional del PSOE de 1 de octubre de 1934, Prieto se dedicó a desmontar las baladronadas de Largo. Propuso que la minoría parlamentaria se sometiese a la autoridad de la comisión ejecutiva, que de esta forma tendría que atenerse a sus propias órdenes. Largo, naturalmente, se opuso a la propuesta, alegando que sólo un congreso del partido podría determinar esta materia. Cuando Prieto ganó la votación, él dimitió. Dadas las tensiones del contexto político en que se celebraba la reunión, los miembros de la comisión nacional mostraron su preocupación por las posibles consecuencias de la dimisión del presidente. Se decidió borrar de las actas todo el debate, y Largo retiró su dimisión^[44].

Cuando la comisión nacional se volvió a reunir el 16 de diciembre de 1935, Prieto, inmediatamente, introdujo la misma propuesta. Posiblemente su objetivo era poner en evidencia la táctica de Largo Caballero de enmascarar su reformismo con críticas revolucionarias de los demás, lo que mantenía su popularidad entre la juventud del partido. Contra lo que había defendido públicamente sobre la sumisión del grupo parlamentario a la ejecutiva, Largo volvió a votar contra la propuesta, apoyando sus objeciones en los mismos tecnicismos de los estatutos del partido. De los 14 miembros presentes, nueve, incluyendo a Prieto y a Cordero, votaron contra el presidente. La del vicepresidente, el veterano Remigio Cabello, fue una de las dos abstenciones. Es muy interesante que el lugarteniente de Prieto, Juan Simeón Vidarte, votase con Caballero. Esto parece suficiente como para poner en duda las afirmaciones de Largo de que todo había sido un complot para eliminarle de la dirección del partido. De hecho, cuando dimitió, Vidarte intentó disuadirle por todos los medios^[45].

Las razones de Largo Caballero para su dimisión ilustraban las diferencias entre los dos grupos. A Vidarte le dijo que la ejecutiva debía ser siempre unánime, como «un organismo homogéneo de dirección férrea», lo cual estaba totalmente de acuerdo con su nueva defensa «bolchevizante» de una jerarquía centralizada del partido. Había también un elemento de aversión personal a la maniobra de Prieto. Los moderados, sin embargo, por muy

preocupados que estuvieran por la unidad del partido, no pretendían asegurar la expulsión de sus oponentes, sino hacerles razonar, como se vio en los resultados inmediatos de la dimisión del presidente. El comité nacional pidió que, puesto que el 18 de diciembre reaparecía *El Socialista*, tanto *Claridad* como *Democracia* debían dejar de publicarse. Saborit aceptó la decisión, pero los caballeristas la ignoraron y empezaron una campaña feroz contra la dirección prietista del partido, pidiendo su dimisión. Esperando ver la implantación de un comité nacional totalmente caballerista, *Claridad* organizó un plebiscito extraoficial dentro del partido. La nueva formación de que eran partidarios los izquierdistas era la siguiente: Largo Caballero como presidente, Julio Álvarez del Vayo como vicepresidente, Enrique de Francisco como secretario, Wenceslao Carrillo como vicesecretario, Pascual Tomás como secretario de actas, junto con Luis Araquistáin, Ricardo Zabalza, Carlos Hernández Zancajo, Rodolfo Llopis, José Díaz Alor y G. Egido como vocales^[46].

La dirección oficial condenó suavemente esta actividad divisoria y alzó la bandera de la unidad, afirmando que, con o sin Largo Caballero, el PSOE continuaba siendo el mismo partido que había realizado el levantamiento de octubre. Mientras *Claridad* publicaba declaraciones de apoyo a Largo Caballero, *El Socialista*, el periódico oficial del partido, dirigido por el seguidor de Prieto, Julián Zugazagoitia, intentaba disimular las diferencias. El 4 de enero, Zugazagoitia publicó una carta al vicepresidente del partido, Remigio Cabello, firmada por él, por González Peña, por Luis Jiménez de Asúa, por Juan Negrín y por otros destacados socialistas. La carta apelaba a la unidad del partido y a la disciplina y, mostrando que la revolución y la reforma o las tácticas legales y las ilegales no eran incompatibles, ofrecía una alternativa más democrática que las ambiciones monolíticas para el partido de los caballeristas. Cuatro días más tarde, Cabello respondió, lamentando el lenguaje divisivo que se había utilizado hasta entonces y declarando su compromiso por la unidad del partido con una base amplia. Con su carta se publicaban declaraciones de apoyo, especialmente de las secciones socialistas del norte, incluyendo las de Guipúzcoa y Teruel. *El Socialista* empezó entonces a publicar una larga serie de reportajes sobre los acontecimientos de octubre de 1934 y algunos relatos escalofriantes, y comprobables, de la represión. Generalmente, estos artículos se han considerado parte de la campaña electoral; sin embargo, lo más probable es que su principal objetivo fuese mantener a los prietistas a la altura de los militantes de base^[47].

Es imposible establecer con precisión total cómo se dividía el apoyo a Prieto y a Caballero entre las masas socialistas o incluso hasta qué punto la base seguía la polémica. No hay duda de que los «bolchevizantes» hacían más ruido, y posiblemente por esto algunos escritores han creído que las masas estaban totalmente convencidas por la posición de Caballero^[48]. Puesto que los caballeristas intentaban dividir el partido, no había razón para que moderasen su lenguaje. Dada la política conflictiva del bienio negro, las masas socialistas eran más susceptibles a la retórica revolucionaria, pero eran también conscientes de la necesidad de unidad. De hecho, las dos partes publicaron listas de las secciones que les apoyaban, pero eran contradictorias. Una determinada ejecutiva local no reflejaba necesariamente las opiniones de su base. Es casi seguro que todas las secciones locales tenían partidarios de los dos bandos. Según los caballeristas, la Agrupación Socialista Madrileña, por ejemplo, había votado por 1800 votos contra 600 a favor del comité de *Claridad*. Igualmente, el País Vasco y Asturias estaban firmemente a favor de Prieto.

La selección de candidatos para las elecciones de febrero hecha por las circunscripciones locales de los partidos indica que los «bolchevizantes» tenían menos apoyo del que afirmaban. El norte fue sólidamente proprietista en su elección. Los dos candidatos de Vizcaya fueron Prieto y Zugazagoitia. Asturias escogió a los héroes prietistas de octubre, Belarmino Tomás, Graciano Antuña y al presidente del SMA, Amador Fernández, entre sus siete candidatos. Levante era ambiguo. Alicante, por ejemplo, había eliminado a Manuel González Ramos como represalia por su colaboración en *Democracia*. Valencia, por otra parte, eligió a Manuel Molina Conejero, en la capital, y a Pedro García y García, por la provincia; ambos habían votado contra Largo Caballero en la reunión del 16 de diciembre, que había provocado su dimisión. El sur mostraba un apoyo creciente a los maximalistas del partido, pero todavía estaban lejos de tener el control total. Andrés Saborit no se presentó por Ciudad Real, como había hecho en 1933. Córdoba eliminó a Francisco Azorín, que había votado contra Largo el 16 de diciembre. Al mismo tiempo, Sevilla eligió a Víctor Adolfo Carretero, que también había votado contra Largo. Huelva, con un fuerte contingente de mineros socialistas, fue un caso interesante. La sección local no eligió a Ramón González Peña para la candidatura del frente popular, pero se presentó solo y fue elegido por tantos votos como la coalición. Jaén eliminó al besteirista Lucio Martínez Gil, pero mantuvo a los moderados Jerónimo Bugada, Juan Lozano y Tomás Álvarez Angulo. Granada conservó a Fernando de los Ríos.

Valladolid, sin embargo, parece haber sido sólidamente caballerista. Manuel Cordero y Eusebio González Suárez, que habían votado contra Largo, y Remigio Cabello, que se había abstenido, pero había mostrado su hostilidad a la bolchevización, fueron eliminados^[49].

Hay datos que sugieren que los caballeristas, como incipientes leninistas, eran extremadamente activos y ruidosos en la política local del partido. Por eso parecen haber alcanzado un predominio en ciertas organizaciones locales del partido desproporcionado al apoyo con que contaban en la base, como lo muestra un análisis de los bastiones caballeristas de Madrid y Badajoz. La Agrupación Socialista Madrileña votó una candidatura que incluía a los izquierdistas más significados, que a su vez figuraban en la lista que había sugerido *Claridad* para la comisión ejecutiva. Sin embargo, junto con Largo Caballero, Álvarez del Vayo, Araquistáin, Hernández Zancajo y Enrique de Francisco, figuraban también como candidatos Julián Besteiro y Luis Jiménez de Asúa. Había 3039 miembros con voto en la agrupación. Como era de esperar, Largo quedó el primero de la lista, con 2886 votos; Besteiro figuró por poco, con 1157 votos en la segunda vuelta. Lo sorprendente fue que Jiménez de Asúa, que se había puesto de parte de Prieto, fuese el segundo. Pero incluso más asombroso para los caballeristas fueron los resultados de la elección. Había 13 candidatos del frente popular, entre ellos siete socialistas. Azaña fue el primero, con 224 928 votos, seguido por Besteiro, en segundo lugar, con 224 875. El siguiente entre los socialistas fue Jiménez de Asúa, en sexto lugar. Álvarez del Vayo, Araquistáin, De Francisco y Hernández Zancajo ocupaban, respectivamente, los lugares octavo, noveno, décimo y undécimo. Largo Caballero estaba el duodécimo, con 220 981 votos, por encima sólo del comunista José Díaz. El triunfo de Besteiro no puede explicarse afirmando que recibió más votos de la clase media. Los mismos barrios obreros que votaron a Largo le dieron más votos a Besteiro; los barrios de las clases altas les dieron muy pocos votos a los dos^[50]. De hecho no hubo gran diferencia en términos numéricos, pero el éxito de Besteiro y de Jiménez de Asúa desmentía algunas de las afirmaciones más extremas de *Claridad*.

Badajoz presentó también un cuadro fascinante. La candidatura local del frente popular constaba de seis socialistas, cuatro republicanos y un comunista. La representación republicana era desproporcionada, puesto que, en 1933, los socialistas habían conseguido 139 000 votos y los republicanos 8000. Vidarte, el lugarteniente de Prieto, de Badajoz, creía que dos plazas

serían suficientes para los republicanos, uno por la Izquierda Republicana y otro por la Unión Republicana. Sin embargo, la federación socialista local había incluido a dos republicanos más para excluir a dos besteiristas, Narciso Vázquez, pionero del socialismo en Extremadura, y Anselmo Trejo Gallardo, que, junto con Vidarte, se había encargado de la defensa de los aldeanos de Castilblanco. La candidatura socialista incluía a tres caballeristas, Ricardo Zabalza, Margarita Nelken y Nicolás de Pablo, y tres prietistas, Vidarte, José Aliseda Olivares y José Sosa Hormigo. Los caballeristas parecían ser más fuertes en la capital, mientras que Vidarte y Aliseda aparentemente contaban con el apoyo de los pueblos, como Don Benito y Llerena. La demostración de esto vino dada por el hecho de que consiguieran éstos que sus candidatos dieran votos tácticos a los candidatos del centro, asegurando así la derrota de la candidatura de derechas, incluso para los escaños reservados a la minoría^[51]. Aunque se trataba de una jugada inteligente, no hubiera sido aprobada por los caballeristas.

Aunque para la selección de los candidatos del frente popular continuó la lucha interna por el poder en el PSOE, la participación de los caballeristas en la coalición fue una victoria para Prieto y, desde luego, para Jacques Duclos. Las dos concepciones principales de la alianza electoral, la de Prieto y Azaña y la de la *Komintern*, se unieron de este modo, aunque no fuese sin sacrificios por parte de los grupos obreros. Las negociaciones para un programa conjunto continuaron entre los representantes de Izquierda Republicana, Amós Salvador; de la Unión Republicana, Bernardo Giner de los Ríos, y del PSOE, Vidarte y Cordero. De hecho, los dos socialistas representaban también a los comunistas, a los sindicalistas disidentes de Angel Pestaña y al POUM, así como a la UGT y a la FJS. En un principio, los republicanos intentaron limitar sus negociaciones al PSOE. Vidarte y Cordero habían pedido que al menos la UGT estuviese representada. Fue Caballero el que, a regañadientes, ofreció la solución sugiriendo que los dos delegados del PSOE representaran a todos los grupos de la clase obrera.

Había un acuerdo de base sobre la necesidad de amnistía política, la restauración de los derechos individuales y el restablecimiento de la legislación social de las Cortes constituyentes. Los socialistas hubieran querido un programa como el redactado por Prieto en enero de 1934, pero los republicanos se negaban a aceptar el control obrero de la industria y la nacionalización de la tierra y de la banca. De hecho parece que fueron los comunistas, que ya intentaban atraerse a la pequeña burguesía, los que vencieron la resistencia de Largo Caballero a aceptar estas limitaciones. Al

PCE le preocupaba que la intransigencia de Largo provocase la retirada de alguno de los grupos republicanos que quedaban en la coalición. Sánchez Román se había negado a participar en una alianza con los comunistas. Finalmente, el pacto firmado el 15 de enero de 1936 difícilmente hubiera podido ser más tibiamente reformista. Lógicamente tanto enfureció a los trotskistas que no habían entrado en el POUM como tranquilizó a Miguel Maura y a Manuel Portela Valladares^[52].

Puesto que Prieto tenía que mantener la ficción de estar en el exilio, el peso de la parte socialista en la campaña electoral cayó especialmente sobre Largo Caballero. Sus dos temas principales fueron la necesidad de unidad proletaria y de transformación de la sociedad capitalista. Presentados con una retórica aparentemente revolucionaria, encantaron a sus audiencias de la clase obrera por toda España. En determinado momento, el 11 de febrero, habló al lado de José Díaz en un mitin conjunto del PSOE y del PCE sobre el tema de la unidad. De hecho, ambos oradores entendían por unidad que sus organizaciones se hicieran con el control de todo el movimiento de la clase obrera. Además, cuando Largo declaró su empeño por un cambio social completo, dejó claro que él veía la revolución como algo del futuro. Así, mientras insistía en que la sociedad capitalista difícilmente podría cambiarse de forma fundamental por medio de la democracia capitalista, subrayaba también que esto no significaba una revolución inmediata, sino simplemente que la clase obrera debía prepararse a largo plazo para el futuro momento revolucionario. Aunque reiteraba que los socialistas no abandonaban su decisión de introducir cambios sociales radicales, declaró también que cumplirían sus compromisos de apoyo al gobierno republicano hasta que se realizase el programa mínimo del 15 de enero^[53].

La izquierda consiguió un triunfo notable en las elecciones de 16 de febrero. La forma en que los socialistas seleccionaron a sus candidatos para las elecciones, la naturaleza de la campaña propagandística de Largo Caballero y el éxito obtenido en las urnas sugieren varias cuestiones importantes sobre el movimiento socialista a principios de 1936. En primer lugar, la política beligerante y revanchista que había seguido la coalición radical-cedista había acelerado el giro hacia la izquierda del PSOE. Las candidaturas para las elecciones mostraron que, mientras Besteiro parecía conservar su tremenda popularidad personal en Madrid, su sección reformista dentro del partido había perdido apoyo considerablemente, sobre todo en el sur rural. Sin embargo, aunque la sección más derechista del PSOE estuviese

en decadencia, el partido parecía dividido entre los seguidores de Prieto y los de Largo Caballero, sin que la balanza se inclinara definitivamente a favor de ninguno de ellos. En cualquier caso, la base socialista no mostraba estar demasiado enterada de la polémica que dividía a la dirección. El futuro era, por tanto, problemático. Prieto se había comprometido a intentar reconstruir la república progresista del primer bienio. Incluso Largo había manifestado sus esperanzas de que la victoria electoral marcara el principio de un período de paz social^[54]. El que la radicalización militante de las masas socialistas pudiese detenerse por medio de una política inteligente y de amplias miras dependía de la reacción de la derecha. Sin embargo, su conducta entre 1931 y 1935 no indicaba que fuesen a adoptar la postura tolerante que hubiese permitido a Largo Caballero arriesgarse a perder popularidad predicando la moderación a sus seguidores.

CAPÍTULO VI

LA VÍA LEGAL HACIA EL ESTADO CORPORATIVO:

¿LA CEDA EN EL PODER?, 1934-1935

Para Gil Robles, el éxito de la represión de la insurrección asturiana era una confirmación suficiente de la eficacia de su táctica legalista. Cuando los socialistas formaban parte del gobierno republicano, los aliados monárquicos del líder de la CEDA habían intentado destruir el régimen con un golpe militar mal organizado. De hecho, este asalto directo había fortalecido a la República del mismo modo que el intento de sublevación de Kapp había fortalecido a la República de Weimar. En consecuencia, Gil Robles, tras el fracasado levantamiento del 10 de agosto, reforzó el compromiso de Acción Popular con la táctica legal. Tenía confianza en que una propaganda hábil le proporcionaría el éxito electoral y finalmente el poder. Era mucho más sensato realizar las ambiciones de su partido, la defensa del orden social anterior a 1931 y la destrucción de la amenaza socialista, desde el gobierno que desde la oposición al aparato represivo del Estado. Habiendo conseguido una victoria electoral en circunstancias que no era lógico que se repitiesen, había utilizado esa victoria con gran habilidad y paciencia hasta que, en octubre de 1934, tres ministros de la CEDA habían entrado en el gobierno. Para su satisfacción, los socialistas habían mordido el cebo y habían lanzado un asalto desesperado contra el Estado. Miles de cuadros socialistas fueron encarcelados y se silenció a la prensa socialista. Sin embargo, se ha señalado que las Cortes continuaron funcionando a partir del 5 de noviembre de 1934, que los sindicatos socialistas no fueron destruidos y que la victoria militar en Asturias no se utilizó para imponer un Estado corporativo^[1]. Hay numerosas pruebas que muestran que la CEDA estaba deseando hacer todo esto y que sólo el realismo de Gil Robles lo impidió.

Las Cortes se reunieron, aunque había censura de los debates y durante algún tiempo la izquierda no estuvo presente. En realidad, era una tribuna valiosa para denunciar el insurreccionismo de la izquierda. También servía como un instrumento muy eficaz para aprobar automáticamente la actuación del gobierno. En cualquier caso, el que el Parlamento continuara existiendo no revela nada sobre la sinceridad democrática de Gil Robles. Sólo los monárquicos alfonsinos y los carlistas eran públicamente hostiles a la democracia parlamentaria. Es posible que un número sustancial de diputados

de la CEDA no se hubiera opuesto a la clausura de las Cortes si su declaración pública hubiera tenido algún sentido. Sin embargo, quedaba una considerable mayoría de radicales, republicanos de varios tipos y socialistas, así como algunos diputados demócratas de la CEDA, que no hubieran tolerado la supresión de las Cortes. Sólo se podía derribar al Parlamento por medio de una acción militar. Las consultas con destacados generales mostraron a Gil Robles que esto era imposible.

Los sindicatos recibieron ataques. El periódico de las juventudes de la CEDA, *JAP*, pedía estridentemente la destrucción de la UGT y del PSOE. Hablando en nombre de las secciones más moderadas del partido, *El Debate* pedía la prohibición de los sindicatos marxistas, la regulación estricta y el control de otros sindicatos. El 5 de noviembre, Gil Robles manifestaba en las Cortes que el país no podía permitir la existencia de sindicatos con fines sociales revolucionarios. Ya el 19 de octubre, Acción Popular y varios sindicatos no marxistas y patronales se habían unido para formar el Frente Nacional del Trabajo, que se convertiría en la respuesta de la CEDA al sindicalismo de izquierdas y que se transformaría en la Confederación Española de Sindicatos Obreros. Esto coincidía con las instrucciones del Bloque Patronal a sus miembros aconsejándoles el despido de todos los trabajadores que habían tomado parte en la huelga de octubre y que donde fuera posible los sustituyeran por los que en aquellos momentos habían actuado como esquiroles. En Asturias se adoptaron sistemas para que los mineros llevaran una tarjeta de identidad en la que figurase la relación del trabajo efectuado^[2].

Si no se suprimieron los sindicatos fue porque Acción Popular tenía que atenerse siempre a lo establecido en la ley. No pudo encontrarse ninguna prueba de la participación de los sindicatos en el levantamiento de octubre y su abolición legal era difícil. Gil Robles, sin embargo, abogó por su disolución y pidió la confiscación de sus bienes para indemnizar por los daños de los acontecimientos revolucionarios de octubre. El 14 de noviembre, en el debate de las Cortes, Dimas de Madariaga afirmaba que el poder del socialismo provenía de la cobardía de los patronos y del gobierno y que debía ser destruido. En la práctica, importaba poco la existencia legal de los sindicatos, puesto que los patronos podían tomar todo tipo de represalias contra los trabajadores, dado que la detención de los líderes sindicales había dejado desamparadas a las organizaciones sindicales. Las represalias adoptaron también otras formas. *El Debate* pidió la purga de los funcionarios y maestros que no fueran de confianza, refiriéndose a los republicanos que

habían sido nombrados los dos años anteriores. La entrañable ley de cultivos de los catalanes fue abolida por decreto militar. Como respuesta a las demandas de la prensa de la CEDA, el 2 de enero de 1935 se nombró un gobernador general que asumiera las funciones de la *Generalitat*^[3].

A lo largo de octubre, Gil Robles manifestó su inquietud por si cualquier interferencia impedía una represión eficaz de la revuelta. El 23 de octubre pidió el castigo adecuado para «los horrores que se han cometido en Asturias». Cuando las Cortes reanudaron sus sesiones, exigió la aplicación inflexible de la ley y algunos ajusticiamientos ejemplares. El 15 de noviembre pidió que la Cámara anunciase su «incompatibilidad moral» con la izquierda, propuesta que la izquierda interpretó como el preludio de la prohibición del partido socialista. La propuesta, junto con una petición que la acompañaba de disolución de los sindicatos implicados en el levantamiento, fue rechazada por los radicales. Un nuevo obstáculo a las exigencias de la CEDA de represión implacable de la izquierda surgió a propósito de las ejecuciones. Alcalá Zamora, deseoso de evitar un empeoramiento innecesario de la situación, se inclinaba por la clemencia, lo mismo que después del 10 de agosto de 1932. Gil Robles se oponía totalmente a cualquier forma de conciliación, pero le preocupaba que si los ministros de la CEDA se mostraban intransigentes, el presidente resolviera la crisis entregando el poder a un gobierno de izquierdas y disolviendo las Cortes^[4].

De haber sido así, Gil Robles hubiera querido apelar al ejército, pero, como escribió más tarde, «era dudoso que existiera entonces en el seno de las fuerzas armadas la necesaria unidad interna y la fuerza precisa para acometer la delicada tarea de restaurar el orden social». Era claro que la firmeza de la posición de la CEDA dependería enteramente de que el ejército estuviera en condiciones de respaldarla. Desde el 18 de octubre estaban en contacto con Goded y Fanjul por medio de su amigo íntimo Cándido Casanueva, diputado de la CEDA por Salamanca. De hecho, les pidió a los generales que tomaran la iniciativa de forzar al presidente. Quería que impidiesen que Alcalá Zamora respondiese a la intransigencia de la CEDA disolviendo las Cortes. Sin embargo, había pocas posibilidades de confiar en una acción militar. Después de consultar a las guarniciones de provincias, los generales le pidieron a Gil Robles que transigiera para evitar la llegada al poder de un gobierno de izquierdas, puesto que el ejército no estaba en condiciones de lograrlo por otros medios. El tan alabado legalismo de Gil Robles no fue en esos

momentos más que el resultado de la imposibilidad de una línea de acción alternativa^[5].

Sin posibilidades de obtener el poder por la fuerza, Gil Robles volvió al proceso gradual de conseguirlo legalmente. El 16 de noviembre, Samper y Diego Hidalgo, ministro de la Guerra, fueron eliminados del gobierno por supuesta «responsabilidad» en la preparación de la revuelta. El proceso de eliminar a los elementos «liberales» y reestructurar el gobierno a gusto de la CEDA avanzó un paso más el 21 de diciembre. El ministro de Instrucción Pública, Villalobos, del grupo de los liberales demócratas de Melquíades Álvarez, había alarmado ya a la CEDA por su celo en la construcción de escuelas. Cometió el error de quejarse por los cortes salvajes en el presupuesto de educación y fue atacado en un debate por el diputado de la CEDA Jesús Pabón. Villalobos se vio obligado a dimitir —tal y como escribió Gil Robles, «era la segunda crisis parcial que me veía obligado a provocar»— y se quejó amargamente de que la causa de su salida había sido su republicanismo. Junto con el cisma forzado del grupo de Martínez Barrio nueve meses antes, constituía parte de un proceso inexorable por el que se obligaba a los liberales a abandonar la coalición gubernamental, dejando a los que quedaban cada vez más dependientes de la CEDA^[6].

En aquellos momentos la CEDA podía llevar a la práctica su tan cacareado objetivo de derrotar a la revolución por medio de un programa de reforma social. Esta tarea recayó sobre Giménez Fernández en el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, sus tímidos planes reformistas iban a provocar una oleada de oposición tan virulenta dentro de su propio partido como para confirmar los temores de la izquierda de que no podía esperarse ninguna reforma de las clases conservadoras en España como no fuera a través de una revolución.

Sin atacar el problema agrario en sus raíces, la serie de medidas que Giménez Fernández trató de adoptar entre noviembre de 1934 y marzo de 1935 intentaban mitigar los abusos más flagrantes con un espíritu de justicia social. Sin embargo, no encontró ninguna solidaridad en la CEDA, muchos de cuyos diputados votaron regularmente contra él, y se convirtió en el blanco de ataques personales furiosos. Por ejemplo, en enero presentó un proyecto de ley de arrendamientos que ofrecía a los arrendatarios la posibilidad de comprar la tierra en la que hubieran estado trabajando durante doce años consecutivos. A pesar de su timidez, el proyecto provocó una coalición de diputados ultraderechistas, dirigidos por el tradicionalista Lamamié de Clairac

y tres cedistas, Mateo Azpeitia (por la provincia de Zaragoza), Cándido Casanueva (por Salamanca) y Adolfo Rodríguez Jurado (por Madrid, capital) [7]. La maniobra no era de extrañar. Ya *El Debate* había prevenido a Giménez Fernández, afirmando, en diciembre, que la reforma agraria no debía ser «ni muy rápida en el tiempo ni muy extensa en su área geográfica». Además, este periódico había informado favorablemente de las reuniones de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas, la aristocrática organización de propietarios rurales, que había expresado su hostilidad virulenta a la concesión del acceso a la tierra de los campesinos. Un dato a tener en cuenta es que Rodríguez Jurado era el presidente de la Agrupación.

Sesión tras sesión, Lamamié y los ultras de la CEDA fueron despojando la obra de Giménez Fernández de sus rasgos progresistas. El plazo mínimo para los arrendamientos se redujo de seis a cuatro años, se suprimió el acceso a la propiedad y los tribunales encargados de supervisar las condiciones de los arrendamientos fueron disueltos. Además, se añadieron una serie de cláusulas que permitían la rescisión de un gran número de contratos. Con otras medidas tuvo todavía menos éxito. Gil Robles afirmaba estar totalmente de acuerdo con el análisis de Giménez Fernández sobre la necesidad de reforma e incluso admitió públicamente que sólo las concesiones hechas dentro de un espíritu cristiano podían contener la revolución. Sin embargo, se mantuvo al margen y vio cómo su ministro era insultado y derrotado por los votos de la CEDA. A Giménez Fernández se le llamó «bolchevique blanco» y «marxista disfrazado». La hostilidad no se limitaba a una pequeña minoría del partido. Gil Robles habla de un «grave quebranto» de la CEDA. La fuerza de la reacción provocada por los intentos de reforma le causó una profunda impresión. Cuando provocó la crisis siguiente, Gil Robles, calladamente, eliminó a Giménez Fernández. El sacrificio que esto suponía para la unidad del partido lo muestra el comentario del líder de la CEDA, «no me atreví a que Giménez Fernández ocupase nuevamente la cartera de Agricultura»[8].

La derrota en aquellos momentos de la pequeña ala católico-social de la CEDA era simplemente uno de los aspectos del desplazamiento general a la derecha de los seguidores más ricos de la CEDA, que justificaban su inflexibilidad basándose en que había que «liquidar la revolución». En la industria, muchos miembros de los sindicatos se encontraron sin trabajo. Pero fue en el campo donde las condiciones empeoraron dramáticamente. Muchos terratenientes continuaron sin cultivar la tierra como venganza y seguían diciéndoles a los trabajadores: «Comed República». Con los líderes sindicales

en la cárcel, los jurados mixtos, si no habían sido suspendidos, apenas funcionaban y se inclinaban notoriamente a favor de los propietarios. El 14 de diciembre de 1934 se suspendió indefinidamente el estatuto catalán. Sin embargo, a pesar de la intensificación general de los conflictos, la CEDA pensaba que los radicales no habían mostrado suficiente decisión para explotar la derrota de la revolución de octubre^[9].

La insatisfacción de la CEDA por el ritmo de los acontecimientos políticos la expresaba la JAP en su forma más extrema. En noviembre, su periódico pedía una purga de marxistas y masones, y en febrero, una nueva Constitución que declarara ilegales a ambos. En sus páginas, Gil Robles describía su visión del Estado futuro: un poder ejecutivo más fuerte, reducción de los Parlamentos futuros a las funciones específicamente, legislativas y la limitación drástica del derecho a criticar la obra del gobierno. Era claro que el liberalismo fundamental de Lerroux dejaba mucho que desear. Para la JAP, los defectos del Estado liberal y parlamentario sólo podían remediarse siguiendo los ejemplos de Alemania, Italia, Austria y Portugal en la vía hacia el corporativismo. El *leitmotiv* de la JAP era «todo el poder para el jefe», alternado con «los jefes no se equivocan». En sus memorias, Gil Robles ha hecho patente que no veía nada criticable en la postura de sus jóvenes seguidores. Para él representaban los ideales de la CEDA sin las trabas del compromiso con las realidades políticas. Si él tenía que ser más moderado era simplemente por una cuestión de táctica^[10].

Otras secciones de la CEDA, aunque no mostraban sus ambiciones con la vehemencia de la JAP, eran también bastante directas. En diciembre, *El Debate* pedía una Constitución, de acuerdo con el espíritu de la época, que reforzase la autoridad, disminuyese el poder del Parlamento e introdujese un sistema corporativo de representación. Gil Robles expresaba los mismos sentimientos en una conferencia en la sede de Acción Popular, manifestando su insatisfacción con la democracia y su deseo de algo más «orgánico». Italia y Alemania se citaban como «prototipos»^[11].

Estos deseos contrastaban con la realidad del gobierno en coalición con los radicales. Al gabinete le faltaba una dirección vigorosa. De hecho, Lerroux apenas aparecía por las Cortes. Regularmente, Gil Robles llenaba este vacío, pero él quería vigorizar el gobierno de acuerdo con sus ideas sobre una base más oficial, es decir, con mayor representación de la CEDA. Frustrado por la falta de decisión del gobierno en la «liquidación» de la revolución y por la inercia de los radicales, en contraste con el empeño de la

CEDA de poner en marcha un Estado autoritario, Gil Robles le escribió a Lerroux, a principios de enero, pidiéndole «un cambio de orientación y de aceleración en el ritmo de la obra de gobierno». A lo largo del mes vio al jefe del gobierno en varias ocasiones para recomendarle «un ritmo más intenso de acción política», y finalmente Lerroux accedió a una mayor participación de la CEDA en el gobierno^[12].

Lo que podía entenderse por un «ritmo más intenso de acción política» lo sugería un conferenciante en los locales de Acción Popular al pedir la restricción del derecho de huelga y proclamar la necesidad de agrupar todas las fuerzas sociales en una organización corporativa, como se había hecho en Italia. *El Debate* se hacía eco en el suplemento dominical de 20 de enero con un artículo sobre los éxitos económicos de dos años de nazismo en el poder. Gil Robles volvía a recoger el tema al dirigirse a los hombres de negocios del Círculo de la Unión Mercantil el 2 de marzo. El problema económico, dijo, era de autoridad. Su solución estaba en la creación de un consejo corporativo de economía nacional^[13].

La crisis que iba a dar a la CEDA el aumento de poder con el que impulsar sus ideas surgió por la cuestión de la ejecución de los socialistas implicados en el levantamiento de octubre. Dos de los seguidores de Prieto, Teodomiro Menéndez y Ramón González Peña, fueron condenados a muerte, pero Lerroux, con gran disgusto de la CEDA, se inclinaba a favor de la clemencia. Gil Robles pedía firmeza y *El Debate* declaró que el perdón «sería una burla de la ley, un escarnio de las víctimas inocentes de la revolución de octubre». Gil Robles amenazó a Lerroux con romper la coalición gubernamental, pero el líder radical se mostró inflexible. En consecuencia, el 29 de marzo, los tres ministros de la CEDA se retiraron del gobierno porque, como dijo Aizpún, el ministro de Justicia, «ese indulto representa un síntoma revelador de un proceso de lenidad en la represión del movimiento subversivo de octubre»^[14]. Mientras la CEDA se quejaba de la falta de celo del gabinete en la represión de la izquierda, el gobierno había tomado una interesante iniciativa en el área del control social. El embajador español en Berlín había recibido instrucciones el 14 de marzo para que intentase la colaboración oficial entre la Gestapo y la policía española en la lucha contra el comunismo^[15]. Sin embargo, Gil Robles seguía considerando que el gobierno era «débil».

Alcalá Zamora esperaba poder resolver la crisis con un gobierno de coalición que incluyese fuerzas republicanas a la izquierda de los radicales.

Gil Robles se negó, indignado, a que la CEDA participase en este proyecto, puesto que había provocado la crisis para imponer una orientación más derechista, no más republicana. Quería seis Ministerios en el nuevo gobierno, incluidos el del Interior y el de la Guerra, el cual lo ocuparía él personalmente. En este propósito chocó con la hostilidad del presidente, que desconfiaba de la débil lealtad de la CEDA al régimen. La situación se resolvió temporalmente disolviendo durante un mes el Parlamento y formando un gobierno de amigos personales de Lerroux y Alcalá Zamora. Gil Robles no podía permitirse el lujo de esperar. Dada la composición de las Cortes, no se podía formar ningún gobierno sin su consentimiento. Si todavía no había pedido la jefatura del gobierno era porque temía que el presidente respondiese dando un decreto de disolución de las Cortes a un gobierno republicano de izquierdas. Por el momento se contentaba con incrementar su poder lenta pero inexorablemente, con aumentar su control sobre el gobierno en general y con dirigir personalmente el Ministerio de la Guerra. Esto último era vital para su política de fortalecimiento de los poderes represivos del gobierno, cuyo elemento crucial él veía en el ejército. En diciembre de 1934 ya había afirmado públicamente que para él el ejército era el baluarte contra las masas y sus aspiraciones sociales. Sin embargo, le preocupaban las evidentes dificultades militares surgidas en Asturias y la incapacidad de los generales para apoyarle en un golpe de Estado en octubre de 1934. Durante la segunda mitad de abril de 1935 Gil Robles presionó a favor de sus argumentos en una serie de reuniones con Lerroux, que no se oponía a que aumentase el poder ministerial de la CEDA. Gil Robles organizó una serie de mítines ruidosos de la CEDA que culminarían el 28 de abril, cuando se celebraron 197 mítines, con un mínimo de dos en cada provincia. Finalmente, sabiendo que la CEDA terminaría por derribar al gobierno y reacio a convocar elecciones, puesto que sólo lo podía hacer dos veces durante su mandato, Alcalá Zamora cedió y le autorizó a Lerroux para que formase un gobierno, el 6 de mayo, con cinco ministros de la CEDA, entre ellos Gil Robles como ministro de la Guerra^[16].

La preocupación de Gil Robles por encargarse de este Ministerio en lugar de cualquier otro estaba en función de lo que había manifestado Fanjul, en octubre de 1934, respecto a la imposibilidad de que el ejército se levantara en aquellos momentos. Según parece, le inquietaba la presencia de elementos republicanos en las fuerzas armadas. Ya en dos ocasiones, el 15 y el 27 de febrero de 1935, había pronunciado dos largos discursos en las Cortes sobre la necesidad de eliminar del ejército a los elementos «masónicos»^[17]. Afirmó

también que quería convertir el ejército «en instrumento adecuado de una vigorosa política nacional». Cuando la derecha decía «nacional», normalmente quería decir «de derechas». Por tanto, había que fortalecer el ejército para hacer frente a la «revolución», para luchar contra la subversión y para defender a la patria de los enemigos interiores y exteriores. Las implicaciones políticas quedaron pronto claras. En cuanto se hizo con el control, Gil Robles tuvo una reunión con varios destacados generales antirrepublicanos, Fanjul, Goded y Franco, y virtualmente se colocó en sus manos^[18]. Franco fue nombrado jefe del Estado Mayor Central y, en consecuencia, se convirtió en la piedra angular para la reorganización de las fuerzas armadas. Gil Robles hizo el nombramiento contra la opinión de Alcalá Zamora, quien dijo que «los generales jóvenes son aspirantes a caudillos fascistas». Otros nombramientos de Gil Robles eran igualmente significativos. Como subsecretario eligió a Fanjul, un monárquico furioso que había abandonado el partido agrario cuando éste se declaró republicano. En una ocasión Fanjul había dicho: «Todos los Parlamentos del mundo no valen lo que un soldado español». Goded fue nombrado inspector general. Como Fanjul, formaba parte de la Unión Militar Española, el grupo conspiratorio antirrepublicano; era un conspirador infatigable y estaba vinculado estrechamente a los monárquicos de Acción Española, que preparaban el derrumbamiento de la República. Todas las actuaciones y los decretos de Gil Robles mientras estuvo en el Ministerio eran examinados por una comisión en la que se encontraban los tres. El embajador americano comentaba que en los círculos de las clases altas «había una gran alegría por el esperado traslado de los generales monárquicos o de tendencia fascista a las posiciones estratégicas»^[19].

En estas condiciones no es de sorprender que la principal preocupación en el Ministerio de la Guerra fuera la de depurar a los «elementos claramente indeseables». Socialistas y comunistas fueron sistemáticamente excluidos. Incluso Alcalá Zamora estaba escandalizado por la eliminación progresiva de los oficiales liberales y republicanos y su sustitución por nacionalistas a ultranza y africanistas. Además, Gil Robles no podía ignorar la proliferación de juntas conspiratorias de la antirrepublicana Unión Militar Española en el cuerpo de oficiales^[20]. Se llevaron a cabo una serie de reformas materiales con vistas a agradar a las secciones del ejército más conservadoras y militaristas. Se reorganizaron los regimientos, se empezó la motorización, se restableció la Academia General Militar, considerada por los republicanos como la cuna de los oficiales reaccionarios. En el caso de una

«conflagración», se militarizarían las fábricas de armamento, una respuesta clara al asalto de los trabajadores asturianos a este tipo de fábricas. Se realizaron maniobras en Asturias para estudiar la forma de combatir una futura rebelión. Cuando Gil Robles se vio obligado a abandonar el Ministerio, había comenzado un rearme de bastante importancia. Sin aceptar las acusaciones más extremas de la izquierda, parece razonable sugerir que, no sólo en la elección de los mandos, Gil Robles había hecho todo lo posible para preparar el ejército para un levantamiento potencial^[21]. En este sentido, un apologista reciente de Gil Robles ha afirmado que el líder de la CEDA hizo posible el levantamiento de 1936^[22].

Las circunstancias del rearme propuesto, que fue mantenido escrupulosamente en secreto dentro de España, son muy esclarecedoras. Los cinco ministros de la CEDA se reunieron en San Sebastián, en agosto de 1935, para discutir la situación política. Estaban seriamente preocupados por si la reciente adopción por Moscú de una línea de frente popular iba a suponer la colaboración de los comunistas con otras fuerzas de izquierda en España y una amenaza revolucionaria para el gobierno. Sobre la base de que sólo el ejército podría enfrentarse a este supuesto desafío revolucionario, que él debía saber que estaba por encima de las posibilidades de la izquierda derrotada, Gil Robles deseaba por todos los medios aumentar la potencia militar de ataque. El ministro de la Guerra justificaba también su deseo de adquisición de armas afirmando que las islas Baleares habían estado amenazadas por Italia durante la crisis de Abisinia. Efectivamente, Mussolini ambicionaba las islas, y el ministro de Asuntos Exteriores español había apoyado el plan de sanciones de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, *El Debate*, tal vez presionado por el Vaticano, se había opuesto a las sanciones contra Italia, y Gil Robles había puesto tropas en la frontera con Gibraltar mientras el gobierno británico debatía el tema. Cualquiera que fueran sus motivos, el líder de la CEDA se dirigió a Alemania como potencial suministrador. Había razones para importar bienes manufacturados de Alemania, puesto que las exportaciones españolas de frutas y minerales habían producido un saldo favorable para España en su comercio con el *Reich*. En consecuencia, Cándido Casanueva, segundo de Gil Robles en la CEDA y ministro de Justicia, preparó que un agente del partido, un tal Eduardo Laiglesia, estableciese contactos con la Federación Alemana de Industria. El 14 de septiembre, Laiglesia mandó una carta, que los alemanes creían que había sido escrita por Casanueva, al embajador alemán en Madrid, conde Welczeck. La carta afirmaba que el ejército sólo podría equiparse en la escala necesaria durante un período de tres

años. Para asegurar la continuación de la presencia de la CEDA en el gobierno se pedía a los alemanes una contribución sustancial a los fondos electorales del partido. Se hicieron esfuerzos para imponer el tema a otros ministros del gobierno, provocando una huelga en algunas minas vascas de mena. Como parte del mismo acuerdo, los alemanes prohibieron temporalmente las importaciones de mena vasca, permitiendo así que la CEDA presentase la adquisición de armas como una forma esencial de asegurar la continuación de las ventas de mena. A lo largo de toda la operación se hicieron considerables esfuerzos para impedir que los radicales averiguasen lo que estaba ocurriendo. Los mandos militares más importantes, incluyendo al general Franco, estaban totalmente en el secreto. El acuerdo continuó hasta que las empresas alemanas empezaron a juzgar excesivas las comisiones que Laiglesia exigía. Antes de que se pudiera llegar a otros acuerdos alternativos, el gobierno había caído y había nuevas elecciones en el horizonte^[23].

Los intentos de fortalecer al ejército como una fuerza de represión doméstica estaban totalmente en la línea del tono reaccionario adoptado por el gobierno constituido el 6 de mayo. Entre los cinco cedistas estaba el tradicionalista Rafael Aizpún Santafé, vicepresidente de la CEDA, como ministro de Industria y Comercio. El relativamente liberal Manuel Giménez Fernández fue eliminado y se incluyó en el gobierno a su principal oponente, el líder parlamentario de la CEDA Cándido Casanueva, como ministro de Justicia. El gabinete incluía a cuatro antiguos miembros del viejo partido liberal, monárquico, con Nicasio Velayos y Velayos, uno de los «agrarios» más reaccionarios, como ministro de Agricultura. La orientación social de Velayos se vio claramente cuando permitió que la Confederación Española Patronal Agrícola, el grupo de presión derechista de los patronos rurales, celebrase una reunión dentro del propio Ministerio. *El Debate* proclamó triunfalmente que por fin los agricultores habían conquistado el Ministerio. Se aceleró el ritmo de despidos de los trabajadores y de reducción de los salarios^[24]. Tras la caída de Giménez Fernández, la ofensiva de los terratenientes tanto contra los jornaleros como contra los arrendatarios alcanzó proporciones descritas por un historiador franquista en los siguientes términos: «No solamente anticristianos (puesto que los terratenientes españoles jamás se comportaron colectivamente como cristianos, ni antes ni después de 1935), sino además de auténtico ensañamiento». Se añadieron cláusulas a las reformas de Giménez Fernández que las convirtieron en un medio de atacar a los pequeños campesinos. Los desahucios alcanzaron un

nivel increíble. La persecución de la izquierda en el campo continuó sin cesar. En Don Benito, un pueblo de Badajoz célebre por el encarnizamiento del odio de clases, fueron asesinados dos socialistas. El diputado socialista por Badajoz, Pedro Rubio Heredia, especialmente odiado por los propietarios locales y que había sido detenido ilegalmente durante la huelga de campesinos de 1934, fue asesinado en un restaurante en el mismo Badajoz. El mismo historiador semioficial comenta que «la actuación de las derechas y de los derechistas en el campo, en el segundo semestre de 1935, fue uno de los principales determinantes del odio de la guerra civil y probablemente de la guerra civil misma»^[25]. El propio Giménez Fernández afirmaba años más tarde que Velayos puso en marcha una contrarreforma general opuesta al espíritu de todo lo que él había intentado hacer en el campo. La reforma del ministro del proyecto de reforma agraria existente llegó incluso a provocar la hostilidad del líder de Falange, José Antonio Primo de Rivera^[26].

El nuevo ministro de Trabajo, Federico Salmón Amorín, era secretario de la CEDA y pertenecía al ala social católica del partido. Intentó promocionar algunos proyectos de viviendas y trató de disminuir los excesos de los patronos. *El Debate* alabó sus esfuerzos, pero el cuadro que involuntariamente pintaba el órgano de la CEDA era el de un ministro enterrado bajo una montaña de reclamaciones. Incluso estas reclamaciones tenían que proceder de una minoría de trabajadores que conocían los trámites necesarios y no tenían miedo a quejarse. *El Debate* continuaba escandalizándose de que se siguieran pagando las cuotas sindicales y de que los trabajadores afiliados a la CNT encontraran trabajo ocasionalmente. Los jurados mixtos habían dejado de funcionar virtualmente y eran escasas las sanciones a los propietarios por infracciones de la ley^[27]. Cuando Salmón llegó al Ministerio de Trabajo, el desempleo había alcanzado la cifra de 732 034. Aunque disminuyó algo durante la recolección del verano, a finales de noviembre había llegado a 806 221. Ante esta situación, la izquierda veía con bastante desprecio las continuas declaraciones de inquietud social de Gil Robles. Los cacareados planes contra el desempleo a base de obras públicas fueron archivados por razones presupuestarias, aunque las dificultades financieras no impidieran que Gil Robles continuase con sus vastos planes de rearme^[28]. Así, la constante propaganda sobre el «sentido profundo cristiano de justicia social» de la CEDA parecía poco menos que hipocresía. Efectivamente, Gil Robles mostró la superficialidad de su postura piadosa al replicar a Juan Antonio Irazusta, un nacionalista vasco que había protestado en las Cortes contra los desahucios, que eran contrarios al espíritu de la ley de

arrendamientos rústicos. Aunque el líder de la CEDA condenó en términos generales los desahucios injustos, le quitó toda la carga a sus afirmaciones defendiendo a Nicasio Velayos, el reaccionario ministro de Agricultura. Después de su denuncia retórica de la injusticia rural, Gil Robles previno cualquier sanción contra los desahucios, afirmando que no podía esperarse que el ministro definiera cuándo un caso era «injusto»^[29]. La impresión general que dejaba la realidad de la política de la CEDA era la de un egoísmo económico ilimitado oculto tras una fachada de verborrea social católica. La reforma de la reforma agraria que fue aprobada en julio lo destacó claramente. Entre una serie de enmiendas había una que destruía cualquier posibilidad de cambio fundamental: la desaparición del Inventario de la Propiedad Expropiable. Desde ese momento no había nada que impidiese a los propietarios declarar simplemente que sus tierras eran más pequeñas que lo que establecía la ley para la expropiación. De las 900 000 propiedades inventariadas para reforma, 800 000 desaparecieron de la lista^[30].

Mientras Gil Robles preparaba al ejército para que «cumpliera su misión» y se desmantelaban en el campo los avances sociales de la República, la CEDA y la JAP miraban al futuro. La gradual desintegración del partido radical y el aparentemente inexorable aumento de poder de la CEDA necesitaban preparativos para el momento en que Gil Robles se hiciera con el gobierno. En una serie impresionante de mítines se anunciaban y se explicaban las particularidades del «nuevo Estado» que se establecería entonces. El vocabulario empleado era tan ambiguo como siempre, aunque lo que a la izquierda le llamaba la atención era el recurso continuo a la terminología fascista. Las referencias más frecuentes eran a la creciente amenaza de la masonería y el judaísmo. En una concentración de la JAP, celebrada en Uclés (Cuenca), organizada con el despliegue usual de mítines preparatorios, trenes y autobuses especiales, Dimas de Madariaga anunció que el «nuevo Estado» sería uno «no basado en el liberalismo decadente en el que no circule el veneno del marxismo y del separatismo, inoculado por masones, judíos y judaizantes». En esta concentración, el líder de la JAP, Pérez Laborda, pidió todo el poder para Gil Robles^[31].

La ola de mítines propagandísticos y concentraciones de la CEDA coincidió con los primeros preparativos para la reforma de la Constitución. Mientras los planes de la CEDA se discutían en el gobierno y se preparaban para la discusión parlamentaria, se organizaban concentraciones monstruo de las masas de derechas. El 30 de junio, Gil Robles se dirigía a 50 000 personas

en Medina del Campo (Valladolid) por la mañana y volaba a Valencia para hablar a 20 000 más por la tarde^[32]. Bajo la superficie del aparente respeto de Gil Robles por las normas democráticas, yacía siempre la amenaza de utilizar su poder si no conseguía lo que quería. En un mitin de la JAP, en Santiago de Compostela, atizó el miedo de los radicales a una disolución, proclamando que «si las Cortes actuales no quieren ir a la revisión constitucional, nosotros haríamos imposible la vida de las Cortes para que fuesen disueltas»^[33].

La vehemencia de ciertos oradores de la CEDA era llevada a sus últimas consecuencias por la JAP. Más que reformar la Constitución existente, la JAP, como la mayoría de los grupos de extrema derecha, quería una Constitución totalmente nueva. El «nuevo Estado» previsto por la JAP supondría una reducción drástica en los poderes del Parlamento. El poder ejecutivo quedaría libre del control parlamentario, así como el consejo económico que dirigiría la nueva economía corporativista. El corporativismo tan insistentemente defendido por todas las secciones de la derecha española como modelo para el futuro político del país no era esencialmente diferente del fascismo tal y como se veían ambos fenómenos en aquel tiempo^[34]. Para la izquierda, la utilización del término corporativismo no era más que un eufemismo pío de fascismo. Incluso más característico de la JAP que sus ambiciones autoritarias de un «nuevo Estado» era la virulencia con que reaccionaban ante la situación existente. La noción táctica de Gil Robles de explotar el sistema lentamente, pero con seguridad, para alcanzar objetivos concretos provocaba la impaciencia de su movimiento de juventudes. Número tras número de su periódico, en una mezcla confusa de consignas provocadoras, anunciaban la necesidad de preparar a la CEDA para la gran batalla que le esperaba: la guerra para expulsar de España a los marxistas y a los masones. No iba a haber diálogo con la izquierda: «O Acción Popular acaba con el marxismo o el marxismo aplasta a España —con el jefe o contra el jefe—. No cabe diálogo ni convivencia con la anti-España. Nosotros y no ellos. Aplastemos al marxismo, la masonería y el separatismo para que España prosiga su ruta inmortal». Este lenguaje era incluso más violento que el empleado por la Juventud Socialista en 1934. Lógicamente, era el mismo lenguaje que iba a utilizar la Falange durante la guerra civil después de que la mayoría de los miembros de la JAP se hubieran pasado a la organización fascista. Con cinco ministros de la CEDA en el gobierno, sólo podía alarmar a la izquierda y al centro. Gil Robles se dio cuenta de que la JAP estaba minando sus planes a largo plazo y trató de frenar parte de su virulencia. Impidió que el expresidente de la JAP, José María Valiente, que había sido depuesto por sus

contactos públicos con Alfonso XIII, hablase en la gran concentración de la JAP en Uclés. Valiente dimitió de la CEDA y se unió a los carlistas. Gil Robles retuvo el número semanal del boletín de la JAP de 15 de junio, pero la semana siguiente volvió a venderse de nuevo, con la misma línea, declarando entusiásticamente que «el jefe no se equivoca»^[35].

De hecho, Gil Robles nunca se disoció de los excesos de su movimiento de juventudes. Inevitablemente, la izquierda pensó que las consignas de la JAP indicaban lo que la CEDA era simplemente, demasiado astuta para decir abiertamente. En realidad, cuando la CEDA suspendió el boletín de su partido, se asoció claramente con la JAP. En su último número, *CEDA* pedía a todos los miembros de Acción Popular que transfiriesen su suscripción a *JAP*, «en esta vibrante publicación encontrará audacia, fe, entusiasmo, arrojo, austeridad y disciplina». Puesto que Gil Robles afirmaba regularmente en los mítines que la CEDA y la JAP estaban totalmente identificadas, la izquierda suponía que él estaba implicado en las exigencias de la JAP para que asumiese todo el poder en un régimen dictatorial y aplastase a la izquierda^[36]. El hecho de que Gil Robles intentase avanzar lenta y legalmente hacia el poder no mitigaba en absoluto lo que la JAP quería que su jefe hiciese una vez que lo hubiera obtenido.

La hora de la verdad para la CEDA estaba más próxima de lo que incluso Gil Robles sospechaba. En junio había concluido con los radicales el pacto de Salamanca, un acto visto, por el grupo de Acción Española en aquellos momentos y por sus apologistas desde entonces, como la prueba de su fe republicana. No hay ninguna duda del cinismo que escondía el acto. En el mitin de Valencia del 30 de junio, Gil Robles dijo ante la multitud que lo mismo que ellos no se planteaban quién metía dinero en sus negocios cuando se trataba de obtener beneficios, tampoco él se planteaba a quién utilizaba para sus fines políticos. José Antonio Primo de Rivera comentó irónicamente: «Es decir, que a los radicales se les soporta como socios poco gratos, pero por ahora indispensables»^[37]. Hasta qué punto los radicales eran el vehículo esencial de la CEDA en su aproximación al poder quedó demostrado cuando su eficacia política saltó en pedazos al revelarse su corrupción y la CEDA sola no pudo seguir su táctica legalista.

A mediados de septiembre surgió una crisis que no era obra de Gil Robles. El desenlace mostró la fragilidad de sus planes de utilizar a los radicales para saltar al poder sin correr el riesgo de nuevas elecciones. La crisis se provocó en septiembre por la dimisión de Antonio Royo Villanova, del partido agrario,

ministro de Marina, un centralista furioso que no estaba conforme con que se cediese a Cataluña el control de sus carreteras. Su compañero de los agrarios, Velayos, se le unió. La crisis coincidió con un inminente reajuste ministerial impuesto por un plan para disminuir el gasto público, elaborado por el ministro de Hacienda, Joaquín Chapaprieta. Para complicar aún más las cosas, la decisión del presidente respecto a la resolución de la crisis tenía que adoptarse sabiendo que estaba a punto de estallar un escándalo financiero enorme, el asunto del *straperlo*, con grave detrimento de los radicales. Después de varias consultas, Alcalá Zamora decidió ofrecer la jefatura del gobierno a Chapaprieta, que consiguió la colaboración tanto de Gil Robles como de Lerroux. Ambos estaban dispuestos a aceptar la situación porque sabían que si no lo hacían así, el presidente disolvería las Cortes; Chapaprieta era el mal menor^[38].

Al ser Chapaprieta un defensor de la austeridad, se redujo el número de Ministerios de trece a nueve, disminuyendo la participación de la CEDA a tres. Para Gil Robles esto no significaba pérdida de poder. Él conservó el Ministerio de la Guerra; Luis Lucía se encargó del Ministerio conjunto de Obras Públicas y Comunicaciones, y Federico Salmón, del de Trabajo y Justicia. La CEDA tenía el mismo número de ministros que los radicales y, de hecho, controlaba cinco Ministerios. La composición del gobierno representó también para Gil Robles un triunfo menor, puesto que el ministro del Interior, Manuel Portela Valladares, republicano de centro, fue sustituido por el radical Joaquín de Pablo Blanco. Portela había llevado una política de orden público bastante dura, pero neutral, que no había sido lo suficientemente antiizquierdista para Gil Robles, quien había pedido que el mando de la Guardia Civil pasase del Ministerio de la Gobernación al de la Guerra. Este deseo manifiesto de monopolizar el aparato de violencia del Estado había inquietado a los aliados de gabinete de Gil Robles y su petición no fue satisfecha. En cambio, sus presiones para que se sustituyese a Portela habían sido eficaces. El líder de la CEDA continuaba siendo la figura dominante del gobierno en las Cortes. Además, puesto que desde su lugar estratégico en el Ministerio de la Guerra sabía que las condiciones del ejército no le ofrecían otra alternativa viable, salvo continuar con la táctica legalista, debió quedar bastante satisfecho con el resultado de la crisis. En particular, existía la ventaja derivada del hecho de que Chapaprieta era casi un cero a la izquierda y no le importaba que Gil Robles se hiciese virtualmente con el control del gobierno. Como él mismo dijo: «Al señor Gil Robles, hacia el que sentía yo una gran inclinación y con el que siempre procedí de acuerdo, le expresé mi

deseo de que siguiéramos compenetrados en absoluto para toda labor de gobierno». De hecho, Gil Robles solía llegar a las reuniones del gobierno media hora antes que los demás ministros para una discusión previa de los asuntos que se iban a plantear. Chapaprieta se pasaba con regularidad por el Ministerio de la Guerra para informar al «jefe» de los últimos acontecimientos. Y lo que es aún más significativo, Chapaprieta, que continuaba siendo ministro de Hacienda a pesar de su preocupación por la austeridad económica, le dio al ministro de la Guerra todas las facilidades presupuestarias para su programa de rearme^[39].

La izquierda continuaba inquietándose por las intenciones de Gil Robles. Martínez Barrio y Félix Gordón Ordás, el líder radical socialista, mostraron su preocupación en las Cortes respecto a los rumores de un inminente golpe de Estado de derechas^[40]. De hecho, un golpe era poco probable, puesto que en aquellos momentos a Gil Robles le preocupaba más mantener el poder que ya había conseguido. El 9 de octubre, sabiendo que se avecinaba un escándalo, aunque no se dio cuenta de su magnitud, tomó parte en un banquete en honor a Lerroux. En su discurso reafirmó la alianza de la CEDA con los radicales, una alianza que era ahora el baluarte central contra la temida disolución de las Cortes. El «jefe» declaró también que, en su opinión, el presidente sólo podía disolver las Cortes una vez durante su mandato. La precariedad de la situación se reveló pronto. Las acusaciones respecto a la implicación de los radicales en el fraude del *straperlo* le fueron entregadas al gobierno y, el 22 de octubre, el tema se debatió en las Cortes^[41].

Chapaprieta y Gil Robles visitaron a Lerroux y le pidieron que dimitiese como ministro de Asuntos Exteriores, pero él se negó a hacerlo hasta que todo el asunto se discutiese en el Parlamento. Era una situación difícil para Gil Robles. Después de todo, su propio partido mantenía negociaciones con el gobierno alemán para que éste le donase fondos electorales a cambio del monopolio de venta de armas a España. El asunto no sólo era tan ilegal como el de la ruleta trucada del *straperlo*, sino que además se refería a la seguridad nacional. Gil Robles hizo frente a la crisis con bastante brío. Decidido a que no le afectase la caída de los radicales, jugó un papel destacado pidiendo que todo el asunto fuese examinado en profundidad. Cuando pidió que se aplicasen las sanciones más enérgicas, la izquierda en general y Gordón Ordás en particular fueron de la opinión de que Gil Robles, habiendo visto que los radicales ya no le servían, intentaba sacar el mayor provecho de su destrucción. En cualquier caso estaban heridos de muerte. José Antonio Primo

de Rivera declaró que habían quedado descalificados para la vida pública y afirmó que todo el partido radical debería sufrir como la CEDA había hecho sufrir a todo el movimiento socialista después de lo de Asturias. El 29 de octubre, Lerroux y su compinche, Juan José Rocha, ministro de Educación, dimitieron. Fueron sustituidos por dos hombres de paja radicales, Luis Bardají López, en Educación, y Juan Usabiaga Lasquivar, en Agricultura. El agrario Martínez de Velasco pasó del Ministerio de Agricultura al de Asuntos Exteriores. Ahora, más que nunca, Gil Robles era el jefe efectivo del gobierno. En su agonía, los radicales no se preocupaban siquiera de acudir a los debates^[42].

Teniendo en cuenta todo esto, el líder de la CEDA había salido muy bien de la crisis y se encontraba en una posición de fuerza para continuar su escalada gradual al poder supremo. Por el momento, sin embargo, el principal interés político del día se centraba en el programa de Chapaprieta de reforma fiscal. Éste quería aumentar la incidencia de los derechos de sucesión, que eran los más bajos de Europa, y someter a impuesto los fondos de las compañías. Inevitablemente, esto provocó la hostilidad de las clases que constituían gran parte del apoyo financiero de la CEDA y también de los radicales.

Según admitió el propio Gil Robles, los oponentes más tenaces en el Parlamento a la reforma de Chapaprieta se encontraban en la CEDA. De hecho, Chapaprieta se vio sometido a los violentos ataques de los cedistas Casanueva y Azpeitia, que se habían opuesto con tanto éxito a Giménez Fernández. Igual que antes, utilizaron la táctica de sobercargar el proyecto con enmiendas. En su táctica dilatoria fueron secundados por otros diputados de la CEDA que dejaron de acudir a las Cortes, impidiendo así la aprobación de cualquier cláusula. El 2 de noviembre, Chapaprieta anunció a la prensa que dimitiría si no podía realizar completamente sus planes. Gil Robles le aseguró los votos de la CEDA, pero éstos no llegaban a materializarse. Cuando, finalmente, Chapaprieta planteó el problema en un consejo de ministros, Gil Robles le informó de que se veía impotente para obligar a sus diputados a que votasen a favor de las reformas, lo cual no parece muy probable dada la adulación a que sometían al «jefe» todas las secciones de la CEDA. Además, Casanueva era el segundo de a bordo de Gil Robles, un colaborador leal, que en una ocasión había dicho públicamente que «con un jefe como Gil Robles resulta agradable hasta la tarea de limpiar letrinas». Lo que parece más probable, y ésta fue la opinión de Chapaprieta, es que Gil Robles estaba utilizando la sincera oposición de la CEDA a la reforma fiscal para preparar la

próxima crisis de gobierno. Sabía que se avecinaba otro escándalo de la magnitud del *straperlo*. Conocido como el escándalo Nombela, se refería a unos pagos ilegales hechos por los radicales con fondos del gobierno. La continuación de los radicales en el poder sería imposible, y Gil Robles confiaba en que, tras esa crisis, se le encargase de formar gobierno. Sugirió a Chapaprieta que retirase sus reformas del presupuesto, sabiendo que esto provocaría su dimisión. Como efectivamente ocurrió. Chapaprieta dimitió el 9 de diciembre^[43].

En estas circunstancias, Alcalá Zamora no tenía más elección que ofrecer el gobierno a Gil Robles o disolver las Cortes. El líder de la CEDA no dudaba de que elegiría la primera solución y le aconsejó en este sentido. Sin embargo, Alcalá Zamora no estaba dispuesto a hacerlo, porque no tenía fe en las convicciones democráticas de Gil Robles. Después de todo, sólo pocas semanas antes, la JAP había revelado con toda crudeza el objetivo de la táctica legalista en unos términos que recordaban la actitud de Goebbels ante las elecciones de 1933 en Alemania: «Con las armas del sufragio y de la democracia, España debe disponerse a enterrar para siempre el cadáver putrefacto del liberalismo. La JAP no cree en el sufragio universal ni en el parlamentarismo, ni en la democracia». La democracia, «tanta palabra vacua», iba a ser explotada para su destrucción. Poco después, Gil Robles les decía a unos japiistas entusiastas que aceptaba su programa en su totalidad^[44]. Los temores de Alcalá Zamora sobre el tibio republicanismo y las ambiciones dictatoriales de Gil Robles se vieron intensificados por las actividades del «jefe» como ministro de la Guerra. Chapaprieta sacó la impresión clara de que el presidente temía que Gil Robles se encontrase bajo la influencia de las secciones extremistas monárquicas del cuerpo de oficiales, que estaban decididas a destruir la República. Cada nombramiento que hacía el ministro le parecía al presidente parte de «un designio de entregar el ejército a los enemigos de la República». A Alcalá Zamora le parecía que el Ministerio de la Guerra se estaba convirtiendo en una fortaleza, que los puestos claves iban a parar a los oficiales que estaban preparando un golpe de Estado y que su propia seguridad personal estaba amenazada. Cuando se quejó a Gil Robles por las actividades conspiratorias del general Fanjul, el ministro defendió a éste sin reservas. El presidente llegó a ser amenazado por el inspector general de Gil Robles, Goded, quien le dijo que el ejército no toleraría que la izquierda volviese a ser llamada al gobierno^[45].

Aunque en aquella crisis de gobierno se ejerció una presión considerable sobre el presidente para que le diera el poder a la CEDA, había también razones de peso para no hacerlo. En aquellos momentos, Gil Robles y la prensa de la CEDA pedían la reforma constitucional. Hasta el 9 de diciembre de 1935, cuatro años después de su ratificación, la Constitución sólo podía enmendarse por una mayoría de dos tercios de las Cortes, algo que Gil Robles nunca podría reunir. Después de esa fecha bastaba con el voto de la mayoría simple, de ahí el interés del «jefe» por evitar unas elecciones y estar al frente del gobierno cuando llegara el momento crucial. De hecho, parece que Alcalá Zamora había ya decidido que, por el bien de la República, cualquier solución de la crisis tenía que incluir la salida de Gil Robles del Ministerio de la Guerra. Si esto no era posible, disolvería las Cortes, aunque esto suponía que se agotaba su prerrogativa para hacerlo. No hay que insistir en que no fue una decisión adoptada a la ligera. La descalificación política de los radicales era motivo suficiente para la disolución. Además, la derrota de Chapaprieta había convencido a Alcalá Zamora de que aquellas Cortes eran incapaces de conseguir ningún progreso legislativo. Sin embargo, por el momento, estaba dispuesto a ensayar cualquier solución que no fuese lo que él consideraba el paso peligroso de entregar el poder a Gil Robles. En primer lugar, le pidió al líder agrario Martínez de Velasco que formara gobierno. Aunque éste no se atrevió a decirle a Gil Robles que la condición previa era su exclusión del Ministerio de la Guerra, el líder de la CEDA, que quería para sí el poder supremo, se negó a apoyar a este gobierno. Gil Robles estaba tan confiado en que tenía el poder al alcance de la mano que no veía ninguna razón para colaborar en el gobierno de otros.

Es revelador de la profundidad de las sospechas de Alcalá Zamora respecto a Gil Robles el hecho de que durante toda crisis estuviera el Ministerio de la Guerra rodeado de guardias civiles y las principales guarniciones y aeropuertos colocados bajo vigilancia especial. Cuando, el 11 de diciembre, habló con el presidente, Gil Robles se enteró, enfurecido, de que no se le ofrecía el gobierno. No podía creer que no hubiese jugado bien sus cartas. Alcalá Zamora le indicó que las Cortes eran incapaces de sostener gobiernos estables. Gil Robles no replicó, como podía haberlo hecho, que la inestabilidad la había creado él artificialmente para acelerar su aproximación al poder, y que si se le daba el poder esto no tenía por qué volver a ocurrir. En cambio, lanzó una vehemente protesta contra la posibilidad de que se convocasen elecciones en unos momentos de penuria económica, en que las

masas eran capaces de «todo tipo de excesos», como, presumiblemente, votar por los candidatos de izquierdas.

Gil Robles sólo podía elegir entre dar un golpe de Estado o buscar una solución que permitiese a la CEDA seguir en el gobierno. Intentó las dos soluciones al mismo tiempo. Esa misma tarde mandó un enviado a Cambó, jefe de la *Lliga* catalana, pidiéndole que se uniese a la CEDA y a los radicales en un gobierno que evitaría que el presidente disolviese las Cortes. Mientras tanto, en el Ministerio de la Guerra, Gil Robles discutía la situación con Fanjul, que dijo que él y el general Varela estaban dispuestos a levantarse con la guarnición de Madrid para impedir que el presidente llevara a cabo sus planes de disolución. Gil Robles trató de justificar su inclinación a una propuesta de este tipo indicando que la acción de Alcalá Zamora constituía en sí misma un golpe de Estado^[46]. Sin embargo, le preocupaba que el levantamiento fracasase, puesto que tendría que enfrentarse a la decidida resistencia de las masas socialistas y anarquistas. En cualquier caso, le dijo a Fanjul que si el ejército creía que su deber estaba en dar un golpe, él no se interferiría y, desde luego, haría todo lo posible para mantener la continuidad de la administración mientras tuviese lugar. Sólo le preocupaban algunas dudas concretas, y así le sugirió a Fanjul que pulsase la opinión de Franco antes de tomar una decisión definitiva. Mientras Fanjul estudiaba las posibilidades de éxito con Goded, Varela y Franco, Gil Robles pasó la noche sin dormir. La conclusión fue que el ejército no estaba preparado para dar un golpe. Por tanto, el 12 de diciembre, Gil Robles tuvo que abandonar el Ministerio de la Guerra con «amargura infinita». Había ido demasiado lejos. Incapaz de hacerse con el poder por la fuerza, había perdido también el control de una situación en la que podía ir avanzando poco a poco hacia el poder legalmente^[47].

Ahora, la táctica legalista tenía que volver a pasar la prueba de las elecciones. Tras los intentos fallidos de Chapaprieta y de Miguel Maura de formar un amplio gobierno de coalición, el 13 de diciembre el presidente le dio el poder a Portela Valladares, el gran maestro en los manejos electorales, que formó un gobierno con las fuerzas de la antigua coalición, excepto la CEDA, e intentó utilizar las elecciones para crear un nuevo partido del centro que sería el árbitro de las Cortes. Esto sólo podía hacerse a expensas de la CEDA, y Gil Robles estaba dispuesto a evitarlo. La prensa monárquica anunciaba ya jubilosamente que la táctica legalista había fracasado. Había bastantes posibilidades de que la importante ala derecha de la CEDA, que

había aceptado el legalismo mientras el partido podía hacerla participar en los beneficios materiales del poder, se pasase ahora a los que proponían tácticas menos dilatorias para sus problemas. En consecuencia, Gil Robles intentó derribar el gobierno Portela. El 16 de noviembre anunció que estaba decidido a impedir que los partidos del antiguo bloque gubernamental se desplazasen hacia Portela por la tentación del éxito electoral que podía conseguirse a través de la manipulación oficial de las elecciones. Al día siguiente le escribió a Alcalá Zamora para insistirle en que el gobierno no extendiese la validez del presupuesto en curso sin la aprobación del Parlamento. O Portela aparecía ante las Cortes, donde sería derribado por la CEDA, o habría que acelerar la convocatoria de elecciones. Mientras dudaba, la CEDA publicó una nota, el 28 de diciembre, diciendo que no haría alianzas electorales con ningún grupo que estuviera en el gobierno. Esto provocó una desintegración del gobierno, puesto que todos los grupos componentes sabían que ir a las urnas en oposición a la CEDA suponía entregar la victoria electoral a la izquierda. El gobierno dimitió el 30 de diciembre y fue sustituido por otro compuesto por amigos de Portela, sin apoyo parlamentario y cuyo único objetivo era organizar las elecciones^[48].

En la cuestión de las alianzas electorales, la CEDA tenía todos los triunfos en lo que se refería a las derechas. Las coaliciones eran mutuamente beneficiosas, pero la CEDA, al ser el partido más numeroso, era el que más tenía que ofrecer. Desde el principio, Gil Robles dejó claro que su objetivo era ganar, sin importarle con quién tuviera que aliarse. Ya el 14 de diciembre había abogado por la formación de un frente nacional contrarrevolucionario lo más amplio posible. Para conseguir la victoria estaba dispuesto a incluir tanto a los radicales como a los monárquicos extremistas. El frente tendría que atraerse «a las clases patronales, mercantiles e industriales». No se permitiría que los ideales políticos se interfirieran con la protección de estos intereses sociales, como lo demostró el hecho de que Gil Robles ignorase las presiones de los liberales de la CEDA, Lucía y Giménez Fernández, para que se evitasen las alianzas con la extrema derecha conspiratoria y se formara un bloque sólo con los republicanos conservadores^[49].

A lo largo de diciembre y enero se negoció con todos los grupos. Para ello, Gil Robles contó con el apoyo activo de la Iglesia. Una delegación de dirigentes del Partido Nacionalista Vasco fue a Roma para discutir en el Vaticano las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el País Vasco. El arzobispo Pizzardo, secretario del cardenal Pacelli, les dijo que debían unirse

a la coalición de Gil Robles, puesto que una victoria de la CEDA sería una victoria de la Iglesia sobre Lenin. Cuando los vascos replicaron que la Iglesia no debía comprometer su futuro en unos resultados electorales transitorios, Pizzardo contestó que, si no firmaban un compromiso de aliarse con Gil Robles, no serían recibidos ni por Pacelli ni por el Papa. José Antonio Aguirre, el líder del PNV, confiaba en que los católicos del PNV conseguirían todos los escaños de la región vasca en las Cortes y, en consecuencia, se negó a unirse innecesariamente con una coalición como la de Gil Robles, que, en su opinión, estaba formada por extremistas de derechas. Cuando los vascos fueron condenados al ostracismo por el Papa, presumiblemente aconsejado por Pacelli, la red de prensa de la ACNP trató de capitalizarlo políticamente^[50]. Aunque coincidían con el frente popular en la necesidad de una amnistía política, los vascos no querían contribuir a la elección de un comunista y fueron a las elecciones solos.

Con la excepción de los vascos, sólo los monárquicos planteaban algún problema, puesto que pedían la elaboración de un vasto programa maximalista que sería obligatorio tras las elecciones y una representación numerosa en las candidaturas conjuntas. Gil Robles se mantuvo firme. Se dio cuenta de que, en caso de victoria, un grupo amplio de Renovación Española podría hacer con la CEDA lo que la CEDA había hecho con los radicales. Además, sabía que un acuerdo nacional sobre la base de una alianza sería contraproducente, puesto que en muchas zonas una candidatura conjunta les repugnaría o a los republicanos de derechas o a los ultramonárquicos. Por tanto, insistió en que las alianzas fueran locales. En las zonas donde la izquierda tenía una fuerza considerable, como Badajoz, Jaén, Córdoba y Asturias, donde la victoria había sido por un escaso margen en 1933, la CEDA estaba dispuesta a aliarse con cualquiera que no perteneciese al frente popular. Por otra parte, en Salamanca, Navarra y la mayoría de Castilla, las zonas donde los sentimientos reaccionarios eran más fuertes, Gil Robles sabía que los contactos con grupos que no fueran de extrema derecha le harían perder votos. De este modo, las alianzas dependieron de las circunstancias locales, y la CEDA defendió los ideales que proclamaba sólo donde podía permitírsele. En Salamanca, la alianza fue únicamente con los carlistas y con los agrarios; en Asturias, con los liberales demócratas de Melquíades Álvarez; en Pontevedra, con los radicales; en Navarra, con los carlistas; en las Baleares, con Juan March. En los bastiones republicanos de Cataluña surgió una coalición inverosímil de la CEDA, los radicales, los carlistas y la *Lliga* unidos en un frente de «ley y orden»^[51].

El enorme cinismo del enfoque de la CEDA respecto a las elecciones se vio ilustrado por los contactos de Gil Robles con Portela Valladares, al que despreciaba y al que había tratado por todos los medios de derribar como ministro de la Gobernación durante el otoño anterior. Ante la imposibilidad manifiesta de crear un partido de centro sin apoyo popular, Portela había propuesto una alianza electoral con la izquierda. Su oferta fue tajantemente rechazada en la mayoría de las provincias, excepto Lugo y Alicante. En Lugo, la organización personal de Portela de falsificación electoral hacía virtualmente imposible que nadie se le impusiera. A las especiales circunstancias de Alicante nos referiremos más adelante. La oferta de Portela tenía un valor inmenso; el gobierno tenía a su disposición un aparato masivo de influencia electoral, el control de los Ayuntamientos, de las fuerzas de orden público, de los mecanismos de escrutinio electoral. La negativa de la izquierda evidenciaba de modo inconfundible su actitud ante el proceso democrático como modo de expresar la voluntad popular. Ante la negativa, Portela anunció, el 7 de febrero, que los candidatos que él patrocinaba se aliarían con la derecha en las zonas donde no se llegase a un acuerdo con la izquierda. La oferta fue aceptada y la derecha fue a las elecciones en coalición con los candidatos de Portela en muchas provincias^[52].

En sus memorias, Gil Robles describe a los hombres de Portela como chaqueteros y parásitos. Afirma que le asqueaba la idea de utilizar los mecanismos de corrupción: «Mi repugnancia a admitir una inteligencia con los medios gubernamentales era infinita. Pero ¿cómo impedir nuestra derrota en las circunscripciones de más elevado censo?». Un comentario ilustrativo de la sinceridad de las convicciones democráticas de Gil Robles. Lo que le interesaba era el poder que una victoria electoral le podía dar, sin que le preocupase la expresión de la voluntad del electorado^[53]. Él ya había mostrado públicamente su acuerdo con la aseveración de la JAP de que había que utilizar la democracia para provocar su propia destrucción. En consecuencia, podía permitirse condescender a la manipulación electoral para conseguir los resultados necesarios. Gracias al acuerdo de su partido con Portela, la CEDA contaba con el apoyo del gobierno en la mayor parte de Extremadura y Andalucía, zonas donde la izquierda rural era fuerte y donde el comportamiento de la Guardia Civil sería crucial para decidir los resultados. Un ejemplo esclarecedor de la moralidad electoral de la derecha tuvo lugar en Alicante. Portela había entablado negociaciones con la derecha local; como no le ofrecieron un número satisfactorio de escaños en la coalición, le hizo una propuesta a la izquierda. A continuación entregó el control de la provincia

y la mayoría de los Ayuntamientos a republicanos y socialistas. Chapaprieta ha mostrado en sus memorias la justa indignación y la repugnancia con que los derechistas de la provincia contemplaron este abuso. Sin embargo, las negociaciones de la derecha con Portela continuaron, y cuando Gil Robles le ofreció un número aceptable de escaños en la candidatura, los recién nombrados izquierdistas fueron separados de sus cargos sin contemplaciones y sustituidos por derechistas. Ni Gil Robles ni Chapaprieta parecen hallar esta situación, moralmente idéntica a la anterior, censurable en absoluto^[54].

Nada muestra más claramente la decisión de la CEDA de ganar las elecciones a cualquier precio que la naturaleza de su campaña. Para la propaganda dispusieron de fondos considerables, facilitados por seguidores acaudalados, como Juan March^[55]. Ya a finales de octubre, Gil Robles le había pedido al embajador alemán, conde Welczeck, un muestrario completo de propaganda nazi antimarxista de carteles y folletos para utilizarlos como modelo del material publicitario de la CEDA^[56]. En términos reales, la derecha tenía una enorme ventaja sobre la izquierda. Se imprimieron 10 000 carteles y 50 millones de folletos, que presentaban las elecciones en términos apocalípticos de lucha entre el bien y el mal, entre la supervivencia y la destrucción. A menudo, en la propaganda de la CEDA aparecían impresos la hoz y el martillo o las letras CNT para atraer la atención de los votantes de la clase obrera^[57]. En la mayoría de los casos, el contenido era tan virulento como falso. En Sevilla, por ejemplo, se distribuyeron folletos a las mujeres, afirmando que la República pretendía quitarles los hijos y destruir sus familias. Otro folleto pretendía que si la izquierda ganaba las elecciones, las consecuencias serían: «Armamento de la canalla, incendio de Bancos y casas particulares, reparto de bienes y tierras, saqueos en forma, reparto de vuestras mujeres». La derrota de la derecha se presentaba como una catástrofe terrible. Se decía que la República significaba el aumento de los delitos, con robos, incendios y asesinatos encabezando la lista^[58]. Este tipo de propaganda se distribuía a toneladas. Los camiones la llevaban hasta los pueblos pequeños y los aviones la dejaban caer en las granjas. Esta saturación de propaganda fue decisiva en los distritos rurales del norte, ya que de esta forma llegaba a una población rural sin cultura que miraba con gran respeto la palabra impresa. En Madrid se envió por correo ordinario medio millón de folletos, un índice de que la derecha tenía dinero fresco. Un retrato de Gil Robles de tres pisos de altura dominaba la Puerta del Sol. Aunque se prohibieron las transmisiones de radio, Acción Popular pudo pagar la retransmisión privada, el 9 de febrero, de un discurso de Gil Robles a 26 ciudades, y la víspera de las elecciones, otro a

400 lugares diferentes. También en febrero se alquilaron 10 teatros en Madrid, y a todos ellos se retransmitió un discurso del «jefe»^[59].

La intensidad y la malevolencia de la campaña de la CEDA alcanzaron el punto culminante en los mítines y en la prensa. Especialmente en provincias, la prensa de la CEDA era, como mínimo, tan truculenta como la de los monárquicos y los carlistas, enemigos declarados de la República. *El Debate* veía las elecciones como un conflicto irreconciliable entre la España y la anti-España, entre la civilización y la barbarie. La JAP, que controlaba la campaña de la CEDA, era más explícita y declaraba que la batalla era entre Gil Robles y el triángulo (la masonería, símbolo de republicanismo), la hoz y la estrella solitaria (de David). La JAP condujo la campaña en una atmósfera de adulación frenética a Gil Robles^[60]. Los gritos de ¡jefe!, ¡jefe!, ¡jefe!, resonaban a lo largo de los mítines, mezclados a menudo con vivas al ejército. Hubo un momento en que Pérez Laborda fue detenido después de un mitin de la JAP, en Soria, por la virulencia de sus ataques al presidente de la República. Gil Robles apenas era menos vehemente. En una gira por Galicia criticó repetidas veces una Constitución que, según él, reunía los peores aspectos del parlamentarismo y del sistema presidencial. En Toledo atacó la moderación del presidente respecto a la represión de Asturias. Y al finalizar un mitin en Madrid, en las palabras de Pérez Laborda resonaba el eco de un discurso anterior de Gil Robles: «Exaltación de España; pensar en España, trabajar por España, ¡morir por España! Exaltación de la patria con locura, con frenesí»^[61].

En todo el país, la prensa de la CEDA se caracterizaba por un odio implacable a la izquierda, que, en consecuencia, estaba profundamente preocupada por lo que supondría para ella una victoria de las derechas. La beligerancia de *El Debate* desmentía sus pretensiones del legalismo: «Entre la ruina o la salvación de España no cabe término medio ninguno. España está amenazada en su propio ser por las hordas marxistas, deseosos de poder cumplir la promesa del octubre rojo de 1934». La amnistía política sería «poner en la calle a los asesinos, ladrones e incendiarios afectos al socialismo, sindicalismo y comunismo». Se imprimieron gráficos detallados para demostrar que el socialismo era equivalente al gangsterismo^[62]. La prensa de provincias era, si acaso, más belicosa. En Almería, *La Independencia* pedía a los votantes que rescataran a España de judíos y masones. La elección era entre Dios o la anarquía. A los propietarios de tierras se les hacían llamamientos elementales «Tu propiedad desaparecerá si ellos triunfan». El

tono de la propaganda de la CEDA contrasta con la moderación del periódico rival, republicano, *El Diario de Almería*. Un contraste aún más profundo lo tenemos en Granada entre el estridente *Ideal*, de Acción Popular, y el bastante más controlado *El Defensor*^[63].

Inevitablemente, la izquierda apoyaba sus acusaciones de fascismo en las declaraciones de los propagandistas de la CEDA y de sus periódicos. La preocupación de la izquierda es comprensible. La JAP resumía el programa de la CEDA en caso de victoria: deposición del presidente, plenos poderes para el gobierno, disolución del partido socialista, aniquilación de la revolución, reducir al silencio a «la prensa canalla», una nueva Constitución. No se trataba simplemente de excesos verbales de la juventud. El propio Gil Robles acariciaba la idea de la dictadura. Sabía que incluso si la CEDA, que tenía 178 candidatos, conseguía una victoria aplastante, sólo podría contar como máximo con 140 escaños en las Cortes. Esto supondría nuevos gobiernos de coalición. El 5 de febrero anunció amenazadoramente: «España no puede aguantar por más tiempo unas Cortes estériles. Ya es bastante». Muchos de sus seguidores le incitaban hacia la dictadura civil. Él, lógicamente, recordaba sus consultas con los generales en diciembre. Araquistáin, el teórico socialista, sugiere, y tal vez fuera así, que Gil Robles no estaba hecho de la madera de los dictadores. Pero el hecho es que a muchos cedistas les atraía la idea^[64]. Las afirmaciones más extremistas sobre esta posibilidad provenían de la JAP en un grito de combate tan fascista como nunca había emanado de la derecha española. Después del triunfo habría energía, repudio del liberalismo, una política joven y viril. Se aducían 27 razones por las que había que dar plenos poderes a Gil Robles, entre las cuales estaban la necesidad de aplastar el espíritu revolucionario, limitar las libertades «criminales», prohibir las organizaciones que predicán la lucha de clases, terminar con el laicismo, terminar con los vicios del parlamentarismo, fortalecer el poder ejecutivo, llevar a cabo una política enérgica de orden público, crear un ejército fuerte, una marina y una fuerza aérea^[65].

Hasta qué extremos estaba decidida la CEDA a conseguir el poder que hiciera posible todo esto se vio por la forma en que, junto con la propaganda y las alianzas electorales, ejerció durante la campaña todo tipo de presiones, incluido el uso de la fuerza. Las pruebas son necesariamente anecdóticas, pero, en cualquier caso, abrumadoras. Las presiones electorales en las ciudades fueron diversas, pero en su mayoría variaciones sobre el tema de la compra de votos. En las zonas rurales y urbanas de desempleo, Acción

Popular empezó a abrir comedores benéficos y a repartir mantas a los pobres. *El Socialista* hizo acusaciones de compra directa de votos. La penuria económica era suficiente como para poder hacerlo a bajo precio. El embajador americano cuenta que «un agente electoral, haciendo propaganda en el piso donde vivía Constanca de la Mora..., creyó que había comprado a su criada andaluza por 25 pesetas, pero inmediatamente ella se lo contó a su señora». El periodista inglés Henry Buckley da más detalles: «Conocí a un casero, propietario de siete casas, que avisó a los porteros que pasaría a recogerles en coche a ellos y a sus familiares que tuvieran voto para llevarles al colegio electoral. Claro que esto significaba que en la puerta de la cabina les daría las papeletas con el voto por la derecha y miraría desde la puerta hasta que las introdujeran en la urna. Y varias mujeres de derechas a las que yo conocía habían preparado todo para llevar a sus criadas con ellas al colegio electoral, lo mismo que la última vez». En las oficinas de Madrid, los empleados sufrieron presiones para que votaran por las derechas. A los que querían actuar como interventores de la izquierda se les advirtió que tendrían problemas si lo hacían. Al mismo tiempo, los empleados de derechas tuvieron todas las facilidades, tiempo libre y tren pagado a sus provincias de origen para que pudieran depositar sus votos^[66].

La situación en las zonas rurales era mucho más violenta y la derecha tenía muchas más facilidades para influir en los resultados. Un caso extremo de la conducta de la derecha se dio en Granada, donde una clase terrateniente especialmente reaccionaria veía la victoria de la CEDA como la única posibilidad de proteger sus privilegios. Las Casas del Pueblo permanecían cerradas tras la revolución de octubre. La prensa republicana desaparecía misteriosamente al llevarla de Granada a los pueblos remotos. El periódico de la CEDA, *Ideal*, que siempre llegaba a su destino, daba el tono al decir que unos cuantos palos bastarían para que la izquierda no se moviera, puesto que todos los izquierdistas eran unos cobardes. Los caciques locales parecen haberlo tomado al pie de la letra, porque alquilaron grupos de matones que, a menudo con ayuda de la Guardia Civil, impedían la propaganda de la izquierda. Los carteles se arrancaban a punta de pistola, se bloqueaban las carreteras para que los oradores republicanos no pudieran llegar a los pueblos, se hacían correr rumores de que los campesinos no podrían votar si no tenían una documentación especial. Los republicanos destacados eran detenidos ilegalmente y se impidió a los interventores de izquierdas que ejercieran sus funciones. Durante las votaciones, las presiones se hicieron más variadas. En algunos pueblos se repartieron comestibles a los parados antes de que votaran;

en otros se utilizaron urnas de cristal sin que hubiese más que interventores de derechas armados. En Loja, el Ayuntamiento requisó todos los coches, taxis, autobuses y camiones durante el día de las elecciones para que los trabajadores no pudiesen acudir a votar. En Chite se detuvo durante todo el día a los republicanos. En Fonelas, los campesinos que llegaban a votar se encontraron con que el alcalde había adelantado el reloj y había cerrado el colegio electoral una hora y media antes de tiempo. A pesar de todo esto, los caciques tuvieron que alterar los resultados, sin siquiera preocuparse de guardar las apariencias. En 20 pueblos, los candidatos del frente popular no recibieron ni un solo voto, en una zona donde la izquierda era muy fuerte^[67].

Puede que Granada fuese un caso extremo, pero de ningún modo atípico. En Badajoz, por ejemplo, las autoridades mantuvieron cerradas las Casas del Pueblo, contraviniendo directamente las órdenes del gobierno. Al mismo tiempo, la Guardia Civil colaboró con los derechistas locales para impedir los preparativos electorales de socialistas y republicanos. En Huelva, los alcaldes derechistas prohibieron todos los mítines del frente popular. Los pocos relatos de testigos presenciales que se han publicado cuentan la misma historia. En Mijas (Málaga), el cacique movilizó a sus matones y a la Guardia Civil para evitar cualquier propaganda de izquierdas. También intentaron impedir que la izquierda votase. En Novés (Toledo), el cacique, un cedista que había intentado dominar al campesinado local negándose a cultivar la tierra, recibió toda la ayuda de la Guardia Civil en sus esfuerzos para detener la campaña electoral del frente popular. Después de las elecciones, la izquierda acusó a la derecha de haber utilizado procedimientos ilegales en varias provincias. Parece que hubo pruebas de compras de votos en Salamanca, pero era difícil demostrarlo. La derecha también tenía sus contraacusaciones. Sin embargo, si la izquierda hubiera estado dispuesta a alterar la voluntad popular a cualquier precio, no tenía más que haber aceptado la oferta de Portela de coalición con los candidatos del gobierno. Pero no lo hizo; fue la CEDA la que se valió de los mecanismos de falsificación^[68].

Las elecciones celebradas el 16 de febrero dieron la victoria al frente popular. De hecho, los partidos de derechas aumentaron sus votos en más de 750 000, en parte como resultado de la desaparición del partido radical y la probable transferencia de la mayoría de sus votos a la CEDA^[69]. En ese sentido, la carísima campaña electoral de Gil Robles había sido un éxito. Sin embargo, los partidos de la izquierda aumentaron sus votos aproximadamente en un millón. La política de la derecha durante el bienio negro había hecho

posible que no se repitieran las dos condiciones claves de los resultados de la elección de 1933: la división de la izquierda y la abstención de los anarquistas. Las consecuentes recriminaciones de los monárquicos y de los miembros de la CEDA más extremistas se dirigieron contra Gil Robles por haber derrochado el dinero y un tiempo muy valioso en una táctica legalista que al final había fracasado. De hecho, hasta las últimas fases de la guerra civil, como una idea tardía, no se impugnó la validez de los resultados de las elecciones como parte de un intento de legitimar el levantamiento militar de julio de 1936^[70].

Sin embargo, precisamente porque los resultados electorales mostraban la voluntad popular, la derecha cambió gustosa a tácticas más violentas. Ya la campaña propagandística del frente antimarxista había descrito la derrota como el principio del holocausto. En gran medida, Gil Robles había apoyado la existencia de su legalismo en la obtención de una victoria en las elecciones. Inevitablemente, tras el tono apocalíptico de la campaña electoral, los resultados produjeron un sentimiento de desesperación dentro de la CEDA. El movimiento de juventudes y muchos de los ricos mecenas del movimiento se convencieron inmediatamente de la necesidad de asegurar por la violencia lo que era inalcanzable por la persuasión. A fuerza de gastos enormes y ayudada por la locura táctica de la izquierda, la derecha había conseguido la victoria en las elecciones de 1933. La utilización revanchista de ese triunfo volvió a unir a la izquierda. En 1936 se había gastado más aún en propaganda; miles de cuadros socialistas, comunistas y anarquistas estaban en la cárcel; los mecanismos de falsificación electoral habían estado a disposición de la derecha; se había utilizado con los votantes desde el engatusamiento económico hasta las amenazas. Y, sin embargo, la izquierda había ganado. La insurrección de octubre había impedido el establecimiento pacífico del Estado corporativo, y las elecciones del frente popular posponían la posibilidad indefinidamente. Las elecciones marcaban la culminación del intento de la CEDA de utilizar la democracia contra sí misma. Esto significaba que desde entonces la derecha se preocuparía más de destruir la República que de apoderarse de ella. En el transcurso de la labor de zapa que la CEDA había realizado contra el régimen, se había generalizado la suficiente insatisfacción como para que el movimiento socialista no estuviese dispuesto a sacrificarse por la República, como lo había hecho entre 1931 y 1933. En ese sentido, a pesar de su aparente fracaso, la CEDA había facilitado considerablemente la tarea de sus aliados más violentos.

CAPITULO VII

EL ABANDONO DEL LEGALISMO: EL PSOE, LA CEDA Y LOS PROLEGOMENOS DE LA GUERRA EN 1936

Los acontecimientos de octubre de 1934 y los resultados de las elecciones de 1936 destruyeron los sueños de la CEDA de imponer un Estado corporativo autoritario sin tener que luchar en una guerra civil. Tras dos años de gobierno agresivo de la derecha, el estado de ánimo de las masas trabajadoras, especialmente en el campo, estaba lejos de ser conciliatorio. Habiendo visto una vez frustradas sus ambiciones reformistas, la izquierda estaba decidida ahora a poner en marcha rápidamente un cambio agrario significativo que amenazaría directamente los intereses de los promotores de la CEDA. Al predecir que un éxito electoral de la izquierda sería el preludio de los más terroríficos desastres sociales, la CEDA había minado su propia razón de ser la defensa legal de los intereses religiosos y de los de los terratenientes. La pequeña sección de la jefatura de la CEDA que se agrupaba alrededor de Manuel Giménez Fernández y de Luis Lucía y que creía que el partido debía aceptar ahora la República totalmente era incapaz de ejercer una influencia sobre la política de la CEDA. Era demasiado tarde para intentar anular los efectos de la propaganda cedista. Las oligarquías industrial y rural estaban ya desviando su apoyo financiero hacia la derecha conspiratoria. Parece que Gil Robles aceptó que la táctica legalista carecía ya de utilidad. En cualquier caso, no intentó detener la salida de miembros de la CEDA hacia organizaciones más extremistas. Al mismo tiempo colaboró positivamente, en el Parlamento y en la prensa, para crear el ambiente en el que las clases medias veían en un levantamiento militar la única alternativa a la catástrofe.

No quiere decir esto que Gil Robles no hubiera preferido ver el establecimiento por medios legales de un Estado corporativo, socialmente conservador. Sin embargo, su prontitud en dirigirse a los militares en octubre de 1934, diciembre de 1935 y febrero de 1936 revela que el fin era más importante, que los medios. Una vez convencido de que la vía legal hacia el corporativismo estaba bloqueada, hizo todo lo posible para ayudar a los partidarios de la violencia. Ya había hecho dos contribuciones fundamentales para el éxito del levantamiento de 1936. La primera, de la que se jactaría más adelante, era la creación de una masa militante de derechas. La otra era el haber minado la fe socialista en las posibilidades de una democracia burguesa.

El éxito de la CEDA, dentro y fuera del poder, en la defensa de la estructura social anterior a 1931 había mermado la disposición del PSOE para defender el régimen.

La ambigüedad de la actitud socialista hacia la República iba a ser de forma muy real el factor crucial de 1936. Prieto estaba tan convencido cómo siempre de la necesidad de la colaboración socialista en el gobierno, sobre todo porque conocía la fuerza y la determinación de la derecha. Sin embargo, a pesar de controlar la ejecutiva del PSOE, Prieto seguía teniendo que hacer frente a Largo Caballero y a su cortejo revolucionario. Una serie de factores influían en la actitud de Largo: resentimiento hacia Prieto, un deleite en los halagos de los comunistas y de los izquierdistas del PSOE que le aclamaban como el «Lenin español» y, sobre todo, la militancia de la base socialista. La combinación de la crisis económica y de la política revanchista de los terratenientes contra los trabajadores sindicados hizo llegar, a finales de febrero de 1936, el desempleo a 843 872, el 17 por 100 de la población activa^[1]. Los resultados de las elecciones marcaron un retomo casi inmediato al *lock-out* rural de 1933 y una nueva agresión de los patronos urbanos. Largo Caballero temía un desplazamiento hacia la CNT o el PCE si no mantenía a las masas socialistas en la esperanza de un futuro revolucionario. Además, su propuesta más revolucionaria, la convocatoria a la unidad proletaria, escondía simplemente el deseo de hacer crecer a la UGT a través del control de los movimientos anarquista y comunista. A los comunistas les convenía fomentar su convicción de que era un auténtico revolucionario, puesto que confiaban en que podrían dominar a la clase obrera unida si Largo Caballero conseguía la fusión del proletariado.

Los anarquistas y los trotskistas seguían desconfiando. Creían que, aunque Largo aceptase en teoría que la clase obrera poco podía esperar de un régimen burgués, en la práctica nunca podrían romper con sus hábitos reformistas^[2]. Así, en lo que a ellos se refería, lo único que hacía Largo era exponer de forma rimbombante tópicos revolucionarios. Este análisis era prácticamente correcto, pero la falsa naturaleza del revolucionarismo de Largo no servía para tranquilizar a las clases medias, aterrorizadas por la propaganda derechista. Resentido por su experiencia de colaboración con el régimen burgués entre 1931 y 1933, y decidido a no tener que volver a sufrir nunca el oprobio de un nuevo Casas Viejas, el presidente de la UGT esperaba que los republicanos realizaran el programa electoral y de este modo despejasen el camino para un gobierno exclusivamente socialista. Largo hablaba de

conseguir el poder «por cualquier medio», pero no parece probable que llegase a pensar en la acción insurreccional, puesto que confiaba en que, finalmente, podría poner en marcha una reforma social general desde el poder. En consecuencia, se opuso a cualquier tipo de participación provisional de los socialistas en el gobierno y continuó refiriéndose al cambio social revolucionario como si fuera inminente. De este modo perdió tanto las ventajas posibles de un revolucionarismo auténtico como las de una postura reformista. La amenaza de un golpe fascista o del ala derecha militar podía haberse evitado por medio de la acción revolucionaria, aunque las condiciones objetivas difícilmente favorecían esta táctica. Del mismo modo, una presencia socialista fuerte en el gobierno podría haber restringido las provocaciones fascistas antes de que creasen el contexto necesario para un golpe. La política de Largo impidió lo uno y lo otro.

Aparte de impedir que el PSOE participase en el gobierno, Largo no hizo nada para obstaculizar el trabajo del gobierno republicano. Sin embargo, no bastaba con quedarse moderadamente al margen. La dirección socialista sabía perfectamente que la derecha estaba decidida a que el frente popular no pudiera disfrutar de su victoria. Poco antes de entregar el poder a Azaña, el 19 de febrero, Portela Valladares, le había dicho el secretario en funciones del PSOE, Juan Simeón Vidarte, que había habido una amenaza seria de golpe militar. A las, 3,30 de la mañana del día 17, al conocerse los primeros resultados, Gil Robles había ido a ver a Portela para tratar de persuadirle de que no entregase el poder a la izquierda victoriosa. El líder de la CEDA le dijo al primer ministro que el triunfo del frente popular significaba la anarquía y le pidió que declarase el estado de guerra. Al mismo tiempo mandó a su secretario particular, el conde de Peña Castillo, a que consiguiese que Franco, que seguía siendo jefe del Estado Mayor, presionara sobre Portela para que éste apelase al ejército. Cuando Portela se negó, continuaron los esfuerzos para organizar la intervención militar. El general Goded intentó sacar las tropas del cuartel de la Montaña, de Madrid, pero los oficiales de ese cuartel y de otras guarniciones se negaron a rebelarse sin la garantía de que la Guardia Civil no se les opondría. Franco mandó un emisario al general Pozas, director de la Guardia Civil, pidiéndole que se uniese al levantamiento. Pozas se negó, y Franco, desde su despacho del Ministerio de la Guerra, intentó que los jefes locales declarasen el estado de guerra. Éste llegó a declararse en Zaragoza, y en Huesca y Granada se hicieron preparativos en el mismo sentido. Sin embargo, no respondieron los suficientes jefes locales, sobre todo porque Pozas rodeó con destacamentos de la Guardia Civil todas las guarniciones

sospechosas. Si el golpe hubiera triunfado, Gil Robles se hubiera encargado de la jefatura del gobierno^[3].

Tal como se desarrollaron los acontecimientos, la consecuencia principal de estos incidentes fue que Portela se alarmó y quiso entregar el poder inmediatamente a Azaña, sin esperar para dimitir a la apertura de las Cortes. En contra de su voluntad, Azaña se vio forzado a aceptar prematuramente el poder la tarde del 19 de febrero. Por el momento, la CEDA no tenía más alternativa que aceptar los resultados electorales, lo que era un duro golpe. Privado de los beneficios del legalismo, el partido católico parecía aturdido. Corrieron rumores de que Gil Robles iba a abandonar la política^[4]. Al principio parecía que la derrota había moderado los ánimos de la CEDA, que la demagogia preeleitoral era algo del pasado y que el partido estaba dispuesto a hacer un esfuerzo para calmar la situación política. La impresión era ilusoria. Giménez Fernández visitó a Azaña el 20 de febrero, con evidente nerviosismo, para comunicarle que la CEDA estaba dispuesta a votar a favor de la amnistía de los presos por razones políticas desde octubre de 1934. Al jefe del gobierno le pareció que era un simple intento de evitar las consecuencias de la política agresiva de la CEDA durante los dieciocho meses anteriores. «Si hubiesen ganado las elecciones —escribió con acritud en su diario— no se habrían cuidado de pacificar y, lejos de dar la amnistía, habrían metido en la cárcel a los que aún andan sueltos»^[5].

Por el momento, sin embargo, la moderación estaba ostensiblemente en el orden del día de la CEDA. Gil Robles, en una entrevista al *Le Petit Parisien*, dijo que la oposición al gobierno no sería sistemáticamente destructiva, sino prudente, inteligente y moderada. La comisión nacional de la CEDA se reunió el 4 de marzo para examinar su postura tras la derrota electoral y publicó una declaración reafirmando el compromiso del partido con la táctica legalista y manifestando que el partido «no piensa remotamente en soluciones de fuerza». Puesto que Gil Robles había estado envuelto dos veces en intentos de organizar un golpe de Estado desde mediados de diciembre, la declaración puede verse más como una estratagema defensiva para mitigar la hostilidad y los recelos de la izquierda que como una afirmación de intenciones. Se ofreció al gobierno el apoyo de la CEDA para el mantenimiento del orden público, que, según ellos, estaba seriamente amenazado por los seguidores del frente popular^[6]. Lógicamente, este apoyo no servía para nada a un gobierno comprometido a realizar las aspiraciones de las masas y no a su represión indiscriminada.

A la izquierda no le impresionaban las declaraciones de moderación de Gil Robles. Durante el período de dominio de la CEDA se habían dado más de 270 000 licencias de armas a los derechistas. Ahora, en la primera mitad de marzo, comenzaban los ataques armados a los políticos prominentes liberales o de izquierdas. La izquierda no creía que las acciones de comandos estuvieran dirigidas sólo por los falangistas y financiadas por los monárquicos de Acción Española. *El Socialista* afirmaba que también la CEDA estaba organizando grupos de asalto motorizados. A medida que pasaba la primavera, un número creciente de jóvenes de derechas detenidos por actos de violencia eran miembros de la JAP^[7]. La izquierda no creía que la preocupación de Gil Robles por el orden público le distinguiese de los otros grupos de derechas. Más bien creía que, junto con las provocaciones de los falangistas, formaba parte de un intento de desacreditar al gobierno y mostrar la necesidad de un régimen dictatorial de la derecha. La izquierda veía a la CEDA, Renovación Española, los carlistas y la Falange como unidades especializadas del mismo ejército. Sólo diferían sus tácticas. Compartían la misma decisión de establecer un Estado corporativo y de destruir las fuerzas efectivas de la izquierda. Los dirigentes de cada grupo hablaban en los mítines de los otros y generalmente eran aplaudidos con entusiasmo. En la prensa de la CEDA se reservaba regularmente espacio para dar información favorable sobre las actividades de sus rivales más violentos. Las divisiones entre ellos nunca fueron más allá de una crítica táctica del legalismo de la CEDA. Hay pruebas considerables en apoyo de esta interpretación de los partidos de derechas. Todos ellos servían a la oligarquía terrateniente e industrial, puesto que su financiación dependía de ella y todas sus actividades políticas iban dirigidas a la protección de sus intereses. Raras veces rompieron la unidad en el Parlamento, durante las elecciones o durante la guerra civil, un contraste absoluto con las divisiones que escindieron a la izquierda tanto en la guerra como en la paz.

La prensa de izquierdas pedía continuamente a sus lectores que no respondiesen a las provocaciones fascistas, aunque no siempre con éxito. El 12 de marzo los falangistas intentaron matar a Luis Jiménez Asúa. Cuatro días más tarde la casa de Largo Caballero fue incendiada. En consecuencia, la izquierda se sintió furiosa cuando Gil Robles fue a ver al ministro del Interior, Amos Salvador, el 17 de marzo para protestar por el desorden. Además, la CEDA pidió un debate sobre el tema en las Cortes. Sin mencionar que la Falange y posiblemente la JAP estaban implicadas en la violencia, la CEDA declaró que el gobierno y la izquierda eran los responsables^[8]. Esto muestra

la naturaleza totalmente propagandística de la recién hallada moderación de la CEDA. Gil Robles se veía obligado a moverse con discreción. Sabía que el ejército todavía no estaba preparado para hacerse con el poder. También sabía que la obstrucción total al gobierno de Azaña sólo podía llevar a la constitución de un gobierno totalmente socialista, que pasaría inmediatamente a la acción contra la extrema derecha. Por tanto, dedicó sus energías a crear la atmósfera en la que las clases medias, aterrorizadas por el espectro del desorden, se volvieran hacia el ejército como el único salvador.

El 19 de marzo, Manuel Giménez Fernández pidió a la CEDA que dejase clara su posición. Enfrentados con la alternativa de elegir entre monarquía o república, los miembros de la minoría parlamentaria del partido decidieron que no era «oportuno» modificar su postura de legalidad republicana. Cuando se les pidió la elección entre democracia y fascismo, los diputados de la CEDA mostraron su preferencia por la primera, pero anunciaron amenazadoramente que si la democracia no era posible el partido se disolvería y cada miembro se uniría al grupo más próximo a su ideología. Al debatir si debían permanecer en el Parlamento, los diputados decidieron continuar para utilizar las Cortes como tribuna propagandística. En aquellos momentos, una declaración abierta de republicanismo de la CEDA hubiera fortalecido considerablemente al régimen contra los extremistas de derechas e izquierdas. Sin embargo, a los promotores del partido, y a la mayoría de sus miembros, no les interesaba consolidar el régimen^[9]. En las Cortes, los diputados de la CEDA desafiaban provocadoramente a los socialistas para que se dejaran de discursos e hicieran la revolución. A principios de abril, Largo Caballero sacó a la luz una provocación similar. Según parecía, la derecha estaba imprimiendo folletos, que se atribuían a la UGT, con planes detallados para la revolución y listas negras de los enemigos de la izquierda. Sin renunciar a sus objetivos a largo plazo, el presidente de la UGT declaró que los socialistas no tenían intención de alterar el orden público^[10].

La forma en que la derecha en general, y la CEDA en particular, utilizaban el Parlamento simplemente por su valor propagandístico se puso de manifiesto durante los debates celebrados para examinar la validez de las recientes elecciones. La comisión franquista establecida para probar la ilegitimidad del gobierno republicano afirmaba que el frente popular utilizó su mayoría en la comisión encargada de examinar la validez electoral, la comisión de actas, para aumentar el número de sus diputados^[11]. De hecho, fue todo lo contrario, puesto que la comisión actuó con un legalismo

puntilloso, ya que al excluir muchas pruebas de falsificación favoreció consistentemente a la derecha. En Santander, por ejemplo, se ignoraron las alegaciones de intimidación a los republicanos por falta de pruebas acreditadas mediante acta notarial y se confirmó la victoria de las derechas. Otras decisiones favorecieron a la derecha en las provincias de Ciudad Real, Toledo y Ávila por razones similares. En la provincia de Zaragoza, dejando aparte las pruebas de intimidación, el gobernador civil se había inventado los resultados de 78 pueblos. Sin embargo, se aprobó la victoria de la derecha por falta de pruebas documentales legalmente aceptables. Los resultados de las islas Baleares, el feudo de Juan March, ni siquiera fueron puestos en cuestión. En Albacete había pueblos en que el número de votos superaba al de votantes. El secreto del voto también se había transgredido. Sin embargo, como la izquierda no había podido contar con un notario que estuviera presente durante las elecciones, las pruebas acumuladas fueron insuficientes para impugnar los resultados de Albacete^[12].

A pesar de la imparcialidad con que la comisión de actas llevó a cabo sus funciones, la CEDA se las ingenió para ocultar su participación en el fraude electoral y para dar la impresión de que se la estaba persiguiendo. Esto era una parte crucial del proceso por el que se convencía a la opinión de derechas de que la coexistencia democrática ya no era posible. Varios de los distritos en los que se ponían en duda los resultados electorales estaban representados por líderes derechistas destacados. Gil Robles y Cándido Casanueva, en Salamanca; Calvo Sotelo, en Orense, y Goicoechea, en Cuenca, estaban en peligro de perder sus escaños. Si se invalidaban las elecciones más flagrantemente fraudulentas, las de Granada, la CEDA corría el riesgo de perder cinco diputados. En consecuencia, Giménez Fernández, el representante de la CEDA en la comisión de actas, declaró que la comisión era tendenciosa y que estaba creando un Parlamento para que fuese el instrumento de un régimen totalitario. A continuación dirigió la retirada de las Cortes de los diputados de la CEDA, tras un discurso amenazador que terminaba con las palabras: «Dejamos en vuestras manos la suerte del sistema parlamentario». Esta simple maniobra iba dirigida a que la CEDA pudiese denunciar la composición del Parlamento como arbitraria y no democrática. *ABC* afirmó que la derecha había sido expulsada del Parlamento^[13].

Precisamente para evitar que la derecha pudiera desacreditar de esta forma a las Cortes, Prieto, el presidente de la comisión, intentaba llegar a un acuerdo con los representantes de la CEDA, pero éstos pidieron más de lo que él

estaba dispuesto a conceder. Cuando, por otras razones, dimitió de la presidencia, la derecha intentó hacer creer que era una prueba de que él, como socialista recto, estaba asqueado de las actividades fraudulentas de la comisión. Prieto parece haber dimitido, en parte, porque creía que políticamente sería más prudente no proceder a la expulsión de las figuras destacadas de la derecha, por muy justificada que estuviese. Para él era más prudente tenerlos en el Parlamento que conspirando en otra parte. También se ha dicho que no estaba dispuesto a tolerar las presiones de Alcalá Zamora para que se aprobase la elección de Portela Valladares en Pontevedra. Consideraba que no era justo ignorar la evidencia del fraude en Pontevedra y no hacer lo mismo en Orense. Sin embargo, el 7 de abril dejó claro en las Cortes que su dimisión no se debía a que creyese que se estaba haciendo trampas a la derecha para arrebatarle escaños^[14].

Prieto fue sustituido por Jerónimo Gómáriz, el diputado de la Unión Republicana por Alicante. Las decisiones de la comisión continuaron en la misma línea de antes. Tanto los resultados de Pontevedra como los de Orense fueron aprobados. Los de Cuenca fueron anulados por dos razones. En primer lugar había habido falsificación de votos, y además, una vez que se descontaron los votos defectuosos, ningún candidato llegaba al mínimo del 40 por 100 de los votos requerido para la elección. Había pruebas abrumadoras de que en Granada los representantes legales del frente popular habían sido detenidos durante las elecciones, de que bandas armadas habían controlado las urnas y de que la gente había sido obligada a punta de pistola a votar por las derechas. En consecuencia, las elecciones de Granada fueron anuladas. La situación respecto a los resultados de Salamanca era bastante más compleja. Los seis candidatos victoriosos de la derecha, Gil Robles, Cándido Casanueva, Ernesto Castaño y José Climas Leal, de la CEDA, junto con los dos carlistas, Lamamié de Clairac y Ramón Olleros, estaban implicados en la solicitud ilegal de votos a los cultivadores de trigo de la provincia, ofreciéndoles comprarles los excedentes acumulados. Finalmente, las elecciones de Lamamié, Castaño y Olleros fueron declaradas nulas y fueron sustituidos como diputados por los candidatos que habían obtenido mayor número de votos detrás de ellos^[15].

Una vez que tuvo su escaño asegurado, Gil Robles volvió a llevar a la CEDA a la Cámara, aunque a un precio. Azaña, igual que Prieto, se dio cuenta de que habría pocas esperanzas para la democracia española si la derecha podía afirmar en su masiva red de prensa que había sido excluida de

las Cortes. En consecuencia, como compensación a la vuelta de la CEDA al Parlamento, Azaña retrasó las elecciones municipales que debían tener lugar el 14 de abril. En aquellas circunstancias hubieran supuesto, casi con seguridad, una victoria masiva de los candidatos del frente popular y la eliminación de los alcaldes de derechas en la mayor parte de España. La izquierda sufrió una amarga decepción^[16]. Gil Robles hizo poco para merecer el premio. El 7 de abril, cuando Prieto sacó el tema de la validez de la disolución de las Cortes anteriores por Alcalá Zamora para provocar su dimisión, Gil Robles aprovechó la oportunidad para desfigurar la labor de la comisión de actas. Primero afirmó que a su partido se le habían arrebatado con malas artes 40 escaños. A continuación protestó por los procedimientos ilegales que se habían utilizado en las elecciones de Granada y de Cuenca, como si hubiese sido culpa de la izquierda. No hay ni que decir que la prensa de derechas, al dar cuenta de su discurso, no se molestó en aclarar esta astuta confusión de problemas^[17].

La campaña de Prieto para deponer a Alcalá Zamora iba a tener serias consecuencias para la República. Prieto y Azaña eran posiblemente los dos únicos políticos con la suficiente habilidad y popularidad para estabilizar la tensa situación de la primavera de 1936. Ellos podían haber sido capaces de mantener el ritmo de la reforma a un nivel satisfactorio para el militante de izquierdas, de mostrar la decisión terminante de acabar con las actividades de la extrema derecha y de revelar la suficiente capacidad de estadistas como para haber atraído a la derecha moderada. Puesto que la derecha había mostrado que sólo podría aceptar una república que defendiese el conservadurismo social, es muy improbable que un gobierno liberal fuerte hubiera podido convertir a la lealtad republicana a un número significativo de sus miembros. Sin embargo, Prieto y Azaña podían haber puesto término a las provocaciones fascistas y a las respuestas izquierdistas, que preparaban el camino para un golpe militar. Tal y como ocurrieron las cosas, deponiendo al presidente y facilitando su sustitución por Azaña, Prieto hizo que ninguno de los dos pudiese dirigir el gobierno.

Se ha dicho que fue el ala izquierda del partido socialista la que quería eliminar a Alcalá Zamora porque era «la última garantía de moderación que quedaba dentro del sistema republicano»^[18]. La única prueba que puede aducirse en apoyo de esta afirmación es un comentario que Luis Araquistáin hizo poco antes de su muerte a Juan Manchal. Según Araquistáin, la izquierda socialista neutralizó tanto a Azaña como a Prieto, haciendo presidente al uno

e impidiendo que el otro le sustituyese como jefe de gobierno para impedir que hubiera una figura fuerte al frente del gobierno^[19]. Los hechos no justifican esta afirmación. El propio Prieto fue el que tomó la iniciativa de deponer al presidente contra la opinión de Besteiro y de Fernando de los Ríos. Secundado por su lugarteniente, Vidarte, emprendió con éxito la denuncia parlamentaria del presidente. Aún más significativo es que, cuando llegó el momento de buscarle un sustituto, Prieto hizo más que nadie para asegurar que éste fuera Azaña. Rechazó las sugerencias de Vidarte de que fuera Besteiro, basándose en que Largo Caballero nunca daría su acuerdo. Cuando Vidarte mencionó a De los Ríos, Prieto replicó que los republicanos no le darían el visto bueno a un socialista. Largo le dijo a Vidarte que consideraba ridículo quitar a Azaña de un puesto en el que estaba haciendo un trabajo esencial. El líder de la UGT era partidario de que fuera Álvaro de Albornoz, pero cuando Vidarte sugirió su nombre a la ejecutiva del PSOE, Prieto se opuso y consiguió que los socialistas no propusieran ningún candidato. Cuando la Izquierda Republicana propuso a Azaña, Prieto insistió en que el PSOE apoyase su candidatura^[20]. Prieto estaba jugando todas sus bazas para poder seguir a Azaña como jefe de gobierno. Si fracasaba, no habría ningún otro capaz de dirigir el gobierno en unos momentos de creciente hostilidad de las derechas.

La necesidad de un gobierno con decisión se hizo patente el 15 de abril, cuando Azaña presentó su programa de gobierno a las Cortes. Pronunció un discurso extremadamente moderado y se comprometió a cumplir el programa electoral del frente popular. Calvo Sotelo replicó en tono beligerante que cualquier gobierno que se apoyase en los votos del PSOE estaba sólo a un paso de la dominación rusa. Gil Robles, hablando con menos virulencia, recogió el tema de Calvo Sotelo de que el país estaba bajo el dominio de la anarquía de la izquierda y dirigido por un gobierno impotente. La consecuencia que se desprendía de ello es que sólo quedaban las soluciones de fuerza. Ya, dijo, sus seguidores estaban escogiendo el camino de la violencia. Afirmó que se aproximaba a gran velocidad el momento en que tendría que informar a los miembros de la CEDA de que no había nada que esperar de la legalidad. Hablando en términos apocalípticos que difícilmente correspondían a la situación por la que se atravesaba, e ignorando totalmente la contribución derechista a la violencia política, advirtió lúgubrememente: «La mitad de la nación no se resigna a morir. Si no puede defenderse por un camino, se defenderá por otro... La guerra civil la impulsan, por una parte, la violencia de aquellos que quieren ir a la conquista del poder por el camino de

la revolución; por otra parte, la está mimando, sosteniendo y cuidando la apatía de un gobierno que no se atreve a volverse contra unos auxiliares que tan cara le están pasando la factura de la ayuda que le prestan... Cuando la guerra civil estalle en España, que se sepa que las armas las ha cargado la incuria de un gobierno que no ha sabido cumplir con su deber frente a los grupos que se han mantenido dentro de la más estricta legalidad». Se trataba de una interpretación terriblemente parcial de la situación que en gran medida había sido creada por la derecha durante la estancia de la CEDA en el poder. El discurso de Gil Robles terminaba con un grito de batalla profético que prefiguraba lo que iba a suceder realmente con la CEDA cuando se produjo el levantamiento militar: «Por esa patria, lo que sea necesario, incluso nuestra desaparición si los grandes intereses lo exigieran; pero no una desaparición cobarde, entregando el cuello al enemigo. Es preferible saber morir en la calle a ser atropellado por cobardía». Este discurso ha sido interpretado por algunos como un alegato sincero en favor del orden^[21]. Sin embargo, queda claro que el único orden aceptable para la derecha era el que no amenazase «los intereses nacionales». En el vocabulario de la derecha, estos intereses tendían a ser idénticos a los de la oligarquía. De hecho, Gil Robles amenazaba con la guerra si el gobierno no abandonaba la reforma de la estructura económica y social.

En este contexto debe verse el aumento del desorden durante la primavera de 1936. Que hubo desorden está claro, pero sus dimensiones fueron inmensamente exageradas por la prensa de derechas y en los discursos parlamentarios de Gil Robles y Calvo Sotelo. Además, es imposible atribuir responsabilidades con la seguridad con que ambos bandos lo hacían en aquellos momentos. Hay un factor que no puede ignorarse. Sólo dos grupos podían beneficiarse, incluso en teoría, de la proliferación de violencia indiscriminada: la extrema izquierda y la derecha «catastrofista». Los comunistas estaban totalmente preocupados durante 1936 por ampliar su apoyo entre las clases medias como parte de la táctica del frente popular impuesta por Moscú. Esperaban también hacerse con gran parte del movimiento socialista a través de la unificación con la izquierda del PSOE. No les interesaba ocupar el poder en medio de un colapso total del orden público. Los anarquistas estaban dispuestos a utilizar la violencia ocasional, pero esto no caía dentro de su estrategia revolucionaria global. Dentro del movimiento socialista, tanto *El Socialista* como *Claridad* pedían constantemente a sus lectores que ignorasen las provocaciones derechistas. Al haber ganado las elecciones, ninguno de los componentes del frente popular

necesitaba provocar la violencia para hacerse con el poder. La creación de una atmósfera de confusión y desorden podía, por otra parte, justificar el recurso a la fuerza para establecer una dictadura de la derecha. Sin embargo, sigue siendo prácticamente imposible determinar en las luchas callejeras entre falangistas y comunistas o entre japistas y socialistas lo que había de provocación y lo que había de represalias.

Aunque esto sea así respecto a los incidentes individuales, una perspectiva más amplia confirma que la violencia beneficiaba a la derecha. Si alguno de los principales grupos de izquierdas esperaba hacer uso de la alteración del orden público, no se explica por qué pedían insistentemente a sus seguidores que no se dejasen llevar por la espiral provocación/represalia, ni por qué se pusieron al lado del gobierno republicano como base del orden^[22]. Es significativo que los conservadores adinerados, que previamente habían financiado a Gil Robles como el defensor más eficaz de sus intereses, estaban ahora traspasando los fondos a la Falange y a los esquirols de los Sindicatos Libres. A principios de marzo, *ABC* abrió una suscripción a favor de una casi desconocida Federación Española de Trabajadores, tras la cual aparecía la figura de Ramón Sales, el supuesto agente provocador fascista que se hizo célebre en el gangsterismo político de los años 1919-1923. A finales de abril los fondos habían llegado a 350 000 pesetas sobre la base de donaciones de aristócratas, terratenientes, industriales y muchos «fascistas» y falangistas anónimos. Puesto que el dinero no se utilizó nunca para fines sindicales, y puesto que un número alarmante de individuos detenidos por actos de violencia resultaron ser miembros de los Sindicatos Libres, la izquierda no tenía la menor duda de que este fondo estaba dedicado a financiar a los agentes provocadores. La derecha alquilaba pistoleros profesionales y sus operaciones estaban planeadas para que tuviesen las más amplias repercusiones^[23].

Los ataques a dirigentes socialistas, como Jiménez de Asúa y Largo Caballero, tenían claramente la finalidad de provocar represalias. La operación de este tipo que tuvo más éxito fue la llevada a cabo en Granada el 9 y el 10 de marzo. Una escuadra de pistoleros falangistas disparó sobre un grupo de trabajadores y sus familias, hiriendo a muchas mujeres y niños. Los sindicatos locales convocaron una huelga general en el transcurso de la cual se produjeron una serie de actos de violencia. Las oficinas de Falange y Acción Popular fueron incendiadas, el periódico de ACNP, *Ideal*, fue destruido y se quemaron dos iglesias. En Granada y en los demás sitios los

incidentes solían causarlos forasteros, que desaparecían tan deprisa como habían aparecido. Los anarquistas y comunistas más vociferantes de Granada resultaron ser falangistas cuando los nacionalistas se hicieron con el poder. Dada la represión general de la izquierda que se produjo durante la guerra, es muy poco probable que fuesen simplemente chaqueteros. En toda España, las autoridades municipales de izquierdas tuvieron problemas considerables para mantener el orden contra posibles alteraciones. El hecho de que los miembros conservadores del poder judicial simpatizasen con las actividades de los falangistas no era precisamente una ayuda. Los jueces que adoptaron una línea dura contra los pistoleros derechistas fueron, a su vez, seleccionados como objetivos de futuras operaciones^[24].

La prensa de derechas exageraba todos los incidentes y daba un cuadro de anarquía creciente por el simple procedimiento de agrupar cada reyerta, pelea o huelga, por insignificantes que fueran, en una página dedicada a los «desórdenes sociales». Entonces, Calvo Sotelo y Gil Robles citaban en las Cortes cifras infladas de la supuesta anarquía como justificación para un levantamiento militar. Calvo Sotelo llegó a pedir públicamente que el ejército diera un golpe, aunque Gil Robles y él sabían que el levantamiento se estaba ya preparando. La violencia falangista y la respuesta izquierdista suministraban el material para discursos que atribuían toda la responsabilidad a la izquierda. Sin que hubiese censura que lo impidiera y ampliamente reproducidos, estos discursos crearon una atmósfera de terror entre amplios sectores de las clases media y alta que cada vez miraban más hacia el ejército como salvación.

La actitud de Gil Robles respecto a la violencia era más ambigua que la de Calvo Sotelo. Dentro de la división derechista del trabajo, su función parece haber sido la de persuadir a la opinión más moderada de la clase media de que el gobierno era impotente y de que la última esperanza estaba en el ejército y la Falange. Sus comentarios en las Cortes el 15 de abril y su asidua asistencia a los funerales de pistoleros falangistas fortalecían la impresión deseada de que la violencia política era el terreno exclusivo de la izquierda. Parece que no le preocupaba demasiado la inclinación creciente por el uso de la fuerza dentro de la CEDA. No se hizo nada para impedir que sus miembros abandonasen el partido y se afilasen a Falange ni se reclutó a gente nueva para compensar las deserciones. Parece que, en cumplimiento de las decisiones adoptadas el 19 de marzo, se permitió a sus miembros que se uniesen al grupo con el que más simpatizaban. Gil Robles deja entender en sus memorias que la CEDA se mantuvo para hacer propaganda en el

Parlamento y como escudo de los grupos más violentos. En la célebre entrevista que concedió a *El Defensor*, de Cuenca, anunciaba virtualmente su aprobación de «los que se van por los caminos de la violencia, creyendo honradamente que de esta manera se resuelven los problemas nacionales», condenando sólo a los que abandonaban la CEDA porque, al estar fuera del poder, ya no podía repartir cargos ni prebendas^[25]. Casi inmediatamente después de las elecciones, la mayoría de la Derecha Regional Valenciana rechazó la moderación de su líder, Luis Lucia, en favor de la acción directa. La DRV empezó a organizar su propia milicia clandestina. A lo largo de la primavera, al menos 15 000 miembros de la JAP se pasaron a Falange. Muchos de los que se quedaron en la CEDA estaban en contacto activo con los grupos partidarios de la violencia. Calvo Sotelo contaba con algunas simpatías en Acción Popular. Y cuando estalló la guerra, miles de cedistas se unieron a los carlistas^[26].

Incluso oficialmente crecían los lazos de la CEDA con la falange. A principios de mayo se repitieron las controvertidas elecciones de Granada y Cuenca. En Granada, la CEDA hizo la campaña en alianza exclusiva con la Falange. Los socialistas locales ofrecieron a la CEDA dejarles ganar tres escaños si retiraban de la lista de derechas el nombre del odiado Ramón Ruiz Alonso. Gil Robles se negó y el frente popular presentó candidatos a todos los escaños de Granada. Tras el escándalo de las elecciones anteriores, las masas estaban decididas a que no les volviesen a robar su victoria. Parece que hubo algún hostigamiento de los candidatos de la derecha, que paradójicamente sirvió para que la derecha se beneficiase de una derrota casi segura. Convencidos de que no podían ganar, los candidatos derechistas se retiraron, declarando que se les había impedido hacer campaña y, por tanto, impugnando la validez de las elecciones^[27]. En Cuenca, la candidatura de la derecha incluía a José Antonio Primo de Rivera y al general Franco. Se incluía al líder falangista para que, si triunfaba, la inmunidad parlamentaria le asegurase la puesta en libertad, ya que llevaba encarcelado desde el 14 de marzo. La inclusión del general Franco se decidió para conseguir su traslado desde las islas Canarias, donde estaba destinado, a la península, donde la conspiración militar necesitaba su presencia. Puesto que la elección de Cuenca era técnicamente una repetición, dado que ningún candidato había conseguido el 40 por 100 de los votos en febrero, no se podían admitir nuevos candidatos, por mucho que lo lamentaran los diputados de la CEDA, que arguyeron en vano a favor del líder fascista.

El visto bueno de la dirección de la CEDA a la creciente violencia de la derecha era la consecuencia de haberse dado cuenta de que los métodos legales ya no podían mantener intactos los intereses materiales de la oligarquía terrateniente. La obstrucción derechista a la reforma durante las Cortes constituyentes y la conducta de los propietarios mientras la CEDA estaba en el poder habían fortalecido la decisión de la izquierda de asegurar una reforma rápida y eficaz. Poco después de que Azaña formase gobierno, su nuevo ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, anunció que estaba dispuesto a emprender una reforma agraria rápida. La renaciente Federación de Trabajadores de la Tierra intentaba hacerle cumplir su palabra. Después de la dura represión rural de los años anteriores, la FNTT había empezado a ampliarse a una velocidad vertiginosa en 1936. Su dirección militante no estaba como para tolerar aplazamientos del gobierno ni obstrucciones de los grandes terratenientes.

Inmediatamente después de las elecciones, Ricardo Zabalza, el dinámico secretario general de la FNTT, le había escrito a Ruiz Funes pidiéndole que acelerase la vuelta a sus tierras de los arrendatarios desahuciados en 1935. También pedía el restablecimiento de los jurados mixtos, así como la aplicación del decreto de laboreo forzoso. En una carta al ministro de Trabajo, Enrique Ramos, Zabalza pedía la puesta en marcha de un plan para colocar a los obreros desempleados con los terratenientes. Una tercera carta a Amos Salvador, ministro del Interior, pedía el desarme de los caciques. Seriamente alarmada por la cantidad de armas a disposición de los terratenientes y de sus matones y por el hecho de que las clases altas rurales seguían contando con la simpatía de la Guardia Civil, la FNTT empezó en seguida a recomendar a sus miembros que formasen milicias populares para impedir una repetición de las persecuciones de 1934 y 1935. Antes de que se abrieran las Cortes, a mediados de marzo, hubo manifestaciones de campesinos por toda España, pidiendo que se llevaran a cabo las peticiones de Zabalza^[28]. Las peticiones de la FNTT no eran revolucionarias, pero constituían una amenaza importante al equilibrio del poder económico rural. Además, los acontecimientos de los dos años anteriores habían exacerbado las tensiones entre clases hasta un punto que resultaba bastante improbable la aplicación pacífica de la legislación social deseada. Incluso dejando aparte el implacable odio de clases que existía ahora en el campo, las circunstancias económicas determinaban que las reformas, que eran esenciales para aliviar la miseria de los campesinos sin tierra, no pudiesen ser absorbidas por los propietarios sin una redistribución significativa de la riqueza rural. Las lluvias constantes entre

diciembre de 1935 y marzo de 1936 habían dañado seriamente la cosecha de cereales y reducido los márgenes de beneficios de los cultivadores grandes y pequeños. Este desastre natural aumentó la poca disposición de propietarios y obreros para buscar la conciliación.

A lo largo del mes de marzo la FNTT animó a sus miembros para que se tomasen la justicia por su mano, especialmente donde habían sido víctimas del desahucio. En Salamanca y en Toledo hubo invasiones de propiedades en pequeña escala. Sólo en Badajoz las ocupaciones de tierras fueron masivas. Una vez que el gobierno hubo legalizado estas invasiones de tierras, un gran número de terratenientes abandonaron sus propiedades o adoptaron posturas de gran beligerancia. Las confrontaciones en gran escala no empezaron hasta después de la negociación de los contratos de trabajo, en abril, cuando quedó claro que los jurados mixtos intentaban hacer cumplir los contratos por medio de multas elevadas^[29]. Hubo ataques a las secciones locales de la FNTT en Cuenca y Ciudad Real. En Castellón, los propietarios se negaron a dar trabajo a los hombres durante la recogida de la naranja. Las bases de trabajo fueron virtualmente ignoradas en Badajoz, Córdoba, Ciudad Real, Málaga y Toledo. En Badajoz, los propietarios se negaban a dar trabajo de día y utilizaban máquinas para hacer la recolección de noche. Al tener que hacer frente a un virtual *lock-out* rural, la FNTT recurrió a la huelga en Málaga y en Badajoz. Es extraordinario que la FNTT consiguiese mantener la disciplina de sus miembros, incluso después de un incidente que recordaba a Casas Viejas y que ocurrió en Yeste (Albacete). Los campesinos del pueblo se habían quedado sin posibilidades de sustento, al haberse utilizado grandes extensiones de tierra fértil para la construcción de un pantano. Mientras cortaban madera en unas tierras que en otros tiempos fueron comunales y ahora de propiedad privada, tuvieron enfrentamientos con la Guardia Civil. Fueron muertos 17 campesinos, otros tantos heridos y 50 miembros de la FNTT detenidos^[30]. Yeste y otros incidentes de este tipo podían haber provocado una matanza en gran escala. Sin embargo, la dirección de la FNTT frenó a la base confiando en la política agraria avanzada que iba a emprender el gobierno. Esta política representaba precisamente la amenaza a la hegemonía social de los grandes terratenientes contra la que éstos habían luchado desde 1931. Como ya no podían poner sus esperanzas en la CEDA como primera línea de defensa, empezaron a buscar la protección de los militares.

En ningún momento durante la II República se necesitaba más un gobierno fuerte y decidido que en la primavera de 1936. Los conspiradores militares se preparaban para derribar al régimen. Los jóvenes activistas de la derecha y de la izquierda se enfrentaban en las calles. El desempleo crecía y las reformas sociales se encontraban con la tenaz resistencia de los terratenientes. El problema se hizo especialmente agudo tras la elevación de Azaña a la presidencia el 10 de mayo. El nuevo presidente pidió en seguida a Prieto que formase gobierno. Prieto ya había mostrado que servía para el puesto en un discurso de auténtico estadista en Cuenca el 1 de mayo. En este discurso había expuesto el peligro de un levantamiento militar bajo la dirección del general Franco, había hablado de la necesidad de poner remedio a la injusticia social, había denunciado las provocaciones de los derechistas que rechazaban los resultados de las elecciones y había criticado a los maximalistas revolucionarios que estaban haciendo el juego a sus enemigos^[31]. Cuando Azaña le llamó el 11 de mayo, Prieto le habló de sus planes para restaurar el orden y acelerar la reforma. Pretendía trasladar a los jefes militares en los que no se pudiera confiar, disminuir el poder de la Guardia Civil y desarmar a los comandos de acción fascistas. También tenía previsto promover planes masivos de obras públicas, de irrigación y de construcción de viviendas, así como acelerar la reforma agraria. Es posible que este programa de gobierno, llevado a cabo con decisión, hubiese evitado la guerra civil. Desde luego, el proyecto hubiera provocado las iras de la derecha y, por tanto, necesitaba el apoyo incondicional de las fuerzas de la izquierda. Prieto dudaba si podía contar con los votos del ala izquierda del PSOE^[32].

Prieto tenía buenas razones para esperar la hostilidad de los seguidores de Largo Caballero. Decidido a no volver a realizar la política burguesa en un gobierno de coalición con los republicanos, Largo esperaba a que se cumpliera el programa del frente popular antes de presionar para el establecimiento de un gobierno totalmente socialista. Dentro del PSOE tenía una posición fuerte para imponer sus puntos de vista. El 8 de marzo los caballeristas habían obtenido todos los puestos importantes en la Agrupación Socialista Madrileña, la sección más fuerte del PSOE. La candidatura caballerista —Largo como presidente, Álvarez del Vayo como vicepresidente, Enrique de Francisco como secretario y un comité que incluía a Llopis, Araquistáin, Hernández Zancajo y Zabalza— era la misma que había querido arrebatar la ejecutiva del PSOE a los prietistas. La ASM se había convertido en el centro de la lucha caballerista por la dirección del partido. El 16 de

marzo Largo había sido elegido como presidente de la minoría parlamentaria del PSOE. El dominio caballerista sobre el partido parecía inquebrantable. Sin embargo, una aparente victoria de Largo fue esencial para cambiar la situación. Álvarez del Vayo había preparado con el agente de la *Komintern* Victorio Codovila la unificación de los movimientos de juventudes comunista y socialista, lo que parecía satisfacer parte de las ambiciones de Largo Caballero de unir a la clase obrera, pero en realidad lo único que significó fue la pérdida de unos 40 000 jóvenes socialistas, que pasaron a engrosar las filas del PCE. El líder de la FJS, Santiago Carrillo, asistía ya a las reuniones del comité central del Partido Comunista^[33]. Sin embargo, en aquellos momentos la creación de las Juventudes Socialistas Unificadas parecía un triunfo de Largo, y Prieto tenía motivos para sentirse inseguro de su propia posición. Aparte de cualquier objeción teórica a otra coalición republicano-socialista, los caballeristas estaban furiosos durante la primera parte de mayo por la forma, nada democrática, en que Prieto había asegurado el apoyo socialista a la candidatura de Azaña^[34].

El 12 de mayo, Prieto informó a la minoría parlamentaria del PSOE de que Azaña le había pedido que formase gobierno. Tenía pocas esperanzas de poder contar con su apoyo. El día anterior la minoría se había reunido para discutir la respuesta al presidente, que había pedido su asesoramiento para la formación de gobierno. Prieto había propuesto que el PSOE recomendase un gobierno amplio de frente popular, pero había sido derrotado por la contrapropuesta de Álvarez del Vayo, partidario de un gobierno exclusivamente republicano. El grupo *Claridad*, de Araquistáin, Baraibar y Del Rosal, estaba organizando la oposición a que Prieto se convirtiese en jefe del gobierno. Dentro del grupo se temía que Prieto se convirtiese en el «Noske de la revolución española». Una vez que Azaña hubo consultado a todos los partidos, le hizo un ofrecimiento formal a Prieto, quien de nuevo tendría que enfrentarse a la minoría. Cuando Largo Caballero se opuso, aceptó la derrota casi sin luchar. Ni defendió el programa de gobierno que tenía previsto, ni reiteró el peligro de un levantamiento militar y la necesidad de un gobierno fuerte de amplia base. Aparte de su tendencia fatal al derrotismo pesimista, había dos razones posibles de la dócil renuncia de Prieto al gobierno. Por un lado, sabía que la mayoría de la izquierda del partido creía que exageraba los peligros de un golpe militar para atemorizarles y que le apoyaran y, por tanto, no creía poder conseguir de ellos el respaldo que necesitaba. Por otro, sospechaba que Azaña realmente no le quería como jefe de gobierno. Probablemente, incluso después de que la postura hostil de

Largo Caballero se hubiera impuesto en la reunión de la minoría, Prieto hubiera podido seguir adelante. La ejecutiva del partido estaba con él unánimemente y también el comité nacional. Además, podía contar con el apoyo de los partidos republicanos. Vidarte le presionó para que formase gobierno, confiando en que, llegada la ocasión, Largo no votaría contra él en las Cortes. Sin embargo, cuando Vidarte se ofreció para preparar una reunión con el presidente de la UGT, Prieto le replicó con acritud: «¡Que se vaya Caballero a la mierda!»^[35].

El ofrecimiento de Azaña a Prieto el 11 de mayo no fue el único intento que se hizo durante la primavera para formar un gobierno fuerte. A lo largo de abril y mayo tuvieron lugar negociaciones intermitentes entre Azaña, Miguel Maura, Claudio Sánchez Albornoz, Prieto, Besteiro, Giménez Fernández y Luis Lucia. Gil Robles sabía que Giménez Fernández estaba mezclado en esas conversaciones y que éstas tenían pocas posibilidades de éxito. Era inconcebible que Prieto, no habiendo conseguido el apoyo del PSOE para una coalición con los republicanos de izquierdas, lo consiguiese para un gobierno en el que participase la CEDA. Además, puesto que la mayoría de los diputados se oponían a Giménez Fernández, era muy improbable que aprobasen sus conexiones con Prieto. Gil Robles conocía perfectamente los planes que se estaban realizando para un levantamiento militar y participaba en ellos. En este sentido no hubiera tolerado un gobierno de concentración nacional que intentaba tomar medidas contra el ejército. Así, como se desprende de su propia versión, es posible que sólo tolerara las negociaciones de Giménez Fernández con la esperanza de dividir al partido socialista^[36].

Azaña fue sustituido como jefe de gobierno por Santiago Casares Quiroga, que no estaba a la altura de los problemas que tendría que resolver. Los hombres que eligió para los puestos claves simbolizaban la incapacidad de su gabinete. Ni su ministro de la Gobernación, Juan Moles, ni su ministro de Trabajo, Juan Lluhí Vallescá, se daban cuenta exacta de la seriedad de la crisis. Casares se negaba sistemáticamente a creer los informes fidedignos de la conspiración militar. Ni Casares ni Moles tomaban medidas, a pesar de las repetidas visitas de Prieto y Largo Caballero. Prieto se sintió profundamente ofendido cuando Casares, como respuesta a una advertencia sobre los conspiradores, replicó: «No estoy dispuesto a soportar las exaltaciones de su menopausia»^[37]. La euforia del jefe de gobierno era totalmente errónea. La conspiración, cuyas ramificaciones se remontaban a 1931, estaba en marcha

desde que se conocieron los resultados de las elecciones y fracasó el intento del general Franco de declarar el estado de guerra.

Gil Robles se mantuvo al fondo de los preparativos de guerra, lo mismo que Calvo Sotelo. Al líder de la CEDA se le tenía perfectamente informado del desarrollo de la conspiración. Algunos de los oficiales claves para la conexión entre elementos civiles y militares eran cedistas. El 8 de marzo, en la casa de un destacado agente de bolsa de la CEDA, José Delgado, tuvo lugar una reunión decisiva entre los generales Franco, Orgaz, Villegas, Fanjul y Varela. A los miembros del partido que le pedían instrucciones al jefe se les respondía que se pusieran a las órdenes del ejército en cuanto empezara el levantamiento. En una declaración hecha en 1942, Gil Robles afirmaba que él había colaborado en el movimiento «con el consejo, con el estímulo moral, con órdenes secretas de colaboración e incluso con auxilio económico, tomado en no despreciable cantidad de los fondos electorales del partido». Esto último se refiere a 500 000 pesetas que Gil Robles le dio a Mola, confiando en que los donantes originales habrían aprobado su acción^[38].

A lo largo de junio y julio, Gil Robles envió instrucciones a los líderes provinciales de la CEDA. El día que estallase el alzamiento, todos los miembros del partido se unirían a los militares inmediata y públicamente, las organizaciones del partido ofrecerían la colaboración desinteresada de la CEDA, las secciones de la juventud se unirían al ejército y no formarían milicias separadas, los miembros del partido no tomarían parte en represalias contra la izquierda, se evitarían las luchas por el poder con otros grupos derechistas y se daría a las autoridades la máxima ayuda económica. Sólo se ignoraron las instrucciones relativas a las represalias, y los cedistas se destacaron en la represión nacionalista en Valladolid y en Granada. La primera sección de la CEDA que se unió al movimiento fue la DRV. Cuando, en junio, el general Mola estaba finalizando los preparativos de la participación civil, el secretario general de la DRV, José María Costa Serrano, ofreció 1250 hombres para los primeros momentos del levantamiento y prometió 10 000 después de cinco horas y 50 000 después de cinco días^[39].

Gil Robles fue extremadamente discreto. Sin embargo, prestó varios servicios útiles a los conspiradores. A principios de julio acompañó al propietario de *ABC*, Juan Ignacio Luca de Tena, a una misión de contacto con el líder carlista, Manuel Fal Conde. Iban enviados por Mola para persuadir a Fal Conde de que moderase sus condiciones para la participación carlista en el levantamiento^[40]. La conexión de Gil Robles con Mola era a través del

miembro de la CEDA Francisco Herrera, que negoció con Juan March el apoyo económico a la conspiración. Los arreglos para la participación civil iban a correr a cargo de Gil Robles, el carlista conde de Rodezno y Calvo Sotelo, pero se vieron frustrados por el asesinato del jefe monárquico el 13 de julio. Gil Robles estaba decidido a no comprometerse públicamente. A través de su intermediario, Herrera, discutió con Mola su futuro papel en el Estado de la posguerra. Cuando Mola le pidió que asistiese a una reunión de diputados de derechas en Burgos el 17 de julio, en la que declararían facciosos al gobierno y a las Cortes y se pediría públicamente la intervención militar, se negó. Después de cinco años propugnando el legalismo, creía que esto sería «indecoroso»^[41].

Los pronunciamientos públicos de Gil Robles hay que verlos a la luz de estas actividades clandestinas. Sus discursos ambiguos, que eran ostensiblemente una llamada a la moderación, eran también una justificación de la violencia. El 19 de mayo el líder de la CEDA respondió en las Cortes a la presentación del programa de gobierno de Casares Quiroga. Intentando trazar una línea divisoria entre los componentes del frente popular, afirmó que el gobierno republicano era el servidor, y sería pronto la víctima, de los socialistas. También alegó que el creciente desorden aumentaba la relevancia de las soluciones fascistas. Si él criticaba al fascismo era sólo por sus orígenes extranjeros, su panteísmo filosófico y sus elementos de socialismo de Estado. Afirmó que la gente se veía obligada a girar hacia el fascismo porque no había otra forma de defender sus intereses. Al identificar democracia y desorden no mencionó la contribución a la violencia de la política represiva y revanchista llevada a cabo mientras él estaba en el poder, ni las actividades de los provocadores fascistas. Desde luego, afirmó que la detención de los falangistas era injusta. Al declarar que la democracia estaba ya muerta alabó la evolución del fascismo como resultado de «un sentido de amor patrio quizá mal enfocado, pero profundamente dolorido, al ver que el ritmo de la política no lo trazan los grandes intereses nacionales, sino que lo trazáis vosotros (dirigiéndose a los marxistas) con las órdenes de Moscú». Con un desafío provocador a la vehemencia revolucionaria de la izquierda hizo una referencia despectiva a «vosotros, feroces revolucionarios, que no hacéis más que hablar»^[42]. A finales de mayo el líder de la CEDA afirmaba, en una entrevista concedida a un diario argentino, que la democracia en España llevaba inevitablemente a la anarquía. También habló en términos muy favorables del fascismo italiano, que había curado a Italia del desorden y había restaurado su prestigio internacional^[43].

El cuadro que pintaban Gil Robles y Calvo Sotelo de desorden y de revolución comunista inminente era exagerado. De hecho, lo último que Moscú o el PCE deseaban era la revolución en España, por miedo a las repercusiones desfavorables que pudiera tener en la política exterior rusa^[44]. También los socialistas, a pesar de sus divisiones internas, se extremaban por mantener el orden. Sin embargo, dejando aparte el desorden, dos factores contribuían a la credibilidad de la descripción derechista de la situación: el continuado revolucionarismo verbal del ala caballerista del PSOE y la gran cantidad de huelgas, especialmente donde CNT tenía influencia, durante la primavera de 1936. Tanto detrás de las huelgas como de la retórica revolucionaria de Caballero había una ola creciente de militancia de la clase obrera. Esto era consecuencia, en primer lugar, de los agravios pendientes de los dos últimos años de agresión sin trabas por parte de los patronos, cuando las huelgas habían sido virtualmente imposibles. La situación se había exacerbado por la negativa de los patronos, a veces por dificultades económicas y a veces por intransigencia táctica, a readmitir a los trabajadores que habían sido encarcelados después del levantamiento de Asturias.

De hecho, la ola principal de huelgas no comenzó hasta finales de mayo, mucho después de que la derecha hubiera empezado a denunciar la anarquía industrial y rural. Para entonces ya había pruebas de la deliberada intransigencia patronal en forma de *lock-outs* y de negativa a aceptar las decisiones de los tribunales de arbitraje. Muchos industriales, bien por pánico o porque estuvieran al corriente del inminente levantamiento militar, abandonaron sus empresas y sacaron de contrabando el capital al extranjero. La UGT y los comunistas parecen haber hecho todo lo posible para frenar a sus propios militantes y persuadir a la CNT de que hiciera lo mismo. Los socialistas llegaron a las manos con los anarquistas en Madrid por los intentos de la UGT de terminar con una amplia huelga de la construcción, que tuvo lugar en junio y en julio. También los comunistas lucharon con los anarquistas en Málaga. El periódico caballerista, *Claridad*, pedía regularmente al gobierno que resolviese los conflictos sociales para impedir que la prensa de derechas los utilizara para fomentar el terror de la clase media. Las peores huelgas tuvieron lugar en Madrid, en junio, entre los trabajadores de la construcción, los trabajadores de la calefacción y de los ascensores, los trabajadores de la sastrería y de la madera. A mediados de mes había más de 110 000 hombres en huelga. La UGT intentó frenar a los huelguistas y presionó para que volviesen en seguida al trabajo, una vez que los jurados mixtos habían fallado en favor de los aumentos salariales y la reducción de

jornada pedidos por los trabajadores. Los trabajadores de las sastrerías se negaron a aceptar el arbitraje durante varias semanas. Los dueños de los solares en construcción se retiraron de los jurados, declararon un *lock-out* y más adelante se jactaron de cómo su actitud había favorecido la creación de una atmósfera adecuada para el levantamiento militar. A lo largo de la crisis, la prensa socialista y comunista denunciaron la postura conflictiva de la CNT. Sin embargo, lo que ocurría era que en Barcelona los patronos habían provocado las huelgas al negarse a volver a la semana de cuarenta y cuatro horas, que se había perdido tras octubre de 1934, y en Badajoz, Málaga y otras provincias del sur, rechazando las bases de trabajo elaboradas por los jurados mixtos. También los trabajadores, resentidos por el trato que habían recibido en 1934 y 1935, y ebrios por la victoria electoral del frente popular, se encontraban llenos de decisión y agresividad^[45].

En gran medida había un miedo perenne a perder sus seguidores, cada vez más militantes, tras las continuas predicciones de Largo Caballero de una muerte inminente del sistema capitalista. En verdad que su experiencia de la obstrucción derechista a la reforma entre 1931 y 1933, junto con sus lecturas en la prisión en 1935, le habían convencido de la futilidad del reformismo. Sin embargo, entre la teoría y la práctica se interponía una vida de gradualismo pragmático. En 1936, Largo Caballero continuó actuando en gran medida, como lo había hecho siempre, preocupado, sobre todo, por consolidar la UGT. En sus discursos sobre la vía revolucionaria al socialismo les decía a los obreros lo que éstos querían oír. El hecho de que Largo no estuviera propagando seriamente la revolución inmediata, difícilmente era apreciado por las clases medias que leían sus discursos. En ese sentido, sus intentos de mantener la lealtad de la base socialista estaban haciéndole el juego a Gil Robles y a Calvo Sotelo.

Los anarquistas tenían profundas dudas sobre el revolucionarismo verbal de Largo Caballero. De hecho, lo más revolucionario que proponía el presidente de la UGT era la unificación del proletariado. Los anarquistas sospechaban, con bastante razón, que las propuestas de Largo lo único que pretendían era el control de las masas cenetistas por la UGT. Después de todo, los socialistas no habían ocultado, durante los comienzos de la primavera, su convicción de que ellos debían tener el control exclusivo de la clase obrera revolucionaria. El 18 de abril la Agrupación Socialista Madrileña celebró una reunión para elaborar un nuevo programa que sería presentado para su discusión en el siguiente congreso del PSOE. En vista de la amenaza fascista, cada vez mayor, y de la creciente radicalización de la clase obrera, el nuevo

programa propuesto intentaba eliminar las ilusiones reformistas del pensamiento socialista. En el transcurso de la discusión, en la que Besteiro y Trifón Gómez defendieron el programa existente, un militante, Antonio Muñoz Lizcano, sugirió que se añadiese una cláusula subrayando que la dirección de la revolución correspondía a las Alianzas Obreras. Largo arguyó con vehemencia que el PSOE podía y debía hacer el trabajo solo. Afirmó que la consecución de la unidad sindical eliminaría la necesidad de las Alianzas. En este sentido, Largo había prohibido durante 1935 a las organizaciones locales de la UGT que tomaran parte en actividades conjuntas con las Alianzas Obreras. La deducción lógica era que la unificación proletaria significaba el control socialista. Simultáneamente, Araquistáin estaba enzarzado en una polémica con los comunistas sobre qué partido debía dirigir la revolución^[46]. En consecuencia, en el congreso de la CNT celebrado en Zaragoza a principios de mayo se aceptó el reto socialista. La CNT rechazó la unión con la UGT, pero, a cambio, ofreció un pacto revolucionario con ciertas condiciones. Entre éstas estaban la condena pública por parte de la UGT del régimen político y social existente, así como la noción libertaria de que la futura organización de la sociedad sería decidida libremente por la clase obrera. No es de sorprender que Largo Caballero no aceptase la invitación de la CNT. Además, dos días más tarde resucitó la idea de las Alianzas Obreras como un medio para disciplinar a la CNT^[47]. Si la utilización que había hecho de las Alianzas Obreras en 1934 había mostrado algo, era que el dominio del movimiento de la clase obrera por la UGT significaba mucho más para Largo Caballero que cualquier proyecto futuro de revolución.

La conducta de los socialistas a lo largo de 1936 desmintió la retórica de los caballeristas. Todas las secciones del PSOE sabían que se preparaba un levantamiento militar. El optimismo de Casares Quiroga de que éste se podría aplastar como se quisiese no era compartido por los socialistas ni por el PCE. Sin embargo, la única arma de que disponía la izquierda, la huelga general revolucionaria, no se utilizó nunca. El carácter espontáneo y sin sincronizar de la resistencia de la clase obrera al levantamiento de julio sugiere que hubo pocos preparativos para la acción revolucionaria en los meses precedentes. En este sentido, cuando, en abril, Joaquín Maurín, uno de los líderes del POUM, hizo una propuesta seria de revolución, hubo gritos de protesta. El recién formado Partido Obrero de Unificación Marxista, basado en una alianza entre el BOC y la Izquierda Comunista, fue tachado por el PCE de renegado, enemigo del frente popular^[48]. Se ha hablado mucho de las divisiones dentro del PSOE como un síntoma de desviación revolucionaria del partido. Es

cierto que el ala izquierda del partido hacía regularmente declaraciones sobre la agonía del capitalismo y el triunfo inevitable del socialismo, que Prieto, con bastante razón, consideraba peligrosamente provocadoras. Sin embargo, se mantuvo la disciplina del partido para contribuir a la estabilidad del gobierno republicano. Los caballeristas, a pesar de sus reservas, se unieron a los prietistas para votar por el nombramiento de Martínez Barrio como presidente de las Cortes y para la elevación de Azaña a la presidencia de la República. El PSOE apoyó constantemente al gobierno, reteniendo a menudo en las Cortes cuestiones embarazosas sobre los conspiradores militares y la provocación al desorden, a petición de Casares Quiroga^[49].

Los socialistas se vieron presos en un terrible dilema. Prieto creía que un gobierno reformista fuerte era la única respuesta a los peligros que amenazaban a la República. Sin embargo, en aquellos momentos no había nada en la conducta de la derecha que sugiriese que se abandonarían voluntariamente los planes conspiratorios como no fuese para seguir una política como la que había sido la norma durante el bienio negro. Largo Caballero estaba convencido, después de la experiencia de las Cortes constituyentes, de que una coalición republicano-socialista como la que deseaba Prieto sería incapaz de llevar a cabo las medidas adecuadas. El presidente de la UGT aspiraba a un gobierno exclusivamente socialista, del mismo modo que aspiraba a un movimiento obrero totalmente ugetista. Esta división de opiniones, exacerbada por los resentimientos personales, paralizaba toda la iniciativa política del movimiento socialista. De hecho, Largo Caballero y muchos de sus colaboradores más próximos, Carlos de Baraibar, Luis Araquistáin, Carlos Hernández Zancajo y Wenceslao Carrillo, nunca quisieron dividir al partido. Esperaban imponer al resto del PSOE su programa más revolucionario por medio del congreso del partido. Las iniciativas para escindir el partido como un preludio para la unificación de los socialistas cismáticos con el PCE partieron de compañeros de viaje, como Álvarez del Vayo, Margarita Nelken y los líderes de la JSU, Santiago Carrillo y Federico Melchor^[50]. En dos ocasiones, comandos de las JSU interrumpieron los mítines en los que hablaban Prieto y González Peña, en Ejea de los Caballeros (Aragón) y en Écija (Sevilla), de una forma que parecía un intento deliberado de provocar una escisión en el PSOE^[51].

De esta forma, las dos consecuencias principales de la división socialista fueron el impedir los intentos de constituir un gobierno fuerte y la agudización del miedo de la clase media a una revolución por la conducta

demagógica del ala izquierda procomunista del PSOE. El hecho de que los comunistas, a pesar de toda su demagogia, no aspirasen a la revolución o de que la retórica de Largo Caballero fuese dirigida especialmente al engrandecimiento de la UGT significaban poco para las clases medias. Después de todo, la demagogia izquierdista, combinada con la evidencia visible de las huelgas y el desorden políticamente motivado, parecían simplemente confirmar el cuadro exagerado de caos sin límites que pintaban Gil Robles y Calvo Sotelo. La facilidad con que la JSU se enzarzaba en choques callejeros con los falangistas, bajo la impresión equivocada de que estaban realizando actividades revolucionarias, y el mantenimiento por la CNT de una línea dura con motivo de las huelgas de junio y julio oscurecieron un importante acontecimiento interno dentro del PSOE. A finales de junio la ejecutiva del PSOE celebró elecciones para cubrir seis vacantes, producidas por la dimisión de Largo Caballero y sus lugartenientes, el 16 de diciembre de 1935, y por la muerte del vicepresidente del partido, Remigio Cabello, en abril de 1936. Hay grandes diferencias en las cifras de votos que ofrecieron *El Socialista* y *Claridad*. Muchos de los votos que se atribuyeron los caballeristas no correspondían a miembros cotizantes del partido, sino más bien a militantes de la JSU. Se declaró que había triunfado la candidatura prietista. Las débiles protestas de *Claridad* de que la línea caballerista había prevalecido en Cádiz, un bastión anarquista, y en Jaén refuerzan la impresión de que la corriente se estaba volviendo a favor de Prieto^[52].

La victoria de los moderados del PSOE no pasó sin discusiones en el movimiento socialista. En cualquier caso parece poco probable que la derecha se hubiese impresionado lo suficiente como para haber cambiado de táctica. Los preparativos del ejército estaban muy avanzados. Las huelgas y los desórdenes, cualquiera que fuese su origen, habían convencido a gran parte de la clase media de que Gil Robles y Calvo Sotelo tenían razón cuando afirmaban que no podía esperarse nada del régimen democrático. El 16 de junio, en las Cortes, Gil Robles pronunció su última gran denuncia del gobierno del frente popular. Aunque superficialmente pudiera parecer una llamada a la moderación, era más una amplia justificación del levantamiento que se preparaba. El líder de la CEDA leyó una larga lista de asesinatos, palizas, robos, quemados de iglesias y huelgas, un catálogo de desórdenes cuya responsabilidad colocaba en el gobierno. Parte era verdad, parte una exageración terrorífica. No dio ninguna indicación de que la derecha hubiera participado en lo que describía. Protestó por la detención de terroristas de

Falange y de la JAP y por la imposición de multas a los patronos recalcitrantes. La culpa del desorden la atribuyó firmemente al hecho de que el gobierno se apoyara en los votos socialistas y comunistas. Mientras las cosas siguieran así, tronó Gil Robles, nunca habría paz en España^[53]. Puesto que Gil Robles no era, ni mucho menos, la figura más extremista de la derecha, su actitud indicaba que incluso un gobierno moderado presidido por Prieto iba a encontrar poca tolerancia fuera del frente popular.

Ya a principios de la primavera de 1936 la coexistencia era imposible, salvo que la izquierda renunciase a sus aspiraciones de reforma estructural o la derecha cesase en su oposición a esta reforma. Una coalición republicano-socialista dirigida por Prieto hubiera tenido que promover el cambio social a un ritmo que, como se había visto, era intolerable para las clases altas rurales. En 1936, después de cinco años de miseria social creciente, la izquierda aspiraba a una reforma más avanzada que la que había sido posible entre 1931 y 1933. La táctica obstruccionista de la derecha legalista entonces y su política social cuando estuvo en el poder revelaban la profunda incompatibilidad entre los dos modelos de organización social que habían entrado en conflicto. El 1 de julio el agrario José María Cid atacó la situación que se había creado en el campo con el ministro republicano de Agricultura, Ruiz Funes^[54]. Sin embargo, para la izquierda, el ministro sólo estaba haciendo el mínimo aceptable. Puesto que la derecha estaba decidida a no ceder, la guerra civil sólo podía haberse evitado si la izquierda hubiera estado dispuesta a aceptar la estructura social anterior a 1931.

El discurso de Gil Robles de 16 de junio era una atribución apriorística de las responsabilidades de la guerra a la izquierda. La acusación se repitió después del asesinato de Calvo Sotelo por unas guardias de asalto como represalia por la muerte de dos de sus miembros a manos de pistoleros derechistas^[55]. Dos días después del descubrimiento del cuerpo de Calvo Sotelo, el 13 de julio, Gil Robles volvió a hablar en una reunión de la Diputación permanente. Acusó al gobierno de responsabilidad criminal, política y moral por el asesinato. Reiteró que la izquierda había conseguido que no se pudiera lograr nada por procedimientos democráticos y que ella tenía la culpa del crecimiento de un movimiento de violencia en España^[56]. No hizo mención de que los preparativos para un levantamiento militar habían empezado, sabiéndolo él, desde las elecciones de febrero.

Cuando estalló la guerra la noche del 17 de julio, los militantes de la CEDA se unieron a los rebeldes donde pudieron. Gil Robles, decidido a no

mancharse las manos de sangre, se fue a Francia. Expulsado por el gobierno Blum, se dirigió a Lisboa, donde ayudó a establecer una junta nacionalista que organizó suministros, propaganda y ayuda económica para la causa rebelde^[57]. Públicamente alabó a la JAP por su patriotismo al unirse al levantamiento^[58]. En abril de 1937, cuando el general Franco unió a la fuerza los distintos grupos políticos de la zona nacionalista, Gil Robles le escribió para que dispusiese de toda la organización de Acción Popular para su incorporación al nuevo partido único^[59]. El «jefe» visitó la España rebelde en varias ocasiones, de forma señalada en agosto de 1936 y en mayo de 1937, pero se encontró con una recepción cada vez más hostil. En la atmósfera cargada de la guerra su postura legalista no tenía sitio. Sin embargo, el esfuerzo de guerra franquista iba dirigido a conseguir muchos de los fines a los que la CEDA había aspirado. En toda la zona nacionalista, y en toda España después de 1939, se estableció un Estado corporativo. Se abolieron los sindicatos, se destruyó la prensa de izquierdas. Los socialistas y otros cuadros izquierdistas, que sobrevivieron a la guerra, pero no pudieron escapar hacia el exilio, sufrieron pesadas condenas cuando no fueron ejecutados. Se estableció la estructura social anterior a 1931. Desapareció la legislación social de la República. Se consolidó el dominio rural de los caciques y de la Guardia Civil.

A pesar de utilizar a un partido fascista radical, la Falange, para movilizar a la población de la zona nacionalista durante la guerra, el Estado continuó siendo el instrumento de la oligarquía tradicional. Franco renunció al barniz de novedad antioligárquica adoptado por Hitler y Mussolini. Su Estado corporativo conservó celosamente la estructura tradicional agraria, al menos hasta la mitad de la década de los cincuenta. Sólo durante el breve período de dominio del antiguo diputado de la CEDA, Ramón Serrano Súñer, cuando parecía probable la victoria del Eje en la guerra mundial, los consejeros falangistas tuvieron más peso que los carlistas, monárquicos ortodoxos y cedistas. Los lazos franquistas con el antiguo orden hicieron parecer la República como un simple interludio. En ese interludio se había puesto en marcha una amenaza contra el equilibrio existente de poder económico y social. La parte más eficaz de esa amenaza estaba constituida por el programa reformista de los socialistas porque tenía la sanción legal del Parlamento. La respuesta de la derecha tradicional fue doble. El recurso a la violencia tenía pocas posibilidades de éxito en los primeros años de la República y la defensa del viejo orden social fue asumida por los legalistas. Tanto éxito tuvo la táctica de la CEDA y de los agrarios en el bloqueo de la reforma y en la

construcción de un partido de masas que el reformismo optimista de los socialistas se transformó en una postura más agresiva y aparentemente revolucionaria. El levantamiento de octubre de 1934 y los resultados electorales de 1936 mostraron la imposibilidad de defender las estructuras tradicionales por medio de la imposición legal de un Estado corporativo. Dada la evidente decisión de la clase obrera de introducir importantes reformas y la de la oligarquía de oponerse a ellas, el fracaso de la táctica legalista sólo podía llevar al resurgimiento de la derecha «catastrofista» y a la imposición de un Estado corporativo por la fuerza de las armas.

BIBLIOGRAFÍA

FUENTES PRIMARIAS

I. DEBATES PARLAMENTARIOS

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, comenzaron el 14 de julio de 1931, 25 vols.

Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso de los Diputados, comenzaron el 8 de diciembre de 1933, 17 vols.

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, Congreso de los Diputados, comenzaron el 16 de marzo de 1936, 3 vols.

II. BOLETINES, INFORMES Y MEMORIAS DE CONGRESOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y SINDICATOS

Boletín de Información de Acción Popular, Madrid, quincenal, marzo 1932-mayo 1933.

Boletín de la Unión General de Trabajadores de España, Madrid, mensual, agosto 1929-agosto 1934.

CEDA. Órgano de la Confederación Española de Derechas Autónomas, Madrid, quincenal, mayo-noviembre 1933.

JAP. Órgano Nacional de las Juventudes de Acción Popular de España, Madrid, quincenal, octubre 1934-febrero 1936.

PSOE: Convocatoria y orden del día para el XII Congreso ordinario del Partido Socialista Obrero Español, Madrid, 1927.

—, *Convocatoria y orden del día para el XIII Congreso ordinario del Partido Socialista Obrero Español*, Madrid, 1932.

Renovación, órgano de la Federación de Juventudes Socialistas de España, Madrid, semanal, febrero 1933-septiembre 1934.

La Unión Ferroviaria. Boletín del Sindicato Nacional Ferroviario, Madrid, mensual, 1933.

Unión General de Trabajadores: Memoria y orden del día del XVII Congreso, que se celebrará en Madrid los días 14 y siguientes de octubre de 1932.

III. INFORMES Y BOLETINES DE LOS MINISTERIOS

Boletín del Instituto de Reforma Agraria, Madrid, mensual, enero 1933-julio 1936.

Boletín del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Madrid, mensual, enero 1931-abril 1936.

Ministerio de la Gobernación: *Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936*, Barcelona, 1939.

Ministerio de Justicia: *Causa general. La dominación roja en España. Avance de la información instruida por el ministerio público*, Madrid, 1944.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social: *La crisis andaluza de 1930-1931*, Madrid, 1931.

IV. PERIÓDICOS Y REVISTAS

ABC (Madrid, diario), agosto 1923-agosto 1936.

Acción Española (Madrid, mensual), diciembre 1931-abril 1936.

Arriba (Madrid, semanal), marzo 1935-febrero 1936.

Avance (Oviedo, diario), noviembre 1931-octubre 1934.

Claridad (Madrid, semanal, y luego, a partir de abril de 1936, diario), julio 1935-julio 1936.

Comunismo (Madrid, mensual), mayo 1931-octubre 1934.

El Debate (Madrid, diario), enero 1930-julio 1936.

El Defensor (Granada, diario), diciembre 1935-junio 1936.

Democracia (Madrid, semanal), junio-diciembre 1935.

La Época (Madrid, diario), abril 1931-abril 1936.

FE (Madrid, semanal), diciembre 1933-julio 1934.

Leviatán (Madrid, mensual), mayo 1934-julio 1936.

El Liberal (Bilbao, diario), marzo 1935-marzo 1936.

La Mañana (Jaén, diario), abril 1932-julio 1936.

El Obrero de la Tierra (Madrid, semanal), enero 1932-julio 1936.

El Pueblo Católico (Jaén, diario), enero 1931-mayo 1933.

El Socialista (Madrid, diario), agosto 1923-agosto 1936.

El Sol (Madrid, diario), agosto 1923-julio 1936.

Tierra y Trabajo (Salamanca, semanal), noviembre 1932-mayo 1933.

Además de las series de periódicos y revistas citadas arriba, se consultaron series más cortas y números sueltos de otros muchos, entre los cuales figuran:

El Adelanto (Salamanca).

Campo Libre (Madrid).

La Gaceta Regional (Salamanca).

El Heraldo (Madrid).

Ideal (Granada).

La Libertad (Madrid).

Mundo Obrero (Madrid).

La Nación (Madrid).

Región (Cáceres).

Sur (Málaga).

La Tierra (Madrid).

V. DOCUMENTOS, DIARIOS, CARTAS Y DISCURSOS IMPRESOS

Arnau, Roger: *Marxisme català i qüestió nacional catalana, 1930-1936*, 2 vols., París, 1974.

Azaña, Manuel: *Obras completas*, 4 vols., México, 1966-1968.

—, *Memorias íntimas de Azaña*, Madrid, 1939.

Cierva, Ricardo de la: *Los documentos de la primavera trágica*, Madrid, 1967.

Clero Vasco, El: *El pueblo vasco frente a la cruzada franquista*, Toulouse, 1966.

Díaz, José: *Tres años de lucha*, 2.^a ed., París, 1969.

Documents on Germán Foreign Policy, 1918-1945, serie C, vol. 4; serie D, vol. 3, Londres, 1964, 1951.

- Gil, Robles, José María: *Discursos parlamentarios*, Madrid, 1971.
- Iglesias, Pablo: *Escritos*, 2 vols., Madrid, 1975.
- Jiménez Asúa, Luis; Vidarte, Juan Simeón; Rodríguez Sastre, Antonio, y Trejo, Anselmo: *Castilblanco*, Madrid, 1933.
- Largo Caballero, Francisco: *Discursos a los trabajadores*, Madrid, 1934.
- , *Posibilismo socialista en la democracia*, Madrid, 1933.
- López Sevilla, Enrique: *El PSOE en las Cortes Constituyentes de la II República*, México, 1969.
- Mola Vidal, Emilio: *Obras completas*, Valladolid, 1940.
- Pabón, Jesús: *Palabras en la oposición*, Sevilla, 1935.
- Prieto, Indalecio: *Dentro y fuera del gobierno*, Madrid, 1935.
- , *Discursos fundamentales* (recopilados por E. E. Malefakis), Madrid, 1975.
- Primo de Rivera, José Antonio: *Obras*, 4.^a ed., Madrid, 1966.
- Trotsky, León: *La révolution espagnole, 1930-1940* (textes recueillis et présentés par Pierre Broué), París, 1975.
- Vidal i Barraquer, Archives: *Esglesia i Estat durant la segona República espanyola*, 4 vols., Monastir de Montserrat, 1971-1975.

VI. MEMORIAS Y OBRAS TEÓRICAS DE LOS PROTAGONISTAS

- Álvarez del Vayo, Julio: *Freedom's Battle*, Londres, 1940.
- , *The Last Optimist*, Londres, 1950.
- Andrade, Juan: *La burocracia reformista en el movimiento obrero*, Madrid, 1935.
- Ansaldo, Juan Antonio: *¿Para qué...? (de Alfonso XIII a Juan III)*, Buenos Aires, 1951.
- Araquistáin, Luis: *El derrumbamiento del socialismo alemán*, Madrid, s. f. (1933).
- Baraibar, Carlos de: *Las falsas «posiciones socialistas» de Indalecio Prieto*, Madrid, 1935.
- Berenguer, Dámaso: *De la Dictadura a la República*, Madrid, 1946.

- Besteiro, Julián: *Marxismo y antimarxismo*, Madrid, 1935.
- Bueno, Javier: *El Estado socialista*, Madrid, 1931.
- Bullejos, José: *España en la II República*, México, 1967.
- , *La Komintern en España: recuerdos de mi vida*, México, 1972.
- Canel, José: *Octubre rojo en Asturias*, Madrid, 1935.
- Carrillo, Santiago: *Demain l'Espagne*, París, 1974.
- Castro Delgado, Enrique: *Hombres made in Moscú*, Barcelona, 1965.
- Chapaprieta Torregrosa, Joaquín: *La paz fue posible: memorias de un político*, Barcelona, 1971.
- Cordero, Manuel: *Los socialistas y la revolución*, Madrid, 1932.
- Domingo, Marcelino: *La experiencia del poder*, Madrid, 1934.
- , *La revolución de octubre*, Barcelona, 1935.
- Duclos, Jacques: *Mémoires*, vol. 2, *Aux jours ensoleillés du front populaire*, París, 1969.
- Gil Robles, José María: *No fue posible la paz*, Barcelona, 1968.
- Goded, Manuel: *Un «faccioso» cien por cien*, Zaragoza, 1939.
- Gorkín, Julián: *El revolucionario profesional: testimonio de un hombre de acción*, Barcelona, 1975.
- Grossi, Manuel: *L'insurrection des Asturies*, 2.^a ed., París, 1972.
- Hernández Zancajo, Carlos: *Octubre*, segunda etapa, s. l., s. f., (Madrid, 1935).
- Hidalgo, Diego: *¿Por qué fui lanzado del Ministerio de la Guerra? Diez meses de actuación ministerial*, Madrid, 1934.
- Hidalgo de Cisneros, Ignacio: *Cambio de rumbo*, 2 vols., Bucarest, 1964.
- Ibárruri, Dolores: *El único camino*, París, 1965.
- Jalón, César: *Memorias políticas: periodista, ministro, presidiario*, Madrid, 1973.
- Jiménez de Asúa, Luis: *Anécdotas de las Constituyentes*, Buenos Aires, 1942.
- Largo Caballero, Francisco: *Mis recuerdos*, México, 1953.

- , *Presente y futuro de la Unión General de Trabajadores*, Madrid, 1925.
- Ledesma Ramos, Ramiro: *¿Fascismo en España?*, 2.^a ed., Barcelona, 1968.
- Lerroux, Alejandro: *La pequeña historia. Apuntes para la historia grande vividos y redactados por el autor*, Buenos Aires, 1945.
- López de Ochoa, general Eduardo: *Campaña militar de Asturias en octubre de 1934*, Madrid, 1936.
- Luca de Tena, Juan Ignacio: *Mis amigos muertos*, Barcelona, 1971.
- Mario de Coca, Gabriel: *Anti-Caballero: una crítica marxista de la bolchevización del Partido Socialista Obrero Español*, Madrid, 1936.
- Martín Blázquez, José: *I Helped To Build An Army: Civil War Memoirs of a Spanish Staff Officer*, Londres, 1939.
- Martínez Barrio, Diego: *Orígenes del frente popular español*, Buenos Aires, 1943.
- Maura, Miguel: *Así cayó Alfonso XIII*, 2.^a ed., Barcelona, 1966.
- Maurín, Joaquín: *Hacia la segunda revolución: el fracaso de la República y la insurrección de octubre*, Barcelona, 1935.
- , *Los hombres de la Dictadura*, Madrid, 1930.
- , *La revolución española*, Madrid, 1932.
- Monedero Martín, Antonio: *La Confederación Nacional Católica Agraria en 1920: su espíritu, su organización, su porvenir*, Madrid, 1920.
- Monge Bernal, José: *Acción Popular (estudios de biología política)*, Madrid, 1936.
- Mora, Constanca de la: *In Place of Splendour*, Londres, 1940.
- Moral, Joaquín del: *Oligarquía y «enchufismo»*, Madrid, 1933.
- Morón, Gabriel: *El partido socialista ante la realidad política española*, Madrid, 1929.
- , *La ruta del socialismo en España*, Madrid, 1932.
- Munis, Grandizo: *Jalones de derrota, promesa de victoria*, México, 1948.
- Nelken, Margarita: *Por qué hicimos la revolución*, Barcelona, 1936.

- Nin, Andrés: *Los problemas de la revolución española*, París, 1971.
- Ossorio y Gallardo, Angel: *Mis memorias*, Buenos Aires, 1946.
- Pi Sunyer, Carles: *La República y la guerra: memorias de un político catalán*, México, 1976.
- Prieto, Indalecio: *Convulsiones de España*, 3 vols., México, 1967-1969.
- , *Del momento: posiciones socialistas*, Madrid, 1935.
- Ramos Oliveira, Antonio: *Nosotros los marxistas: Lenin contra Marx*, Madrid, 1932.
- , *La revolución española de octubre*, Madrid, 1935.
- Ríos, Fernando de los: *El sentido humanista del socialismo*, Madrid, 1926.
- , *Escritos sobre democracia y socialismo*, Madrid, 1974.
- Romero Solano, Luis: *Vísperas de la guerra de España*, México, s. f.
- Rosal, Amaro del: *Historia de la UGT de España, 1901-1939*, 2 volúmenes, Barcelona, 1977.
- Ruiz Alonso, Ramón: *Corporativismo*, Salamanca, 1937.
- Salazar Alonso, Rafael: *Bajo el signo de la revolución*, Madrid, 1935.
- Sánchez Guerra, José: *Al servicio de España*, Madrid, 1930.
- Santiago, Enrique de: *La UGT ante la revolución*, Madrid, 1932.
- Sanz, Ricardo: *El sindicalismo y la política: los «solidarios» y «nosotros»*, Toulouse, 1966.
- , *El sindicalismo español antes de la guerra: los hijos del trabajo*, Barcelona, 1976.
- Serrano Poncela, Segundo: *El partido socialista y la conquista del poder*, Barcelona, 1935.
- Serrano Súñer, Ramón: *Entre Hendaya y Gibraltar*, Madrid, 1947.
- Tagüeña Lacorte, Manuel: *Testimonio de dos guerras*, México, 1973.
- Trotsky, León: *Escritos sobre España*, París, 1971.
- , *The Struggle Against Fascism in Germany*, Nueva York, 1971.

Valdés, Alejandro: *¡Asturias! (relato vivido de la insurrección de octubre)*, Valencia, s. f. (1935).

Valverde, José Tomás: *Memorias de un alcalde*, Madrid, 1961.

Vidarte, Juan Simeón: *Las Cortes Constituyentes de 1931-1933*, Barcelona, 1976.

—, *Todos fuimos culpables*, México, 1973.

Villar, Manuel (Ignotus): *El anarquismo en la insurrección de Asturias*, Valencia, 1935.

Zugazagoitia, Julián: *Guerra y vicisitudes de los españoles*, 2 volúmenes, París, 1968.

VII. TESTIMONIOS CONTEMPORÁNEOS

Arrabal, Juan: *Gil Robles, su vida, su actuación, sus ideas*, Madrid, 1933.

Arrese, Domingo de: *Bajo la ley de defensa de la República*, Madrid, 1933.

Aunós, Eduardo: *La política social de la Dictadura*, Madrid, 1944.

Avon, Earl of: *Facing the Dictators*, Londres, 1962.

Azpeitia, Mateo: *La reforma agraria en España*, Madrid, 1932.

Barea, Arturo: *La forja de un rebelde*, Buenos Aires, 1951.

Belausteguigoitia, Ramón de: *Reparto de tierras y producción nacional*, Madrid, 1932.

Benavides, Manuel: *El último pirata del Mediterráneo*, 2.^a ed., México, 1976.

—, *La revolución fue así*, Barcelona, 1935.

Berges, Consuelo: *Explicación de octubre: historia comprimida de cuatro años de República en España*, Madrid, 1935.

Boaventura, Armando: *Madrid-Moscovo: Da Ditadura a República e a Guerra Civil de Espanha*, Lisboa, 1937.

Bowers, Claude G.: *My Mission to Spain*, Londres, 1954.

Buckley, Henry: *Life and Death of the Spanish Republic*, Londres, 1940.

Buenacasa, Manuel: *La CNT, los «treinta» y la FAI*, Barcelona, 1933.

- Canals, Salvador: *El bienio estéril: perspectivas electorales*, Madrid, 1936.
- Cánovas Cervantes, S.: *Apuntes históricos de «Solidaridad Obrera»*, Barcelona, 1937.
- Carral, Ignacio: *Por qué mataron a Luis de Sirval*, Madrid, 1935.
- Carrión, Pascual: *Los latifundios en España*, Madrid, 1932.
- , *La reforma agraria: problemas fundamentales*, Madrid, 1931.
- Casares, Francisco: *La CEDA va a gobernar (notas y glosas de un año de vida pública nacional)*, Madrid, 1934.
- Conze, Edward: *Spain Today: Revolution and Counter-Revolution*, Londres, 1936.
- Cortés Cavanillas, Julián: *Gil Robles ¿monárquico?*, Madrid, 1935.
- , *Vida, confesiones y muerte de Alfonso XIII*, Madrid, 1956.
- Costa i Deu, J., and Sabaté, Modest: *La veritat del 6 de octubre*, Barcelona, 1936.
- Díaz, Guillermo: *Cómo llegó Falange al poder: análisis de un proceso contrarrevolucionario*, Buenos Aires, 1940.
- Díaz del Moral, Juan: *Historia de las agitaciones campesinas andaluzas*, 3.^a ed., Madrid, 1973.
- Ehrenburg, Ilya: *España, República de trabajadores*, Madrid 1976.
- Félix Maíz, B.: *Alzamiento en España*, 2.^a ed., Pamplona, 1952.
- García Palacios, Luis: *El segundo bienio (España en escombros)*, Madrid, 1936.
- Guerra, Francisco: *Casas Viejas: apuntes de la tragedia*, Jerez de la Frontera, 1933.
- Jellinek, Frank: *The Civil War in Spain*, Londres, 1938.
- Jupin, René: *La question agraire en Andalusie*, París, 1932.
- Koestler, Arthur: *Spanish Testament*, Londres, 1937.
- León, María Teresa de: *Memoria de la melancolía*, Buenos Aires, 1970.
- Manning, Leah: *What I Saw In Spain*, Londres, 1935.

- Marco Miranda, Vicente: *Las conspiraciones contra la Dictadura: relato de un testigo*, Madrid, 1930.
- Maurín-Sánchez Julia, Fernando: *La reforma agraria italiana y la futura reforma española*, s. l., s. f. (Madrid, 1931).
- Martínez Aguiar, Manuel: *¿A dónde va el Estado español? Rebelión socialista y separatista de 1934*, Madrid, 1934.
- Medina Togores, José: *Un año de Cortes Constituyentes: impresiones parlamentarias*, Madrid, 1932.
- Mendizábal, Alfred: *Aux origines d'une tragédie: la politique espagnole de 1923 a 1936*, París, s. f., (1937).
- Nicolás, L.: *A travers les révolutions espagnoles*, París, 1972.
- Ramos Oliveira, Antonio: *Alemania: ayer y hoy*, Madrid, 1933.
- , *Politics, Economics and Men of Modern Spain*, Londres, 1946.
- Rangil Alonso, Félix: *El ensayo socialista en la República española*, Buenos Aires, 1934.
- Reporteros Reunidos: *Octubre rojo: ocho días que conmovieron a España*, Madrid, s. f. (1935).
- Rivas-Xerif, Cipriano de: *Retrato de un desconocido: vida de Manuel Azaña*, México, 1961.
- Rodríguez de la Peña, José: *Los aventureros de la política: Alejandro Lerroux*, Madrid, s. f. (1916).
- Ruiz, del Toro, José: *Octubre: etapas de un período revolucionario en España*, Buenos Aires, 1935.
- Saborit, Andrés: *Julián Besteiro*, Buenos Aires, 1967.
- , *El pensamiento político de Julián Besteiro*, Madrid, 1974.
- Sánchez Albornoz, Claudio: *De mi anecdotario político*, Buenos Aires, 1972.
- Sánchez Guerra, Rafael: *Dictadura, indiferencia, República*, Madrid, 1931.
- Sender, Ramón J.: *Viaje a la aldea del crimen (documental de Casas Viejas)*, Madrid, 1934.

Tusquets, J.: *Orígenes de la revolución española*, Barcelona, 1932.

FUENTES SECUNDARIAS

VIII. MONOGRAFÍAS Y OBRAS GENERALES PUBLICADAS A PARTIR DE 1936

Abad de Santillán, Diego: *Contribución a la historia del movimiento obrero español*, 3 vols., Puebla, 1962-1971.

Aguado Sánchez, Francisco: *La revolución de octubre de 1934*, Madrid, 1972.

Álvarez, Ramón: *Eleuterio Quintanilla (vida y obra del maestro): contribución a la historia del sindicalismo revolucionario en Asturias*, México, 1973.

Arrarás, Joaquín: *Franco*, 7.^a ed., Valladolid, 1939.

—, *Historia de la cruzada española*, 7 vols., Madrid, 1939-1943.

—, *Historia de la II República española*, 4 vols., Madrid, 1956-1968.

Aunós, Eduardo: *Itinerario histórico de la España contemporánea*, Barcelona, 1940.

Balcells, Alberto: *Crisis económica y agitación social en Cataluña (1930-1936)*, Barcelona, 1971.

—, *El problema agrari a Catalunya, 1890-1936: la qüestió rabassaire*, Barcelona, 1968.

—, *El sindicalismo en Barcelona, 1916-1923*, Barcelona, 1965.

Bécarud, Jean: *La II República española*, Madrid, 1967.

Bernal, Antonio Miguel: *La propiedad de la tierra y las luchas agrarias andaluzas*, Barcelona, 1974.

Bizcarrondo, Marta: *Leviatán y el socialismo de Luis Araquistáin*, Glashütten im Taunus, 1974.

—, recopiladora: *Octubre del 34: reflexiones sobre una revolución*, Madrid, 1977.

Blinkhorn, Martin: *Carlism and Crisis in Spain, 1931-1939*, Cambridge, 1975.

Bolín, Luis: *Spain: The Vital Years*, Nueva York, 1967.

- Bolloten, Burnett: *The Grand Camouflage: The Spanish Civil War and Revolution, 1936-1939*, 2.^a ed., Londres, 1968.
- Bonamusa, Francesc: *El Bloc Obrer i Camperol: Els primers anys (1930-1932)*, Barcelona, 1974.
- Brademas, John: *Anarcosindicalismo y revolución en España, 1930-1937*, Barcelona, 1974.
- Brenan, Gerald: *Personal Record, 1920-1972*, Londres, 1974.
- , *The Spanish Labyrinth*, 2.^a ed., Cambridge, 1950.
- Broué, Pierre, y Temime, Emile: *The Revolution and the Civil War in Spain*, traducción inglesa, Londres, 1972.
- Bruguera, F. G.: *Histoire contemporaine d'Espagne, 1789-1950*, París, 1953.
- Cabanellas, Guillermo: *La guerra de los mil días: nacimiento, vida y muerte de la II República española*, 2 vols., Buenos Aires, 1973.
- Calero, Antonio M.: *Movimientos sociales en Andalucía, 1820-1936*, Madrid, 1976.
- Carr, Raymond, recopilador: *The Republic and the Civil War in Spain*, Londres, 1971.
- , *Spain, 1808-1939*, Oxford, 1966.
- Castillo, Juan José: *El sindicalismo amarillo en España*, Madrid, 1977.
- Cattell, David T.: *Communism and the Spanish Civil War*, Berkeley, 1955.
- Checkland, S. G.: *The Mines of Tharsis*, Londres, 1967.
- Cierva, Ricardo de la: *Bibliografía general sobre la guerra de España (1936-1939) y sus antecedentes históricos*, Madrid-Barcelona, 1968.
- , *Historia de la guerra civil española*, I, Madrid, 1969.
- , *La historia perdida del socialismo español*, Madrid, 1972.
- Comín Colomer, Eduardo: *Historia del Partido Comunista de España*, 3 vols., Madrid, 1967.
- Cruells, Manuel: *El 6 d'octubre a Catalunya*, Barcelona, 1971.
- Díaz Nosty, B.: *La comuna asturiana: revolución de octubre de 1934*, Bilbao, 1974.

- Elorza, Antonio: *La utopía anarquista bajo la II República española*, Madrid, 1973.
- Fontana, Josep: *Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX*, Barcelona, 1973.
- Fraser, Ronald: *In Hiding: The Life of Manuel Cortés*, Londres, 1972.
- Fusi, Aizpurúa, Juan Pablo: *Política obrera en el País Vasco, 1880-1923*, Madrid, 1976.
- García Delgado, José Luis, editor: *La cuestión agraria en la España contemporánea*, Madrid, 1976.
- Gibson, Ian: *La represión nacionalista de Granada de 1936 y la muerte de Federico García Lorca*, París, 1971.
- Gutiérrez Ravé, José: *Gil Robles, caudillo frustrado*, Madrid, 1967.
- Hennessy, C. A., M.: *The Federal Republic in Spain, 1868-1874*, Oxford, 1962.
- Ibárruri, Dolores, y cols.: *Guerra y revolución en España, 1936-1939*, 3 vols., Moscú, 1967-1971.
- Jackson, Gabriel: *Costa, Azaña, el Frente Popular y otros ensayos*, Madrid, 1976.
- , *Historian's Quest*, Nueva York, 1969.
- , *The Spanish Republic and the Civil War*, Princeton, 1965.
- Lacomba, Juan Antonio: *La crisis española de 1917*, Madrid, 1970.
- Lamberet, René: *Mouvements ouvrier et socialistes: l'Espagne*, París, 1953.
- Lamo de Espinosa, Emilio: *Filosofía y política en Julián Besteiro*, Madrid, 1973.
- Lorenzo, César, M.: *Les anarchistes espagnols et le pouvoir, 1868-1969*, París, 1969.
- Madariaga, Salvador de: *Spain: a Modern History*, Londres, 1961.
- Malefakis, Edward E.: *Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain*, New Haven, 1970.

- Maurice, Jacques: *La reforma agraria en España en el siglo xx (1900-1936)*, Madrid, 1975.
- Meaker, Gerald H.: *The Revolutionary Left in Spain, 1914-1923*, Stanford, 1974.
- Míguez, Alberto: *El pensamiento filosófico de Julián Besteiro*, Madrid, 1971.
- Moore, Barrington, Jr.: *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, Londres, 1967.
- Pabón, Jesús: *Cambó*, 3 vols., Barcelona, 1952-1969.
- Pagés, Pelai: *Andreu Nin: su evolución política, 1911-1937*, Bilbao, 1975.
- , *El movimiento trotskista en España (1930-1935)*, Barcelona, 1977.
- Payne, Stanley G.: *Falange: a History of Spanish Fascism*, Stanford, 1961.
- , *Politics and the Military in Modern Spain*, Stanford, 1967.
- , *The Spanish Revolution*, Londres, 1970.
- Peirats, José: *Los anarquistas en la crisis política española*, Buenos Aires, 1964.
- , *La CNT en la revolución española*, 3 vols., 2.^a ed., París, 1971.
- Pérez Galán, Mariano: *La enseñanza en la II República española*, Madrid, 1975.
- Preston, Paul, recopilador: *Leviatán: antología*, Madrid, 1976.
- Ramírez Jiménez, Manuel: *Los grupos de presión en la II República española*, Madrid, 1969.
- , editor: *Estudios sobre la II República española*, Madrid, 1975.
- Robinson, Richard A. H.: *The Origins of Franco's Spain: The Right, The Republic and Revolution, 1931-1936*, Newton Abbot, 1970.
- Ruiz, David: *El movimiento obrero en Asturias*, Oviedo, 1968.
- Sáez Alba, A.: *La otra «cosa nostra»: la Asociación Católica Nacional de Propagandistas*, París, 1974.
- Sánchez Albornoz, Nicolás: *España hace un siglo*, Barcelona, 1968.

Sánchez y García Saúco, Juan Antonio: *La revolución de 1934 en Asturias*, Madrid, 1974.

Seco Serrano, Carlos: *Época contemporánea*, Barcelona, 1971.

Southworth, Herbert R.: *Antifalange*, París, 1967.

—, *El mito de la cruzada de Franco*, París, 1963.

Tamames, Ramón: *La República, la era de Franco*, Madrid, 1973.

Tuñón de Lara, Manuel: *El movimiento obrero en la Historia de España*, Madrid, 1972.

—, *La España del siglo xx*, 2.^a ed., París, 1973.

—, editor: *Sociedad, política y cultura en la España de los siglos XIX-XX*, Madrid, 1973.

Tusell, Javier: *Las elecciones del frente popular*, 2 vols., Madrid, 1971.

—, *Historia de la democracia cristiana en España*, 2 vols., Madrid, 1974.

Venegas, José: *Las elecciones del frente popular*, Buenos Aires, 1942.

Velarde Fuertes, Juan: *El nacionalsindicalismo cuarenta años después*, Madrid, 1972.

Viñas, Angel: *La Alemania nazi y el 18 de julio*, Madrid, 1974.

Zapatero, Virgilio: *Fernando de los Ríos: los problemas del socialismo democrático*, Madrid, 1974.

IX. ARTÍCULOS

Anes, Gonzalo: «La agricultura española desde comienzos del siglo XIX hasta 1868», en Banco de España: *Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo XIX*, Barcelona, 1970.

Baraibar, Carlos de: «La traición del stalinismo», en *Timón*, número 7, Buenos Aires, junio 1940.

Bécarud, Jean: «La acción política de Gil Robles», en *Cuadernos de Ruedo Ibérico*, núms. 28-29, París, diciembre 1970-marzo 1971.

Bizcarrondo, Marta: «La crisis socialista en la II República», en *Revista del Instituto de Ciencias Sociales*, núm. 21, Barcelona, 1973.

- , «Julián Besteiro: socialismo y democracia», en *Revista de Occidente*, núm. 94, Madrid, enero 1971.
- Blas Guerrero, Andrés de: «La radicalización de Francisco Largo Caballero, 1933-1934», en *Sistema*, núm. 8, Madrid, enero 1975.
- Blinkhorn, Martin: «“The Basque Ulster”: Navarra and the Basque Autonomy Question under the Spanish Second Republic», en *The Historical Journal*, vol. XVII, núm. 3, 1974.
- Castillo, Juan José: «El Comité Nacional Circunstancial de la Confederación Española de Sindicatos Obreros», en *Revista Española de la Opinión Pública*, núm. 38, Madrid, octubre 1974.
- Claudín, Fernando: «Dos concepciones de la vía española al socialismo», en *Cuadernos de Ruedo Ibérico. Horizonte español*, 2 vols., París, 1966.
- Díaz, Elías: «Fernando de los Ríos: socialismo humanista y socialismo marxista», en *Sistema*, núm. 10, Madrid, julio 1975.
- Fusi, Aizpurúa, Juan Pablo: «El movimiento obrero en España, 1876-1914», en *Revista de Occidente*, núm. 131, Madrid, febrero 1974.
- Madden, Marie R.: «The Status of the Church and Catholic Action in Contemporary Spain», en *Catholic Historical Review*, XVIII, 1933.
- Malefakis, Edward E.: «Peasants, Politics and Civil War in Spain, 1931-1939», en Bezucha, Robert J.: *Modern European Social History*, Boston, 1972.
- Nadal, Jordi: «Spain, 1830-1914», en Cipolla, Carlo M.: *The Emergence of Industrial Society*, 2 vols., Londres, 1973.
- Preston, Paul: «Alfonsist Monarchism and the Coming of the Spanish Civil War», en *Journal of Contemporary History*, volumen 7, núms. 3-4, 1972.
- , «El accidentalismo de la CEDA: ¿aceptación o sabotaje de la República?», en *Cuadernos de Ruedo Ibérico*, núms. 41-42, París, febrero-mayo 1973.
- , «The “Moderate” Right and the Undermining of the Second Spanish Republic, 1931-1933», en *European Studies Review*, volumen 3, núm. 4, 1973.

—, «Spain's October Revolution and the Rightist Grasp for Power», en *Journal of Contemporary History*, vol. 10, núm. 4, 1975.

Romero Maura, Joaquín: «El debate historiográfico acerca de la II República», en *Revista Internacional de Sociología*, 2.^a época, núms. 3-4, Madrid, julio-diciembre 1972.

Varela Ortega, José: «Reacción y revolución frente a la reforma», en *Revista Internacional de Sociología*, 2.^a época, números 3-4, Madrid, julio-diciembre 1972.

Viñas, Miguel: «Franquismo y revolución burguesa», en *Cuadernos de Ruedo Ibérico. Horizonte español*, 3 vols., París, 1972.

Nota.—, Cuando este libro se encontraba ya en imprenta me llegó el magnífico estudio de la CEDA hecho por José R. Montero: *La CEDA: el catolicismo social y político en la II República*, 2 vols. Madrid, 1977.

Notas

[¹] Richard A. H. Robinson: *The Origins of Franco's Spain* (Newton Abbot, 1970), p. 12. <<

[2] Salvador de Madariaga: *Spain: A Modern History* (Londres, 1961), p. 455. Un estudio más elaborado de esta misma tesis aparece en Guillermo Díaz: *Cómo llegó Falange al poder* (Buenos Aires, 1940), páginas 63-74. <<

[3] Andrés Saborit: *Julián Besteiro*, 2.^a ed. (Buenos Aires, 1967) página 250; Luis Romero Solano: *Vísperas de la guerra de España* (México, ¿1947?), pp. 176-177; Carlos de Baraibar: «La traición del stalinismo», en *Timón* (Buenos Aires), núm. 7, junio de 1940; conferencia de Luis Araquistáin en Toulouse el 24 de enero de 1947, citada en Saborit: *Besteiro*, p. 262, y observaciones de Araquistáin a Juan Marichal, en introducción a Manuel Azaña, *Obras completas*, 4 vols. (México, 1966-1968), III, XXXI-XXXII. <<

[4] Esto lo han observado tanto críticos de derecha como de izquierda. Véase Ricardo de la Cierva: «Marxismo en España, hoy», en *ABC*, 8 de junio de 1973, y Juan Andrade: *La burocracia reformista en el movimiento obrero* (Madrid, 1935), crítica acerva; Fernando Claudín: «Dos concepciones de la vía española al socialismo», en *Horizonte Español 1966* (París, 1966), II, p. 60. <<

[5] Gerald Brenan: *The Spanish Labyrinth*, 2.^a ed. (Cambridge, 1950), página 218; Grandizo Munis: *Jalones de derrota, promesa de victoria* (México, 1948), p. 50; Gerald H. Meaker: *The Revolutionary Left in Spain, 1914-1923* (Stanford, 1974), pp. 10-14 y 196-197. <<

[6] *El Socialista*, 10 de noviembre de 1917. <<

[7] Juan Pablo Fusi Aizpurúa: «El movimiento obrero en España, 1876-1914», en *Revista de Occidente* (Madrid), núm. 131, febrero de 1974; Meaker, *Revolutionary Left*, p. 4. <<

[8] Juan Antonio Lacomba: *La crisis española de 1917* (Madrid, 1970), *passim*; Manuel Tuñón de Lara: *El movimiento obrero en la historia de España* (Madrid, 1972), cap. X. <<

[9] Juan Díaz del Moral: *Historia de las agitaciones campesinas andaluzas*, 3.^a ed. (Madrid, 1973); Alberto Balcells: *El sindicalismo en Barcelona, 1916-1923* (Barcelona, 1965). <<

[10] Juan Pablo Fusi: *Política obrera en el País Vasco, 1880-1923* (Madrid, 1975), cap. 8. David Ruiz: *El movimiento obrero en Asturias* (Oviedo, 1968), pp. 162-181, muestra la aspereza de los conflictos sociales en la región. <<

[11] Diciembre de 1919, junio de 1920, abril de 1921. Las mejores reseñas son las de Meaker: *Revolutionary Left*, *passim*, y Tuñón: *Movimiento obrero*, pp. 681-717. <<

[¹²] Gabriel Morón: *El partido socialista ante la realidad política española* (Madrid, 1929), pp. 109-114. <<

[13] *El Socialista*, 14 de septiembre de 1923, estaba decididamente contra la resistencia. <<

[14] Francisco Largo Caballero defiende fervientemente esta postura en *Presente y futuro de la Unión General de Trabajadores de España* (Madrid, 1925), *passim*. <<

[15] Luis Araquistáin: «¿Qué hacen los socialistas?», en *El Socialista*, 1 de mayo de 1929; Enrique de Santiago: *La Unión General de Trabajadores ante la revolución* (Madrid, 1932), pp. 21, 22, 25, 44; Manuel Cordero: *Los socialistas y la revolución* (Madrid, 1932), pp. 43-51, 60-67; Largo Caballero: *Mis recuerdos, cartas a un amigo* (México, 1954); resulta extrañamente nada informativo sobre el tema, aunque vitupera a los que se opusieron a la táctica pasiva adoptada por el PSOE y la UGT, véanse pp. 90-91. <<

[16] Los anarquistas fueron atacados desde el primer momento, José Peirats: *La CNT en la revolución española*, 3 vols. (2.^a ed., París, 1971), I, pp. 37-38. El dictador ofreció tolerar a los comunistas si se comprometían a abandonar la agitación; cuando la dirección se negó, empezaron las detenciones, José Bullejos: *La Comintern en España* (México, 1972), p. 54. <<

[¹⁷] Joaquín Maurín: *Los hombres de la Dictadura* (Madrid, 1930), páginas 153-156. <<

[18] Morón: *Partido socialista*, pp. 78-85. <<

[19] Antonio Ramos Oliveira: *Politics, Economics and Men of Modern Spain* (Londres, 1946), p. 205. <<

[20] El pensamiento de Besteiro ha recibido considerable atención recientemente en España. Véase Alberto Míguez: *El pensamiento filosófico de Julián Besteiro* (Madrid, 1971); Andrés Saborit: *El pensamiento político de Julián Besteiro* (Madrid, 1974), y E. Lamo de Espinosa: *Filosofía y política en Julián Besteiro* (Madrid, 1973), que contiene una información detallada del positivismo y el neokantismo que impregnaron siempre el marxismo de Besteiro. Besteiro hizo la introducción a una traducción de *El programa de Erfurt*, de Kautsky (Madrid, 1933). <<

[21] Lamo de Espinosa: *Besteiro*, pp. 302-307. <<

[22] *El Socialista*, 5 de febrero y 14 de noviembre de 1924. <<

[23] Largo Caballero: *Mis recuerdos*, p. 37; *Presente y futuro*, p. 7. <<

[24] Largo Caballero: *Presente y futuro*, pp. 42-43; Santiago: *La Unión General de Trabajadores*, pp. 24-25. <<

[25] Este sentimiento de rivalidad aparece en muchos escritos socialistas de la época. Véase Largo Caballero: *Presente y futuro*, *passim*; Santiago: *La Unión General de Trabajadores*, p. 44; Cordero: *Socialistas*, p. 64; *Convocatoria y orden del día para el XII Congreso ordinario del PSOE* (Madrid, 1927), p. 91. Antonio Ramos Oliveira lo expresa más claramente en *Nosotros los marxistas: Lenin contra Marx* (Madrid, 1932), p. 185, donde acepta la persecución de anarquistas y comunistas por el dictador sobre la base de que tales grupos son incompatibles con cualquier régimen. <<

[26] *Convocatoria*, p. 89. <<

[27] *ABC*, 29 de septiembre de 1923. <<

[28] *El Socialista*, 2 de octubre y 1 de noviembre de 1923; Ruiz: *Asturias*, pp. 188-189. <<

[29] Ruiz: *Asturias*, p. 189. <<

[30] Tuñón: *Movimiento obrero*, p. 721; *ibid.*, p. 776, para las acciones huelguísticas. <<

[31] *Convocatoria*, p. 96. <<

[32] Largo Caballero y Cordero, en la Junta de Abastos (Santiago: *UGT*, p. 39); Lucio Martínez y otros miembros de la ejecutiva estuvieron en otros organismos (Tuñón: *Movimiento obrero*, p. 776). <<

[33] *Convocatoria*, pp. 101-102. <<

[34] Manuel Tuñón de Lara: *La España del siglo xx* (2.^a ed., París, 1973), p. 151. <<

[35] *Convocatoria*, p. 103. <<

[36] *El Socialista*, 11 de diciembre de 1923; Virgilio Zapatero: Fernando de los Ríos: los problemas del socialismo democrático (Madrid, 1974), p. 77. <<

[37] *El Socialista*, 13 de diciembre de 1923; Largo Caballero: *Presente y futuro*, pp. 42-47; *Recuerdos*, pp. 90-92. <<

[38] Ruiz: *Asturias*, pp. 190-191. <<

[39] Vicente Marco Miranda: *Las conspiraciones contra la Dictadura* (Madrid, 1930), p. 61, muestra cómo Besteiro sólo estaba dispuesto a autorizar un movimiento contra la Dictadura que no supusiera riesgos contra los socialistas. Más tarde, los apologistas del PSOE señalarían, con cierta justificación, que la mayoría de los movimientos de resistencia intentaban restaurar la monarquía y, por tanto, ofrecían pocas ventajas al movimiento obrero; Cordero: *Socialistas*, p. 74; Ramos Oliveira: *Nosotros*, pp. 182-183; *El Socialista*, 12 de mayo de 1925 y 26 de febrero de 1926. <<

[40] Eduardo Aunós: *La política social de la Dictadura* (Madrid, 1944), pp. 46-63. <<

[41] Santiago: *UGT*, pp. 25-27 y 32-33. <<

[42] *Ibid.*, Cordero: *Socialistas*, p. 63; Ramos Oliveira: *Nosotros*, páginas 186 y 193; cf. Maurín: *Hombres*, p. 189. <<

[43] En 1927 se registraron 107 huelgas en las que tomaron parte 70 616 trabajadores y que supusieron 1 311 065 jornadas de trabajo perdidas. En 1928, con aproximadamente el mismo número de huelgas y de huelguistas, sólo se perdieron 771 293 jornadas. En 1929 las cifras descendieron más aún: 96 huelgas, 55 576 huelguistas y 313 065 jornadas perdidas (Tuñón: *Movimiento obrero*, p. 780). Esto parece reflejar el éxito de los comités paritarios en anestesiar las protestas de la clase obrera. En Barcelona, por ejemplo, el desempleo casi se duplicó entre principios de 1927 y finales de 1929; Alberto Balcells: *Crisis económica y agitación social en Cataluña (1930-1936)* (Barcelona, 1971), p. 34. Además, tras haber aumentado lentamente hasta 1925, los salarios comenzaron a bajar desde entonces a ritmo regular, aunque con grandes variaciones regionales y por oficios. Los alimentos corrientes de la clase obrera, como patatas, pan y aceite de oliva, aumentaron de precio. Para un análisis de salarios y precios, véase Tuñón: *Movimiento obrero*, pp. 755-773. Cf. Joaquín Maurín: *La revolución española* (Madrid, 1932), p. 51. <<

[44] Ruiz: *Asturias*, pp. 191-195. <<

[45] Edward E. Malefakis: *Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain* (New Haven, 1970), p. 159; *Convocatoria*, pp. 11-12, reproduce peticiones de organizaciones socialistas de Asturias, Andalucía y Zaragoza para que el PSOE adoptase una política agraria más coherente y dinámica. <<

[46] Eduardo Aunós: *Itinerario histórico de la España contemporánea* (Barcelona, 1940), pp. 377-379; Santiago: *UGT*, p. 45, afirma que para 1928 se habían clausurado 65 secciones rurales de la UGT con 15 000 miembros. En diciembre de 1929 la UGT tenía únicamente 30 000 miembros rurales; en agosto de 1922 eran 65 405. <<

[47] Morón: *Partido socialista*, pp. 124-135. <<

[48] Saborit: *Besteiro*, pp. 169-170; *Convocatoria*, p. 121. <<

[49] Maurín: *Hombres*, pp. 188-189; Andrade: *Burocracia reformista*, *passim*; Ricardo Sanz: *El sindicalismo y la política* (Toulouse, 1966), p. 149; Álvaro de Albornoz: prólogo a Morón: *Partido socialista*, p. 25. <<

[50] Véanse notas 43 y 45. Resulta difícil establecer el avance de la UGT en este período. Santiago: *UGT*, pp. 44-45, admite la pérdida de 15 000 trabajadores rurales, pero afirma, en compensación, un crecimiento de 17 000 obreros industriales en la época en que se celebró el XVI Congreso de septiembre de 1928. Incluso en el sector minero, a pesar de las pérdidas espectaculares en Asturias, hubo algún crecimiento. Llaneza consiguió asegurar mejores salarios y condiciones laborales para los mineros del cobre de las minas de Tharsis, de propiedad británica, en las cercanías de Huelva. Este éxito indujo a los mineros de la zona a afiliarse a la Federación Minera; S. G. Checkland: *The Mines of Tharsis* (Londres, 1967), pp. 212-214. El crecimiento total de la UGT no fue muy importante: 1923: 210 617; 1924: 210 742; 1925: 217 386; 1926: 219 396; 1927: 223 349; 1928: 210 567; 1929: 238 501 (cifras de Tuñón: *Movimiento obrero*, pp. 721, 775, 784; Santiago: *UGT*, p. 45; Maurín: *Hombres*, pp. 197-198). Representan un crecimiento muy escaso considerando la posición privilegiada de la UGT; apenas mayor del que se podía esperar en los años normales y que, desde luego, no supone una absorción de los militantes cenetistas. Claro que las cifras se refieren a miembros cotizantes y los tiempos eran difíciles. En el XVI Congreso de la UGT, del 10 al 15 de septiembre de 1928, los 591 delegados representaban sólo a 141 269 afiliados (René Lamberet: *Mouvements ouvriers et socialistes: l'Espagne*, París, 1953, p. 146), pero posiblemente se debía a que algunas secciones no tenían fondos suficientes para mandar un delegado. El PSOE evolucionó ligeramente mejor, aumentando de 5395 en 1923 a 12 815 en 1929, según Maurín: *Hombres*, p. 199. Tuñón: *Movimiento obrero*, pp. 732 y 775, da las cifras de 8215 en 1923, creciendo hasta 13 181 en 1929. Maurín: *Hombres*, p. 200, afirma que el crecimiento representaba simplemente los miembros de la UGT que se habían afiliado al PSOE. En centros industriales importantes, el número de miembros del PSOE era muy bajo. En Asturias descendió de 528 en 1923 a 391 en 1929; en el País Vasco, de 670 a 631. <<

[51] Morón: *Partido socialista*, pp. 182-185; *El Socialista*, 10 de julio de 1928.

<<

[52] PSOE: presidente, Besteiro; vicepresidente, Largo Caballero; tesorero, Saborit; secretario, Lucio Martínez Gil; secretario de actas, Wenceslao Carrillo. UGT: presidente, Besteiro; vicepresidente, Saborit; secretario general, Largo Caballero; tesorero, W. Carrillo. Tuñón: *Movimiento obrero*, p. 784. <<

[53] Morón: *Partido socialista*, pp. 189-190. Éste fue el principio de la oleada de huelgas en el sur en 1930. Véase Lamberet: *Mouvements*, pp. 146-147. <<

[54] Ruiz: *Asturias*, pp. 195-197; Gabriel Santullano: «Las organizaciones obreras asturianas en los comienzos de la II República», en Manuel Tuñón de Lara: *Sociedad, política y cultura en la España de los siglos XIX-XX* (Madrid, 1973), p. 257. <<

[55] *El Socialista*, 3 de enero de 1929. Santiago: *UGT*, p. 54, afirma que en las últimas etapas de la Dictadura fueron disueltas 150 secciones de la UGT, se clausuraron 93 centros obreros y cientos de socialistas fueron detenidos tras las huelgas, especialmente en Santander y Vigo. <<

[56] Saborit: *Besteiro*, p. 172. <<

[57] *Boletín de la Unión General de Trabajadores de España* (en adelante, BUGT), agosto de 1929; *El Socialista*, 1 de septiembre de 1929. <<

[58] Santiago: *UGT*, p. 47. <<

[59] Se reproduce Integro en Saborit: *Besteiro*, pp. 175-180. <<

[60] *BUGT*, septiembre de 1929; *El Sol*, 17 de septiembre de 1929. <<

[61] Centenares de miembros de la UGT fueron encarcelados en Santander a raíz de una huelga del Sindicato Metalúrgico Montañés, Santiago: *UGT*, p. 54; *El Socialista*, 14 de enero de 1930. <<

[62] *El Socialista*, 5 y 13 de febrero de 1924. <<

[63] *El Sol*, 6, 13 y 17 de febrero de 1924. <<

[64] En 1924 Besteiro pasó una larga temporada en Inglaterra, estudiando la *Worker's Educational Association*. Fue la culminación de su creciente interés por las realizaciones del partido laborista y el movimiento gremial inglés. Véase Lamo: *Besteiro*, pp. 57-58 y 310-312. Cuando la polémica en torno a la denominada bolchevización del socialismo español era más aguda, Besteiro publicó una introducción a una serie de ensayos de socialistas ingleses: Stafford Cripps y otros: *Problemas de gobierno socialista* (Madrid, 1934). <<

[65] Zapatero: *De los Ríos*, p. 71; Fernando de los Ríos: *El sentido humanista del socialismo* (Madrid, 1926), *passim*, da una idea de su concepción de la preeminencia del socialismo democrático. Véase también Elías Díaz: «Fernando de los Ríos: socialismo humanista y socialismo marxista», en *Sistema* (Madrid), núm. 10, julio de 1975, páginas 115-125. <<

[66] Lamo: *Besteiro*, p. 70. <<

[67] El texto íntegro se reproduce en Saborit: *Besteiro*, pp. 185-190. <<

[68] Dámaso Berenguer: *De la Dictadura a la República* (Madrid, 1946), pp. 51-52. <<

[69] Emilio Mola Vidal: *Obras completas* (Valladolid, 1940), páginas 351-353.

<<

[70] Lamo: *Besteiro*, pp. 72-73. <<

[71] Miguel Maura: *Así cayó Alfonso XIII* (Barcelona, 1966), pp. 50-59; José Sánchez Guerra: *Al servicio de España* (Madrid, 1930); Angel Ossorio y Gallardo: *Mis memorias* (Buenos Aires, 1946), pp. 165-166. Largo pidió a la ejecutiva del PSOE que censurase a Prieto por haber acudido a un banquete con Sánchez Guerra; Gabriel Mario de Coca: *Anti-Caballero* (Madrid, 1936), p. 18; PSOE: *XIII Congreso ordinario: memoria* (Madrid, 1932), pp. 68-69.

<<

[72] Ruiz: *Asturias*, pp. 214-217. <<

[73] Tuñón: *Movimiento obrero*, p. 790, da las siguientes cifras: 1929: huelgas, 96; huelguistas, 55 576; jornadas perdidas, 313 065; 1930: huelgas, 402; huelguistas, 247 460; jornadas perdidas, 3 747 360. <<

[74] Mola: *Obras*, p. 260. <<

[75] Bullejos: *Comintern*, pp. 100-101; José Peirats: *Los anarquistas en la crisis política española* (Buenos Aires, 1964), pp. 60-64; Mola: *Obras*, p. 353; Tuñón: *Movimiento obrero*, p. 792; Lamberet: *Mouvements ouvriers*, pp. 146-147. <<

[76] Mola: *Obras*, pp. 352-353; Andrade: *Burocracia*, pp. 204-220. <<

[77] Muchos militantes anarquistas, e incluso socialistas, entrevistados por el autor recordaban con acritud o con irrisión la gran cantidad de sinecuras acumuladas por Cordero. Para listas, véase Andrade: *Burocracia*, pp. 242 y 245; Joaquín del Moral: *Oligarquía y enchufismo* (Madrid, 1933), pp. 80-81.

<<

[78] Cordero: *Socialistas*, p, 88. <<

[79] Mola: *Obras*, pp. 353-354, 373, 394, 399, 404, 421, 437-446. <<

[80] *Anuario estadístico de España* (Madrid, 1931), p. 606; *El obrero de la tierra*, 17 de septiembre de 1932. Estas cifras no llegan todavía a las del sector agrario de la UGT antes de la Dictadura. En agosto de 1922 la UGT tenía 510 secciones agrarias con 65 405 miembros —*Anuario estadístico* (Madrid, 1923), pp. 308-309—. El *BUGT* de noviembre de 1931 se quejaba de una sección que con 80 000 miembros sólo recibía suscripciones de 21 000. <<

[81] Constancio Bernaldo de Quirós: «Informe acerca del paro de los jornaleros del campo de Andalucía durante el otoño de 1930», en Ministerio de Trabajo y Previsión Social: *La crisis andaluza de 1930-1931* (Madrid, 1931), pp. 8-35. <<

[82] Cordero: *Socialistas*, pp. 93-94. <<

[83] Maura: *Así cayó*, pp. 71-73; Saborit: *Besteiro*, p. 191; Largo Caballero: *Recuerdos*, p. 107; Zapatero: *De los Ríos*, pp. 82-83; Lamo: *Besteiro*, p. 72.
<<

[84] Saborit: *Besteiro*, p. 194; Lamo: *Besteiro*, p. 74; Zapatero: *De los Ríos*, pp. 84-85; Mario de Coca: *Anti-Caballero*, p. 11; *Recuerdos*, página 108. <<

[85] Las Agrupaciones Socialistas de Bilbao, Valladolid y San Sebastián habían ignorado ya una instrucción del Comité Nacional de enviar concejales a los Ayuntamientos restablecidos. Saborit: *Besteiro*, página 194. <<

[86] Maura: *Así cayó*, p. 83. <<

[87] Saborit: *Besteiro*, p. 191. <<

[88] Indalecio Prieto: *Convulsiones de España*, 3 vols. (México, 1967-9), I, p. 61. <<

[89] Largo Caballero: *Recuerdos*, pp. 113-114; Saborit: *Besteiro*, páginas 194-195. <<

[90] Ignacio Hidalgo de Cisneros: *Cambio de rumbo*, 2 vols. (Bucarest, 1964), I, pp. 221-224. Hidalgo afirma que había gran entusiasmo entre los tranviarios locales respecto al movimiento revolucionario. <<

[91] *El Socialista*, 8 y 13 de octubre de 1932. <<

[92] Julio Álvarez del Vayo: *The Last Optimist* (Londres, 1950), página 198. Se servía ya de su puesto como corresponsal del *Guardian* para pasar de contrabando armas cortas para el comité revolucionario: *ibid.*, pp. 193-196. Saborit no menciona su falta de colaboración en sus memorias. <<

[93] Mola: *Obras*, p. 543. <<

[94] Largo Caballero: *Recuerdos*, pp. 111-112; Saborit: *Besteiro*, página 196, reconoce que Largo pasaba la información a Muiño, y a continuación, intencionadamente, se pregunta por qué no habló también con Besteiro y con Trifón Gómez. <<

[95] El debate está recogido en *El Socialista* de 8 y 9 de octubre de 1932; véase también la excelente apología besteirista de G. Mario de Coca: *Anti-Caballero*, p. 63; Saborit: *Besteiro*, p. 197; Cordero: *Socialistas*, pp. 84-85. Una lista de lugares afectados por las huelgas nos la da Tuñón en *Siglo xx*, pp. 210-211. Véase también Maura: *Así cayó*, página 75; Ruiz: *Asturias*, p. 215. <<

[96] *Diario de Sesiones de las Cortes* (en adelante *DSC*) de 11 de abril de 1934. <<

[97] *El Socialista*, 24 de febrero de 1931; Saborit: *Besteiro*, pp. 201-202; Santiago: *UGT*, pp. 86-88; Mario de Coca: *Anti-Caballero*, pp. 23-24. <<

[98] Este proceso es similar al de la alianza del hierro y el centeno en Alemania. Véase Barrington Moore Jr.: *Social Origins of Dictatorship and Democracy* (Londres, 1967), especialmente cap. VIII; cf. León Trotsky: Carta a los editores de *Contra la corriente*, 13 de junio de 1930, y su folleto *The Revolution in Spain* (Nueva York, 1931), reproducido en *Escritos sobre España* (París, 1971), donde condena como pedante la interpretación socialista del papel de la burguesía. <<

[99] Josep Fontana: «Transformaciones agrarias y crecimiento económico en la España contemporánea», en *Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX* (Barcelona, 1973); Gonzalo Anes: «La agricultura española desde comienzos del siglo XIX hasta 1868», en Banco de España: *Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo XIX* (Barcelona, 1970); Jordi Nadal: «Spain, 1830-1914», en Carlo M. Cipolla, *The Emergence of Industrial Society*, 2 volúmenes (Londres, 1973), p. 2; Antonio Miguel Bernal: «Formación y desarrollo de la burguesía agraria sevillana», en *La propiedad de la tierra y las luchas agrarias andaluzas* (Barcelona, 1974); Miguel Viñas: «Franquismo y revolución burguesa», en *Horizonte español 1972*, 3 volúmenes (París, 1972), III; Nicolás Sánchez Albornoz: *España hace un siglo: una economía dual* (Barcelona, 1968), p. 190. <<

[100] C. A. M. Hennessy: *The Federal Republic in Spain 1868-74* (Oxford, 1962); Juan Antonio Lacomba: *La crisis española de 1917* (Madrid, 1970).
<<

[101] Jesús Pabón: *Cambó* (Barcelona, 1952), cap. 10. <<

[¹] Para la ACNP, véase A. Sáez Alba, *La otra «cosa nostra»: la Asociación Católica Nacional de Propagandistas* (París, 1974), IX-XXII; para la CNCA, véase más adelante. <<

[2] *El Debate*, 7 de abril; *La Época*, 6 de abril de 1931. <<

[3] La génesis y el desarrollo de esta respuesta «catastrofista» a la República se describen en Martin Blinkhorn: «Carlism & the Spanish Crisis of the 1930s'», y en Paul Preston: «Alfonsist Monarchism & the Coming of the Spanish Civil War», ambos en el *Journal of Contemporary History*, vol. 7, 3/4, 1972. <<

[4] Rafael Sánchez Guerra: *Dictadura, indiferencia, República* (Madrid, 1931), p. 137. <<

[5] José Monge Bernal: *Acción Popular* (Madrid, 1936), pp. 114-115 y 122.
<<

[6] (Barcelona, 1968), pp. 33-34. <<

[7] Monge: *Acción Popular*, pp. 128-129. <<

[8] *NFP*, p. 35 (el subrayado es nuestro). <<

[9] Javier Tusell: *Historia de la democracia cristiana en España*, 2 vols. (Madrid, 1974), I, p. 59; Manuel Azaña: *Obras completas*, 4 volúmenes (México, 1966-68), IV, p. 189, anotación en el diario el 18 de octubre de 1931. <<

[10] Telegrama Pacelli-Vidal, 29 de abril de 1931, en Arxiu Vidal i Barraquer: *Esglesia i Estat durant la segona República espanyola*, 2 vols. (Monestir de Montserrat, 1971-75), I, pp. 27-29. <<

[¹¹] *Ibid.*, pp. 36-37. <<

[¹²] Cf. Henry Buckley: *Life and Death of the Spanish Republic* (Londres, 1940), p. 58; Constanica de la Mora: *In Place of Splendour* (Londres, 1940), p. 32. <<

[13] *El Debate*, 28 de abril de 1931. <<

[14] Carta del cardenal-arzobispo de Sevilla al cardenal Vidal i Barraquer, 28 de noviembre de 1931, en Arxiu Vidal i Barraquer, vol. 2 (Montserrat, 1975), p. 169; José R. Montero Gibert: «La CEDA: el partido contrarrevolucionario hegemónico de la II República», en Manuel Ramírez Jiménez: *Estudios sobre la II República española* (Madrid, 1975), p. 99. <<

[15] Entrevista con Miguel Maura, en Gabriel Jackson: *Historian's Quest* (Nueva York, 1969), pp. 114-115; declaración del testigo núm. 30 en la compilación del clero vasco, *El pueblo vasco frente a la cruzada franquista* (Toulouse, 1966), pp. 23-24. Henry Buckley, un periodista inglés católico que estaba presente, escribió: «De ahí la explosión de rabia y violencia de las muchedumbres madrileñas cuando descubrieron que incluso el único tentáculo del pulpo feudal que había sido cortado empezaba a crecer de nuevo», *op. cit.*, p. 64. Según Ricardo de la Cierva: *Historia de la guerra civil española*, vol. I (Madrid, 1969), p. 172, Gil Robles estaba presente en la reunión del CMI. El propio Gil Robles, en una entrevista con el autor, lo denegó firmemente. <<

[16] Monge: *Acción Popular*, pp. 130-132. <<

[17] *El Debate*, 5 y 6 de mayo de 1931. <<

[18] *El Siglo Futuro*, 5 de mayo de 1931. <<

[19] Julián Cortés Cavanillas: *Gil Robles ¿monárquico?* (Madrid, 1935), p. 91.

<<

[20] *El Debate*, 8 de mayo de 1931. <<

[21] Antonio Monedero Martín: *La Confederación Nacional Católico-Agraria en 1920: su espíritu, su organización, su porvenir* (Madrid, 1921), pp. 22-33; Juan José Castillo: «Orígenes, y primeros años de la CNCA: planteamientos básicos de análisis del catolicismo social en España», leído en un congreso sobre «La société rurale espagnole depuis la crise de l'ancien régime jusque à celle des années trente», celebrado en la Universidad de Pau el 21 y el 22 de marzo de 1975, y reimpreso en José Luis García Delgado: *La cuestión agraria en la España contemporánea* (Madrid, 1976); Jean Bécarud: *La II República española* (Madrid, 1967), pp. 58-63. <<

[22] *El Debate*, 9 y 30 de mayo y 17 de junio de 1931; una serie de entrevistas con el marqués de Gracia Real, un terrateniente salmantino, que era miembro de Acción Nacional y de Acción Española, celebradas en el invierno de 1970-1971 en Madrid. <<

[23] Monge: *Acción Popular*, pp. 136-138. Hay una tendencia reciente que ve la causa esencial de la guerra civil en el fracaso de la derecha moderada para conseguir sus objetivos dentro de la República. Según esta opinión, el egoísmo de la izquierda forzó a la derecha a abandonar el legalismo y a defender sus intereses por otros medios. Dos trabajos destacados de esta escuela son los de R. A. H. Robinson: *The Origins of Franco's Spain* (Newton Abbot, 1970), y Carlos Seco Serrano: *Época contemporánea* (Barcelona, 1971). Hay, sin embargo, pruebas considerables que sugieren que los fines de la derecha «moderada» eran incompatibles con una existencia significativa de la República. <<

[²⁴] *El Debate*, 2 de junio de 1931. <<

[25] *El Debate*, 11 y 28 de junio de 1931. <<

[26] Sólo cinco eran miembros de Acción Nacional, aunque la mayoría debía su elección a la campaña de ésta. Todos ellos eran de orígenes monárquicos. *El Debate*, 8 de julio de 1931. <<

[27] *El Debate*, 22 y 28 de julio de 1931. <<

[28] *Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes* (en adelante, *DSCC*), 8 y 9 de octubre de 1931; Luis Jiménez de Asúa: *Anécdotas de las Constituyentes* (Buenos Aires, 1942), pp. 61-63; *NFP*, pp. 51-55; Robinson: *Origins*, pp. 60-68; Joaquín Arrarás: *Historia de la II República española*, 4 vols. (Madrid, 1956-68), I, pp. 181-203. <<

[29] Intercambio de cartas entre el cardenal Vidal y Luis Nicolau d'Olwer el 22 de noviembre de 1931, entre el cardenal Vidal y Manuel Azaña el 24 y 25 de noviembre de 1931 y entre el cardenal Vidal y el cardenal Pacelli, recogiendo una conversación con Azaña, el 28 de noviembre de 1931. Arxiu Vidal i Barraquer, vol. 2, pp. 48-49, 158-163, 168 y 179-180. <<

[30] Monge: *Acción Popular*, p. 436. <<

[31] *NFP*, pp. 64-65. <<

[32] *El Debate*, 18 de octubre; *El Sol*, 15 de octubre de 1931. El intento de Maura de crear una derecha democrática estaba abocado al fracaso, ya que la prensa de derechas no toleraría nunca su negativa a unir el catolicismo con un orden económico y social dado. Cf. *El Debate*, 27 de octubre de 1931. <<

[33] *El Debate*, 20 y 23 de octubre de 1931. Es interesante que un católico inglés que se encontraba en España en aquellos momentos comentase: «Doy la bienvenida a la República como un paso hacia mejores condiciones sociales, y por mucho que me desagraden la violencia de las masas y los incendios de iglesias, creo que los españoles que profesan con más ruido su fe católica son los que más culpa han tenido de la existencia de masas analfabetas y de una economía nacional depauperada», Buckley: *op. cit.*, pp. 66-67. <<

[³⁴] *El Debate*, 1, 3, 10 y 12 de noviembre; *El Socialista*, 2 de noviembre de 1931. <<

[35] Para el texto completo, véase Monge: *Acción Popular*, páginas 170-183; *El Debate*, 6 de diciembre de 1931. <<

[36] *La Época*, 24 de febrero de 1932; Monge: *Acción Popular*, páginas 223-225. <<

[37] *La Época*, 2 de enero de 1932; Domingo de Arrese: *Bajo la ley de defensa de la República* (Madrid, 1933), p. 68. <<

[38] *Ibid.*, 5 de enero de 1932. <<

[39] *NFP*, pp. 67-76; carta de 25 de abril de 1937 de Gil Robles a Luciano de la Calzada en la que trata de la disolución de Acción Popular por Franco y de su incorporación al partido único del Estado. Gil Robles veía esta «espléndida cosecha» como el fruto de sus esfuerzos de propaganda durante la República; *Sur* (Málaga), 28 de abril de 1937; cf. José Gutiérrez Ravé: *Gil Robles, caudillo frustrado* (Madrid, 1967), pp. 198-199. <<

[40] Monge: *Acción Popular*, pp. 941, 953, 965, 991. El cambio fue la respuesta a la prohibición del gobierno de utilizar la palabra «nacional» por entidades no estatales, *ibid.*, p. 183. <<

[41] *El Socialista*, 6 de agosto de 1931. <<

[42] *DSCC*, 7 de agosto y 1 de septiembre de 1931; *El Debate*, 1 de diciembre de 1931; Marcelino Domingo: *La experiencia del poder* (Madrid, 1934), pp. 240-242. <<

[43] Domingo: *La experiencia*, pp. 243-248; Gabriel Jackson: *The Spanish Republic and the Civil War* (Princeton, 1965), pp. 86-87. <<

[44] Incluso el llamado social católico Dimas de Madariaga estaba implicado en actividades antirrepublicanas con el conspirador monárquico Ansaldo; véase Juan Antonio Ansaldo: *¿Para qué? de Alfonso XIII a Juan III* (Buenos Aires, 1951), p. 23. <<

[45] *NFP*, p. 79. <<

[46] *NFP*, p. 79. <<

[47] Malefakis: *op. cit.*, pp. 197-199. <<

[48] *NFP*, p. 60. <<

[49] *El Debate*, 8 de octubre de 1932; Cortés Cavanillas: *Gil Robles*, páginas 138 y 144-146. <<

[50] *El Debate*, 21, 23 y 25 de octubre de 1932; Robinson: *Origins*, páginas 107-109; Salvador Canals: *El bienio estéril* (Madrid, 1936), páginas 12-13.
<<

[51] *NFP*, p. 84. <<

[52] *El Debate*, 11 de enero; *ABC*, 11 de enero de 1933; Arrarás: *República*, II, p. 137. El subrayado es nuestro. <<

[53] Se trataba de un intento de provocar el miedo de los agricultores conservadores; véase *El Debate*, 1, 9, 10, 15 y 25 de noviembre de 1932. A pesar de todas las acusaciones de desorden endémico, la cosecha fue una de las mayores del siglo. <<

[54] *El Socialista*, 29 y 30 de octubre de 1932: «No es la primera vez que tenemos que subrayar manifestaciones fascistizantes de *El Debate*. Pero acaso nunca como ahora hayamos oído en las derechas españolas un lenguaje tan escalofriante». <<

[55] *El Debate*, 13 de noviembre de 1932. El diario manifestaba una creciente simpatía por las posibles soluciones fascistas a los problemas de España; véase el editorial de 16 de diciembre de 1932, «Hacia una democracia fascista», y el artículo de 17 de enero de 1933 sobre las ventajas de una economía fascista. <<

[56] Arrarás: *República*, vol. II, p. 138. <<

[57] *El Debate*, 1, 2, 3, 5 y 7 de marzo de 1933; *CEDA*, 1 de mayo de 1933; Arrarás: *República*, vol. II, pp. 144-148. <<

[58] *El Socialista*, 8 de marzo de 1933. <<

[59] *El Socialista*, 31 de enero, 5, 10 y 11 de febrero, 10 de marzo y 2 y 21 de abril de 1933. <<

[60] *El Socialista*, 1 de mayo; el suplemento del 1 de mayo se titulaba «Lecciones de la contrarrevolución alemana»; el 4 de mayo de 1933 aparecía un llamamiento en favor de las víctimas del fascismo, y el 6 de mayo de 1933 publicaba un informe completo sobre la destrucción por Hitler de los sindicatos alemanes. <<

[61] *El Debate*, 8 y 22 de marzo de 1933; *NFP*, pp. 205-207. <<

[62] *El Debate* de 1 de enero de 1933 había afirmado abiertamente que el accidentalismo como táctica había hecho difícil a las autoridades restringir las actividades del grupo. <<

[63] *El Debate*, 9 de mayo de 1933. Exagera considerablemente, cf., Jackson: *Historian's Quest*. <<

[64] *El Debate*, 18 de mayo de 1933. <<

[65] *El Socialista*, 10 de mayo de 1933; el 20 de agosto *El Socialista* señalaba que el 50 por 100 de la población de la provincia de Sevilla se acostaba con hambre todas las noches, y afirmaba que cuando la clase alta se había dirigido a Sanjurjo en busca de la salvación era para que les salvase de las subidas salariales y las leyes que atacaban los privilegios feudales. <<

[66] *El Socialista*, 20 de junio de 1933; para ejemplos de provocaciones deliberadas de la derecha, véase *El Socialista*, 23 y 29 de junio. <<

[67] Claude G. Bowers: *My Mission to Spain* (Londres, 1954), p. 33. <<

[68] *El Debate*, 16 de mayo de 1933. Para una versión de las afirmaciones de la CEDA de ser socialmente consciente y orientada hacia la reforma, véase Robinson: *Origins*, p. 114. <<

[69] *El Debate*, 19 y 23 de mayo, 16 de junio y 17 y 29 de agosto de 1933. <<

[70] *El Debate*, 10 de agosto de 1933; Malefakis: *op. cit.*, pp. 268-273; Robinson: *Origins*, pp. 127-128; Gil Robles: *Discursos parlamentarios* (en adelante *Discursos*) (Madrid, 1971), pp. 263-267. <<

[71] *NFP*, pp. 87-89; Cortés Cavanillas: *Gil Robles*, pp. 143-144; *Vida, confesiones y muerte de Alfonso XIII* (Madrid, 1956), pp. 426-427. <<

[72] Juan Arrabal: *José María Gil Robles* (Madrid, 1933), pp. 9-13; Monge: *Acción Popular*, p. 378; *NFP*, p. 48; *El Debate*, 27 de diciembre de 1932; Martin Blinkhorn: *Carlism and Crisis in Spain, 1931-1939* (Cambridge, 1975), pp. 100-103, 158-162. <<

[73] *El Socialista*, 2, 4, 11, 18 y 21 de julio de 1933. <<

[74] Luego resultó que Neurath dijo que era imposible una entrevista. Angel Viñas: *La Alemania nazi y el 18 de julio* (Madrid, 1974), página 149. <<

[75] *El Debate*, 28 de junio y 16 y 25 de julio de 1933. *El Socialista*, 21 de julio y 7 de septiembre, criticaba duramente la facilidad con que la Iglesia pasaba por alto la persecución en los regímenes autoritarios. <<

[76] *El Debate*, 4, 17 y 25 de agosto; *El Pueblo Católico*, 29 de marzo de 1933. <<

[77] Antonio Ramos Oliveira: *Alemania, ayer y hoy* (Madrid, 1933), página 257; *El Debate*, 30 de junio; *El Socialista*, 2 de julio de 1933. <<

[78] Juan Velarde Fuertes: *El nacionalsindicalismo cuarenta años después* (Madrid, 1972), pp. 131-134. <<

[79] Para los antecedentes de la convocatoria a elecciones, véase Jackson: *Republic*, caps. 4-6. <<

[80] *CEDA*, 30 de septiembre de 1933; *El Debate*, 2 de septiembre de 1933. Gil Robles le dijo al autor, en febrero de 1973, que había ido a Nuremberg como invitado de Von Papen. <<

[81] *El Debate*, 15 de septiembre de 1933. <<

[82] *El Debate*, 10 de octubre de 1933. <<

[83] *NFP*, p. 94; *El Debate*, 12 de octubre de 1933. <<

[84] *El Debate*, 17 de octubre de 1933. El subrayado es nuestro. <<

[85] *El Socialista*, 17 de octubre de 1933. La visita de Gil Robles a Alemania no había pasado inadvertida, véase 14 de octubre de 1933. Fernando de los Ríos, socialista moderado y distinguido profesor de Derecho, señalaba con horror que el llamamiento de Gil Robles para una purga de judíos y masones negaba los postulados jurídicos y políticos del régimen, 21 de octubre de 1933. José Antonio Primo de Rivera, líder de la Falange, que iba a fundarse pocos días después comentó: «(Gil Robles) proclama principios “fascistas”. Podrá rechazar el nombre, pero el nombre no hace la cosa. El señor Gil Robles, al hablar así, no se expresa como caudillo de un partido demócrata cristiano... Éste ha sido, en gran parte, un discurso caliente, tajante... “fascista”. Yo se lo aplaudo, y estoy de acuerdo con él. Pero ¿por qué misterioso motivo se empeña él en decir que está en desacuerdo con nosotros?», La Cierva: *Historia*, p. 509. <<

[86] *CEDA*, 31 de octubre de 1933. <<

[87] *MFP*, p. 100; *El Debate*, 27 de octubre, 3, 7, 8, 15, 16 y 18 de noviembre de 1933. <<

[⁸⁸] Buckley: *op. cit.*, pp. 115, 120 y 125; Bowers: *My Mission*, página 55; cf. la carta de Gil Robles a los donantes de fondos en *CEDA*, 30 de diciembre de 1933. <<

[89] *El Debate*, 3 de noviembre de 1933. <<

[90] Bécarud: *op. cit.*, pp. 120-124; *NFP*, pp. 102-105; Ronald Fraser: *In Hiding* (Londres, 1972), p. 114; *El Socialista*, 25 de noviembre de 1933. <<

[91] *El Socialista*, 26 y 28 de noviembre y 1 de diciembre de 1933; José Tomás Valverde: *Memorias de un alcalde* (Madrid, 1961), páginas 139-147. <<

^[1] *El Socialista*, 31 de marzo de 1931; Zapatero: *De los Ríos*, página 89. <<

[2] Zapatero: *De los Ríos*, p. 90. <<

[3] Largo Caballero: *Recuerdos*, p. 117. <<

^[4] *El Sol*, 24 de mayo de 1931. <<

[5] Mario de Coca: *Anti-Caballero*, p. 31; Cordero: *Socialistas*, páginas 93-96.

<<

[6] Mario de Coca: *Anti-Caballero*, pp. 31-32. <<

[7] Javier Bueno: *El Estado socialista: nueva interpretación del comunismo* (Madrid, 1931), pp. 9-13. <<

[8] Gabriel Morón: *La ruta del socialismo en España* (Madrid, 1932), pp. 24-35. <<

[9] *Memoria y orden del día del XVII Congreso que se celebrará en Madrid los días 14 y ss. de octubre de 1932* (Madrid, 1932), p. 61; *El Obrero de la Tierra*, 10 y 17 de septiembre de 1932; Malefakis: *op. cit.*, p. 292. <<

[10] Francisco Largo Caballero: *Posibilismo socialista en la democracia* (Madrid, 1933), p. 16. <<

[11] Cordero: *Socialistas*, pp. 342-345; Besteiro, entrevista en *El Sol*, 3 de junio de 1931. <<

[12] Enrique López Sevilla: *El Partido Socialista Obrero Español en las Cortes Constituyentes de la II República* (México, 1969), páginas 12-14. <<

[13] *El Debate*, 22 de abril de 1931. <<

[¹⁴] *La crisis agraria andaluza de 1930-1931* (Madrid, 1931). <<

[15] Ramón Tamames: *La República, la era de Franco* (Madrid, 1973), pp. 56-66; *BUGT*, diciembre de 1931. <<

[¹⁶] Malefakis: *op. cit.*, pp. 166-171; *BUGT*, mayo y junio de 1931. <<

[17] Azaña: anotaciones en el diario el 14 y el 21 de julio de 1931, *Obras*, IV, pp. 10 y 36. <<

[18] *El Sol*, 30 de julio de 1931. <<

[19] Manuel Ramírez Jiménez: *Los grupos de presión en la II República española* (Madrid, 1969), pp. 118-124; Mercedes Cabrera: «Organizaciones patronales y cuestión agraria en España, 1931-1936», en García-Delgado: *La cuestión agraria*. <<

[20] Pascual Carrión: *Los latifundios en España* (Madrid, 1932) ofrece unos cuadros muy detallados, especialmente en la página frente a la 324. <<

[21] *El Debate*, 8 de mayo, 3 de octubre y 1 de diciembre de 1931; Azaña: anotaciones en el diario de 5 de agosto y de 22 de diciembre de 1931; *Obras*, IV, pp. 63 y 140; para los discursos de los diputados del PSOE, Antonio Marcos Escudero (Huelva), Antonio García Prieto (Málaga), Tomás Álvarez Angulo (Jaén) y Juan-Simeón Vidarte (Badajoz), *DSCC*, 11 y 24 de septiembre, 1 y 23 de octubre y 4 de noviembre de 1931. <<

[22] *El Debate*, 22 de julio, 23 de septiembre y 1 de noviembre; *El Pueblo Católico* (Jaén), 27 y 28 de julio de 1931; Azaña: anotaciones en el diario el 28 de octubre, *Obras*, IV, p. 203. <<

[23] Mario de Coca: *Anti-Caballero*, p. 44. <<

[24] *El Socialista*, 12 de julio de 1931; *PSOE: XIII Congreso: memoria*: pp. 126-135; López Sevilla: *PSOE*, pp. 20-21; Morón: *Ruta*, páginas 39-48.
<<

[25] Azaña: anotación en el diario de 4 de agosto de 1931; estaba preocupado porque se habían sacado 400 000 000 de pesetas del Banco Hispano Americano y la Bolsa estaba siendo mantenida artificialmente, *Obras*, IV, p. 60; *El Liberal*, 2 de junio de 1931. <<

[26] Cf. Luis Araquistáin: «Los socialistas en el primer bienio», en *Leviatán*, núm. 18, octubre-noviembre de 1935, 25, donde subraya las dificultades que encontraron para poner en práctica las reformas. <<

[27] Gabriel Santullano: «Las organizaciones obreras asturianas en los comienzos de la II República», en M. Tuñón de Lara: *Sociedad política y cultural en la España de los siglos XIX y XX* (Madrid, 1975). <<

[28] *El Socialista*, 9 de julio; Mario de Coca: *Anti-Caballero*, páginas 41-42; Grandizo Munis: *Jalones*, pp. 73-75. <<

[29] Maura: *Así cayó*, pp. 278-287; Azaña: anotación en el diario de 21 de julio de 1931, *Obras*, IV, p. 37; *DSCC*, 28 y 29 de julio de 1931. <<

[30] «El anti-Cristo sindicalista», «¿Por qué hay tantas huelgas?» y «Contra el abuso de la huelga», en *El Sol*, 18, 21 y 24 de julio de 1931, todos ellos reimpresos al día siguiente en *El Socialista*. <<

[31] Azaña: anotaciones en el diario de 4 y 7 de agosto y de 22 de septiembre de 1931; *DSCC*, 5 y 26 de agosto de 1931; Prieto: *Convulsiones*, pp. 101-106; Morón: *Ruta*, pp. 136-141; Marta Bizcarrondo: «La crisis socialista en la II República», en *Revista del Instituto de Ciencias Sociales*, 1973, p. 74; *DSCC*, 5 y 26 de agosto de 1931. <<

[32] Manuel Buenacasa: *La CNT, los «treinta» y la FAI* (Barcelona, 1933), pp. 20-32; John Brademas: *Anarcosindicalismo y revolución en España, 1930-1937* (Barcelona, 1974), pp. 70-86. <<

[33] *DSCC*, 27 de agosto, 3, 8 y 16 de septiembre, 1, 6, 13 y 14 de octubre de 1931; Jiménez de Asúa: *Anécdotas de las Constituyentes*, páginas 30-38. <<

[³⁴] *El Socialista*, 8 de agosto, 18, 19 y 20 de noviembre; *El Sol*, 8, 12 y 15 de septiembre de 1931. <<

[35] *El Socialista*, 17 de noviembre de 1931; Andrade: *Burocracia*, páginas 244-247; Declaraciones de Largo Caballero en *Avance* (Oviedo), el recién fundado diario del SMA, 24 de noviembre de 1931. <<

[36] Mario Coca: *Anti-Caballero*, pp. 52-53; Juan-Simeón Vidarte: *Las Cortes Constituyentes de 1931-1933* (Barcelona, 1976), pp. 235-245. <<

[37] Azaña: anotaciones en el diario de 30 de octubre, 16, 17, 21 y 30 de noviembre y 4 de diciembre de 1931, *Obras*, IV, pp. 207, 231-233, 240-242, 251 y 260. <<

[38] *Avance*, 6, 8, 10, 15 y 16 de diciembre de 1931. <<

[39] *El Socialista*, 5, 11 y 13 de diciembre; *Avance*, 25 de noviembre y 27 de diciembre de 1931. <<

[40] *El Pueblo Católico*, 21 de agosto de 1931. <<

[41] Este relato se basa en la transcripción del proceso de los aldeanos, Luis Jiménez de Asúa y otros: *Castilblanco* (Madrid, 1933), *passim*. Véase también Vidarte: *Cortes Constituyentes*, pp. 294-308. <<

[42] *El Socialista*, 2 y 5 de enero; *Avance*, 3 y 5 de enero; *ABC*, 3 y 5 de enero de 1932; *DSCC*, 5 de enero de 1932; Arrarás: *República*, I, páginas 287-289.
<<

[43] Azaña: anotaciones en el diario de 30 de noviembre y 14 de diciembre de 1931 y 5 de enero de 1932, *Obras*, IV, pp. 251, 275, 294-295. <<

[44] *El Socialista*, 6, 7 y 13 de enero; *Avance*, 6, 7, 12, 13 y 19 de enero de 1932; *DSCC*, 6 de enero de 1932; Vidarte: *Cortes Constituyentes*, pp. 306 y 601. <<

[45] *El Socialista*, 23 de enero; *Avance*, 23, 24 y 26 de enero y 12 de febrero; *El Obrero de la Tierra*, 23 de enero de 1931. <<

[46] *Avance*, 5 de abril de 1931; Mariano Pérez Galán: *La enseñanza en la II República española* (Madrid, 1975), pp. 332-333. <<

[47] *BUGT*, enero de 1932. <<

[48] *BUGT*, mayo de 1932. <<

[49] *El Obrero de la Tierra*, 30 de enero; *La Mañana* (Jaén), 1, 6 y 7 de abril de 1932. <<

[50] *El Obrero de la Tierra*, 5, 13 y 20 de febrero y 5, 12 y 26 de marzo de 1932. <<

[51] *El Obrero de la Tierra*, 2 de abril de 1932. <<

[52] *La Mañana*, 12 de abril de 1932. <<

[53] *La Mañana*, 9 de julio; *El Socialista*, 15 de julio de 1932; Ramos Oliveira: *Nosotros*, p. 68. <<

[54] *Boletín del Ministerio de Trabajo y Previsión Social*, abril de 1933; Bizcarrondo: «La crisis», p. 63. <<

[55] Sería superfluo discutir los plazos de elaboración de la reforma agraria, puesto que el tema está tratado extensamente en el admirable estudio de Malefakis: *op. cit.*, cap. 7; *El Obrero de la Tierra*, 11 y 25 de junio de 1932.

<<

[56] *Avance*, 6 y 16 de abril, 1, 12 y 13 de mayo y 12 de junio de 1932. <<

[57] *BUGT*, julio de 1932. <<

[58] *El Socialista*, 11 de noviembre de 1931; 15 de julio de 1932. <<

[59] *El Pueblo Católico*, 4 de mayo de 1933. <<

[60] Azaña: anotaciones en el diario de 11, 12, 17 y 20 de julio de 1932, *Obras*, IV, pp. 435-443; *DSCC*, 20 de julio de 1932. <<

[61] *El Obrero de la Tierra*, 24 de septiembre y 1 de octubre de 1932. <<

[62] *El Adelantado* (Salamanca), 1 y 4 de octubre de 1932. <<

[63] *DSCC*, 18 y 21 de octubre de 1932; *El Adelantado*, 8 de octubre de 1932, reproduce el texto completo de las bases de trabajo que provocaron la circular del Bloque. <<

[64] *El Obrero de la Tierra*, 8 de octubre de 1932. <<

[65] Esta estimación de los niveles de vida se basa en los índices mensuales publicados durante la República en el *Boletín del Ministerio de Trabajo y Previsión Social*. Las cifras son notablemente estables durante todo el período; no están amañadas por la presencia de un socialista al frente del Ministerio. La cifra de 35 pesetas no incluye los gastos de vestido, vivienda, ni domésticos, y está calculada sobre la base de una comida diaria. <<

[66] Ésta era la opinión del Bloque Agrario de Jaén, *La Mañana*, 1 de octubre; *El Adelantado*, 19 de octubre de 1932. <<

[67] *DSCC*, 20 de octubre de 1932; una serie de entrevistas mantenidas por el autor en Madrid, en el invierno de 1970-71, con el marqués de Gracia Real, un terrateniente de Ledesma (Salamanca). <<

[68] *Avance*, 2, 6, 8, 13, 15, 17 y 18 de septiembre de 1932. <<

[69] *El Socialista*, 8 y 9 de octubre de 1932; Vidarte: *Cortes Constituyentes*, pp. 485-493; Lamo de Espinosa: *Besteiro*, pp. 86-87; Saborit: *Besteiro*, pp. 227-228; Mario de Coca: *Anti-Caballero*, pp. 62-65. <<

[70] Andrade: *Burocracia*, pp. 102 y 159. <<

[71] *El Sol*, 23 de octubre; *El Socialista*, 23 y 25 de octubre de 1932; Mario de Coca: *Anti-Caballero*, pp. 66-70; Lamo de Espinosa: *Besteiro*, pp. 87-88; Vidarte: *Cortes Constituyentes*, pp. 495-497; Amaro del Rosal: *Historia de la UGT de España, 1901-1939*, 2 vols. (Barcelona, 1977), I, pp. 350-352. <<

[72] *Avance*, 26 de enero, 27 de febrero, 10 de marzo y 19 de abril y 2, 3 y 7 de agosto de 1932. <<

[73] *El Obrero de la Tierra*, 15 y 22 de octubre de 1932. <<

[⁷⁴] *Tierra y Trabajo* (Salamanca), 30 de noviembre de 1932. <<

[75] Azaña: anotación en el diario de 4 de diciembre de 1931, *Obras*, IV, p. 260. <<

[76] *Tierra y Trabajo*, 9 y 20 de diciembre de 1932; Arrarás: *República*, II, p. 76. <<

[77] *Avance*, 11, 14, 18, 19 y 23 de octubre, 14, 15 y 20 de noviembre y 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 1932. <<

[78] Mario de Coca: *Anti-Caballero*, pp. 71-72; Arrarás: *República*, II, pp. 77-78. <<

[79] Ramón Sender: *Viaje a la aldea del crimen* (Madrid, 1934), páginas 33-42 y 70-130; Francisco Guerra: *Casas Viejas: apuntes de la tragedia* (Jerez, 1933). <<

[80] *El Debate*, 15 de enero de 1932. <<

[81] Azaña: anotación en el diario de 13 de enero de 1933, *Memorias íntimas* (Madrid, 1939), p. 208. <<

[82] *DSCC*, 3, 23 y 24 de febrero y 2 y 3 de marzo de 1933; *El Debate*, 24 de febrero de 1933. <<

[83] Azaña: anotaciones en el diario de 19 y 21 de febrero y 1 y 3 de marzo de 1933, *Memorias*, p. 210; *Obras*, IV, pp. 447-455. <<

[84] Azaña: anotación en el diario de 6 de marzo de 1933, *Obras*, IV, p. 460;
Vidarte: *Cortes Constituyentes*, pp. 522 y 532. <<

[85] Azaña: anotación en el diario de 14 de abril de 1933, *Obras*, IV, pp. 484-485. <<

[86] Existe una notable controversia sobre la interpretación de estas cifras. Véase *El Debate*, 25 de abril; *El Socialista*, 26 y 27 de abril de 1933; Azaña: anotación en el diario de 30 de abril de 1933, *Obras*, IV, pp. 501-503; *DSCC*, 25, 26 y 28 de abril de 1933; Arrarás: *República*, II, pp. 116-117; Jackson: *Republic*, p. 104. <<

[87] Azaña: anotación en el diario de 16 de mayo de 1933, *Obras*, IV, p. 530.

<<

[88] *ABC*, 26 de enero de 1933; *El Obrero de la Tierra*, 19 de noviembre de 1932 y 14 de enero de 1933. <<

[89] *Boletín del Instituto de Reforma Agraria*, marzo de 1933; *El Obrero de la Tierra*, 28 de enero de 1933. <<

[90] *Región* (Cáceres), 24 de febrero; *El Pueblo Católico*, 14 de marzo; *ABC*, 26 de marzo; *La Mañana*, 21 y 27 de enero, 3 y 18 de febrero y 5 de abril; *El Obrero de la Tierra*, 14 de enero y 4 de marzo; *El Socialista*, 21 de enero, 20 de abril y 1 de julio de 1933. <<

[91] Véase el capítulo segundo. <<

[92] *El Socialista*, 26 de marzo y 4 de julio; *La Unión Ferroviaria*, marzo de 1933; Rosal: *UGT*, I, p. 291. <<

[93] *El Sol*, 15 y 19 de julio de 1933; Bizcarrondo: «La crisis», páginas 64-65, señala que el momento cumbre de la movilización de los patronos fue solamente pocos días antes de que Largo expresara públicamente su adopción de una línea radical. <<

[94] *El Socialista*, 25 de julio de 1933. <<

[95] Saborit: *Besteiro*, pp. 237-240; Mario de Coca: *Anti-Caballero*, página 101. <<

[96] Indalecio Prieto: *Discursos fundamentales* (Madrid, 1975), páginas 160-180; *Convulsiones*, III, pp. 160-165. <<

[97] *El Socialista*, 13 de agosto de 1933. El texto completo fue publicado como *Posibilismo socialista en la democracia*. <<

[98] *BUGT*, agosto-septiembre de 1933; *El Obrero de la Tierra*, 12 y 20 de agosto y 9 de septiembre; *El Debate*, 22, 23 y 29 de agosto de 1933. <<

[99] Cf. el comentario editorial sobre el discurso de Largo en Torrelodones, en *El Debate*, 15 de agosto de 1933. <<

[100] Vidarte: *Cortes Constituyentes*, pp. 587-594; Malefakis: *op. cit.*, páginas 268-273; Madariaga: *Spain*, pp. 418-420. <<

[101] *El Debate*, 19 de septiembre; *El Obrero de la Tierra*, 16, 23 y 30 de septiembre; *BUGT*, noviembre de 1933. <<

[102] *El Debate*, 4, 17 y 25 de agosto y 2 y 15 de septiembre; *El Pueblo Católico*, 29 de marzo de 1933. <<

[103] *BUGT*, noviembre de 1933. <<

[104] *El Socialista*, 3 de octubre de 1933. <<

[105] *DSCC*, 2 y 3 de octubre de 1933. <<

[106] *El Socialista*, 8 de octubre de 1933; Marcelino Domingo: *La revolución de octubre* (Barcelona, 1935), pp. 54-58. El tecnicismo consistía en que los socialistas habían promovido una moción de censura contra otros miembros del nuevo gobierno, los que opinaban que les descalificaba para formar parte de él (artículo 75 de la Constitución). <<

[107] Bowers: *My Mission*, p. 42. <<

[108] Domingo: *La revolución*, p. 9. <<

[109] *El Debate*, 12, 17, 18 y 24 de octubre y 7, 17 y 18 de noviembre de 1933.

<<

[110] *El Socialista*, 7, 14 y 15 de noviembre de 1933. <<

[¹¹¹] *BUGT*, diciembre de 1933; *El Obrero de la Tierra*, 30 de septiembre, 7 y 14 de octubre y 2 y 23 de diciembre de 1933; Antonio Ramos Oliveira: *Politics, Economics and Men of Modern Spain* (Londres, 1946), pp. 490-491; Joaquín Maurín: *Hacia la segunda revolución* (Barcelona, 1935), pp. 32 y 52-53; Jean Bécarud: *op. cit.*, pp. 124-125; Zapatero: *De los Ríos*, p. 105. <<

[112] Prieto: *Discursos*, pp. 168-169; Bécarud: *op. cit.*, pp. 123-124; Brennan: *Labyrinth*, p. 266. <<

[113] Domingo: *La revolución*, pp. 95-97; Bécarud: *op. cit.*, páginas 125-128 y 136-137. <<

[¹] En un discurso de 14 de enero de 1934 Largo Caballero adoptaba algunas de las ideas de Otto Bauer, *Discursos a los trabajadores* (Madrid, 1934), p. 144. <<

[2] Las cifras de desempleo hasta finales de 1934 son las siguientes: junio de 1932: 446 263; agosto de 1933: 588 174; diciembre de 1933: 618 947; abril de 1934: 703 814; diciembre de 1934: 667 898, *Boletín del Ministerio de Trabajo*, enero de 1935; Malefakis: *op. cit.*, p. 288; Balcells: *Crisis económica*, pp. 52-63. <<

[3] Las cifras de afiliados a los sindicatos se refieren a junio de 1932, suplemento de *BUGT* de julio de 1932. La lealtad de los distintos presidentes de los sindicatos ha sido valorada según sus declaraciones en las reuniones del comité nacional de la UGT, reproducidas en *BUGT*. <<

[4] Apéndice a Largo Caballero: *Discursos*, pp. 163-166. <<

[5] Ramos Oliveira: *Politics*, pp. 488-491; Margarita Nelken: *Por qué hicimos la revolución* (Barcelona, 1936), pp. 67-69. En algunas provincias el margen de la victoria de las derechas fue lo suficientemente pequeño como para que los resultados pudiesen haberse visto afectados por manejos electorales. Esto ocurrió especialmente en Badajoz, Málaga y Córdoba, *El Debate*, 21 y 22 de noviembre y 5 de diciembre de 1933. <<

[6] B. Díaz Nosty: *La comuna asturiana* (Bilbao, 1974), pp. 52-60. <<

[7] *DSC*, 19 de diciembre de 1933. La Juventud Socialista lo consideró como un discurso fascista, *Renovación*, 23 de diciembre de 1933. <<

^[8] *DSC*, 20 de diciembre de 1933. <<

[9] Cortés Cavanillas: *Gil Robles*, pp. 139-141. <<

[10] Alejandro Lerroux: *La pequeña historia* (Buenos Aires, 1945), página 212; Robinson: *Origins*, p. 152; Jesús Pabón: *Cambó*, II, 2.^a parte (Barcelona, 1969), p. 290. Esto no está muy de acuerdo con la abierta admisión de Gil Robles de sus fines tácticos, *NFP*, pp. 106-107. <<

[11] *El Debate*, 25 de agosto de 1931; *El Socialista*, 26 y 28 de noviembre y 1 de diciembre; *El Pueblo Católico*, 4 de mayo de 1933. El otro periódico derechista de Jaén, *La Mañana*, apoyaba indiscriminadamente a los radicales y a la CEDA. <<

[12] *El Socialista*, 11 de noviembre de 1931 y 9 de mayo de 1934; José Rodríguez de la Peña: *Los aventureros de la política: Alejandro Lerroux* (Madrid, sin fecha, ¿1915?), *passim*; Largo Caballero: *Discursos*, pp. 54-55. Largo cuenta también que, a principios de 1931, con la mayoría del comité revolucionario republicano en la cárcel, Lerroux abrió una suscripción pública para ellos, cuyos fondos desaparecieron misteriosamente, *Recuerdos*, p. 121.

<<

[13] Jesús Pabón: *Palabras en la oposición* (Sevilla, 1935), p. 196. <<

[¹⁴] Azaña: anotación en el diario de 12 de julio de 1932, *Obras*, IV, página 435. <<

[15] Azaña: anotación en el diario de 29 de enero de 1932, *Obras*, IV, página 318; Pabón: *Cambó*, p. 297. <<

[16] Azaña: anotación en el diario de 28 de junio de 1937, *Obras*, IV, páginas 635-636; Buckley: *op. cit.*, pp. 186-187. El nivel de venalidad iba a terminar por causar cierto malestar dentro del partido radical. Cf. las dos cartas publicadas en César Jalón: *Memorias políticas* (Madrid, 1973), pp. 214-218.
<<

[¹⁷] *El Debate*, 6, 7 y 22 de diciembre de 1933; *DSC*, 19 de diciembre de 1933. <<

[18] Largo Caballero: *Recuerdos*, p. 133. Al colocar este complot en la casa del exiliado Calvo Sotelo, Largo lo confunde con otro de finales de 1934. Cf. José Bullejos: *España en la II República* (México, 1967), p. 143. <<

[19] *BUGT*, diciembre; *El Obrero de la Tierra*, 23 y 30 de diciembre de 1933 y 6 y 13 de enero de 1934; *El Socialista*, 14 y 23 de enero de 1934. <<

[20] *El Socialista*, 26, 28 y 30 de noviembre y 1, 2, 8, 19 y 21 de diciembre de 1933, y 13 y 14 de enero de 1934. <<

[21] Luis Araquistáin: *El derrumbamiento del socialismo alemán* (Madrid, 1933). <<

[22] María Teresa León: *Memoria de la melancolía* (Buenos Aires, 1970), p. 266. <<

[23] *BUGT*, diciembre de 1933 y enero de 1934; Largo Caballero: *Recuerdos*, pp. 131-133. <<

[24] Gil Robles le indicaba esto al autor en una entrevista en Madrid en febrero de 1973, en defensa de su admiración por el fascismo. <<

[25] Arrarás: *República*, II, pp. 251-257; Peirats: *CNT*, I, pp. 77-80; César M. Lorenzo: *Les anarchistes espagnols et le pouvoir* (París, 1969), páginas 79-80
. <<

[26] *El Socialista*, 12 de diciembre de 1933; *DSC*, 12 de diciembre de 1933.

<<

[27] *BUGT*, enero de 1934. <<

[28] Azaña: anotación en el diario de 1 de julio de 1937, *Obras*, IV, páginas 649-650. <<

[29] *Renovación*, 20 de enero; *El Obrero de la Tierra*, 6, 13 y 20 de enero de 1934. <<

[³⁰] *El Debate*, 27 de diciembre de 1933 y 26 de enero de 1934; *El Socialista*, 23 y 25 de enero de 1934. <<

[31] *El Debate*, 27 de enero y 8 y 25 de febrero; *Renovación*, 6 de enero; *El Socialista*, 26 de enero y 2 de febrero; *La Mañana*, 17, 19 y 20 de enero de 1934. <<

[32] Largo Caballero: *Discursos*, pp. 134-162. <<

[33] Largo Caballero: *Recuerdos*, pp. 134-135; Mario de Coca: *Anti-Caballero*, p. 133. <<

[³⁴] Dolores Ibárruri y otros: *Guerra y revolución en España*, 3 vols. (Moscu, 1967-1971), I, pp. 52-57, reproduce en extenso los tres proyectos; Ramos Oliveira: *Politics*, pp. 507-508. <<

[35] *El Socialista*, 28 de enero; *BUGT*, febrero; *El Obrero de la Tierra*, 3 de febrero de 1934; Mario de Coca: *Anti-Caballero*, pp. 137-142. <<

[36] *DSC*, 7 de febrero; *La Mañana*, 16 de enero de 1934, había denunciado estos robos como «cleptomanía colectiva». <<

[37] *El Debate*, 14-17 de febrero; *El Socialista*, 13, 18 y 20 de febrero y 4 y 7 de marzo; *BUGT*, febrero y marzo; *Leviatán*, núm. 2, junio de 1934, estaba dedicado totalmente al fascismo contemporáneo e incluía artículos de socialistas austríacos que habían sobrevivido. <<

[38] *DSC*, 4 de enero de 1934; *NFP*, pp. 111-112; Alfred Mendizábal: *Aux orígenes d'une tragédie* (París, sin fecha ¿1937?), pp. 214-215; *El Socialista*, 2 de enero; *El Sol*, 23 de marzo de 1934. Cambó se quejaba del dudoso republicanismo de Gil Robles; Pabón: *Cambó*, pp. 307-308. <<

[39] *El Debate*, 20-22 de febrero de 1934. <<

[40] Lerroux: *Pequeña historia*, pp. 216-238; *NFP*, pp. 116-119; *El Debate*, 2 de marzo de 1934; Monge: *Acción Popular*, p. 898, muestra que era una táctica deliberada. <<

[41] Azaña: *Obras*, II, pp. 911-944. <<

[42] *El Liberal*, 6 de febrero de 1934. <<

[43] *Renovación*, 10 y 17 de febrero y 8 de marzo de 1934. En el V Congreso de la FJS, los extremistas fueron confirmados en los puestos más importantes: Carlos Hernández Zancajo, presidente; Santiago Carrillo, secretario; Segundo Serrano Poncela, Federico Melchor y José Laín Entralgo como miembros del comité ejecutivo. <<

[44] *El Debate*, 8 de marzo; *El Socialista*, 11 y 13 de marzo de 1934; Rafael Salazar Alonso: *Bajo el signo de la revolución* (Madrid, 1935), páginas 50-73.
<<

[45] *El Debate*, 2, 8, 10, 11, 22 y 27 de marzo; *El Socialista*, 29 de marzo de 1934; *DSC*, 8 de marzo de 1934; Lerroux: *Pequeña historia*, páginas 235-239.
<<

[46] *NFP*, pp. 119-122; Lerroux: *Pequeña historia*, pp. 247-257; *DSC*, 20 de abril; *El Debate*, 12 y 21 de abril; *El Socialista*, 12 de abril; *Leviatán*, núm. 1, mayo de 1934, lo vio como la glorificación oficial del 10 de agosto. El embajador americano pensaba que la amnistía legalizaba la traición; Bowers: *My Mission*, p. 74. <<

[47] *El Debate*, 3, 10 y 17 de abril de 1934; Arrarás: *República*, II, páginas 305-306. <<

[48] Munis: *Jalones*, p. 114. <<

[49] Cf. Blinkhorn: *Carlism*, p. 158. <<

[50] *El Debate*, 21, 22 y 24 de abril; *El Socialista*, 22 y 24 de abril de 1934; Monge: *Acción Popular*, pp. 253-304; Buckley: *op. cit.*, páginas 126-127. <<

[51] Herbert R. Southworth: *Antifalange* (París, 1967), p. 78; *NFP*, páginas 190-191; Cortés Cavanillas: *Gil Robles*, pp. 143, 180; José Antonio Primo de Rivera: *Obras*, 4.^a ed. (Madrid, 1966), p. 124. <<

[52] Lerroux: *Pequeña historia*, pp. 256-261. <<

[53] La Cierva: *Historia*, p. 483. <<

[54] Ruiz Alonso iba a jugar luego un papel clave en la represión nacionalista en Granada. Véase Ian Gibson: *The Death of Lorca* (Londres, 1973), *passim*.
<<

[55] *El Debate*, 26 de mayo; *El Socialista*, 24 y 25 de mayo de 1934; Salazar Alonso: *op. cit.*, pp. 122-127. <<

[56] *El Debate*, 6 y 10 de mayo; *El Obrero de la Tierra*, 17 de febrero de 1934; Brenan: *Labyrinth*, p. 275. <<

[57] *El Obrero de la Tierra*, 24 de febrero, 3, 24 y 31 de marzo y 14 de abril de 1934. <<

[58] *El Obrero de la Tierra*, 31 de marzo de 1934. <<

[59] El 31 de julio de 1934, el comité nacional de la UGT se reunió para realizar una autopsia de la huelga fracasada. El relato anterior está sacado de las actas de la reunión. *BUGT*, agosto de 1934. <<

[60] *El Socialista*, 6 de mayo; *ABC*, 2 de mayo; *El Sol*, 2 de mayo; *El Obrero de la Tierra*, 21 de abril y 5 de mayo de 1934. <<

[61] *El Obrero de la Tierra*, 19 de mayo de 1934. <<

[62] *El Obrero de la Tierra*, 26 de mayo de 1934. <<

[63] *DSC*, 30 de mayo de 1934. <<

[64] *La Mañana*, 6 y 8-12 de junio, muestra la generalidad de los paros; *El Socialista*, 31 de mayo y 1, 2, 3, 7, 8, 13, 28, 29 y 30 de junio; *El Debate*, 30 y 31 de mayo y 6, 7 y 10 de junio de 1934; *DSC*, 7 y 14 de junio de 1934; Jackson: *Republic*, pp. 134-139. Un relato más crítico de la FNTT se encuentra en Malefakis: *op. cit.*, pp. 335-340, y en Salazar Alonso: *op. cit.*, pp. 141 y ss. <<

[65] Salazar Alonso admiraba a Gil Robles y estaba entusiasmado con los planes de la CEDA. La admiración era recíproca, Salazar Alonso: *op. cit.*, pp. 75-77; *NFP*, pp. 120-123. <<

[66] Francesc Bonamusa: *El Bloc Obrer i Camperol (1930-1932)* (Barcelona, 1974), pp. 275-282 y 341-342. <<

[67] *El Socialista*, 29 de diciembre de 1933. <<

[68] Grandizo Munis: «Hace falta una dirección», en *Comunismo*, mayo de 1934; Munis: *Jalones*, pp. 116-124. Largo Caballero justifica las vacilaciones en *BUGT*, junio-julio de 1934. <<

[69] *BUGT*, agosto de 1934; Largo Caballero: *Recuerdos*, p. 141. <<

[70] Peirats: *CNT*, I, pp. 81-89; «Ignotus» (Manuel Villar): *El anarquismo en la insurrección de Asturias* (Valencia, 1935), pp. 23-27; Arrarás: *República*, II, pp. 298-299; *Avance*, 1 de mayo de 1934. El deseo caballerista de controlar el movimiento obrero a través de las Alianzas Obreras resulta evidente en Segundo Serrano Poncela: *El partido socialista y la conquista del poder* (Barcelona, 1935), como muestra la introducción editorial, pp. XI-XII; véanse también las páginas 149 y 193. <<

[71] León Trotsky: *The Struggle Against Fascism In Germany* (Nueva York, 1971), p. 56. <<

[72] Pelai Pagès: *El movimiento trotskista en España (1930-1935)* (Barcelona, 1977), *passim*. <<

[73] *Comunismo*, marzo y septiembre de 1934; León Trotsky: *La révolution espagnole, 1930-1940* (París, 1975) (textes recueillis et présentés par Pierre Broué), pp. 252-259; Munis: *Jalones*, p. 122. <<

[74] «Ignotus»: *op. cit.*, pp. 31-39; Maurín: *Segunda revolución*, páginas 145-147; Ramón Álvarez: *Eleuterio Quintanilla* (México, 1973), páginas 336-337; *Avance*, 15 de mayo de 1934. <<

[75] Joaquín Maurín: «El problema agrario en Cataluña», en *Leviatán*, núm. 4, agosto de 1934; Albert Balcells: *El problema agrari a Catalunya* (Barcelona, 1968), pp. 135-214; Pabón: *Cambó*, pp. 340-375. <<

[76] Azaña: *Obras*, II, pp. 902 y 977-998; *NFP*, pp. 124-126; *DSC*, 25 de junio y 4 de julio de 1934; *El Debate*, 13 y 19 de junio y 8 de julio; *El Socialista*, 2 de mayo, 9, 13 y 17 de junio y 3 de julio de 1934. <<

[77] Munis: *Jalones*, p. 129; cf. Serrano Poncela: *op. cit.*, páginas 119-120. <<

[78] *El Debate*, 7-9 de septiembre; *El Socialista*, 1 de septiembre de 1934. <<

[79] Alejandro Valdés: *¡Asturias!* (Valencia, sin fecha, ¿1935?), páginas 16-17;
J. A. Sánchez y García Saúco: *La revolución de 1934 en Asturias* (Madrid,
1974), pp. 39-40. <<

[80] *El Debate*, 11 de septiembre; *CEDA*, 15 de septiembre; *El Socialista*, 11 y 20 de septiembre de 1934; *NFP*, pp. 127-130; Cortés Cavanillas: *Gil Robles*, p. 180. <<

[81] Díaz Nosty: *op. cit.*, pp. 105-107; Indalecio Prieto: «La noche del Turquesa», en *Convulsiones*, I, pp. 109-111; Manuel Grossi: *L'insurrection des Asturies*, 2.^a ed. (París, 1972), p. 57; Salazar Alonso: *op. cit.*, páginas 226-227. Manuel Benavides: *La revolución fue así* (Barcelona, 1935), pp. 9-20, da una descripción muy gráfica de la ingenua seriedad con que las Juventudes realizaban sus preparativos. <<

[82] *NFP*, p. 131; Salazar Alonso: *op. cit.*, pp. 319-320; Jackson: *Republic*, p. 146; *El Debate*, 28 de septiembre de 1934. <<

[83] *CEDA*, 36-37, diciembre de 1934. <<

[84] La Cierva: *Historia*, pp. 302-303, una afirmación aparentemente basada en archivos militares restringidos. <<

[85] *El Socialista*, 1 de agosto y 2 de octubre de 1934; Buckley: *op. cit.*, p. 133. No hay otra explicación convincente para la falta de preparación de los socialistas. Los elementos revolucionarios genuinos se quejaron amargamente por la forma en la que el PSOE se vio forzado de mala gana a participar en un movimiento defensivo, Munis: *Jalones*, pp. 130-133; Andrade: *Burocracia*, pp. 250-263. <<

[86] *El Debate*, 26, 27 y 28 de septiembre; *El Socialista*, 3 y 4 de octubre de 1934; *Discursos*, pp. 338-343; *NFP*, pp. 134-139. <<

[87] Mario de Coca: *Anti-Caballero*, p. 107, hace la singular afirmación de que la madre de Anguera era una santa canonizada. <<

[88] *El Socialista*, 1 de agosto y 27 de septiembre de 1934. <<

[89] Díaz Nosty: *op. cit.*, p. 136. <<

[90] Largo Caballero: *Recuerdos*, p. 136; Rosal: *UGT*, I, pp. 401-402. <<

[91] Antonio Ramos Oliveira: *La revolución española de octubre* (Madrid, 1935), pp. 55-61. <<

[92] Los dos relatos hechos por mineros lo confirman; Grossi: *op. cit.*, pp. 57 y 119; José Canel: *Octubre rojo en Asturias* (Madrid, 1935), pp. 31 y 43. <<

[93] Munis: *Jalones*, pp. 130-140; Maurín: *Segunda revolución*, páginas 144-167; testimonio del secretario de la CNT de Madrid, Miguel González Inestal, al autor; Enrique Castro Delgado: *Hombres made in Moscú* (Barcelona, 1965), pp. 176-183; Andrés Nin: *Los problemas de la revolución española* (París, 1971), pp. 156-157. <<

[94] Benavides: *op. cit.*, p. 372. <<

[95] Munis: *Jalones*, p. 154; «Ignotus»: *op. cit.*, pp. 176-179. <<

[96] Grossi: *op. cit.*, pp. 108, 114 y ss.; Canel: *op. cit.*, p. 33. <<

[97] Grossi: *op. cit.*, pp. 155-156; Canel: *op. cit.*, pp. 151-157. <<

[98] J. Costa i Deu & Modest Sabaté: *La veritat del 6 d'octubre* (Barcelona, 1936), *passim*, narra los acontecimientos revolucionarios en Lérida, Gerona y otros lugares de provincias de Cataluña donde la Alianza Obrera tenía influencia. <<

[99] Azaña: *Obras*, III, pp. 74-76; Munis: *Jalones*, pp. 140-147. <<

[100] Maurín: *Segunda revolución*, pp. 123-144. Se ha afirmado que Dencás era un provocador de la derecha, Brenan: *Labyrinth*, p. 284, y Consuelo Berges: *Explicación de octubre* (Madrid, 1935), p. 121; A. N. (Andrés Nin): «Los acontecimientos de octubre en Barcelona», en *Leviatán*, núm. 18, octubre-noviembre de 1935. <<

[101] *NFP*, p. 140; Joaquín Arrarás: *Franco* (Valladolid, 1939), página 186; Brenan: *Labyrinth*, p. 288. Desde el punto de vista del ejército, el desarrollo de la campaña se describe en general en López Ochoa: *Campaña militar de Asturias en octubre de 1934* (Madrid, 1936), y desde el punto de vista de la guardia civil en coronel F. Aguado Sánchez: *La revolución de octubre de 1934* (Madrid, 1972), pp. 253 y ss. <<

[102] *DSC*, 9 de octubre de 1934; *La Mañana*, 7 y 11 de octubre de 1934. Se hicieron detenciones en gran escala. *El Debate*, 11 de octubre de 1934, habla ya de 2000 detenidos sólo en Madrid. Las cifras totales son difíciles de encontrar. Las más bajas, dignas de tener en cuenta, son las de Malefakis: *op. cit.*, p. 342, que da de 15 000 a 20 000; Jackson: *Republic*, p. 161, da de 30 000 a 40 000; Buckley: *op. cit.*, página 166, da 60 000. Su suerte se describe en Leah Manning: *What I Saw in Spain* (Londres, 1935). Véase también Ignacio Carral: *Por qué mataron a Luis de Sirval* (Madrid, 1935). <<

[103] Robinson: *Origins*, p. 194; Madariaga: *Spain*, p. 435. <<

[104] Ramos Oliveira: *Octubre*, pp. 161-162; Berges: *op. cit.*, pp. 89-90; Diego Hidalgo: *¿Por qué fui lanzado del Ministerio de la Guerra?* (Madrid, 1934), pp. 83-89; José Martín Blázquez: *I Helped To Build An Army* (Londres, 1939), p. 34. <<

[¹] Grossi: *op. cit.*, p. 224. <<

[2] Dolores Ibárruri: *El único camino* (París, 1965), pp. 181-183. <<

[3] Sánchez Saúco: *op. cit.*, pp. 149-152; Díaz Nosty: *op. cit.*, páginas 361-372 ; Munis: *Jalones*, pp. 167-168. <<

[4] Rosal: *UGT*, I, pp. 409-422. <<

[5] Largo Caballero: *Recuerdos*, pp. 138-139; Ibárruri y otros: *Guerra*, I, p. 62; Luis Araquistáin: «Largo Caballero ante los jueces», en *Leviatán*, núm. 20, enero de 1936. <<

[6] Castro Delgado: *op. cit.*, p. 193; Mario de Coca: *Anti-Caballero*, página 155; Álvarez del Vayo: *Last Optimist*, pp. 264-266; Munis: *Jalones*, pp. 134-140 y 153; Eduardo Comín Colomer: *Historia del Partido Comunista de España*, 3 vols. (Madrid, 1967), II, pp. 325-327 y 341-343; Manuel Tagüeña Lacorte: *Testimonio de dos guerras* (México, 1973), páginas 67-72.

<<

[7] Saborit: *Besteiro*, p. 251; Lamo de Espinosa: *Besteiro*, p. 88. <<

[8] Largo Caballero: *Recuerdos*, pp. 143 y 145. <<

[9] Azaña: carta a Prieto de 16 de enero de 1935, *Obras*, III, páginas 591-593; Juan Simeón Vidarte: *Todos fuimos culpables* (México, 1973) (en adelante, *TFC*), p. 25. <<

[10] El texto de la carta se reimprime en Carlos de Baraibar: *Las falsas «posiciones socialistas» de Indalecio Prieto* (Madrid, 1935), páginas 139-145 . <<

[11] Nin: *Problemas*, pp. 155-158; Munis: *Jalones*, p. 183; Pelai Pagès: *Andreu Nin: su evolución política, 1911-1937* (Bilbao, 1975), p. 188. Trotsky denunció más tarde como traición la participación del POUM en el frente popular, Trotsky: *Révolution espagnole*, pp. 285-291. <<

[¹²] *La Libertad* 30 de marzo de 1935. <<

[13] *La Libertad*, 13 de abril de 1935; Diego Martínez Barrio: *Orígenes del frente popular español* (Buenos Aires, 1943), pp. 24-31. <<

[¹⁴] El texto de la carta se reimprime en Baraibar: *Prieto*, páginas 197-200; Largo Caballero: *Recuerdos*, p. 144, afirma haber recibido una carta de Peña apoyando *su* posición. De haber sido así, es raro que el texto no fuera publicado en la incontenible polémica de entonces. <<

[15] Indalecio Prieto: «La coalición de izquierdas», en *El Liberal*, 14 de abril de 1935. <<

[16] *Octubre-segunda etapa* (sin lugar y sin fecha). Hubo dos ediciones, de las cuales la más barata no tenía portada y el tipo de letra era más pequeño. Las referencias aquí dadas son de esa edición popular. Los datos referentes a la redacción del folleto proceden de una entrevista del autor con Santiago Carrillo. Se ven confirmados por una carta de Leoncio Pérez Martín, miembro del comité ejecutivo de la FJS, publicada en *Cuadernos para el Diálogo*, núm. 230, 24 de septiembre de 1977. <<

[17] *Octubre*, pp. 26-31, 39-46, 52-55 y 94. <<

[18] Comín: *PCE*, II, pp. 459-474; Stanley G. Payne: *The Spanish Revolution* (Londres, 1970), pp. 164-165; Ricardo de la Cierva: *La historia perdida del socialismo español* (Madrid, 1972), pp. 189-190. <<

[19] Largo Caballero: *Recuerdos*, p. 141; Santiago Carrillo: *Mañana, España* (París, 1975), p. 40. Prieto no opinaba así, cf. *TFC*, p. 30. <<

[20] *La Libertad*, 24 de abril de 1935. Al principio, Cordero era partidario de ignorar la existencia del folleto, *TFC*, p. 30. <<

[21] Saborit: *Besteiro*, pp. 251-257. <<

[22] Véase Serrano Poncela: *op. cit.*, p. 156. <<

[23] Julián Besteiro: *Marxismo y antimarxismo* (Madrid, 1935). Las referencias están hechas a la 4.^a edición (Madrid, 1967), pp. 16-23, 93-102, 107-113 y 130-131. <<

[24] Luis Araquistáin: «El marxismo en la Academia», «Un marxismo contra Marx» y «La esencia del marxismo», en *Leviatán*, mayo, junio y julio de 1935. <<

[25] Julián Besteiro: «Leviatán: el socialismo mitológico» y «Mi crítico empieza a razonar», en *Democracia*, 15 de junio y 6 de julio de 1935. <<

[26] Este aspecto del pensamiento de Araquistáin se discute extensamente en Paul Preston: *Leviatán: antología* (Madrid, 1976), en el prólogo. <<

[27] Indalecio Prieto: «Mi derecho a opinar», «La amnistía, base de la coalición electoral», «El valor de la acción parlamentaria», «Los roedores de derrotas» y «La planta exótica del caudillismo», en *El Liberal* y *La Libertad*, 22-26 mayo de 1935. <<

[28] Azaña se lo recordaba a Prieto en una carta de 20 de abril de 1935, *Obras*, III, p. 601. <<

[29] Indalecio Prieto: *Posiciones socialistas del momento* (Madrid, sin fecha).

<<

[30] Baraibar le regaló un ejemplar de *Las falsas «posiciones socialistas» de Indalecio Prieto* a Largo Caballero el 30 de junio de 1935 con la siguiente dedicatoria: «Ud. conoce mejor que nadie —mi querido D. Francisco— las motivaciones morales de este libro. Reciba con él la expresión del cariño y la devoción sin límites que le profesa Carlos de Baraibar»; ejemplar en una colección particular. <<

[31] Baraibar: *Prieto*, pp. 22-26, 46, 67-69 y 113. Prieto demostró que muchas de las acusaciones de Baraibar eran falsas por medio de documentos publicados en *El Liberal* de 11 de septiembre de 1935. <<

[32] Azaña: carta a Prieto de 7 de agosto de 1935, en *Obras*, III, páginas 603-604. <<

[33] Buckley: *op. cit.*, p. 183; Azaña: *Obras*, III, pp. 229-293. <<

[³⁴] *El Liberal*, 27 y 29 de agosto; *Democracia*, 27 de septiembre de 1935. <<

[35] *Democracia*, 25 de agosto; *Claridad*, 20 de julio de 1935. <<

[36] *Democracia*, 13 y 20 de septiembre, 8 de noviembre y 6 de diciembre;
Claridad, 29 de julio, 6 de octubre y 30 de noviembre de 1935. <<

[37] *Democracia*, 13 de septiembre y 11 de octubre de 1935. <<

[38] José Díaz: *Tres años de lucha*, 2.^a ed. (París, 1969), pp. 7-30, 33 y 57. <<

[39] *Claridad*, 17 de agosto, 12 y 19 de octubre de 1935. <<

[40] Luis Araquistáin: «La nueva táctica comunista», en *Leviatán*, número 16, agosto de 1935. <<

[41] *Claridad*, 7 y 14 de diciembre de 1935. <<

[42] Claudio Sánchez Albornoz: *De mi anecdotario político* (Buenos Aires, 1972), pp. 105 y 116. <<

[43] Jacques Duclos: *Mémoires*, vol. 2 (Paris, 1969), pp. 106-110. <<

[⁴⁴] Largo Caballero: *Recuerdos*, pp. 146-147; Mario de Coca: *Anti-Caballero*, pp. 152-154. <<

[45] *El Socialista*, 25 de diciembre; *Claridad*, 23 de diciembre de 1935; *TFC*, p. 26; Largo Caballero: *Recuerdos*, p. 148; Mario de Coca: *Anti-Caballero*, pp. 193-198. <<

[46] *El Socialista*, 18 y 19 de diciembre de 1935; *Claridad*, 15 de enero de 1936. <<

[47] *El Socialista*, 22 de diciembre de 1935 y 4 y 8-16 de enero de 1936. <<

[48] Payne: *Revolution*, p. 174; La Cierva: *Socialismo*, pp. 200-201. <<

[49] Esta relación se basa en una comparación de los candidatos a las elecciones de 1933 y 1936, según los datos de *El Debate* de 21 de noviembre y 5 de diciembre de 1933 y 18 de febrero de 1936. <<

[50] Lamo de Espinosa: *Besteiro*, pp. 101-102 y 125-133. <<

[51] *TFC*, pp. 38-40; *Claridad*, 25 de enero de 1936. La exclusión del veterano Narciso Vázquez fue evidentemente obra de Margarita Nelken. Trejo fue fusilado más adelante por los franquistas por haber sido abogado defensor de los aldeanos de Castilblanco; Vidarte: *Cortes Constituyentes*, pp. 85 y 608. <<

[52] Carta de Largo Caballero a la ejecutiva de la UGT fechada el 5 de enero de 1936, reproducida en Rosal: *UGT*, I, pp. 445-448; *El Socialista*, 16 de enero de 1936; Ibárruri y otros: *Guerra*, I, pp. 69-78; Largo Caballero: *Recuerdos*, pp. 150-151; Munis: *Jalones*, pp. 191-201; *TFC*, pp. 27-35. <<

[53] *Claridad*, 25 y 30 de enero y 6 de febrero; *El Socialista*, 12 de febrero de 1936. <<

[54] *Claridad*, 18 de enero de 1936. <<

[¹] Robinson: *Origins*, p. 194; Madariaga: *Spain*, p. 435. <<

[2] *JAP*, 27 de octubre; *El Debate*, 9, 17, 21, 24 y 31 de octubre y 4 de noviembre de 1934; *DSC*, 5 de noviembre de 1934; Antonio Elorza: «El sindicalismo católico en la II República», en *La utopía anarquista bajo la II República española* (Madrid, 1973), pp. 295-350. Para las actividades posteriores y el tono extremadamente derechista de la CESO, véase Juan José Castillo: «El comité nacional circunstancial de la Confederación Española de Sindicatos Obreros, 1936-1938», en la *Revista Española de la Opinión Pública*, núm. 38, octubre de 1974. <<

[3] *DSC*, 14 y 15 de noviembre de 1934; *El Debate*, 24 de octubre y 2, 3, 8 y 14 de noviembre de 1934. <<

[4] *El Debate*, 24 de octubre y 16 y 17 de noviembre de 1934; *Leviatán*, núm. 7, noviembre de 1934; *DSC*, 15 de noviembre de 1934; *NFP*, pp. 141-145. <<

[5] Joaquín Arrarás: *Historia de la cruzada española* (Madrid, 1939-1940), 7 vols., II, p. 277; *NFP*, pp. 145-149. <<

[6] *NFP*, pp. 152-153 y 157-158; *DSC*, 21 de diciembre de 1934; *El Debate*, 28 de diciembre de 1934; La Cierva: *Historia*, p. 458; Jackson: *Republic*, p. 170. <<

[7] Lamamié y Casanueva eran diputados por Salamanca, como Gil Robles. Los tres eran miembros del Bloque Agrario de Salamanca, y en febrero de 1935 encontramos a los tres juntos dirigiendo mítines, mientras se atacaba a Giménez Fernández. <<

[8] *El Debate*, 24 de noviembre y 1, 5, 7, 20 y 21 de diciembre de 1934, 2 y 6 de febrero y 19 de marzo de 1935; *NFP*, pp. 172-188; Malefakis: *op. cit.*, pp. 347-355; Robinson: *Origins*, pp. 200-202; Jackson: *Republic*, p. 169. <<

[9] Una descripción gráfica de un pueblo de Toledo nos la proporciona Arturo Barea: *La forja de un rebelde* (Buenos Aires, 1951), páginas 483-490. <<

[¹⁰] *JAP*, 10 y 24 de noviembre, 8 de diciembre, 2 y 11 de febrero y 16 de marzo de 1935; *NFP*, p. 203. En un mitin en Santiago de Compostela, Gil Robles dijo que la JAP era la vanguardia y la CEDA el consolidador; *El Debate*, 3 de septiembre de 1934. <<

[¹¹] *El Debate*, 22 y 23 de diciembre de 1934 y 12 de enero de 1935. <<

[¹²] *El Debate*, 12 de enero de 1935; *NFP*, pp. 165-168; Pabón: *Cambó*, p. 299. <<

[13] *El Debate*, 4 y 20 de enero y 3 de marzo; *CEDA*, 1 de mayo de 1935. <<

[¹⁴] *El Debate*, 10 de febrero y 19 y 27 de marzo de 1935; Lerroux: *Pequeña historia*, pp. 374-375; *NFP*, pp. 212-217; Jackson: *Republic*, páginas 161-167.
<<

[15] Viñas: *op. cit.*, p. 172. <<

[16] *El Debate*, 2, 3, 21, 23, 28 y 30 de abril y 4 y 7 de mayo de 1935; *NFP*, pp. 218-231; Lerroux: *Pequeña historia*, pp. 387-391. La sección más liberal de los radicales, los de Valencia, casi se separaron del partido debido a la aquiescencia de Lerroux a los planes de Gil Robles. Alcalá Zamora persuadió a Samper para no hacerlo. Véase Diego Martínez Barrio: *op. cit.*, pp. 66-67.

<<

[¹⁷] *DSC*, 15 y 27 de febrero de 1935. <<

[18] *El Debate*, 12 de mayo de 1935. <<

[19] *El Debate*, 16 y 18 de mayo y 27 de agosto de 1935; *NFP*, páginas 232-244; La Cierva: *Historia*, pp. 488-490; Arrarás: *Franco*, pp. 191-199; Manuel Goded: *Un «faccioso» cien por cien* (Zaragoza, 1939), páginas 23-24; Stanley Payne: *Politics & The Military in Modern Spain* (Stanford, 1967), pp. 304-306. <<

[²⁰] *NFP*, pp. 238-240; Azaña: carta a Prieto de 7 de agosto de 1935, *Obras*, III, p. 604. <<

[21] Brenan: *Labyrinth*, p. 293, dice: «Fue entonces cuando se construyeron en la Sierra de Guadarrama, mirando hacia Madrid, esas trincheras de hormigón que fueron tan útiles a las tropas del general Mola durante la guerra civil». Las mismas acusaciones se hicieron en *ABC*, 31 de julio de 1936, y en *Solidaridad Obrera*, véase S. Cánovas Cervantes: *Apuntes históricos de «Solidaridad Obrera»* (Barcelona, 1937), p. 31. <<

[22] Seco: *op. cit.*, p. 133. <<

[23] *Documents on Germán Foreign Policy*, serie C, volumen IV (Londres, 1964) (en lo sucesivo, *DGFP*), documentos 303, 330 y 445; Earl of Avon: *Facing the Dictators* (Londres, 1962), p. 256; Buckley: *op. cit.*, páginas 175-176; *El Debate*, 27 de agosto y 15 de septiembre de 1935. <<

[24] *El Debate*, 7 y 16 de mayo; *Arriba*, 13 de junio de 1935; Robinson: *Origins*, pp. 204-205. <<

[25] *El Debate*, 14 de mayo y 14 de junio de 1935; La Cierva: *Historia*, p. 487.

<<

[26] Seco: *op. cit.*, p. 138; Primo de Rivera: *Obras*, pp. 631-642. <<

[27] *El Debate*, 21 de mayo, 2 y 21 de junio, 6 de julio y 19 de septiembre de 1935; *Boletín del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión*, agosto y septiembre de 1935. <<

[28] Emilio Ruiz (pseudónimo de Juan Andrade): «La política presupuestaria radical-cedista», en *Leviatán*, núm. 15, julio de 1935; *Boletín del Ministerio de Trabajo*, junio, octubre y diciembre de 1935 y enero de 1936. <<

[29] *El Debate*, 2 de julio; *CEDA*, 1 de julio; *DSC*, 12 de julio de 1935. <<

[30] *El Debate*, 3 de julio de 1935; Malefakis: *op. cit.*, p. 358. <<

[31] *El Debate*, 21 y 28 de mayo; *Arriba*, 13 de junio, ilustraba gráficamente su reportaje del mitin de Uclés con una fotografía de unos cerdos empujándose en el comedero; *JAP*, 14 de marzo, 27 de abril y 1 de junio de 1935. <<

[32] *El Debate*, 14, 20 y 23 de junio y 2 y 3 de julio; *JAP*, 1 de julio de 1935.

<<

[33] *El Debate*, 3 de septiembre de 1935. <<

[³⁴] *JAP*, 22 de junio y 1 y 14 de julio de 1935; La Cierva; *Historia*, páginas 508-510. <<

[35] *JAP*, 16 de marzo, 8 de junio, 27 de julio, 31 de agosto y 28 de septiembre de 1935; *NFP*, p. 194. <<

[36] *CEDA*, 30 de noviembre; *JAP*, 17 de agosto, 7 de septiembre y 5 de octubre; *El Debate*, 10 de noviembre de 1935. El líder fascista, Ledesma, consideraba a la CEDA como una fuerza «fascistizada», Ramiro Ledesma Ramos: *¿Fascismo en España?*, 2.^a ed. (Barcelona, 1968), página 72. <<

[37] *El Debate*, 25 de junio de 1935; Lerroux: *Pequeña historia*, páginas 392-394; *NFP*, p. 285; Primo de Rivera: *Obras*, p. 609. <<

[38] Joaquín Chapaprieta: *La paz fue posible* (en adelante, *PFP*) (Barcelona, 1971), pp. 207-233; *MFP*, pp. 286-291; Pabón: *Cambó*, pp. 433-435; *El Debate*, 20 y 24-26 de septiembre de 1935. <<

[39] Mendizábal: *op. cit.*, pp. 221-222; *PFP*, pp. 234-235. <<

[40] *DSC*, 2 de octubre de 1935. Su preocupación hubiera sido mayor si hubieran sabido que el 11 de septiembre la embajada alemana en Madrid había contestado afirmativamente a los tanteos de marzo del gobierno respecto a una posible colaboración entre la policía española y la Gestapo en la lucha contra el «comunismo», Viñas: *op. cit.*, pp. 172-173. <<

[41] *DSC*, 22 de octubre de 1935; *PFP*, pp. 257-262; *NFP*, pp. 292-304; Pabón: *Cambó*, pp. 440-446. <<

[42] *PFP*, pp. 262-280; *NFP*, pp. 304-312; *DSC*, 28 de octubre de 1935; Primo de Rivera: *Obras*, pp. 665-668; Lerroux: *Pequeña historia*, página 446-455; Pabón: *Cambó*, pp. 446-450; *El Debate*, 23, 27, 29 y 30 de octubre de 1935.
<<

[43] *PFP*, pp. 292-305; *NFP*, pp. 341-358; Cortés Cavanillas: *Gil Robles*, p. 151; Pabón: *Cambó*, pp. 452-458. Samper alegó más tarde que el líder de la CEDA había hecho la vista gorda a la inmoralidad financiera de los radicales, como compensación por dejarle llevar a cabo sus propios planes en el Ministerio de la Guerra, Martínez Barrio: *op. cit.*, pp. 82-83. <<

[⁴⁴] *JAP*, 12 de octubre; *El Debate*, 10 de noviembre de 1935. <<

[45] *PFP*, pp. 318-321. <<

[46] Durante la guerra civil, Gil Robles le dijo a un periodista portugués que la iniciativa de un golpe era suya; Armando Boaventura: *Madrid-Moscovo-Da Ditadura a República ea Guerra Civil de Espanha* (Lisboa, 1937), pp. 191-192. <<

[47] *El Debate*, 10-14 de diciembre de 1935; *NFP*, pp. 358-367; *PFP*, páginas 324-332; Pabón: *Cambó*, pp. 459-464; Arrarás: *República*, III, páginas 267-271. Es interesante destacar que mientras Gil Robles jugaba con la idea de un golpe, su «rival», Calvo Sotelo, estaba también en contacto con el mismo grupo de generales, urgiéndoles que se sublevaran, Ansaldo: *¿Para qué?*, p. 111. <<

[48] *El Debate*, 17, 18 y 28 de diciembre; *La Nación*, 14 de diciembre; *La Época*, 17 y 27 de diciembre; *ABC*, 17 de diciembre de 1935; *NFP*, pp. 380-403; *PPF*, pp. 353-377. <<

[49] *NFP*, p. 404; Arrarás: *República*, IV, p. 41. <<

[50] *El pueblo vasco*, pp. 105-139. <<

[51] *NFP*, pp. 404-430; Javier Tusell: *Las elecciones del frente popular*, 2 vols. (Madrid, 1971), I, pp. 42-133; *El Socialista*, 11 y 18 de enero de 1936, hacía notar este embrollo con torvo regocijo; Blinkhorn: *Carlism*, p. 204. <<

[52] *El Debate*, 9 de febrero; *ABC*, 8 de febrero de 1936. <<

[53] *NFP*, pp. 431-434. <<

[54] *PFP*, pp. 390-396. <<

[55] Buckley: *op. cit.*, p. 188; Bowers: *My Mission*, p. 187; *El Socialista*, 19 de enero y 13 de febrero de 1936; *NFP*, p. 472. <<

[56] Viñas: *op. cit.*, p. 147. <<

[57] Buckley: *op. cit.*, p. 189; Tusell: *Elecciones*, I, p. 217; *TFC*, página 37. <<

[58] *El Debate*, 2 de febrero de 1936; Tusell: *Elecciones*, II, apéndice 7. <<

[59] *El Debate*, 10, 11 y 15 de enero y 9, 11, 14 y 16 de febrero de 1936; *NFP*, pp. 464-473. <<

[60] *JAP*, 28 de diciembre; la edición de *JAP* de 21 de diciembre reproducía la palabra «jefe» 195 veces en la página 3. <<

[61] *El Sol*, 24 de enero; *El Socialista*, 21 de enero; *El Debate*, 7 de febrero; *JAP*, 14 de febrero de 1936. <<

[62] *El Debate*, 3, 10 y 17 de enero; *El Socialista*, 18 de enero de 1936. <<

[63] Tusell: *Elecciones*, I, pp. 211-219, 230-234 y 273-285; *El Defensor*, 24 de enero, exponía una elocuente y razonada argumentación para que la derecha moderase su agresividad; Ian Gibson: *La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca* (París, 1971), pp. 1-24. <<

[64] *JAP*, 11 de enero; *NFP*, pp. 484-485; *Leviatán*, núm. 20, enero de 1936.

<<

[65] *JAP*, 4 de enero; *El Debate*, 3 de enero; *El Socialista*, 18 de enero. <<

[66] *El Debate*, 3 de enero; *El Socialista*, 30 de enero de 1936; Bowers: *My Mission*, p. 182; Buckley: *op. cit.*, pp. 190-191; De la Mora: *op. cit.*, p. 207.
<<

[67] *Ideal*, 14 de febrero; *El Defensor*, 14, 19 y 28 de enero, 1, 6 y 15-20 de febrero y 5-7 de marzo; *El Socialista*, 1 de marzo de 1936. <<

[68] *El Socialista*, 18 de enero y 9 de febrero de 1936; Fraser: *In Hiding*, p. 116; Barea: *Forja*, pp. 522-529; Tusell: *Elecciones*, II, pp. 123-191; Bécarud: *op. cit.*, pp. 152-153; Robinson: *Origins*, pp. 255-256 y 387-388. <<

[69] Ha habido una controversia interminable sobre los resultados reales. El estudio más exhaustivo hasta el momento es el de Tusell, que da las cifras siguientes: izquierda, 4 654 116; centro, 526 615; derecha, 4 503 505; *Elecciones*, II, p. 13. El otro estudio monográfico, de José Venegas: *Las elecciones del frente popular* (Buenos Aires, 1942), página 65, favorece más a la izquierda: izquierda, 4 838 449; centro, 449 320; derecha, 3 996 931. Los dos estudios generales que tratan de las elecciones con más detalle, Bécarud: *op. cit.*, p. 156, y Jackson: *Republic*, p. 193, dan cifras similares a las de Venegas. <<

[70] Ministerio de la Gobernación: *Dictamen de la comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936* (Barcelona, 1939), pp. 31-45. La composición final de las Cortes era la siguiente: PSOE, 102; Izquierda Republicana, de Azaña, 90; Unión Republicana, de Martínez Barrio, 36; *Esquerra*, de Companys, 36; PCE, 15; Partido del Centro, de Portela Valladares, 18; *Lliga*, 12; nacionalistas vascos, 9; radicales, 4; republicanos conservadores, 17; CEDA, 87; agrarios, 15; Renovación Española y otros extremistas monárquicos, 19, y carlistas, 9. <<

[¹] *Boletín del Ministerio de Trabajo*, abril de 1936. <<

[2] Munis: *Jalones*, p. 201; Díaz: *Lucha*, p. 149; Perriats: *CNT*, I, página 120; testimonio de Miguel González Inestal al autor. <<

[3] Arrarás: *Cruzada*, II, pp. 439-440; *NFP*, pp. 492-497; Goded: *op. cit.*, pp. 26-27; B. Félix Maíz: *Alzamiento en España*, 2.^a ed. (Pamplona, 1952), p. 37; *TFC*, pp. 40-55; Azaña: anotación en el diario de 19 de febrero de 1936, *Obras*, IV, p. 563. <<

[4] *NFP*, pp. 503-507. <<

[5] Azaña: anotación en el diario de 20 de febrero de 1936, *Obras*, IV, p. 572.

<<

[6] *El Debate*, 6 de marzo de 1936; *NFP*, p. 533. <<

[7] *El Socialista*, 1, 8 y 15 de marzo de 1936; discurso de Rodolfo Llopis, *DSC*, 15 de abril de 1936. <<

[8] *El Debate*, 18 y 19 de marzo de 1936. <<

[9] *NFP*, pp. 575-576; *TFC*, p. 53. <<

[¹⁰] *El Socialista*, 22 de marzo; *Claridad*, 6 de abril y 30 de mayo de 1936. <<

[11] *Comisión sobre ilegitimidad*, pp. 41-43; *Apéndice*, I, p. 129; Robinson: *Origins*, pp. 255-256; *NFP*, pp. 541-547; Gil Robles atribuye a Madariaga las opiniones de Alcalá Zamora. <<

[¹²] *DSC*, 20, 24 y 31 de marzo y 1 y 2 de abril de 1936. <<

[¹³] *DSC*, 31 de marzo de 1936; *ABC*, 1 de abril de 1936. <<

[¹⁴] *TFC*, p. 71; Venegas: *Elecciones*, pp. 47-48; *NFP*, pp. 548-549. Prieto quería anular todos los resultados de Galicia. Cf. su propia versión en su prólogo a Romero Solano: *Vísperas*, pp. 6-7. <<

[15] *DSC*, 1 y 2 de abril de 1936. <<

[16] Vidarte: anotación en su diario de 3 de abril de 1936; *TFC*, página 71; *El Sol*, 4 de abril de 1936. <<

[¹⁷] *DSC*, 7 de abril; *El Debate*, 8 de abril; *ABC*, 8 de abril de 1936. <<

[18] Payne: *Revolution*, p. 192; La Cierva: *Socialismo*, pp. 202-203 y 214. <<

[19] Marichal: introducción a Azaña: *Obras*, III, pp. XXXI-II. <<

[20] *DSC*, 7 de abril de 1936; *TFC*, pp. 74-80 y 96-99; Largo Caballero: *Recuerdos*, p. 155; Julián Zugazagoitia: *Guerra y vicisitudes de los españoles*, 2 vols. (París, 1968), I, p. 20. <<

[21] *DSC*, 15 de abril de 1936; Robinson: *Origins*, pp. 259-260. <<

[22] *El Socialista*, 18 y 19 de abril y 8 de mayo; *Claridad*, 15, 16 y 18 de abril de 1936. <<

[23] ABC, 4, 5 y 11 de marzo y 2, 19 y 29 de abril de 1936; Ansaldo: *¿Para qué?*, pp. 77-78; De la Mora: *op. cit.*, pp. 214-215; Buckley: *op. cit.*, página 129; Stanley G. Payne: *Falange: A History of Spanish Fascism* (Stanford, 1961), pp. 98-105. <<

[²⁴] Gibson: *Lorca*, pp. 40-43; *La Mañana*, 14 de marzo; *Claridad*, 14 de abril; *El Sol*, 4, 11, 15, 21 y 26 de marzo y 6 de abril; Bowers: *My Mission*, pp. 200-208. <<

[25] *NFP*, pp. 573-575. <<

[26] Payne: *Military*, p. 318; *Falange*, pp. 104-105; Blinkhorn: *Carlism*, página 257; Ramón Serrano Súñer: *Entre Hendaya y Gibraltar* (Madrid, 1947), p. 25. <<

[27] *MFP*, pp. 558-570; Gibson: *Lorca*, pp. 45-46. <<

[28] *El Obrero de la Tierra*, 29 de febrero y 7, 21 y 28 de marzo de 1936. <<

[29] Malefakis: *op. cit.*, pp. 364-374. <<

[30] *El Obrero de la Tierra*, 18 de abril, 1, 16, 23 y 30 de mayo y 13, 20 y 27 de junio; *Claridad*, 6, 9 y 18 de junio de 1936. Los acontecimientos de Yeste de 29 de mayo se debatieron en las Cortes el 5 de junio. <<

[31] Prieto: *Discursos*, pp. 255-273. <<

[32] *TFC*, pp. 115-118. <<

[33] Burnett Bolloten: *The Grand Camouflage*, 2.^a ed. (Londres, 1968), pp. 115-116; *Claridad*, 2 y 6 de abril de 1936; Carrillo: *op. cit.*, páginas 48-49 ; *TFC*, pp. 56-57. <<

[³⁴] *Claridad*, 7, 8 y 11 de mayo de 1936. <<

[35] Rosal: *UGT*, I, p. 479; *Claridad*, 12 de mayo de 1936; *TFC*, páginas 100 y 115-127; Prieto: *Convulsiones*, I, p. 164; III, pp. 135-136. <<

[36] Arrarás: *República*, IV, pp. 273-281; *NFP*, pp. 616-627; *El Debate*, 24 de abril de 1936; Payne: *Military*, p. 330; *TFC*, p. 136. <<

[37] *TFC*, p. 147 y 190-192; Prieto: *Convulsiones*, III, pp. 143-144; Largo Caballero: *Recuerdos*, pp. 161-163; Ibárruri: *Camino*, pp. 252-253. <<

[38] *NFP*, pp. 719, 728-730 y 798; La Cierva: *Historia*, p. 742. <<

[39] La Cierva: *Historia*, pp. 743-744. <<

[40] Juan Ignacio Luca de Tena: *Mis amigos muertos* (Barcelona, 1971), p. 68; Payne: *Military*, p. 335; *NFP*, p. 733. <<

[41] *NFP*, pp. 730-731 y 787-788; Payne: *Military*, p. 339. <<

[42] *DSC*, 19 de mayo de 1936. <<

[43] *El Debate*, 31 de mayo de 1936. <<

[44] Bolloten: *Camouflage*, *passim*; David T. Cattell: *Communism and the Spanish Civil War* (Berkeley, 1955), pp. 39-43. <<

[45] *Claridad*, 19 y 30 de mayo, 9, 15, 19 y 24 de junio y 8 y 9 de julio; *El Sol*, 9, 11 y 15 de junio y 15 de julio de 1936; Bolloten: *Camouflage*, pp. 22-23; Jackson: *Republic*, pp. 220-222; J. Álvarez del Vayo: *Freedom's Battle* (Londres, 1940), p. 23. <<

[46] *Claridad*, 20 y 21 de abril; Araquistáin, artículos en *Leviatán*, números 22 y 24, marzo y mayo; *Mundo Obrero*, 23-28 de marzo de 1936; Rosal: *UGT*, I, pp. 423-424. <<

[47] *Claridad*, 9 y 11 de mayo de 1936; Peirats: *CNT*, I, pp. 119-122; Brademas: *op. cit.*, pp. 168-171. <<

[48] Munis: *Jalones*, pp. 208-213; Payne: *Revolution*, p. 199. <<

[49] *TFC*, pp. 162-163 y 170. <<

[50] Romero Solano: *Vísperas*, pp. 176-177. <<

[51] *Claridad*, 20 de mayo y 1 de junio de 1936; Prieto: *Convulsiones*, III, pp. 159-160. <<

[52] *Claridad*, 30 de junio y 1, 2 y 13 de julio; *El Socialista*, 1 y 2 de julio; *TFC*; pp. 192-196 y 205-208; Jackson: *Republic*, pp. 221-222. <<

[53] *DSC*, 16 de junio de 1936. <<

[⁵⁴] *DSC*, 1 de julio de 1936. <<

[55] *TFC*, pp. 13-217, contiene el relato de uno de los oficiales presentes. <<

[56] Gil Robles: *Discursos*, pp. 613-672. <<

[57] FO371/2057W9964/9549/41, citado por Glyn A. Stone: «The Official British Attitude to the Anglo-Portuguese Alliance 1910-1945», en *Journal of Contemporary History*, vol. 10, núm. 4, octubre de 1975, página 745; *DGFP*, serie D, vol. III, pp. 53-55; Arthur Koestler: *Spanish Testament* (Londres, 1937), pp. 22-25; Gutiérrez Ravé: *Gil Robles*, páginas 198-199. <<

[58] *La Gaceta Regional*, 18 de octubre de 1936. <<

[59] *Sur* (Málaga), 25 y 28 de abril de 1937. <<